

Este libro propone un recorrido por la historia de la Argentina a partir de un núcleo de problemas que se imbrican tanto en el campo de la política como en el de las experiencias sociales. Se trata de echar luz sobre algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XX para conocerlos pero, fundamentalmente, para desarrollar un análisis crítico sobre ellos que enriquezca y complejice la mirada sobre el presente. Por eso, el relato histórico que aquí se presenta no pretende ser ni total ni totalizante, no busca dar cuenta ni de todos los procesos ni de todos los acontecimientos. Tampoco aspira a que las explicaciones ofrecidas funcionen como respuestas únicas o absolutas a las preguntas planteadas. Por el contrario, y aún reconociendo omisiones y simplificaciones, se ha optado por un tipo de análisis que, focalizando en algunas cuestiones, permita luego discutir las y revisarlas para formular nuevas preguntas y nuevas reflexiones. En ese sentido, el relato propuesto y la selección de temas y problemas considerados pretenden ser estímulo para el análisis, la discusión y la crítica.

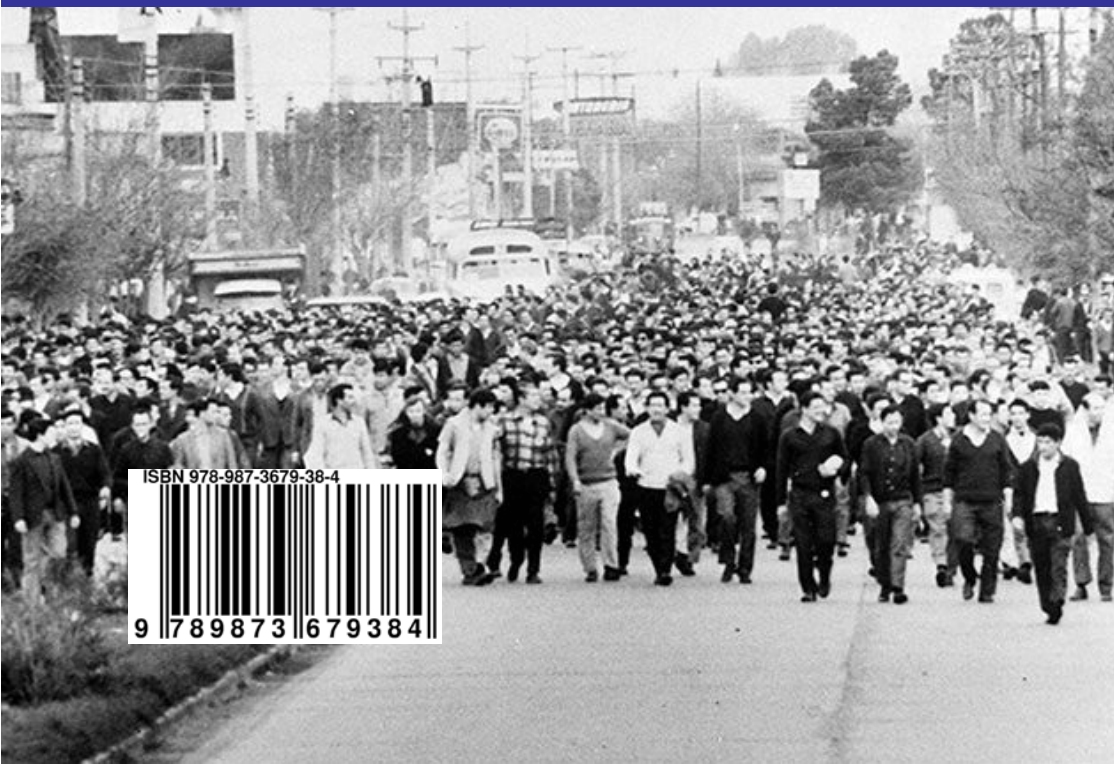
PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA 1955-2011

Capítulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Coordinadoras

Carolina González Velasco y Fernanda Percovich

UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHÉ



ISBN 978-987-3679-38-4



9 789873 679384



Problemas de Historia Argentina : 1912-2011 /
Karin Grammatico ... [et al.] ; compilado por
Carolina González Velasco. - 1a ed
compendiada. - Florencio Varela : Universidad
Nacional Arturo Jauretche, 2019.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-3679-38-4

1. Historia Argentina. 2. Aspectos Políticos. 3. Aspectos Sociales. I.
Grammatico, Karin. II. González Velasco, Carolina, comp.
CDD 982

PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA 1955-2011

Universidad Nacional Arturo Jauretche
Rector: **Lic. Ernesto Fernando Villanueva**

Directora del Instituto de Estudios Iniciales: Dra. Carolina González Velasco
Vicedirectora: Prof. Mónica Inés Garbarini

Problemas de Historia Argentina 1955-2011

Diseño interior y de tapa: Juan Ignacio Ferreras

© 2019, UNAJ

Av. Calchaquí 6200 (CP1888)

Florencio Varela Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4275-6100

editorial@unaj.edu.ar

www.unaj.edu.ar

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Universidad Nacional Arturo Jauretche

**PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA
1955-2011**

Segunda parte | 1955-1983

Tercera parte | 1983-2011

Coordinadoras

Carolina González Velasco y Fernanda Percovich

Equipo docente para la elaboración del libro

Julián Delgado, Karin Grammatico, Diego Nemec, Daniel
Bernardo Sazbón y Mauricio Schuttenberg

Índice

Presentación.....	15
-------------------	----

Segunda parte | 1955-1983

La Argentina entre 1955 y 1983: inestabilidad política, conflictividad social y terrorismo de Estado

Presentación.....	21
-------------------	----

Capítulo 4

Inestabilidad política, ilegitimidad, tutela militar y resistencia social,

1955-1966.....	25
-----------------------	-----------

I- Los gobiernos militares de la Revolución Libertadora, 1955-1958.....	27
---	----

La breve gestión de Lonardi: el fracaso de una conciliación

(im)posible.....	27
------------------	----

El gobierno de Aramburu-Rojas: los intentos de la “desperonización”	28
---	----

La Resistencia Peronista.....	33
-------------------------------	----

La organización sindical bajo el gobierno de Aramburu.....	34
--	----

Los partidos políticos en tiempos de la Revolución Libertadora.....	35
---	----

La reforma de la Constitución Nacional.....	36
---	----

Las elecciones de 1958.....	37
-----------------------------	----

II- La presidencia de Arturo Frondizi, 1958-1962.....	37
---	----

El programa desarrollista.....	40
1959: Plan de estabilización, protesta obrera y represión.....	42
La situación del movimiento obrero durante el gobierno de Frondizi.....	46
Las FFAA: desconfianza y tutela.....	48
La política exterior: el asunto cubano.....	48
Las elecciones de 1962 y la destitución de Frondizi.....	52
III- La presidencia de José María Guido, 1962-1963.....	53
“Azules y colorados”.....	53
Crisis, estabilización y ajuste: la política económica de Guido y la respuesta sindical.....	55
Las elecciones de 1963.....	58
IV- La presidencia de Arturo H. Illia, 1963-1966.....	58
La política económica.....	60
Las relaciones del gobierno con el sindicalismo peronista.....	61
El vanderismo y el fracaso de un “Peronismo sin Perón”.....	61
Las FFAA: “Profesionalismo” y Doctrina de la Seguridad Nacional.....	64
El derrocamiento de Illia.....	67
Bibliografía.....	68

Capítulo 5

Entre el proyecto autoritario de las FFAA y las acciones contestatarias de la sociedad civil, 1966-1973.....

I- El gobierno de Onganía, 1966-1970.....	73
La política económica.....	77
El sindicalismo en tiempos de Onganía.....	80
1969: El “Cordobazo”.....	82
Las consecuencias del “Cordobazo”.....	86
Las organizaciones político-armadas.....	87
La caída de Onganía.....	90
II- El gobierno de Levingston, 1970-1971.....	91

III- El gobierno de Lanusse, 1971-1973.....	93
La campaña electoral de 1973.....	96
IV- La juventud entre la rebeldía cultural y la radicalización política: contestaciones al orden social, cultural y familiar.....	98
V- La Iglesia, cerca de la revolución.....	101
Bibliografía.....	104

Capítulo 6

El retorno del peronismo al poder, 1973-1976.....

I- Campora al gobierno: entre la izquierda peronista y el Pacto Social.....	108
La izquierda peronista y “el to” presidente.....	108
El Pacto Social y el plan economico de Gelbard.....	113
El fin del gobierno de Campora.....	117
II- Peron al poder: los problemas de una estrategia acuerdista.....	119
La “democracia integrada”.....	119
El Pacto Social y la reactivacion de la puja distributiva.....	122
La ruptura con la izquierda peronista.....	126
III- La soledad de Isabel: el fin del acuerdo social y la escalada represiva.....	130
Una alianza para desarmar el Pacto Social.....	130
El Rodrigazo y la pulseada con los jefes sindicales.....	133
La escalada represiva y la radicalizacion de la violencia politica.....	137
El debilitamiento de Isabel.....	142
Bibliografia.....	148

Capítulo 7

La dictadura militar: terrorismo de estado y plan economico neoliberal, 1976-1983.....

I- El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: causas y objetivos.....	155
De la crisis del tercer gobierno peronista al golpe de Estado.....	155
La Junta Militar y el Acta para el Proceso de Reorganizacion Nacional....	160

II- El plan económico neoliberal.....	163
Diagnóstico y solución.....	163
Las principales medidas del plan económico neoliberal.....	165
La valorización financiera y el aumento de la deuda externa.....	170
III - El terrorismo de estado.....	174
Recuadro: Carta abierta de un escritor a la Junta Militar.....	180
IV- La sociedad durante la dictadura.....	182
La construcción de consensos y la cuestión de la responsabilidad civil.....	182
La denuncia del terrorismo de estado: el papel de los organismos de derechos humanos.....	187
El despertar de las voces y la breve presidencia de Viola.....	191
V- La Guerra de las Malvinas y el final de la dictadura.....	198
El gobierno de Galtieri.....	198
La recuperación de las islas Malvinas.....	201
El conflicto bélico y el rol de los medios de comunicación.....	203
La transición democrática.....	209
Bibliografía.....	212

Tercera parte | 1983-2011

Los límites de la democracia: entre la supervivencia del neoliberalismo y la vuelta al mercado interno

Presentación.....	217
--------------------------	------------

Capítulo 8

Los límites de la democracia política, 1983-2001.....	221
I- El gobierno de Alfonsín, 1983-1989.....	222
La primavera democrática.....	222
El alfonsinismo en triunfo.....	226
La cuestión militar y la política de derechos humanos.....	229

Punto Final, Semana Santa y Obediencia Debida.....	235
El delicado panorama económico.....	239
El fracaso del impulso industrialista de Grinspun.....	240
El Plan Austral y el Plan Primavera.....	242
El renacer del peronismo.....	247
II- El gobierno de Menem, 1989-1999.....	249
La resolución de la cuestión militar.....	251
La reforma del Estado.....	253
La convertibilidad y la profundización de la reforma del Estado.....	255
Reforma constitucional y reelección: el segundo gobierno de Menem.....	259
La hegemonía de las ideas liberales.....	262
La caída del Estado de Bienestar, el fin de la Guerra Fría y el “Consenso de Washington”.....	262
Los efectos profundos del neoliberalismo.....	266
Pobreza, desempleo y marginalidad.....	267
Oposición política y protesta social.....	268
Sindicalismo: fragmentación, aislamiento y ruptura.....	269
El movimiento piquetero.....	271
El desencanto con la política.....	273
Nace la Alianza.....	275
III- La presidencia inconclusa de Fernando De La Rúa, 1999-2001.....	277
El costo de la convertibilidad: ajuste fiscal y renegociación de la deuda...279	
La Alianza se parte: el escándalo de la “ley Banelco”.....	281
La vuelta de Domingo Cavallo.....	282
Protesta, represión y derrumbe: diciembre del 2001.....	285
“¡Que se vayan todos!”.....	289
Presidencias provisionales, interinatos y estabilización política.....	291
Bibliografía.....	293

Capítulo 9

La Argentina reciente. Transformaciones políticas, económicas y sociales

en el período 2001-2011.....	297
I- De la crisis del 2001 a la presidencia de Kirchner.....	298
II- La presidencia de Kirchner. La recuperación del rol del Estado.....	302
La inversión en educación, ciencia y cultura.....	303
Los derechos humanos, nuevamente en el centro de la política.....	305
El modelo de desarrollo económico.....	308
Las políticas sociales.....	311
III- La recuperación de la iniciativa política.....	312
¿La “desmovilización” de la clase media?.....	314
La oposición, entre la fragmentación y la denuncia.....	317
IV- La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.....	318
El conflicto con el campo.....	319
De la crisis internacional al revés electoral: reconstrucción y relanzamiento del gobierno.....	319
V- Sobre el contexto internacional: la búsqueda de autonomía.....	326
VI- A manera de reflexión final.....	329
Bibliografía.....	330
 Autores y autoras.....	 333

Presentación

Este libro propone un recorrido por la historia de la Argentina a partir de un núcleo de problemas que se imbrican tanto en el campo de la política como en el de las experiencias sociales. Se trata de echar luz sobre algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XX para conocerlos pero, fundamentalmente, para desarrollar un análisis crítico sobre ellos que enriquezca y complejice la mirada sobre el presente.

Cada capítulo focaliza en un período particular, desarrolla un relato general sobre la etapa en cuestión y analiza algunos de los problemas más relevantes. A su vez, busca plantear el proceso histórico en relación a las experiencias de los diversos actores sociales, resaltando los conflictos y las tensiones que marcan la dinámica del cambio. Los cortes que organizan cada período remiten a ciertos acontecimientos políticos y/o sociales cuya relevancia justifica considerarlos como puntos de llegada y de partida. No obstante, en cada capítulo también se retoman los problemas planteados en el apartado anterior para mostrar así cómo operan y se articulan las continuidades y las rupturas durante el devenir de la historia. En el último capítulo, referido al período 2003-2011, se ofrecen algunos ejes para el análisis de la realidad contemporánea.

El relato de la historia argentina del siglo XX que aquí se presenta no pretende ser ni total ni totalizante, no busca dar cuenta ni de todos los procesos ni de todos los acontecimientos. Tampoco aspira a que las explicaciones ofrecidas funcionen como respuestas únicas o absolutas a las preguntas planteadas. Por el contrario, y aun reconociendo omisiones y simplificaciones, se ha optado por organizar un texto que, focalizando

en algunas cuestiones, permita luego discutirlos y revisarlos para formular nuevas preguntas y nuevos análisis. En ese sentido, el relato propuesto y la selección de temas y problemas considerados pretenden ser estímulos para la reflexión, la discusión y la crítica.

Sobre esta edición, para el primer cuatrimestre 2019

El presente cuadernillo contiene una compilación de trabajos que recorren el período 1955 al 2011 organizados en dos partes, con cuatro y dos capítulos respectivamente: se trata de textos originales realizados por docentes de la materia Problemas de Historia Argentina de la UNAJ y destinados especialmente a los estudiantes que cursan dicha asignatura. En ese sentido, este cuadernillo es la herramienta principal, aunque no la única, con la que se trabajará en las clases.

La numeración de los capítulos continúa la secuencia iniciada en “Problemas de Historia Argentina, 1912-1955”, editado oportunamente.

Segunda parte | 1955-1983

**La Argentina entre 1955 y 1983:
inestabilidad política, conflictividad social y
terrorismo de Estado**

Presentación

En esta segunda parte del libro vamos a estudiar algunas de las cuestiones más relevantes de la historia argentina entre 1955 y 1983. Fueron años convulsionados donde el tiempo pareció correr más rápido que de costumbre. Esa aceleración temporal estuvo asociada, en buena medida, a los cambios vertiginosos de la vida nacional que en esos años se manifestó de muy diversas maneras. Sin lugar a dudas, la inestabilidad política –y sus intentos por resolverla– es una de las características que definen esos años y por ello será uno de los tópicos que indagaremos en las páginas que siguen. Analizaremos sus causas y los efectos que provocó en la sociedad argentina, las lecturas que hicieron los actores sociales y políticos sobre ella y las distintas propuestas que ofrecieron para superarla. Asimismo, la cuestión de la inestabilidad política nos permitirá pensar sobre las distintas ideas de orden que circulaban por entonces.

Tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, el gobierno militar de Pedro E. Aramburu decretó la proscripción del peronismo. Esa decisión –que se mantuvo por dieciocho años– resulta una de las principales razones de aquella inestabilidad que impidió la participación política a amplios sectores de la sociedad argentina. La proscripción del peronismo y sus consecuencias sobre el sistema político se iban a entrelazar con las posturas revolucionarias surgidas al calor de la experiencia de la Revolución Cubana (1959). En la Argentina, como en otros países de América Latina, surgieron organizaciones político-militares, nutridas mayormente por jóvenes,

dispuestas a seguir el ejemplo cubano. De este modo, grupos de cuño peronista y de izquierda optaron por el camino de la lucha armada para terminar con el orden capitalista, al que consideraban el responsable de todas las miserias e injusticias que padecía el pueblo. Estas agrupaciones que proponían un modelo de sociedad radicalmente distinto fueron objeto de especial persecución y represión políticas. Las Fuerzas Armadas (FFAA) cumplieron una función esencial en ello, asumiendo un nuevo papel: la represión del enemigo interno. Amparadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DNS), las FFAA llevaron adelante una serie de acciones tendientes a coartar cualquier manifestación contestataria que discutiera el orden capitalista o propusiera una mayor democratización de la sociedad. Así, lejos de defender el régimen democrático, las fuerzas militares no dudaron en atentar contra él: los sendos golpes de Estado que perpetraron en 1966 y 1976 los justificaron apelando a las prescripciones de la DSN.

Para enfrentar la inestabilidad política –agravada por manifestaciones de violencia cada vez frecuentes– y la agudización de la conflictividad social, las FFAA y sectores civiles afines organizaron una respuesta extrema de disciplinamiento social basada en dos propuestas interconectadas: la aplicación de un programa económico neoliberal destinado a doblegar a la clase obrera organizada y liquidar el esfuerzo social de más de cuarenta años orientado al crecimiento industrial, y la puesta en marcha de un plan sistemático de represión política ilegal para la eliminación física de los opositores. La ejecución de ese proyecto se puso en práctica a partir del 24 de marzo de 1976 cuando las FFAA derrocaron al gobierno de Isabel Perón y tomaron el “control operacional” del país, como lo anunciaron en su Comunicado N° 1 a la población argentina. En tanto parte del entramado histórico que la precedió, la última dictadura militar (1976-1983) será estudiada en el último capítulo de esta tercera parte. Allí prestaremos especial atención tanto a las condiciones de posibilidad que dieron lugar

al horror del terrorismo estatal como a las significativas transformaciones que sufrió la sociedad argentina durante esa siniestra etapa de su historia.

Desde mediados de los años cincuenta y durante la década de 1960 también ocurrieron importantes transformaciones sociales y culturales que impugnaron el orden familiar y doméstico y la sexualidad imperantes. La emergencia de la juventud como fuerza política y social dispuesta a ir contra lo instituido y a proponer modelos alternativos de vida social, el nuevo papel de las mujeres y los cambios en las dinámicas familiares y las relaciones de pareja serán otros de los aspectos a problematizar.

La economía y la política económica que implementaron los sucesivos gobiernos entre 1955 y 1983 también estarán contempladas aquí. Pondremos atención a las características que asumió la industrialización por sustitución de importaciones durante la década del sesenta y el avance de la transnacionalización de la economía argentina. Analizaremos qué sectores económicos se beneficiaron por las políticas económicas de los gobiernos y cuáles se vieron perjudicados y las pujas entre el capital y el trabajo. En 1976, el plan económico implementado por última dictadura, autodenominada “Proceso de reorganización nacional”, decidió interrumpir la apuesta por la industrialización al colocar en el corazón de la vida económica del país a la especulación financiera. A través de distintas medidas como la apertura económica, la reforma del sector financiero y la devaluación pautada del dólar, la última dictadura militar dio forma a un nuevo modelo socio-económico que afectaría el bienestar de amplios sectores de la sociedad argentina.

Capítulo 4

Inestabilidad política, ilegitimidad, tutela militar y resistencia social, 1955-1966

Karin Grammatico

El derrocamiento del presidente Perón en septiembre de 1955 abrió una nueva etapa en la historia argentina caracterizada por una fuerte inestabilidad política que reconoce en la proscripción del peronismo una de sus causas principales. La resolución del gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958) de prohibirlo excluyó a una importante porción de la ciudadanía de los canales de la participación propios de un régimen democrático, lo que trajo aparejado cambios en las formas de hacer política.

El peronismo, duramente perseguido durante aquellos años, debió reorganizarse para poder actuar en un escenario políticamente adverso. Su proscripción, la detención de sus principales referentes y el exilio de su líder contribuyeron a la formación de una nueva dirigencia sindical que en esos años acumularía el poder suficiente como para convertirse en “la columna vertebral” del peronismo y disputarle el liderazgo del movimiento al propio Perón. Ese poder se asentó en la capacidad de representar gremialmente a la clase trabajadora y políticamente a los y las peronistas.

La injerencia de las FFAA en la vida política argentina se agudizó en este período. La tutela ejercida sobre los gobiernos civiles de Arturo Frondizi (1958-1962), José María Guido (1962-1963) y Arturo Illia (1963-1966) profundizó aún más la debilidad de estas presidencias que desde su origen se hallaban cuestionadas en su legitimidad dada la vigencia de la proscripción del peronismo. La Revolución Cubana (1959) y el posterior establecimiento de un gobierno socialista en la isla caribeña encendieron las alarmas de la seguridad continental. El temor de los Estados Unidos (EEUU) era que el ejemplo cubano se difundiera en toda Latinoamérica. Por ello se propuso llevar adelante un accionar coordinado con los Ejércitos de la región para contrarrestar cualquier intento que pusiera en entredicho los valores de la sociedad capitalista occidental. A partir de entonces el control de las fuerzas militares sobre la población se hizo más agobiante.

Como lo señaló el historiador César Tcach, la complejidad del período 1955-1966 se expresa en la variedad de términos que los investigadores acuñaron para denominarlo: *semidemocracia* (por la proscripción del peronismo), *parlamentarismo negro* (por el ejercicio de la política por fuera de los canales institucionales habituales), *juego imposible* (habida cuenta de las dificultades de ganar elecciones sin el apoyo de los votos peronistas y de mantenerse en el poder sin el respaldo de las FFAA, que bregaban por el mantenimiento de la proscripción del peronismo) o *empate hegemónico* (porque cada uno de los actores contaba con la fuerza suficiente para impedir el triunfo del proyecto del contrincante político pero no la tenía a la hora de plasmar el suyo propio). Cada uno de ellos subraya un aspecto crucial de la etapa que estudiaremos en este capítulo.



General Eduardo Lonardi (centro).

Fuente: Archivo General de la Nación.

I- Los gobiernos militares de la Revolución Libertadora, 1955-1958

La breve gestión de Lonardi: el fracaso de una conciliación (im)posible

Como estudiamos en el capítulo anterior, el 16 de septiembre de 1955 un golpe de Estado, autoproclamado Revolución Libertadora, derrocó al gobierno de Juan D. Perón. Las fuerzas golpistas designaron al general Eduardo Lonardi, católico y de la facción nacionalista del Ejército, presidente provisional. Lonardi intentó llevar adelante un gobierno de pacificación y reconciliación que él mismo supo expresar con la frase: “ni vencedores, ni vencidos”. Desde su óptica, resultaba fundamental un entendimiento con los sectores trabajadores para alcanzar una concordia

social. Por ello, se comprometió a respetar las conquistas obreras y no intervenir a la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta postura conciliadora, cuyo límite era la figura de Perón, no contaba con el suficiente respaldo dentro de las FFAA. En el ámbito castrense primaba la idea de dismantelar el Estado peronista y reducir al mínimo posible el poder del movimiento obrero. Esta confrontación de criterios se resolvió a favor de los sectores del antiperonismo más acérrimo quienes decidieron, a comienzos del mes de noviembre de 1955, destituir a Lonardi y designar en su reemplazo al general Pedro E. Aramburu.

El gobierno de Aramburu-Rojas: los intentos de la “desperonización”

Con la llegada de Aramburu a la presidencia y con el acompañamiento del almirante Isaac Rojas, como vicepresidente, el proceso de “desperonización” se puso en marcha. El nuevo gobierno de facto contó con el respaldo de un Consejo Militar integrado por representantes de cada una de las FFAA. Este Consejo asumió una doble función: por un lado reemplazó al Congreso en la elaboración legislativa; por otro, ejerció una observancia sobre el propio gobierno para asegurar que éste no traicionara, como sí lo había hecho Lonardi meses atrás, los objetivos fundamentales de la “Revolución Libertadora”. Por otra parte, la dictadura de Aramburu contó con el aval político de los partidos antiperonistas quienes se reunieron en una Junta Consultiva Nacional integrada, entre otros, por los radicales Oscar Alende y Miguel Zavala Ortiz; los dirigentes del Partido Socialista Américo Ghioldi y Alicia Moreau de Justo; y Horacio Thedy, del Partido Demócrata Progresista.



General Pedro Eugenio Aramburu en el acto de asunción de la presidencia provisional de la Nación.

Fuente: Archivo General de la Nación.

Las primeras disposiciones destinadas a borrar la experiencia peronista de la sociedad argentina incluyeron la disolución del Partido Peronista, la inhabilitación de todos sus dirigentes para asumir cargos electivos o en la administración pública, la exclusión de la actividad sindical para todos aquellos que ocuparon cargos gremiales entre 1952 y 1955 y la derogación de la Constitución Nacional de 1949. Frente a estas medidas, la CGT, un bastión del peronismo, convocó a la huelga general que rápidamente fue declarada ilegal por el gobierno y cientos de dirigentes obreros fueron detenidos. Pero la respuesta oficial avanzó aún más: intervino la confederación de trabajadores –el capitán de navío Alberto Patrón

Laplacette fue designado interventor—, disolvió las comisiones internas en los sitios de trabajo y anuló la Ley de Asociaciones Profesionales, pieza clave de la estructura sindical diseñada por el peronismo en los años cuarenta. En marzo de 1956, a través del Decreto N° 4161, el gobierno prohibió la utilización de imágenes (como las fotografías y esculturas de Juan y Eva Perón), símbolos (el escudo y las banderas peronistas, por ejemplo), expresiones significativas (especialmente el nombre propio del ex presidente y su esposa; los términos peronismo, peronista, justicialismo, justicialista y “Tercera posición”) y artículos y obras artísticas (“La marcha de los muchachos peronistas” y “Evita Capitana”) que reafirmasen la ideología peronista.

Los padecimientos de las clases trabajadoras también se manifestaron en el terreno estrictamente económico. Las medidas del gobierno de Aramburu pretendieron reducir las regulaciones del Estado y dar marcha atrás con las políticas de redistribución del ingreso: dos pilares de la política mercadointernista que supo aplicar el peronismo cuando gobernó. La supresión del IAPI y de los controles de cambio, la devaluación del peso, el congelamiento de salarios y la eliminación de los subsidios al consumo de los sectores populares son ejemplo de ello. Otras de las determinaciones políticas en materia económica tomadas por Aramburu fue la incorporación, en 1956, de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien esto permitió que el país accediera a un nuevo canal de financiamiento externo, los condicionamientos impuestos a los gobiernos, a cambio de la “ayuda”, habrían de lesionar la autoridad del Estado argentino para dirigir su política económica.

El Plan Prebisch

Las FFAA convocaron al economista argentino Raúl Prebisch para que elaborase un estudio sobre la situación de la economía argentina y brindara orientaciones para el diseño de un futuro plan económico. Prebisch, quien por entonces era funcionario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo dependiente de las Naciones Unidas, dio a conocer su trabajo a fines de octubre de 1955. En él, advertía sobre la “grave crisis” que atravesaba el país y proponía una serie de medidas de emergencia para atacarla, indicaciones que por cierto no se ajustaban estrictamente al pensamiento cepalino. En primer lugar recomendaba ayudar a la actividad agropecuaria porque había resultado la más afectada por la política peronista. También sugería el respaldo para el sector industrial pero limitado en el tiempo y destinado solo a los rubros que demostraran ser competitivos y aconsejaba recurrir a las importaciones en aquellas ramas que no lo fueran. En su informe señaló, además, la necesidad de abrir la economía argentina a los capitales extranjeros —el ingreso al FMI lo consideraba imprescindible— y condicionó el aumento de salarios al incremento de la productividad. Finalmente, juzgaba urgente “desmantelar el absurdo sistema de intervención estatal”. El Estado, sostenía, debía reducirse a funciones de sostenimiento de la actividad privada y asegurar una correcta administración de los bienes públicos. Aún cuando la propuesta de Prebisch no se transformó en el programa económico de la Revolución Libertadora (de hecho nunca lanzaron un plan económico con objetivos definidos) en varias de las medidas tomadas por el gobierno de Aramburu se acredita su influencia.

La respuesta de Arturo Jauretche al Plan Prebisch: el retorno al coloniaje

Arturo Jauretche contestó críticamente la propuesta de Prebisch. En sus consideraciones, reunidas luego en el texto *El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje*, señalaba que la supuesta crisis económica en la que estaba sumergida la Argentina era un “falso pretexto” para poder aplicar un plan económico que definió como “la gran estafa a los intereses y las aspiraciones de la nacionalidad”. Para el pensador nacional, la propuesta del economista buscaba desarticular el modelo socioeconómico que, basado en la industrialización y el fortalecimiento del mercado interno, había permitido difundir el bienestar entre todos los argentinos. Según su opinión, la apuesta deliberada por el sector agropecuario y los límites impuestos a la actividad industrial que se hacían en el Plan Prebisch traerían consecuencias desastrosas para el país: “Los argentinos reduciremos el consumo, en virtud de la elevación del costo de vida y del auge de la desocupación. La mayor parte de nuestra industria; que se sustentaba en el fuerte poder de compra de las masas populares, no tardará en entrar en liquidación. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse la comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada”.

Igualmente grave resultaba el aliento a la presencia de los capitales extranjeros en la economía argentina. Advertía Jauretche: “(...) mientras tanto nos iremos hipotecando con el fin de permitir que falsos inversores de capital puedan remitir sus beneficios al exterior. Y como nuestra balanza de pagos será deficitaria, en relación de la caída de nuestros precios y de la carga de las remesas al exterior no habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir”. Otro de los puntos de denuncia más importante estuvo enfocado en el pedido de Prebisch de restringir

la intervención estatal. Con ironía, uno de los fundadores de FORJA reflexionaba: “El dirigismo tiene el sentido que le da el que dirige, y siempre hay dirigismo. Solo que se llama dirigismo cuando dirige el Estado y libertad económica cuando dirigen los grupos monopolistas particulares, que en los países coloniales o semicoloniales no son muy particulares, porque a su vez están dirigidos por la política del imperio predominante”. En definitiva, para Arturo Jauretche, el Plan Prebisch representaba un momento decisivo para el país, allí estaba “el secreto de nuestro porvenir libre o esclavo, del bienestar o de las penurias de los argentinos”.

La Resistencia Peronista

Frente a las acciones del gobierno de Aramburu que pretendían eliminar al peronismo de la vida argentina y la aplicación de medidas económicas que lesionaban el sustento de las clases trabajadoras, la militancia peronista contestó a través de diferentes actos de resistencia organizados, especialmente, por los obreros. Eran ellos quienes cotidianamente experimentaban en sus lugares de trabajo la dureza de las políticas laborales, la “revancha” de los dueños de las empresas y la proscripción política fuera de las fábricas. De ese sustrato trabajador se nutrieron los “Comandos de la resistencia peronista”: grupos que con escasa planificación y con difusas direcciones se enfrentaron al antiperonismo con acciones defensivas tales como “volanteadas” a favor de Perón, el sabotaje a las instalaciones fabriles y la colocación de “caños”, unos explosivos caseros fabricados por los propios militantes.

Los peronistas intentaron otras formas de rechazar a la “Revolución Libertadora”. En la noche del 9 de junio de 1956 estalló en varios puntos del país un levantamiento cívico-militar contra Aramburu y liderado por el general Juan José Valle. El gobierno de facto supo con anticipación del intento de rebelión y actuó con rapidez: derrotó a los rebeldes en sus

centros neurálgicos —el 7mo. Regimiento de Infantería de La Plata y la guarnición de Campo de Mayo— y declaró la vigencia de la Ley Marcial, es decir, la posibilidad de un juicio sumarísimo con atribuciones para aplicar la pena de muerte a toda persona hallada culpable de perturbar el orden público. El gobierno de Aramburu, no conforme con el aplastamiento de la rebelión, ordenó el fusilamiento de 38 personas, entre ellas, el general Valle y un grupo de civiles que fueron detenidos antes de que se declarase la Ley Marcial. Fue la investigación del periodista y escritor Rodolfo Walsh la que permitió conocer la ilegalidad de esos asesinatos a civiles que tuvieron lugar en los basurales de la localidad bonaerense de José León Suárez. Su pesquisa se publicó en varios envíos por el semanario *Mayoría* entre mayo y junio de 1957 y luego reunida en el libro “Operación Masacre”.

La organización sindical bajo el gobierno de Aramburu

Las distintas medidas tomadas por el gobierno de Aramburu en materia sindical perseguían un objetivo muy claro: desmalezar el terreno de toda presencia peronista para que en las futuras elecciones gremiales fueran elegidos dirigentes verdaderamente “democráticos”, que en la jerga del gobierno de facto significaba antiperonistas. Ese propósito, sin embargo, no se cumpliría.

Mientras las bases obreras “resistían” en sus lugares de trabajo, una nueva camada de dirigentes sindicales peronistas, que reemplazaron a los que se hallaban proscritos por “La Libertadora”, tuvieron la ardua tarea de recuperar los gremios. En esos difíciles años, lograron que se realizaran elecciones en un número importante de entidades en las que obtuvieron excelentes resultados. Todos los sindicatos industriales, como la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM), fueron ganados por conducciones peronistas. Las corrientes sindicales antiperonistas (el socialismo y el radicalismo, fundamentalmente) ganaron en los gremios del sector servicios: bancarios, municipales y empleados de comercio.

En 1957, el interventor militar de la CGT, el capitán Patrón Laplacette, convocó a un congreso para normalizar el funcionamiento de la central obrera (es decir, que se realicen elecciones para dotarla de autoridades). Este fracasó ya que, al verse en minoría, los dirigentes antiperonistas abandonaron la reunión y formaron los 32 Gremios Democráticos. El resto de los sindicatos, peronistas en su inmensa mayoría, constituyeron las 62 Organizaciones. Esta fue la primera entidad peronista completamente legal desde la destitución de Perón y sería utilizada por los sindicatos para presionar a los gobiernos del período “semidemocrático”, tanto en el campo gremial como político. A fines de ese año, las 62 Organizaciones se reunieron en La Falda (Córdoba) para elaborar un programa de lucha en el que pedirían algo más que aumento de salarios. El control estatal del comercio exterior, la liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación, política de alto consumo interno, desarrollo de la industria liviana y consolidación de la pesada, expropiación del latifundio y la previsión social integral fueron algunas de las reclamaciones.

Los partidos políticos en tiempos de la Revolución Libertadora

Los partidos políticos no peronistas se debatían en torno a una cuestión: avalar la exclusión del peronismo, siguiendo la línea fijada por el gobierno de facto, o propiciar su integración a la vida política argentina. Las respuestas divergentes a dicha pregunta llevaron a la fractura de varios de ellos. Los radicales se dividieron en 1956: de un lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) que, bajo el liderazgo de Ricardo Balbín, manifestaba su acuerdo con la decisión tomada por la “Revolución Libertadora”. Del otro, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) que, dirigida por Arturo Frondizi, consideraba necesaria la integración política del peronismo para lograr una estabilidad democrática duradera. Las divisiones también llegaron al Partido Socialista. Un sector mantuvo su apoyo al gobierno de Aramburu dando lugar a la fundación del Partido

Socialista Democrático (PSD) con Américo Ghioldi a la cabeza. Otro grupo se distanció de la política oficial, que en un principio apoyó, y creó el Partido Socialista Argentino, siendo Alicia Moreau de Justo una de sus fundadoras. Del Partido Demócrata (una fuerza que agrupaba los conservadores), se desprendió el Partido Conservador Popular liderado por Vicente Solano Lima. El Partido Comunista (PC) logró mantener su unidad bajo la conducción de Victorio Codovilla y revisó su postura inicial de apoyo al gobierno de facto para luego denunciar la represión a los trabajadores.

La reforma de la Constitución Nacional

A pesar de sus esfuerzos, el gobierno militar se mostraba incapaz de mejorar la economía y su política de “desperonización” no parecía ser efectiva, tal como lo evidenciaban las manifestaciones de resistencia popular. En ese contexto adverso, anunció, en 1957, la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Carta Magna. Como ya señalamos, Aramburu, a través de un decreto, anuló la Constitución sancionada en 1949 y restableció el texto anterior, de 1853. La realización de una asamblea de tales características pretendía dotar de legitimidad a esa decisión tomada en soledad por los militares. Al mismo tiempo, la elección de constituyentes se presentaba como una oportunidad para medir las inclinaciones políticas de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones generales que se habían anunciado para comienzos de 1958.

Las elecciones se realizaron sin la participación de candidatos peronistas y demostraron el fracaso de la proscripción: el 24,3% de los votos emitidos fue en blanco. La UCRI obtuvo el 24,2 % y la UCRP, el 21,2 %. Estos resultados, además de señalar la vigencia del peronismo como fuerza política, les indicaban a los partidos políticos no peronistas la necesidad de captar esos votos si pretendían triunfar en la próxima contienda electoral.

La Convención Constituyente sesionó con muchos altibajos. Ya en su primera reunión, los constituyentes de la UCRI abandonaron el recinto por considerar que el gobierno de facto no tenía autoridad para convocar a una reforma constitucional. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, logró declarar la vigencia de la Constitución de 1853 (con las reformas introducidas en 1860, 1866 y 1898). Y aunque se excluyeron todas las modificaciones introducidas en 1949, se agregó un “bis” al artículo 14 en el que se incorporó una serie de derechos laborales y de obligaciones sociales por parte del Estado presentes en la Constitución peronista.

Las elecciones de 1958

Arturo Frondizi, dirigente radical y máximo referente de la UCRI, advirtió la importancia de lograr un acuerdo con el peronismo para ganar las elecciones generales de 1958 y se dispuso a concretarlo. Rogelio Frigerio, su hombre de confianza, se encargó de las negociaciones. Él y John William Cooke, delegado personal de Perón, actuaron como interlocutores de ambos líderes. Las gestiones concluyeron en un acuerdo, por entonces secreto, por el cual Perón, desde el exilio, se comprometía a convocar a sus adherentes a votar al candidato de la UCRI, en tanto Frondizi aceptaba revisar las medidas tomadas durante el gobierno de Aramburu, restablecer las conquistas sociales obtenidas y concretar la normalización de los sindicatos y la CGT sin la proscripción del peronismo. El cálculo de Frondizi no fue errado. Las elecciones realizadas en febrero de 1958 lo dieron como triunfador con el 45% de los votos (sobre un total de 9.063.498 sufragios emitidos) seguido por Ricardo Balbín de la UCRP, que obtuvo el 29% de los sufragios.

II- La presidencia de Arturo Frondizi, 1958-1962

Arturo Frondizi asumió la presidencia el 1º de mayo de 1958 y se vio interrumpida en marzo de 1962 por un golpe militar. Su programa

de gobierno apostaba a la *integración* política de los principales actores sociales y políticos (los “factores de poder” según la jerga de la época) y el *desarrollo* de la economía argentina a partir de la expansión industrial incentivada por capitales extranjeros. Lograr la integración política y el desarrollo económico, bajo las condiciones políticas reinantes y con los compromisos asumidos, implicaba enfrentarse a contradicciones difíciles de resolver.



Arturo Frondizi.

Fuente: Wikipedia.

Las primeras medidas tomadas por Frondizi parecían indicar su intención de respetar el acuerdo con Perón y facilitar la integración del peronismo y de los sindicatos al sistema político. Entre ellas podemos mencionar: la ley de amnistía que liberó a los presos políticos peronistas y les permitió participar de actividades políticas y gremiales, la derogación de las inhabilitaciones gremiales impuestas por la Revolución Libertadora, la anulación del decreto que prohibía el uso de los símbolos peronistas, el otorgamiento de un aumento salarial del 60% (que venía a compensar

un aumento similar en los precios) y una nueva ley de Asociaciones profesionales, inspirada en la anterior normativa peronista, que volvió a establecer el sindicato único por rama industrial y el sistema de lista completa que le aseguraba a la lista ganadora el control total del sindicato. Si bien estas medidas revocaron varias de las restricciones impuestas al peronismo, la proscripción política se mantuvo. Para las FFAA y los sectores antiperonistas esas disposiciones fueron suficientes para acusar a Frondizi de querer romper la estrategia de desperonización de la sociedad argentina diseñada en 1955. Rápidamente, Frondizi dejaba de ser confiable para los militares quienes se dispusieron a ejercer su tutela sobre el gobierno civil.

“Laica o Libre”

Frondizi también pretendió “integrar” a su propuesta política a la Iglesia Católica y contar con su apoyo. Para ello envió al Congreso un proyecto de ley que reconociera y reglamentara el funcionamiento de las universidades privadas, que en su mayoría dependían de esa institución religiosa. Esto provocó la protesta de las universidades nacionales, especialmente la de la Universidad de Buenos Aires, cuyo rector era su hermano Risieri. Estudiantes, profesores y amplios sectores de la cultura rechazaban, en nombre de la laicidad de la educación, que los títulos emitidos por entidades privadas se igualaran a los otorgados por las instituciones públicas. El conflicto conocido como “Laica o Libre” se resolvió a favor de la propuesta gubernamental al lograr que el Congreso Nacional aprobara el proyecto presentado. A partir de entonces las universidades privadas pudieron emitir títulos habilitantes. De esta manera, el presidente se congraciaba con la Iglesia Católica pero perdía el respaldo inicial que le habían ofrecido los sectores progresistas y universitarios.

El programa desarrollista

El programa económico de Frondizi respondía, en buena parte, al ideario de la CEPAL que consideraba que el desarrollo económico en América Latina se lograría a partir de la industria de base o pesada. Para lograr dinamizar ese tipo de industria era necesario contar con grandes cantidades de capitales y tecnologías de avanzada que internamente no estaban disponibles. Por ello, el gobierno alentó de diversas maneras la inversión extranjera.

En julio de 1958 firmó contratos con empresas petroleras norteamericanas argumentando la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos ya que el petróleo y sus derivados representaban por entonces en 21% de las importaciones de la Argentina. Si bien la medida logró su objetivo –en 1962, por primera vez, el país no necesitó comprar petróleo en el exterior– generó fuertes críticas desde distintos sectores. Por un lado, los peronistas le recordaron a Frondizi los argumentos que él mismo había esgrimido en defensa de la soberanía nacional cuando el gobierno de Perón intentó firmar un contrato similar con la California Oil Company. Por otro, la oposición política repudiaba la negativa del Poder Ejecutivo de dar participación al Congreso en una decisión que afectaba el patrimonio nacional. Los trabajadores petroleros, por su parte, organizaron una huelga en contra de los convenios que fue rápidamente controlada por el gobierno.

Otra medida fundamental del proyecto desarrollista fue la Ley 14.780 de Radicación de inversiones extranjeras. La norma establecía amplias prerrogativas para los capitales externos interesados en invertir en el país: gozaban de los mismos derechos que las reglamentaciones locales otorgaban a los capitales nacionales y podían transferir ganancias al país de origen sin previa autorización del Estado nacional. La ley ofrecía, además, un trato preferencial a las empresas extranjeras interesadas en: a) producir bienes a partir de recursos locales, b) colaborar, a partir

de su propuesta, con el crecimiento de las economías regionales y c) dispuestas a fusionarse con empresas locales. A esta normativa se sumó la Ley 14.781 de Promoción industrial. La medida buscaba descentralizar industrialmente al país y evitar la concentración en el área metropolitana. Las zonas de Patagonia, Noroeste y Corrientes se vieron favorecidas por esta ley; y en cuanto a las ramas industriales las más beneficiadas fueron la siderurgia, la petroquímica y la celulosa.

Todas estas iniciativas locales y un contexto internacional muy favorable para el sistema capitalista –que atravesaba sus “años dorados”– produjeron un aumento significativo de las inversiones extranjeras en el país, especialmente las de origen norteamericano que se concentraron en la industria petrolera, la petroquímica y la automotriz. Este último rubro industrial recibió especial aliento del gobierno. Reconocidas empresas extranjeras se radicaron en el país. Entre ellas se destacaron: Citroën, Peugeot y Renault, que luego se asociaría con Industrias Kaiser Argentina (IKA) para la producción de autos en la localidad cordobesa de Santa Isabel; Deutz –especializada en la fabricación de tractores y maquinaria agrícola–, Autoar, Bambi y Goliath Hanza. Asimismo, otras firmas ya establecidas ampliaron sus plantas, tal fue el caso de Fiat y General Motors. En el marco de esta expansión de la industria automotriz, la empresa argentina SIAM Di Tella fabricó su primer automóvil, el SIAM Di Tella 1500. Salió a la venta en 1960 y rápidamente se ganó el interés del público.

El desarrollo del sector agropecuario también fue contemplado por la política desarrollista de Frondizi. Los esfuerzos estuvieron dirigidos, sobre todo, a su tecnificación: la incorporación de maquinarias y de nuevas semillas y el desarrollo de innovadoras técnicas de producción fueron algunas de las principales acciones “modernizadoras”. En este desarrollo jugó un papel muy importante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) –creado en 1956 y que Frondizi apuntaló con

su política científica— que transfirió gratuitamente los conocimientos y técnicas producidos por sus investigadores al sector primario para que este alcanzara un mayor potencial productivo.

1959: Plan de estabilización, protesta obrera y represión.

A fines del año 1958, un estrangulamiento en la balanza de pagos dio lugar a una crisis económica. Como se recordará la balanza de pagos es la cuenta que registra las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Allí se registran por ejemplo las exportaciones e importaciones de mercancías (también llamada balanza comercial), las exportaciones e importaciones de servicios (los transportes de carga y de pasajeros, los viajes de turismo y de negocios, los servicios postales o las telecomunicaciones, por ejemplo) y los pagos de intereses de la deuda externa, la remisión o recepciones de utilidades de las empresas transnacionales y los ingresos que reciben el Banco Central y los bancos comerciales por sus reservas colocadas en el exterior. El estrangulamiento del sector externo se produce, entonces, cuando las divisas disponibles no son suficientes para cubrir los gastos de importaciones y el pago de la deuda externa. La presencia cada vez más importante de empresas extranjeras radicadas en la Argentina a partir de los años sesenta sumará otro factor de demanda de dólares ya que estas los reclamarán para asegurarse la remisión de utilidades a sus casas matrices.

Para enfrentar esa situación, el gobierno de Frondizi solicitó un préstamo al FMI. Esta sería la salida habitual de la Argentina a la largo de la segunda mitad del Siglo XX: contraer nuevos créditos que no haría otra cosa más que profundizar su condición de deudora internacional. Como contrapartida al préstamo otorgado, la Argentina debió aplicar un “plan de estabilización” prescripto por el organismo internacional. Este se implementó en enero de 1959 y dispuso, entre otras medidas, la devaluación del peso, el congelamiento de salarios, la reducción de las

tarifas aduaneras, la supresión de controles de precios y la privatización del Frigorífico Lisandro de la Torre. La decisión de recurrir al FMI fue bien recibida por los sectores liberales y las FFAA. Para Frondizi implicó suspender su plan económico original y perder a Rogelio Frigerio, su asesor y hombre de confianza, y a David Blejer, su ministro de Trabajo, quienes renunciaron a sus cargos. En el alejamiento de Frigerio, y consecuentemente, en el de Blejer, un “frigerista” declarado, tallaron las presiones de los militares quienes censuraban al asesor por su pasado comunista, sus ideas desarrollistas y su postura integracionista frente al peronismo. Esas injerencias militares también influyeron en la designación de Álvaro Alsogaray, un conspicuo representante de la ortodoxia liberal, como ministro de Economía y de Trabajo simultáneamente.



Toma del frigorífico Lisandro de la Torre, enero de 1959.

Fuente: Anred.

El plan de estabilización desató una ola de protesta sindical que tuvo su epicentro en la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre para luego extenderse en distintos puntos del país a lo largo de ese año. Las huelgas

fueron numerosas y llevaron a una paralización laboral casi total. La respuesta gubernamental no se hizo esperar y dispuso la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) que se mantuvo hasta el 1º de agosto de 1961. Inspirada en la escuela militar francesa (ver recuadro La Escuela militar francesa, pág. 29), esta nueva disposición habilitaba a las FFAA a reprimir los conflictos internos –como las manifestaciones de los trabajadores–, detener a los sospechosos y someterlos a la justicia militar. La severa actuación de las fuerzas militares en 1959 determinó la derrota de las luchas obreras –que en los subsiguientes se verían reducidas notablemente– y afectó severamente la comunicación entre el gobierno y el peronismo.

Los postulados de la política económica ortodoxa bajo la lupa de dos economistas (*)

“La política económica ortodoxa, tal como fue aplicada por el FMI en la Argentina, se basa fundamentalmente en tres postulados, hipótesis o –con más exactitud– tres dogmas abiertamente expresados o tácitamente supuestos. Según el primer postulado, el libre juego de las fuerzas del mercado produce generalmente pautas de inversión, producción y comercio socialmente deseables. El segundo postulado, derivado de la “teoría cuantitativa del dinero”, es que los desequilibrios internos y externos –inflación y déficit de balance de pagos– se deben a una demanda doméstica excesiva que a su vez es generada por aumentos de la oferta de dinero debidos a déficit de presupuesto y abundancia del crédito bancario. El tercer postulado es la creencia de que las fuerzas del mercado, libres de intervención gubernamental o perturbaciones por la inflación, generarán, sin dificultades en el balance de pagos, un crecimiento “sano” de la producción y el empleo. (...) En cuanto al primero y desde el punto de vista de la teoría del bienestar, puede argumentarse, aunque no con mucho convencimiento, a favor de que se permita a las fuerzas del mercado actuar libremente en aquellos países industriales de Occidente donde

las disparidades entre la riqueza y los ingresos de las diferentes clases de la comunidad se encuentran más o menos niveladas. Pero, cualesquiera que sean los méritos de este argumento, está claro que tiene muy poca aplicación en los países subdesarrollados en vías de desarrollo (sic). En estos países, la distribución de la riqueza y del ingreso son tales que las fuerzas de mercado, libres de toda intervención gubernamental, conducirán generalmente a una pauta de inversión, producción y gasto que satisfará a sólo una minoría, una pequeña parte de la población. Pocos observadores juzgarán a éste un resultado deseable desde puntos de vista sociales y políticos, en esta segunda mitad del siglo XX. En cuanto al tercer postulado de la filosofía ortodoxa, bastará con señalar que la experiencia de muchos países en este siglo y en particular durante la Gran Depresión de la cuarta década de este siglo, demuestra claramente que el libre juego de las fuerzas del mercado, la estabilidad de precios y el equilibrio presupuestario no son condiciones necesarias ni suficientes para el crecimiento de la producción y del empleo. La segunda hipótesis respecto de la inflación y el déficit del balance de pagos es igualmente discutible. Está demostrado en numerosos estudios de los desequilibrios internos y externos que estos problemas no son siempre causados por presiones de la demanda doméstica sobre la capacidad productiva. Factores tales como aumentos de salarios en relación a la productividad del trabajo; el deterioro de los términos de intercambio; cuellos de botella; bajas elasticidades de oferta, sobre todo en el sector de alimentos; y pérdidas de cosechas pueden producir en ciertas condiciones serios problemas de desequilibrio interno y externo. En estos casos, una política de restricción del crecimiento de la demanda global sólo frenará a la producción sin necesariamente lograr el restablecimiento del equilibrio. Esto es exactamente lo que ocurrió en la Argentina como resultado de un diagnóstico equivocado de la situación basado en el segundo postulado”.

(*) Tomado de Eprime Eshag y Rosemary Thorp: “Las consecuencias económicas y sociales de las políticas económicas ortodoxas aplicadas en la República Argentina durante los años de postguerra” en *Desarrollo económico*, Vol. 4, nº 16, 1965.

La situación del movimiento obrero durante el gobierno de Frondizi

La sanción de una nueva Ley de Asociaciones Profesionales, que recuperaba los aspectos más importantes de la sancionada durante los años cuarenta, resultó una pieza clave para la reconstrucción del sindicalismo argentino y permitió que los peronistas recuperasen su ascendencia sobre el movimiento obrero organizado. Por estas medidas, durante los primeros meses de su presidencia, Frondizi logró, no sin rispideces, un acuerdo mínimo con los sindicatos peronistas, nucleados en las 62 Organizaciones. Sin embargo, el plan de estabilización de 1959, la decisión de privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre y la aplicación del Plan CONINTES, que se extendió hasta 1961, pusieron en cuestión cualquier tipo de entendimiento entre sindicatos y gobierno. La intención del frondicismo de lograr una integración controlada del peronismo al sistema político no resultaría una tarea sencilla.

Durante el gobierno de Frondizi tuvo lugar otro importante acontecimiento para la vida sindical: la devolución de la CGT a los trabajadores que, como se recordará, se hallaba intervenida desde 1955. En octubre de 1960, sindicatos peronistas y no peronistas formaron una comisión de 20 miembros (“la Comisión de los 20”) para exigir el fin de la intervención de la central obrera y normalizar su funcionamiento. Frondizi, finalmente, atendió el reclamo de la Comisión y el 16 de febrero de 1961 devolvió la CGT a los sindicatos. Desde entonces y hasta 1963, la CGT fue conducida por un cuerpo colegiado de ocho integrantes, algunos peronistas, otros independientes: Andrés Framini (representante de los trabajadores textiles), Augusto Vandor (de la UOM), José Alonso (del Sindicato del Vestido), Rigo Ribas (de los gráficos), Juan Rachini (del sindicato de Aguas Gaseosas), Arturo Stafolani (La Fraternidad), Manuel Carullas (de los tranviarios) y Francisco Pérez Leiros (de representante de los municipales).

En el sindicalismo peronista comenzó a delinearse una corriente que haría del “pragmatismo institucional”- según la denominación del historiador Daniel James- su lógica de funcionamiento y que, en poco tiempo, terminaría por imponerse a otras líneas más “combativas” del gremialismo. La corriente del “pragmatismo institucional”, conocida también como el nombre de “vandarismo”, se construyó alrededor de la figura de Augusto T. Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más poderoso del país y determinante dentro de las 62 Organizaciones peronistas. Vandor comenzó a priorizar la negociación sindical con el gobierno bajo la lógica del pragmatismo y la aceptación del status quo imperante. Ya no se trataba de denunciar y actuar contra la situación adversa que vivían la clase trabajadora sino acomodarse a ella y encontrar un espacio de acción dentro de los límites impuestos. Este modo de integrar el sindicalismo al sistema político implicó a su vez la burocratización de los sindicatos y la aplicación de severos métodos de control sobre la vida interna de los gremios. Frente al vandorismo, se desarrolló una línea sindical más “combativa” –Andrés Framini fue uno de sus referentes– que reivindicaba la experiencia y los valores de la Resistencia, manifestaba mayor intransigencia frente al poder de turno, expresaba su reconocimiento al liderazgo de Perón y consideraba imprescindible asegurar su retorno a la Argentina.

El sindicalismo fue el único sector del peronismo que gozó de legalidad para actuar institucionalmente durante este período. Esta situación particular, efecto de la proscripción, hizo que los dirigentes sindicales asumieran la representación política de los trabajadores en tanto peronistas. El poder emanado de este nuevo rol les permitió influir sobre los gobiernos “semidemocráticos” e imponer hacia el interior del movimiento peronista criterios y candidatos en aquellas ocasiones en las que se permitió la presentación de postulantes peronistas.

Las FFAA: desconfianza y tutela

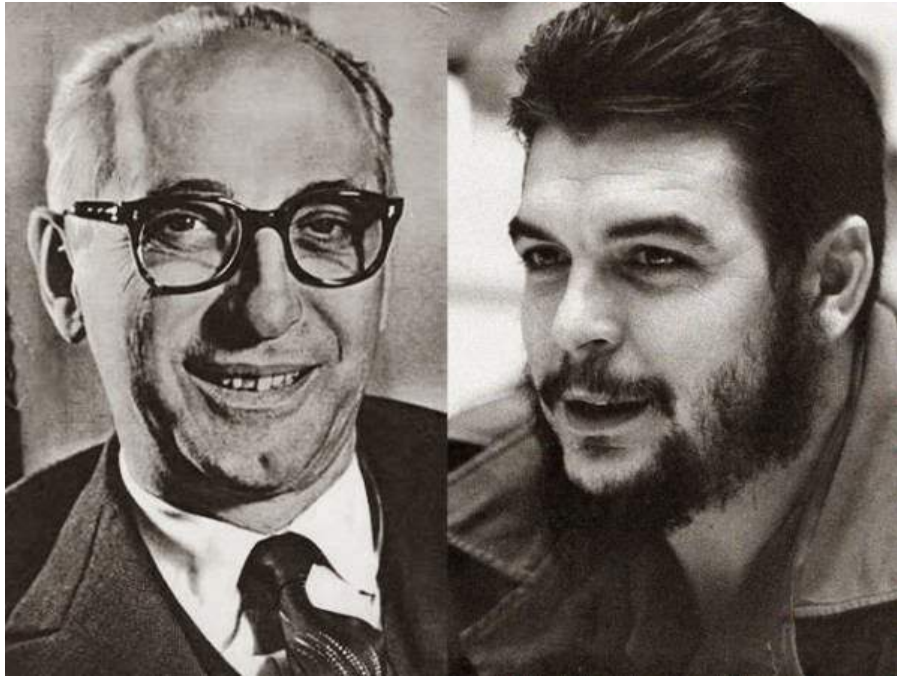
Muy tempranamente las FFAA manifestaron su recelo hacia Frondizi. Las principales dudas de los militares estaban centradas en la capacidad y el interés del presidente en mantener proscripto al peronismo. En tiempos de la campaña electoral, el Ejército ya había tomado nota del decisivo papel del voto peronista en el triunfo de la UCRI. Luego, observaron con alarma las primeras medidas “integracionistas” del frondicismo. Finalmente, la activa presencia Frigerio en el gobierno, la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales y una política exterior contraria a los lineamientos norteamericanos respecto de Cuba terminaron por asentar la desconfianza castrense hacia el presidente. Por ello, las FFAA no dejaron de observar, presionar e intervenir en los asuntos de gobierno. Su injerencia se vio facilitada por la participación en el gabinete nacional de tres secretarios —uno por cada arma— con rango ministerial y se manifestó a través de los “planteos”, forma de nombrar en esa época, las exigencias de las FFAA sobre Frondizi para que éste modificara decisiones y medidas consideradas improcedentes. La renuncia de Frigerio, la designación de Alsogaray como ministro de Economía y Trabajo y los cambios en la política exterior son algunos ejemplos de la incidencia de los militares sobre el gobierno civil.

La política exterior: el asunto cubano

En 1959 estalló en Cuba una revolución que a poco de su triunfo declaró el carácter socialista de su gobierno. Estados Unidos (EEUU), preocupado por una posible propagación de la “infección comunista” en la región, comenzó a desplegar una serie de variadas iniciativas para terminar con esa experiencia revolucionaria. Una de ellas se desarrolló en el terreno diplomático y pretendía la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA). EEUU logró que se tratase la cuestión en

la Octava Reunión de Cancilleres de la OEA que tuvo lugar en la ciudad uruguaya de Punta del Este entre el 22 al 31 de enero de 1962. Allí, el embajador norteamericano expresó que no debía admitirse en el sistema interamericano a ninguna nación que adscribiese al marxismo-leninismo. La delegación argentina, reconociendo el principio de “autodeterminación de los pueblos”, consideró que no debía intervenir en los asuntos internos de los países y manifestó que la mejor manera de combatir al comunismo era que los Estados Unidos cumpla con la ayuda financiera prometida a través de la “Alianza para el Progreso”: un ambicioso programa de préstamos a los gobiernos latinoamericanos lanzado en marzo de 1961 por el presidente estadounidense John F. Kennedy y cuyo objetivo era contrarrestar las aspiraciones revolucionarias en los países de la región a través de la ayuda económica.

Tras largas jornadas de discusión, EEUU logró imponer su postura que fue acompañada por 14 votos. Argentina, junto un grupo minoritario de países, se abstuvo de votar la expulsión de Cuba del sistema interamericana. Esta decisión de la Cancillería argentina generó un profundo malestar en las FFAA quienes rápidamente le “plantearon” a Frondizi su rechazo a lo actuado en Punta del Este. A pesar de las justificaciones del presidente, las presiones militares no cesaron y finalmente, a través del Decreto 1250 del 8 de febrero de 1962, el gobierno argentino rompió relaciones diplomáticas con Cuba.



El presidente Frondizi y el comandante Ernesto “Che” Guevara, por entonces ministro de Industria del gobierno cubano, mantuvieron un encuentro secreto el 18 de agosto de 1961 en la Quinta presidencial de Olivos. Las FFAA, al enterarse del encuentro, le exigieron la renuncia al presidente. Frondizi logró mantenerse en el cargo aunque por poco tiempo. La decisión de no apoyar la expulsión de Cuba en la reunión de la OEA de 1962 sellaría su suerte.

La Guerra Fría (1945-1991)

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el escenario internacional adquirió una nueva configuración determinada por la rivalidad entre los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por entonces las dos principales potencias del planeta. El mundo se partió en dos: de un lado, el

bloque occidental capitalista, liderado por los EEUU; del otro, el bloque oriental comunista, liderado por la URSS. La animosidad entre ambos países no se tradujo en un enfrentamiento armado y abierto entre ellos, sino que se expresó a través de conflictos bélicos que involucraron a otros países en los que las superpotencias intervinieron indirectamente apoyando a una de las partes en pugna. De ahí el nombre que se acuñó para nombrar a esta particular etapa de la historia contemporánea mundial que se extendió hasta 1991, año en que se produjo la disolución de la URSS.

La Guerra Fría también se desarrolló en el terreno ideológico-político, económico, cultural y científico, y tuvo en América Latina uno de sus epicentros. Para los EEUU, la región latinoamericana formaba parte de su zona de influencia. Por ello cuando el gobierno revolucionario de Cuba adhirió al socialismo la situación regional se volvió preocupante para el país del Norte. En su “patio trasero” se había establecido una cuña del comunismo internacional. A partir de entonces, los sucesivos gobiernos norteamericanos trabajarían para evitar que la experiencia cubana se propagase por el continente.

Así, América Latina fue escenario y objeto de contiendas entramadas en la Guerra Fría. La temprana intervención norteamericana en el derrocamiento del presidente guatemalteco, Jacobo Árbenz, en 1954, la Crisis de los Misiles en Cuba, en 1962; el golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, en Chile; las intervenciones de los Estados Unidos en Centroamérica a lo largo de las décadas del setenta y ochenta, y el apoyo a las dictaduras del Cono Sur son sus manifestaciones más importantes.

Las elecciones de 1962 y la destitución de Frondizi

La agenda política de 1962 indicaba la realización de elecciones de gobernadores e intendentes en distintos puntos del país y renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. Aún sabiendo que la decisión causaría irritación en las FFAA, el presidente optó por una maniobra arriesgada: dejar participar a los peronistas de la pulseada electoral. ¿Qué pretendía lograr con ella? En el cálculo político de Frondizi, dos elementos le daban confianza para hacerla: por un lado, los momentos más álgidos de la crisis ya habían pasado y se evidenciaba una recuperación económica, efecto de la llegada de inversiones extranjeras directas y no del plan de estabilización del FMI, sugerido por los sectores liberales y militares. Por otro, los triunfos locales de la UCRI en Catamarca, Santa Fe, San Luis, Formosa y La Rioja obtenidos en las elecciones del año anterior fueron apreciados como ejemplo del incipiente pero manifiesto avance de su política “integracionista” y la posibilidad de hacerse con los votos peronistas.

El anuncio de Frondizi tampoco pasó inadvertido entre los peronistas. Desde el exilio, Perón se mostró partidario del abstencionismo. Pero no era esa la postura que primaba entre las agrupaciones políticas neoperonistas –aquellas que surgieron a partir de las aperturas limitadas a la proscripción– y la dirigencia sindical. A pesar de las diferencias existentes entre ambas corrientes, acordaron listas de unidad, aunque fueron los sindicalistas quienes tomaron la iniciativa en el armado del frente y realizaron los aportes materiales necesarios para la campaña electoral. Sin demasiado espacio para torcer el curso de los acontecimientos, Perón terminó avalando la participación electoral de su movimiento. A cambio, logró imponer a Andrés Framini como candidato a gobernador de la provincia Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país.

Los resultados dieron la victoria al peronismo en ocho de las catorce gobernaciones en juego, incluida la de Buenos Aires. El presidente,

presionado por las FFAA, que no estaban dispuesta a admitir esos resultados, anuló las elecciones e intervino las provincias donde estas se llevaron a cabo. Esto no resultó suficiente para que los militares modificasen su decisión de destituirlo. El 28 de marzo de 1962 ocuparon las radios y anunciaron la vigencia del Plan CONINTES en todo el país. Los Comandantes en Jefe del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se entrevistaron con el presidente para exigirle su renuncia que este se negó a efectivizar. Durante la madrugada del 29, los intercambios entre los golpistas y Frondizi continuaron. Finalmente, a las 8 de la mañana de ese día, un grupo de militares se presentó en la residencia presidencial de Olivos y apresó al presidente, quien fue trasladado, en calidad de detenido, a la Isla Martín García. El golpe de Estado se había consumado.

III- La presidencia de José María Guido, 1962-1963

José María Guido, presidente provisional del Senado y dirigente de la UCRI, según lo estipulado por la ley de Acefalia, se hizo cargo de la presidencia desde el 29 de marzo de 1962 y hasta octubre de 1963. Su corto gobierno mantuvo una legalidad formal que no pudo ocultar la tutela que sobre él ejercieron las FFAA. En materia económica, Guido propició una vuelta a la Argentina liberal y agroexportadora –entre los funcionarios de la cartera de Economía se destacaron José Alfredo Martínez de Hoz y Alsogaray– en tanto que en asuntos de política interna, fortaleció la proscripción del peronismo al anular las limitadas aperturas que Frondizi había alentado durante su gestión.

“Azules y colorados”

Desde 1955, las FFAA atravesaban un proceso de disputas internas que estallaron públicamente en septiembre 1962 a través de un conflicto armado entre “Azules y Colorados” (con esos colores se designaban a los bandos que competían en los ejercicios de entrenamiento militares)

que puso en vilo a la ciudadanía argentina. En ese enfrentamiento se manifestaron las discrepancias existentes entre los militares respecto del peronismo y del papel de las FFAA en la vida política argentina. Los “azules” (también conocido como el sector “legalista” o “profesionalista” y mayoritarios en la Fuerza Aérea y la Caballería del Ejército) sostenían que las presiones militares debían tener un límite: el mantenimiento del orden constitucional y, aunque reactivos al peronismo, consideraban aceptable su integración política, siempre selectiva y condicionada. Por el contrario, los “colorados” (de fuerte representación en la Marina y la Infantería y Artillería del Ejército) no dudaban en intervenir en la política del país si con ello se aseguraban la proscripción del peronismo.



Tanques y efectivos movilizados durante el conflicto entre “azules” y “colorados”, septiembre de 1962.

Fuente: Archivo General de la Nación.

Durante los primeros meses del gobierno de Guido, los “colorados” mantuvieron la supremacía sobre los “azules”. Estos últimos, liderados por el general Juan Carlos Onganía, lejos de aceptar esa situación insistieron en denunciar su preocupación por el alto grado de indisciplina reinante en las FFAA que atribuían al alto nivel de exposición pública y politización de sus miembros. Era necesario, advertía la facción azul, que los militares retornasen a los cuarteles para desarrollar sus actividades profesionales. Las tensiones se acumularon y el enfrentamiento armado no se hizo esperar. El sector “colorado” fue derrotado y el Gral. Onganía asumió el cargo de comandante en jefe del Ejército. Sin embargo, el triunfo de los “azules” no logró neutralizar totalmente a sus adversarios “colorados” y el conflicto volvió a estallar cuando Guido llamó a elecciones generales para julio de 1963. El anuncio animó la formación de un Frente Electoral Nacional y Popular constituido por la UCRI, algunos partidos menores y la Unión Popular, un partido que había logrado su legalización y nucleaba, fundamentalmente, a militantes peronistas. Ante la posibilidad de que estos últimos sortearan la proscripción, un sector de los militares “colorados” se sublevó en abril de 1963. La intentona desestabilizadora fue aplacada por Onganía y el Frente Electoral, disuelto. A partir de entonces y bajo el liderazgo de Onganía, las FFAA se abocarían a su “profesionalización” y superación de los faccionalismos.

Crisis, estabilización y ajuste: la política económica de Guido y la respuesta sindical

En 1962 tuvo lugar una nueva crisis económica. La causa no era novedosa: una crisis de la balanza de pagos. La solución ofrecida por el gobierno de Guido tampoco: aumentó los impuestos, pospuso el pago de las jubilaciones y tomó un nuevo préstamo del FMI. Esto, como era de esperarse, obligó al gobierno argentino a implementar otro plan de estabilización comparable al que puso en marcha Frondizi en 1959. El

ajuste económico afectó muy duramente a la población trabajadora a través de la baja de salarios y el aumento de las tarifas de servicios públicos, y limitó el crecimiento de la industria mediante la restricción del crédito y reposicionó al sector agropecuario gracias a la devaluación del peso que no fue acompañada por la aplicación de retenciones (impuestos) a las exportaciones.

El peronismo, por su parte, advertía con preocupación la subordinación del presidente provisional a las políticas impartidas por las FFAA. El temor no era infundado. De acuerdo con el historiador Tcach, durante la gestión de Guido se prohibió toda propaganda peronista y se le negó existencia legal a la CGT en virtud de no haber renovado sus autoridades de acuerdo con los estatutos. El sector liderado por Vandor –el dirigente metalúrgico que había demostrado una gran capacidad de organización y movilización de los trabajadores en las elecciones de marzo de 1962– se mostró dispuesto al diálogo y la negociación con el gobierno para no profundizar las medidas antiperonistas. No estaban dispuestos a perder las aperturas políticas que les permitía participar de las elecciones y así poder avanzar en una apuesta política propia e independiente de Perón. En tanto los grupos sindicales más combativos organizaron huelgas y protestas para denunciar la política económica de Guido y la firma de un nuevo acuerdo con el FMI.

En julio de 1962, bajo el impulso de los “combativos” aunque sin la participación de los gremios más numerosos, las 62 Organizaciones peronistas se reunieron en Huerta Grande (Córdoba) para lanzar un programa de acción que fue leído por muchos como “un giro a la izquierda” de un sector importante del peronismo. La propuesta constaba de diez puntos y exigía, entre otras demandas: “nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado”, “nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo, frigoríficos” y “prohibir toda exportación directa o indirecta

de capitales”, “expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación”. El Programa de Huerta Grande, como lo estudiaremos en el capítulo siguiente, sería retomado por la CGT de los Argentinos en 1968.

En el mes de enero de 1963, la CGT logró realizar un congreso normalizador para elegir nuevas autoridades. Fue elegido secretario general José Alonso, dirigente del Vestido y miembro de las 62 Organizaciones. La flamante conducción lanzó en mayo de ese año una semana de protesta contra la política económica del gobierno que incluyó reuniones públicas con estudiantes universitarios, federaciones patronales y miembros de la Iglesia, y que culminó con un paro general de 24 horas de alto acatamiento.



“Un grito que estremece/ queremos a Vallese” fue la consigna que se cantó por mucho tiempo en las calles de la Argentina para exigir la aparición con vida del trabajador Felipe Vallese. El 23 de agosto de 1962, durante el gobierno de Guido y en el marco de la dura represión a las manifestaciones obreras de aquel año, se produjo el secuestro y posterior desaparición de Vallese, un joven obrero de la UOM y miembro de la Juventud Peronista, a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Las elecciones de 1963

La decisión de la justicia electoral de impugnar las listas en las que participaran peronistas, hizo que la militancia en su conjunto se uniera detrás de la decisión de Perón de votar en blanco en las elecciones del 7 de julio de 1963. La contienda electoral por la presidencia quedó reducida a tres candidatos: Oscar Alende; de la UCRI, Arturo H. Illia; por la UCRP y Pedro E. Aramburu, el ex presidente de facto, quien armó la Unión del Pueblo Argentino, mejor conocida por su sigla UDELPA. Los sufragios se distribuyeron de la siguiente manera: el primer lugar fue para la UCRP que obtuvo el 25,8% de los sufragios emitidos; seguido por el voto en blanco, con el 19,20%. La UCRI obtuvo el tercer puesto con el 16,80% y UDELPA, el cuarto, con 7,7%. Los magros resultados obtenidos por la UCRP y la contundencia del voto en blanco demostrarían el escaso respaldo político con el que Illia comenzaría su presidencia.

IV- La presidencia de Arturo H. Illia, 1963-1966

Arturo H. Illia gobernó entre octubre de 1963 y junio de 1966. No pudo cumplir con su mandato porque un golpe de Estado lo destituyó de su cargo. Su procedencia partidaria –era dirigente de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), una fuerza política que acompañó la proscripción del peronismo– y sus intenciones de modificar la Ley de Asociaciones Profesionales marcarían la relación conflictiva que mantendría con el sindicalismo peronista, ya consolidado como el principal referente político de esa fuerza política. Las diferencias entre ambos no lograrían matizarse aún con la aplicación de un plan económico de similares características al que Perón desarrolló en los años cuarenta. La política mercadointernista de Illia y su decisión de restringir la presencia del capital extranjero en la economía nacional provocó el malestar de la gran burguesía industrial que se había fortalecido y beneficiado durante el desarrollismo frondicista.



Acto de asunción del presidente Arturo Illia, a su lado el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Onganía.

Fuente: Archivo General de la Nación.

En un comienzo, las FFAA, bajo el liderazgo del general Juan Carlos Onganía, se mantuvieron dentro de los límites “profesionalistas” y evitaron presionar y amenazar al gobierno a través de los “planteos”, como sí lo hicieron con Frondizi. Sin embargo, la influyente e insistente prédica de los EEUU sobre la amenaza de la “infiltración comunista” en la región y el disgusto con la política económica de Illa hizo que los militares argentinos revisaran esa primera actitud no beligerante hacia el gobierno radical. En los cuerpos castrenses latinoamericanos maduraba la idea de la democracia como un sistema político poco eficiente para frenar el avance de la “subversión” (en el caso argentino se incluía en esa categoría al peronismo) en el cuerpo social nacional. Solidario a este postulado, sumaron otro: la legitimidad de la intervención militar sobre los gobiernos constitucionales si estos no se mostraban capaces de defender un orden basado en los valores “occidentales” y “cristianos”.

La política económica

La intervención del Estado en la economía y la defensa del mercado interno fueron dos aspectos destacados de la política económica de Illia. Los capitales extranjeros, que durante la gestión de Frondizi gozaron de amplias prerrogativas para su instalación en el país, vieron limitada esas “libertades” en el período 1963-1966.

El presidente Illia anuló los contratos con las empresas petroleras norteamericanas porque considerara que los acuerdos firmados por su antecesor, Frondizi, lesionaban la soberanía nacional. En 1964, bajo el impulso del ministro de Salud Arturo Oñativia, se sancionó la Ley 16.462 –también conocida como la “Ley de Medicamentos”– que estableció una política de control sobre las empresas farmacéuticas, mayoritariamente de origen extranjero. Asimismo, se aplicaron medidas que limitaron e impusieron nuevos requisitos para las operaciones cambiarias que dificultaron la disponibilidad de divisas para la repatriación de ganancias de las empresas multinacionales. Estas medidas hicieron que las empresas multinacionales, de fuerte presencia en la economía argentina, asumieran una postura opositora al gobierno y colaborativa con los militares golpistas en 1966.

En defensa del poder adquisitivo de los asalariados, el Poder Ejecutivo puso coto al aumento de los precios de productos de primera necesidad y fijó márgenes de ganancias para evitar abusos. En la misma línea, y por iniciativa oficial, se sancionó, a mediados de 1964, la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La aplicación de un programa económico que recuperaba aspectos centrales de la política de Perón y que buscaba proteger el poder adquisitivo de los sectores trabajadores, sin embargo, no resultó suficiente para lograr un entendimiento con el peronismo. En las causas del enfrentamiento tallaban más las diferencias políticas que las económicas.

Las relaciones del gobierno con el sindicalismo peronista

Las relaciones de Illia con el peronismo estuvieron marcadas por el conflicto desde el inicio de su gestión. Como dirigente de la UCRP se mostró reacio al levantamiento de la proscripción y trató de limitar la hegemonía peronista en el ámbito sindical a través de la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales. El presidente pretendía una reforma de la legislación obrera que dejara sin efecto el sistema de lista completa en las elecciones gremiales y limitara las atribuciones de las conducciones sindicales en el manejo de los fondos.

La respuesta de la CGT, bajo la hegemonía vandorista, no se hizo esperar. Entre mayo y junio de 1964, lanzó un “Plan de lucha” que incluyó la ocupación gradual de distintos establecimientos fabriles en todo el país y que terminó con 11.000 establecimientos fabrilestomados y la participación de 3.913.000 de los trabajadores.

El gobierno optó por no reprimir la huelga y pidió, sin éxito, que la Justicia se ocupara del asunto. Los sectores empresariales rechazaron la actuación presidencial y algunos de ellos no dudaron en exigir medidas más duras como el establecimiento del estado de sitio que no fue considerada por el presidente. Esta actitud fue leída por el empresariado y las FFAA como una muestra de la debilidad y la ineficacia presidencial en el control del peronismo.

El vandorismo y el fracaso de un “Peronismo sin Perón”

Detrás del éxito del Plan de Lucha de la CGT de 1964 estaba el dirigente metalúrgico Augusto T. Vandor. Formaba parte de esa generación de líderes sindicales que se forjaron como tales en un escenario político adverso para los militantes peronistas: la Revolución Libertadora. Sin embargo, a medida que avanzó el proceso político, viró, como señala Daniel James, de un “franco antagonismo al status quo posterior a 1955 a una actitud de aceptación de la necesidad de llegar a un acuerdo con esa situación

y encontrar un espacio dentro de sus límites”. Con una política que combinó pragmatismo, amenaza y negociación, el vandorismo consiguió que los sindicatos se convirtieran en la fuerza dominante del peronismo y, por ser su único sector legal, los únicos habilitados para tratar y negociar con otros factores de poder en su nombre.



Augusto T. Vandor (1965).
Fuente: Wikipedia.

Las jornadas de mayo y junio de 1964 fueron una contundente demostración de organización y disciplina gremial –y por ende del poder de Vandor– de la que tomaron nota el gobierno y las FFAA. El primero

quedaba advertido de la fuerza del sindicalismo peronista y de la necesidad lograr un entendimiento político con él en pos de la gobernabilidad. Las segundas confirmaron con aquellas manifestaciones obreras la amenaza “subversiva” que portaba el peronismo. Mas fue el propio Perón, exiliado en la ciudad española de Madrid, quien también acusó recibo de la fortaleza política del dirigente de la UOM.

Las relaciones entre Vandor y el líder exiliado no atravesaban su mejor momento. Entre ambos se había instalado una competencia por el liderazgo del movimiento. Para Perón resultaba difícil dirigir a su militancia desde Europa, poner coto a los enfrentamientos entre las distintas líneas de su movimiento y eliminar cualquier intento de autonomía de sus dirigentes, especialmente el de Vandor, quien ya se mostraba decidido a crear un partido político propio de base sindical e independiente, es decir, “un Peronismo sin Perón”.

Un momento crítico de esa relación se dio en el fallido “Operativo Retorno”. Envalentonada por el logrado Plan de Lucha, la dirigencia sindical encabezó una campaña por el regreso de Perón a la Argentina. Sin embargo, la iniciativa no prosperó: el 2 de diciembre de 1964, el avión que lo traía de regreso a la Argentina fue detenido en el aeropuerto brasileño de El Galeão. Las autoridades brasileñas, a pedido del gobierno de Illia, lo demoraron y lo enviaron de regreso a España. El “Operativo Retorno” había fracasado y en ello influyó el incumplimiento de Vandor de organizar y movilizar a la militancia peronista para asegurar el éxito de la iniciativa. El suceso le dejó en claro a Perón que la dirigencia sindical vandorista no trabajaría para su vuelta al país y que si quería mantener su liderazgo se volvía urgente neutralizar al máximo referente de los metalúrgicos. Este, por su parte, se abocó a construir su propia fuerza política. No todos los sindicalistas lo acompañaron en esa apuesta: importantes figuras del ámbito sindical como José Alonso y Andrés Framini se opusieron a Vandor y reafirmaron su lealtad a Perón.

En el mes de marzo de 1965 se realizaron elecciones de diputados y gobernadores. Pudieron participar de ellas, por autorización de la Justicia, varias agrupaciones neoperonistas como la Unión Popular de cuño vandorista. El sector sindical peronista obtuvo una importante victoria que le permitió conformar un bloque de 52 legisladores en la Cámara de Diputados encabezado por Paulino Niembro, un dirigente de la UOM y estrecho colaborador de Vandor. El triunfo de la Unión Popular intranquilizó al gobierno y a las FFAA, que temían nuevos y más contundentes triunfos, y preocupó a Perón, ante la posibilidad de perder su liderazgo.

La disputa entre el Vandor y Perón se explicitó en las elecciones a gobernador de Mendoza de aquel año. Sin el obstáculo del gobierno radical, María Estela Martínez (también conocida como “Isabelita”), tercera mujer del Perón, visitó la Argentina, en el marco de una misión política diseñada por su esposo. Durante su estadía en el país mantuvo encuentros con dirigentes peronistas y participó de la campaña electoral mendocina al dar su apoyo, y por ende el de Perón, a la candidatura de Enrique Corvalán Nanclares a la gobernación. Vandor, por su parte, respaldó la postulación de otro peronista, Alberto Serú García. Si bien la elección dio como ganador al Partido Demócrata, entre los peronistas quien obtuvo mayor respaldo electoral fue Corvalán Nanclares. Este resultado le permitió al líder exiliado reafirmar su rol de único conductor de su movimiento político y sepultó las ambiciones de Vandor de crear un partido sustentado en los sindicatos y sin Perón.

Las FFAA: “Profesionalismo” y Doctrina de la Seguridad Nacional

Durante los primeros años de la presidencia de Illia, los militares, bajo el liderazgo del comandante en jefe del Ejército, el general Juan Carlos Onganía, se mantuvieron a una prudente distancia del juego político. Ese “retorno a los cuarteles” no debe leerse como una postura respetuosa

de las FFAA frente a la Constitución y las instituciones democráticas, sino como una necesidad de las propias fuerzas militares de reconstruir el orden y la disciplina y de ese modo evitar nuevas divisiones facciosas en su seno.

Las dinámicas políticas locales y las preocupaciones a nivel continental por el posible avance del comunismo en la región contribuyeron a fomentar en las FFAA de Argentina la convicción de que ya no era suficiente la proscripción del peronismo y la tutela militar. Si era necesario había que anular la política, terminar con la democracia y reemplazarlas, llegado el caso, por la administración militar.

Onganía expresó esas ideas en la V Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en West Point (Estados Unidos). Allí, el militar argentino consideró que los golpes militares eran una herramienta legítima para evitar la continuidad de gobiernos constitucionales inhábiles a la hora de defender los valores occidentales y cristianos. En esa reunión, se delinearon los contornos de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que se complementó con la “la teoría de las fronteras ideológicas” por la cual los militares estaban habilitados para controlar los límites ideológicos en sus respectivos países para detectar y eliminar al “enemigo interno” es decir aquel que atentase contra la seguridad de la Nación, pusiera en riesgo la propiedad privada y cuestionara los valores cristianos. De esta manera, el sistema democrático comenzó a ser visto como una amenaza o un lastre a ser descartado si no era capaz de mantener la seguridad interna o la ponía en riesgo al tolerar ideologías y pensamientos que cuestionasen aquellos valores.

Las FFAA latinoamericanas encontraron en estos documentos doctrinarios, elaborados bajo la tutela de los EEUU, los argumentos para justificar los golpes de Estado y dictaduras militares que desde finales de la década del sesenta y hasta los años ochenta asolarían la región con una severísima represión que incluyó la desaparición forzada y el asesinato político.

La escuela militar francesa

No solo la DNS, de cuño norteamericano, influyó en la formulación de la doctrina antisubversiva del Ejército argentino. Como lo han demostrado recientes investigaciones, como la desarrollada por el historiador Esteban Pontoriero, igual de decisiva, y anterior en el tiempo, resultó la doctrina contrainsurgente elaborada por la Escuela militar francesa. Elaborada en los años cincuenta del siglo pasado, fue puesta en práctica contra la población argelina –Argelia, por entonces, era una colonia francesa ubicada al norte de África– en el marco de la lucha por su independencia. De acuerdo con sus postulados, existía una situación de “guerra revolucionaria” alentada por el comunismo con el objetivo de tomar el poder en los países de Occidente. Esta implicaba una acción bélica no declarada (aún cuando no se usaran armas para concretarla) que se podía desarrollar en los más variados ámbitos de la vida social. Eso era posible porque eran llevadas a cabo por un “enemigo interno” que se mimetizaba con la población y por lo tanto, difícil de identificar. Para contrarrestar la “guerra revolucionaria” resultaba fundamental desplegar la “guerra contrarrevolucionaria”. Esta incluía: la división del territorio en zonas de defensa militar, la subordinación de las fuerzas de seguridad al mando de las FFAA, medidas de propaganda para fortalecer la posición propia y debilitar la del “enemigo”; también prácticas ilegales como el establecimiento de centros clandestinos de detención, el secuestro y la tortura para obtener información y la desaparición y muerte de los detenidos asesinados. Cuando los militares argentinos lleven adelante el Operativo Independencia en 1975 y tomen el poder en 1976 aplicarán mucho de lo aprendido de los militares franceses.

El derrocamiento de Illia

En noviembre de 1965, luego de su paso por West Point, Onganía decidió su pase a retiro –el motivo fue su desacuerdo con el presidente Illia por la designación del nuevo Secretario de Guerra– y por ello dejó el cargo de Comandante en jefe del Ejército. A partir de entonces, Onganía comenzó a gestar un golpe de Estado contra el presidente Illia que incluyó una campaña de prensa a través de la revista *Primera Plana* para desprestigiar su figura.

La precariedad institucional del gobierno de Illia, presente desde el inicio de su gestión, se profundizó hasta llegar a una situación de extrema debilidad a comienzos del año 1966. Distintos actores sociales y políticos comulgaban con la idea de derrocar al gobierno radical: los sectores más concentrados de la economía vinculados al capital extranjero porque veían afectados sus intereses por la política económica mercadointernista; las FFAA porque desconfiaban de la capacidad del gobierno de contener al peronismo, frenar la protesta social y asegurar el orden capitalista; el sindicalismo peronista porque los resultados obtenidos del juego político tal como estaba planteado desde 1958 resultaban insuficientes. Como señala Daniel James: “Pese a sus charlas con los generales y su afable familiaridad con los presidentes, la influencia de los sindicatos peronistas en los centros de decisiones de la nación era reconocida a regañadientes y estaba estrictamente limitada por la restringida tolerancia a todo lo que fuera peronista y obrero. Un whisky con el ministro de Trabajo era, en última instancia, un pobre sustituto de unas auténticas instituciones de integración”.

En junio de 1966, la situación era insostenible para el gobierno radical. La idea del golpe de Estado ya estaba madura. El 28 de junio un grupo de militares encabezado por el general Julio Alsogaray (hermano de Álvaro, el economista) irrumpió en el despacho presidencial de la Casa Rosada y le exigió la renuncia a Illia, que el destinatario rechazó. La negativa del

presidente no amedrentó los militares quienes lo terminaron expulsando de la Casa de Gobierno.

La “Revolución Argentina”—así habían nombrado los golpistas a su intervención militar— había triunfado. A las pocas horas de producida, la Junta de Comandantes integrada por el Teniente General Pistarini (Ejército), el Brigadier General Álvarez (Fuerza Aérea) y el Almirante Varela (Marina) designó a Juan Carlos Onganía presidente de la República.



Revista *Primera Plana*, mayo de 1965 y junio de 1966

Bibliografía

Aroskind, Ricardo, “El país del desarrollo posible”, en Daniel James (Director de Tomo), *Nueva Historia Argentina: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana; 2003.

Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en la Argentina*, Buenos Aires, Ariel, 1997.

Gordillo, Mónica, “Protesta, rebelión y movilización”, en Daniel James (Director de Tomo), *Nueva Historia Argentina: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana; 2003.

Historia Argentina. Desde 1931 hasta la actualidad, Tomo 3, Buenos Aires, Colegio Nacional de Buenos Aires-Página/12, 2000.

James, Daniel, *Resistencia e integración*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Novaro, Marcos, *Historia de la Argentina, 1955-2010*, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2010.

O’Donnell, Guillermo, “Estado y alianza de clases en la Argentina, 1956-1976”, *Desarrollo Económico*, vol.16, n° 64, 1977.

Pontoriero, Esteban, “De la guerra (contra)insurgente): la formación doctrinaria antisubversiva del Ejército argentino (1955-1976)”, en Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo Scatizza (coordinadores), *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado*, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2016.

Portantiero, Juan Carlos, “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”, en Ansaldi, Waldo y Moreno, José (compiladores), *Estado y sociedad en el pensamiento nacional*, Buenos Aires, Cántaro, 1989.

Tcach, César, “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en Daniel James (Director de Tomo), *Nueva Historia Argentina: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Capítulo 5

Entre el proyecto autoritario de las FFAA y las acciones contestatarias de la sociedad civil, 1966-1973

Karin Grammatico

El 28 de junio de 1966 un levantamiento militar protagonizado por las Tres Fuerzas Armadas –el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea– derrocó al gobierno del presidente Illia y designó en su reemplazo al general Juan Carlos Onganía, principal mentor de la insurrección castrense. Este golpe de Estado, autodenominado Revolución Argentina, se diferenció de los antecesores en algunos aspectos. En primer lugar, se trató de una acción conjunta de las FFAA y no de algunos sectores militares, lo que demostraba el éxito de Onganía en la neutralización de los faccionalismos entre los militares durante su gestión como Comandante en Jefe del Ejército. En segundo lugar, las FFAA, amparadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, optaron por asumir el control del Estado de forma directa con el objetivo de terminar con la inestabilidad política y lograr la definitiva modernización de la economía argentina.

En el diagnóstico militar, la política era la principal responsable de esa inestabilidad. Por lo tanto debía erradicarse y ser reemplazada por la administración técnica de los asuntos públicos. La garantía de un

“orden” –que en la consideración militar implicaba la ausencia de disenso y la subordinación política y económica de los sectores populares– vendría de la mano del establecimiento de un régimen autoritario que se apoyaría en el trabajo de un particular tipo de funcionario: el “técnico”. Mayoritariamente gerentes de empresas multinacionales y formados en el pensamiento económico ortodoxo, estos nuevos agentes estatales, con su saber “neutro y objetivo”, tratarían las cuestiones de gobierno sin la injerencia “distorsionante” de la política. Los militares consideraban, ilusamente, que las decisiones tomadas por una burocracia de tales características garantizaría la “racionalidad” de las medidas. Así, a través de una fuerte censura y severa represión, y con un plantel de tecnócratas responsable de la administración pública, la Revolución Argentina encaró su propuesta transformadora.

Sin embargo, el estallido del “Cordobazo”, en mayo de 1969, mostraría los límites del autoritarismo gubernamental. La rebelión popular con epicentro en la ciudad de Córdoba desató una crisis política y social muy profunda –una verdadera “crisis de dominación” según el politólogo Guillermo O’Donnell – que se expresó en el avance de la movilización social contestataria y el incremento de las acciones de las organizaciones guerrilleras. Los gobiernos de los generales Marcelo Levingston (1970-1971) y de Alejandro Lanusse (1971-1973) que sucedieron al de Onganía ensayaron diferentes acciones para frenar la ola de protesta social que habilitó el “Cordobazo” y restablecer el programa de la Revolución Argentina. A pesar de sus intentos –que incluyó el asesinato de presos políticos– no lograron contenerla. Ante la evidencia del fracaso, las FFAA anunciaron el retorno a la senda constitucional. El 11 de marzo de 1973, la ciudadanía argentina, sin ningún tipo de proscripción, volvería a elegir a sus representantes.

I- El gobierno de Onganía, 1966-1970

Al asumir la presidencia, Onganía declaró que la “Revolución Argentina” cumpliría sus objetivos, sin fijarse plazos, a partir del desarrollo de tres “tiempos”. El primero de ellos sería el “económico”: durante esta primera etapa debía lograrse la estabilidad económica para luego, en el momento “social” poder “derramar” en la sociedad los beneficios económicos logrados. Finalmente, en el “tiempo político” se concretaría el “traspaso del poder a los civiles”. Sin embargo, el gobierno ya no estaría ordenado bajo los principios democráticos-liberales y la actividad de los partidos políticos, sino que asumiría la forma de una comunidad organizada bajo principios corporativos.

Las primeras decisiones de gobierno sentaron las bases del proyecto autoritario: la Constitución Nacional fue reemplazada por el Estatuto de la Revolución Argentina y se disolvió el Congreso. Los partidos políticos fueron prohibidos y se aplicó la censura previa. Valiéndose del discurso de la eficiencia del Estado, Onganía –quien reunió en su figura las funciones legislativas y ejecutivas– redujo la cantidad de ministerios, creó nuevas secretarías y decidió el despido de un número importante de empleados públicos. Asimismo, impuso rápidamente la desvinculación de las FFAA del gobierno para evitar así la tutela militar que habían sufrido los presidentes del período anterior. De acuerdo con la académica Liliana De Riz, la función adjudicada a los militares durante la Revolución Argentina era la de actuar como “garantes del nuevo régimen”; una tarea que los obligaba a mantenerse alejados de la función pública. Esta decisión, como veremos más adelante, traería importantes consecuencias para la viabilidad de su gobierno cuando este se viera afectado por la protesta social y política.



Juan Carlos Onganía durante un acto religioso en Luján (1969).
Fuente: Wikipedia.

Las universidades, catalogadas como “focos de infiltración marxista”, fueron objetivo privilegiado del autoritarismo gubernamental y sus estudiantes, especialmente observados. Esta actitud debe enmarcarse en la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional que configuró a los jóvenes universitarios como uno de los posibles rostros que podía asumir el “enemigo interno”.



Estudiantes y profesores universitarios al ser detenidos durante la "Noche de los Bastones Largos", 24/07/1966.
Fuente: unsam.edu.ar.



Durante "La noche de los bastones largos", la policía ingresó a varias Facultades de la UBA.
Fuente: educ.ar.

En pos de neutralizar la amenaza “subversiva”, Onganía decidió la intervención de las instituciones universitarias y las reubicó bajo la órbita

del Ministerio del Interior. Frente al avasallamiento, que echaba por tierra el principio de la autonomía conquistado en 1918, estudiantes y profesores se manifestaron contra la medida. En la Universidad de Buenos Aires tomaron las facultades pero fueron brutalmente desalojados por las fuerzas de seguridad. La noche del 29 de julio de 1966, alumnos y docentes de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras fueron sacados de esas casas de estudios a bastonazos por la policía. Esa fecha, conocida como “la Noche de los bastones largos”, marcó a fuego la vida universitaria. Destacados investigadores de las universidades públicas emigraron hacia otros centros de estudios –una verdadera “fuga de cerebros”– donde continuaron las pesquisas que comenzaron a desarrollar en el país.

Una época de revoluciones

Por Julián Delgado

El 9 de octubre de 1967 una noticia sacudió al mundo: el argentino Ernesto “Che” Guevara había muerto en Bolivia. El “Che”, que había tenido un papel protagónico en la Revolución Cubana de 1959, estaba convencido de que el proceso revolucionario sólo lograría consolidarse si se internacionalizaba. Fue por eso que en 1965 había renunciado a todos sus cargos en el gobierno cubano y se había incorporado nuevamente a la lucha guerrillera. Su asesinato en la selva boliviana, perpetrado por las fuerzas militares locales con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, terminaba de convertirlo en un ejemplo moral y político. El “Che” era el revolucionario por antonomasia, aquel que había estado dispuesto a sacrificar su propia vida en favor de la transformación del mundo. Las fotografías de su cadáver, que mostraban su cuerpo enflaquecido y su cara barbuda (no faltaría quien señalara el parecido con las representaciones de Jesucristo), potenciaban esa imagen.

Esta convicción revolucionaria y este imperativo de acción son sin dudas dos de las características fundamentales que permiten pensar “los largos años sesenta” –es decir, el período que va de fines de los años cincuenta a mediados de los años setenta– como una época. Los más diversos proyectos políticos (incluso los gobiernos de facto elegían autodenominarse “revolucionarios”) y las más variadas expresiones sociales y culturales parecieron compartir por entonces un mismo horizonte de expectativas: la idea de que el cambio radical de la sociedad era parte del inevitable desarrollo histórico.

La política económica

En consonancia con los intereses y las demandas de la gran burguesía industrial vinculada con el capital extranjero, el gobierno militar tomó una serie de medidas para concretar la modernización de la estructura económica del país. Se trataba de profundizar la propuesta desarrollista que inició Frondizi en 1958 a partir de tres ejes: “eficacia productiva”, “modernización de la industria” y “contención de la inflación”. Para llevar adelante esta tarea, Onganía designó a Jorge Salimei, un empresario de la industria de alimentos, ministro de Economía.

En pos de lograr la “eficacia productiva”, el ministro Salimei llevó adelante un duro programa de “racionalización” de empresas consideradas deficitarias. Comenzó con el Puerto de Buenos Aires. Allí impuso un nuevo reglamento de trabajo que incrementó los niveles de explotación de los trabajadores portuarios: una jornada laboral más extensa, el incremento en el ritmo de carga y descarga y la reducción de los integrantes de las cuadrillas de trabajo fueron las “novedades” del nuevo código laboral. Ante esto, los portuarios organizaron una huelga que fue severamente reprimida. En la misma línea “racionalizadora”, se quitaron los subsidios a la industria azucarera, cuyo epicentro estaba en la provincia de Tucumán. Esto provocó el cierre de numerosos ingenios y condenó al desempleo a

miles de personas que migraron a distintos centros urbanos en busca de trabajo. Otros de los blancos de esta política fueron la administración pública y los ferrocarriles que sufrieron importantes recortes en su personal.

Edición de 84 Páginas, en 3 Secciones, con CLARIN Deportivo

TUCUMAN: AMPLIO PLAN PARA ERRADICAR EL MONOCULTIVO

Destinarán Inicialmente Diez Mil Millones Para Procurar la Transformación Agraria ★ Salimei: Habrá Fuentes de Trabajo

Clarín
de los Lunes 15 Pesos
Año XXI | Diario de la Mañana Nº 7410
Buenos Aires, Lunes 22 de Agosto de 1966

OTROS HECHOS IMPORTANTES DEL PANORAMA NACIONAL

Rural Se iniciará hoy, en Palermo, la subasta de ejemplares de las razas Cobú y Santa Gertrudis. En la página 13.

Leche Realizan gestiones en torno del anunciado aumento de cuatro pesos por litro. Información en la página 11.

Inauguración Comenzó el I Congreso de Medicina Tropical del Cono Sur. En página 16.

B. Blanca Momentáneamente quedó en suspenso la licitación para la aerostación mixta. Página 22.

Mendoza El 24 del mes próximo será inaugurado el Congreso Nacio-

UN amplio plan de transformación agraria, tendiente a erradicar el monocultivo en Tucumán, anunció anoche el ministro de Economía, doctor Salimei. Tras calificar a aquella provincia de "isla de presente explosivo y de futuro incierto", Salimei anunció: Se giran inicialmente diez mil millones de pesos. ● Se asegurará la plena ocupación, mediante la puesta en marcha de diversas obras públicas y privadas. ● Los obreros cobrarán al día sus haberes. ● Los ingenios deficitarios serán cerrados. ● Se acelerarán las obras de El Cadillal. ● Los sacrificios se exigirán a todos y no solamente a los trabajadores. ● La espada de la Revolución será usada todas las veces que sea necesario para cortar de una vez viejas ataduras de intereses antinacionales. (Información en la Página 11)

UNIVERSIDAD
Reanudan las Clases en 5 Facultades; Nueva Exhortación de Mons. Primatesta
(INFORMACIÓN EN LA PAGINA DOCE)

CARESTIA
Inminente Adopción de Medidas ★ El Alza de Precios Preocupa al Gobierno
(INFORMACIÓN EN LA PAGINA NUEVE)



Según el investigador tucumano Roberto Pucci, la política "racionalizadora" aplicada en los ingenios de su provincia provocó el desempleo –directo e indirecto– de 50.000 habitantes y obligó a 200.000 personas a migrar a otros puntos del país en busca de trabajo.

Si bien Salimei pudo avanzar en la "eficacia productiva" no logró frenar la inflación ni impulsar la modernización de la industria. Onganía decidió su reemplazo por Adalberto Krieger Vasena, un gerente de empresas multinacionales y de acitadas conexiones con los centros financieros

internacionales. Otro "técnico" que, en la mirada del gobierno, haría su trabajo sin privilegiar ningún interés sectorial.

La contención de la inflación era considerada un requisito para alcanzar el desarrollo económico. De acuerdo con los postulados que defendía Krieger Vasena, la inflación, es decir el aumento generalizado de los precios, era provocada por la demanda de los trabajadores –siempre dispuestos a reclamar por el aumento de sus salarios y sus niveles de consumo– y por la respuesta estatal positiva a esa demanda, que era satisfecha a través de la emisión monetaria. Para el nuevo ministro debían aplicarse una serie de medidas que desactivasen el comportamiento inflacionario junto con otras que permitiesen una industria competitiva capaz de aumentar sus exportaciones. Bajo esa premisa, en marzo de 1967, lanzó el Plan de Estabilización y Desarrollo. Entre sus medidas más importantes se cuentan: una devaluación del peso del 40%, la liberación del mercado de cambios y la posibilidad de que los capitales externos entraran y salieran del país sin mayores restricciones. También dispuso el congelamiento de los salarios por dos años, el despido de empleados de la administración pública y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. El plan incluyó además, la aplicación de "retenciones" (impuestos) a las exportaciones agropecuarias, y el establecimiento de un impuesto a la tenencia de divisas. Esta decisión generó malestar en el sector agropecuario ya que los ingresos adicionales que podrían haber obtenido de la devaluación del peso quedaron bajo el control del Estado que los destinó a importantes obras de infraestructura como la construcción de los puentes sobre el río Paraná para unir las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, de la Central Nuclear Atucha y de la represa hidroeléctrica Chocón-Cerros Colorados.

Las medidas aplicadas lograron bajar la inflación y posibilitaron el crecimiento de las industrias de bienes de consumo durable y de bienes de capital con una fuerte presencia del capital extranjero. Sin lugar a dudas, la gran burguesía industrial fue su principal beneficiaria. No así

otros sectores de la sociedad argentina. A los resquemores, ya señalados, del sector agropecuario, se sumaron las quejas de la pequeña y mediana burguesía industrial que producía para el mercado interno. La reducción del consumo popular que trajo la aplicación del programa y la retracción de los créditos y subsidios otorgados por el Estado atentaron contra su crecimiento y varias de ellas terminaron siendo compradas por las empresas multinacionales. Finalmente, los sectores trabajadores continuaron perdiendo su porcentaje en la participación en el ingreso nacional. Además del congelamiento de los salarios, los niveles de explotación aumentaron, las indemnizaciones se redujeron y se elevó la edad jubilatoria; mientras el derecho a huelga no podía practicarse. Finalmente, el Plan de Krieger Vasena profundizó la concentración económica –un grupo reducido de empresas habría de controlar el mercado local– y la desnacionalización de la economía, aspectos que habrían de minar la posibilidad de un desarrollo autónomo.

El sindicalismo en tiempos de Onganía

Como lo indicamos anteriormente, el sindicalismo vandorista, que dirigía por entonces la CGT, apoyó el golpe de junio de 1966. Uno de los motivos de ese respaldo debe buscarse en el rechazo a la presidencia de Illia a la que consideraban ilegítima y hostil a sus demandas e intereses. Por otra parte, la consonancia que los dirigentes sindicales mantenían con los argumentos corporativistas de Onganía los estimuló a pensar que tendrían un lugar de preferencia en el nuevo gobierno. Sin embargo, esas ilusiones se desvanecieron rápidamente. Los despidos de empleados públicos, el cierre de los ingenios azucareros y la represión sobre los portuarios fueron las primeras manifestaciones de la dura política contra la clase trabajadora. La baja de salarios y la suspensión de los convenios colectivos establecidas por Krieger Vasena confirmaban el error de apreciación de Vandor y otros dirigentes peronistas sobre la naturaleza de la Revolución Argentina. Si

quedaban dudas, estas se terminaron de despejar a comienzos de 1967. En represalia al paro general del 1º de marzo convocado por la CGT para protestar contra las medidas del ministro de Economía, el gobierno suspendió la personería gremial de importantes sindicatos como la Unión Ferroviaria y la UOM e interrumpió el funcionamiento de la central obrera.

La agresiva e intransigente política sindical del gobierno militar puso en evidencia la ineficacia de la estrategia de golpear y negociar del vandorismo. Su supremacía en el seno del movimiento obrero organizado se vio cuestionada, además, por la emergencia de una nueva línea sindical “participacionista” y la creciente ascendencia de los “combativos”. La corriente participacionista, liderada por el peronista José Alonso, líder del sindicato del Vestido, se mostraba dispuesta a colaborar con el Ministerio de Trabajo a cambio de cierta benevolencia estatal para con sus gremios. El sector combativo, por su parte, cuestionaba abierta y globalmente a la dictadura de Onganía, y se oponían tanto a Vandor como a Alonso. Participaban de ese espacio gremial, entre otros, el sindicato de los Gráficos, el de los Navales, la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) y el Sindicato de Farmacia.

En marzo de 1968, y sin autorización del gobierno militar, se realizó un congreso normalizador para elegir un nuevo secretario general de la CGT. La elección dio como ganador a Raimundo Ongaro, dirigente peronista del sindicato de los Gráficos y referente de la línea combativa. El resultado fue desconocido por los vandoristas y los participacionistas y la central obrera quedó dividida entre la CGT de los Argentinos, liderada por Ongaro, y la CGT Azopardo, dirigida por Vandor. Esta última nombrada así porque los vandoristas conservaron el edificio de la calle Azopardo de la ciudad de Buenos Aires.

A poco de constituida, la CGT de los Argentinos elaboró una propuesta programática –conocida también como Programa del 1º

de Mayo y similar al elaborado en Huerta Grande, en 1962– que se pronunció a favor de la función social de la propiedad, la nacionalización del comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos, la expulsión de los monopolios que “arruinan nuestra industria”, la reforma agraria y el derecho de los hijos de los obreros a todos los niveles educativos como los “que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas”. Esta experiencia sindical, que se mostró dispuesta a enfrentar a la dictadura de la Revolución Argentina, terminó por disolverse a comienzos de la década del setenta y se mantuvo por fuera del congreso normalizador de la CGT que el 3 de julio de 1970 elegiría como secretario general José Ignacio Rucci, dirigente metalúrgico y estrecho colaborador de Vandor.

1969: El “Cordobazo”

Los días 29 y 30 de mayo de 1969, la ciudad de Córdoba fue el escenario de una rebelión popular e insurrección urbana –tal la definición de los historiadores Mónica Gordillo y James Brennan– que afectó la continuidad del gobierno de Onganía y evidenció los límites del proyecto autoritario de la Revolución Argentina. Sus protagonistas destacados fueron los trabajadores a los que se sumaron activamente los estudiantes universitarios, otros “personajes” importantes de la vida urbana cordobesa. La ciudad mediterránea era el segundo distrito industrial más importante del país (allí estaban radicadas, por ejemplo, la empresa IKA-Renault y las plantas Concord y Materfer de la fábrica FIAT) y funcionaba, además, la universidad más antigua de la Argentina. A los obreros y los estudiantes se sumaron los vecinos de los barrios obreros y los sectores medios del centro de la ciudad que ayudaron de muy diversa manera a los insurgentes principales.



Entre los manifestantes del Cordobazo, Agustín Tosco (centro),
líder del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba.

Fuente: Archivo General de la Nación.

El “Cordobazo” irrumpió en un contexto de amplio descontento social provocado por la política autoritaria y represiva del onganiano y los efectos perniciosos de las medidas económicas de Krieger Vasena sobre los sectores populares. A principios del mes de mayo de 1969, el aumento de los precios en los comedores universitarios provocó la reactivación de las manifestaciones estudiantiles en Corrientes, La Plata, Rosario y Córdoba. En Rosario, los niveles de desobediencia social fueron tales que el Ejército declaró a la ciudad “zona de guerra” y estableció cortes marciales para el juzgamiento de civiles. Ante estos acontecimientos la CGT Azopardo y la CGT de los Argentinos proclamaron una huelga general de 24 horas para el día 30 de mayo en repudio a la represión oficial y la política económica.

En Córdoba, la situación se conjugó de manera singular. Desde hacía tiempo el movimiento sindical cordobés venía luchando por la suspensión de las “quitas zonales” que permitían a los empresarios de esa provincia pagar salarios inferiores en un 11% a los pagados a los obreros de Buenos Aires por el mismo trabajo. A este reclamo se sumó otro por el restablecimiento del “sábado inglés” –que establecía el pago de un jornal completo por el trabajo de media jornada los días sábados– que había sido derogado por Krieger Vasena. Frente a esta pérdida de derechos, los sindicatos cordobeses anunciaron una huelga general por 48 horas que se iniciaría el 29 de mayo y que se engazaría con la anunciada por las dos CGT para el día 30 a nivel nacional.

El 29 de mayo de 1969, a partir de las 10 de mañana, los obreros del SMATA (Sindicato de los mecánicos de automotores y transportes de la Argentina), liderado por Elpidio Torres, los de Luz y Fuerza, conducidos por Agustín Tosco y los de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), por Atilio López, marcharon desde sus lugares al centro de la ciudad de Córdoba acompañados por los estudiantes universitarios. En el trayecto, la policía abrió fuego contra la muchedumbre para evitar que los manifestantes ingresaran a la zona céntrica y mató al joven trabajador Máximo Mena, además de herir a muchos otros. La noticia enardeció aún más a los manifestantes que no dudaron en ir contra las fuerzas policiales que huyeron en desbandada. A partir de entonces, la protesta perdió su organización y se transformó en una rebelión popular. Para la madrugada del día 30, Córdoba era una ciudad tomada por los obreros y los estudiantes. El 31 de mayo el levantamiento fue dominado gracias a la intervención del Ejército. Si bien las cifras no son conclusivas se estima que unas veinte personas murieron en esos días y más de 300 resultaron heridas. El número de detenidos también fue muy alto, entre ellos se encontraban importantes dirigentes gremiales como Tosco y Torres.



“(…) la aparición de algunos francotiradores en los techos agregó un tercer elemento al Cordobazo, el de haberse intentado una insurrección urbana por parte de algunos grupos más organizados con una finalidad más claramente política y, acaso, revolucionaria. La irrupción de esos grupos, no incluida en la planificación inicial de la protesta, (…) fue una faceta menor del Cordobazo si se lo compara con la protesta obrera y estudiantil o con la revuelta popular; sin embargo, no debe ser dejado totalmente a un lado porque habla de la existencia de un fenómeno que saldría a la luz luego del Cordobazo”. Mónica Gordillo, “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada”, en Daniel James (dir.), *Nueva historia argentina: violencia, proscripción y autoritarismo*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, pp. 354-355.

Las consecuencias del “Cordobazo”

Las consecuencias de la revuelta popular de Córdoba fueron múltiples. En primer lugar lesionó gravemente la viabilidad del gobierno de Onganía. En lo inmediato, el gobernador de la provincia y el ministro de Economía Krieger Vasena debieron presentar sus respectivas renunciaciones. En segundo lugar, dio inicio a un ciclo de protesta social –con epicentros en Rosario, Tucumán, nuevamente Córdoba, Cipoletti y Mendoza– que impidió que los gobiernos de la Revolución Argentina rearmaran su programa autoritario original. En tercer lugar, el “Cordobazo” provocó cambios en el ámbito sindical. Allí surgió una nueva corriente denominada “clasismo”. Este movimiento gremial, con una fuerte presencia en la provincia de Córdoba, consideraba que el objetivo fundamental de la lucha obrera era la eliminación del capitalismo y la construcción de una sociedad ordenada bajo los principios socialistas. Para alcanzar esos objetivos resultaba fundamental el papel del sindicato ya que preparaba a los trabajadores para la batalla política contra la patronal y el Estado. Finalmente, influyó en el fortalecimiento, accionar y legitimidad de las organizaciones guerrilleras. Tal como lo señala la historiadora Mónica Gordillo lo novedoso que trajo el Cordobazo fue que éstas “ocuparon el espacio público presentándose claramente como una alternativa política más para el acceso al poder, sobre todo para los sectores juveniles (...); tornó verosímiles varios de los argumentos que los grupos revolucionarios, peronistas o no, sostenían en relación con la transformación social y política, volviéndose creíbles para amplios sectores”. Sobre este punto nos explayaremos en el siguiente apartado.



Manifestación estudiantil en solidaridad con las víctimas de la represión en Córdoba y Rosario. Buenos Aires, 1969. Fuente: Archivo General de la Nación.

Las organizaciones político-armadas

Como en otras partes del mundo, durante las décadas del sesenta y setenta, amplios sectores de la juventud de nuestro país asumieron una postura de confrontación frente al orden establecido. Ante las injusticias, la pobreza y la falta de libertades políticas y bajo la inspiración de experiencias revolucionarias tercermundistas, como la de Cuba, se lanzaron a la política para lograr una transformación radical de la sociedad. Este proceso de radicalización política de los y las jóvenes argentinos comenzó antes del Cordobazo pero este acontecimiento marcó su advenimiento como actores políticos de crucial incidencia en la vida nacional. Como lo señaló la historiadora Valeria Manzano, la juventud alcanzó su mayoría de edad política con los sucesos de mayo de 1969 y definió su participación

pública “mediante la participación en una cultura política revolucionaria que tenía como uno de sus núcleos argumentales la asimilación de la Argentina al Tercer Mundo”.

Para llevar adelante su propuesta transformadora, los sectores juveniles ensayaron nuevos modos de organización y de hacer política. Surgió así una “nueva izquierda”. Con el adjetivo “nueva” se buscaba establecer una diferencia sustancial con la izquierda tradicional (el Partido Socialista, el Partido Comunista) a la que criticaban su antiperonismo y su visto bueno a la proscripción del movimiento político mayoritario, y la tolerancia hacia los gobiernos de facto que se venían sucediendo desde 1955.

Formaron organizaciones que incluyeron entre sus prácticas a la lucha armada –más específicamente, una adecuación urbana a la táctica de la guerra de guerrillas– como una manera de lograr el cambio social. Algunas de ellas reivindicaron su inscripción en el peronismo. Tal es el caso de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) –creadas en 1967 por un grupo de jóvenes que habían participado de la resistencia peronista– y los Montoneros, que harían su aparición pública en 1970 cuando concretan el secuestro y asesinato del ex presidente de facto Pedro E. Aramburu. Durante la Revolución Argentina, las guerrillas peronistas serán consideradas por el propio Perón como parte de su movimiento político bajo el rótulo de “formaciones especiales”. Otras anclaban su linaje en el campo de la izquierda como las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), fundadas en 1968 por jóvenes que habían militado en el Partido Comunista y en el Partido Comunista Revolucionario, o el Partido Revolucionario del Pueblo que en 1970 creó su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Finalmente, podemos mencionar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) constituidas hacia 1970 y en el que se trenzaron tradiciones político-ideológicas diversas como el marxismo, el guevarismo y el peronismo.

La juventud como un actor protagónico

Por Julián Delgado

Lejos de ser un dato biológico, la juventud es una categoría cultural e histórica. La transición entre la infancia y la adultez no siempre fue concebida como un momento particular de la vida. Fue recién hacia mediados de la década del cincuenta que los jóvenes emergieron como un actor cultural y político distintivo. Si bien los factores que hicieron posible este fenómeno son múltiples y muy complejos, una gran cantidad de investigadores coincide en vincular la “juvenilización” de la cultura y de la política con el período de expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La juventud argentina tuvo un rol relevante a lo largo de los años sesenta. Algunas de las expresiones sociales, culturales y políticas más trascendentes de la época estuvieron marcadas por una impronta decididamente juvenil. Los jóvenes eran el símbolo de una potencialidad, la metáfora perfecta del costado más moderno y rebelde de la sociedad. Y fueron además los protagonistas de las transformaciones culturales centrales y los acontecimientos políticos decisivos del período. Desde esta perspectiva, no resulta casual que de acuerdo al relevamiento de la CONADEP el 43,23% de los desaparecidos durante la dictadura militar de 1976-1983 tuviera entre 16 y 25 años.

La guerra de guerrillas

La “guerra de guerrillas” es una táctica militar que llevan adelante pequeñas unidades irregulares contra un ejército invasor o un ejército regular defensor del orden establecido que la acción revolucionaria pretende derrocar. La guerrilla hostiga al enemigo en su propio terreno con ataques rápidos y sorpresivos con el fin de provocar su desgaste total. Emboscadas, voladuras de puentes y caminos, secuestro de armas y provisiones son algunas de las acciones que llevan adelante. Para lograr el éxito de su accionar, quienes la integran deben ser capaces de replegarse entre ataque y ataque y confundirse entre la población local. Esta metodología fue utilizada en distintos momentos de la historia y fue la que pusieron en práctica los revolucionarios cubanos para deponer al dictador Fulgencio Batista el 1° de enero de 1959. La Revolución Cubana y su forma de lucha fueron tomados como ejemplo por otros movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo, incluidas las organizaciones político-armadas de la Argentina.

La caída de Onganía

Tras el Cordobazo, las demandas sociales se acrecentaron, se produjeron huelgas y las organizaciones guerrilleras expandieron su accionar. Los márgenes de maniobra de Onganía se encontraban muy limitados y no contaba con el respaldo de las FFAA. Su decisión de desvincularlas del gobierno había provocado un distanciamiento entre ambos que resultó imposible de remontar. No repuesto de los sucesos de mayo, debió enfrentar otro acontecimiento que lesionaba su credibilidad: el 30 de junio de 1969 fue asesinado el dirigente metalúrgico Augusto T. Vandor a manos de un comando que no se identificó.

Sin embargo, fue un hecho político sin precedentes el que decidió su suerte política: El 29 de mayo de 1970, en el primer aniversario del

Cordobazo, la organización armada de la izquierda peronista Montoneros concretó el secuestro y posterior asesinato del ex presidente de facto Pedro E. Aramburu. Diez días después, la Junta de Comandantes depuso a Onganía de su cargo y designaron en su reemplazo al general Roberto Levingston.

II- El gobierno de Levingston, 1970-1971

La Junta militar integrada por el general Alejandro Lanusse, el almirante Pedro Gnavi y el brigadier Carlos Rey designaron nuevo presidente al general Roberto Levingston, militar perteneciente a las filas nacionalistas del Ejército. Su corta gestión –debió renunciar en marzo de 1971– estuvo fuertemente condicionada por la Junta de Comandante que hizo sentir su poder desde el comienzo: fue ella la que designó a todos los ministros nacionales y a los interventores de los gobiernos provinciales. Aún así, Levingston buscó dejar su impronta y anunció que con su gobierno se iniciaba “el segundo ciclo de la Revolución Argentina”. En octubre de 1970, logró desembarazarse del ministro de Economía Carlos Moyano Llerena, discípulo de Krieger Vasena, y nombró en su lugar a Aldo Ferrer, un economista de la CEPAL. Ferrer era partidario de incentivar el desarrollo de la economía nacional antes que asegurar su “estabilización”. Buscó favorecer a la industria nacional a través de la política crediticia y el aumento de los aranceles a las importaciones a la par que limitó la presencia de los capitales extranjeros. En consonancia con esa política propuso, por ejemplo, el “compre argentino”, medida por la cual todas las dependencias estatales debían adquirir bienes y servicios de empresas argentinas. Aún cuando la política económica pretendió introducir mejoras en la situación de los sectores asalariados y favorecer a los capitales nacionales no logró frenar la protesta social contra la dictadura.

La fuerte impugnación social y las disputas internas entre Levingston y la Junta de Comandantes liderada por Lanusse a la par que debilitaban

a la “Revolución Argentina” favorecieron la reactivación de los partidos políticos. En noviembre de 1970, la Unión Cívica Radical, el peronismo y otros agrupamientos de menor envergadura formaron la “Hora del Pueblo”, una coalición política cuya misión principal era lograr la elección de un gobierno constitucional. Otro tanto hicieron los partidos de izquierda que se reunieron en el “Encuentro de los Argentinos”. El retorno de la vida partidaria a la escena política resultó un duro golpe para el gobierno militar.

Sin embargo, no fue la revitalización de la política partidaria la que provocó el desplazamiento de Levingston sino un nuevo levantamiento popular en la ciudad de Córdoba conocido como el “Vivorazo”. A comienzos de marzo de 1971, Levingston designó como interventor de la provincia de Córdoba al doctor José Camilo Uriburu, un ferviente católico y defensor del corporativismo fascista, quien a los pocos días de asumir su cargo declaró que su misión era “cortar la cabeza de la víbora comunista” que anidaba en la provincia. Frente a las duras palabras del nuevo interventor y en repudio a la dictadura, los sindicatos combativos de Córdoba –Luz y Fuerza, UTA y SITRAC-SITRAM, estos últimos conducidos por dirigentes del clasismo– reunidos en un Comité de Huelga convocaron a un paro con ocupación de fábricas para el 12 de marzo. Ese día, la jornada de protesta terminó con la muerte Adolfo Cepeda, un operario de 18 años. Esto profundizó aún más el descontento de la clase trabajadora cordobesa que votó una nueva huelga para el 15 de marzo. Con un mayor nivel de organización que el Cordobazo y con una presencia activa de la militancia revolucionaria del ERP, la ciudad mediterránea fue el epicentro de una nueva rebelión popular que precipitó la renuncia de Uriburu primero y la de Levingston, después. La Junta de Comandantes designó como nuevo presidente al general Alejandro A. Lanusse. El sería el encargado de conducir el proceso político que devolvería el gobierno a “los civiles”.

III- El gobierno de Lanusse, 1971-1973

Cuando Lanusse se hizo cargo de la presidencia, el 26 de marzo de 1971, poco quedaba en pie del proyecto de la Revolución Argentina. El intento por superar la inestabilidad política a través del autoritarismo había fracasado. La clase obrera, en particular, y los sectores populares, en general, aún en posiciones defensivas, habían demostrado la suficiente fortaleza para enfrentar a la dictadura y oponerse a sus políticas económicas excluyentes. El Cordobazo fue el acontecimiento que evidenció los límites del proyecto autoritario y dio lugar a un ciclo de protesta social, que incluyó el desarrollo de las organizaciones político-armadas, que puso en entredicho la autoridad estatal. Ante la evidencia de su fracaso, los militares optaron por una salida electoral ordenada que les permitiera el regreso a los cuarteles con el menor costo posible ya que su desprestigio frente a la sociedad era significativo y no debía profundizarse. Sin embargo, y a diferencia de otros momentos del pasado cercano, las FFAA aceptaron, no sin malestar, la participación del peronismo –lo más condicionada posible– en las próximas elecciones. Ese fue el principal desafío del gobierno de Lanusse: diseñar y controlar la transición a un gobierno constitucional. Fue su ministro del Interior, Arturo Mor Roig, quien dio forma a una propuesta de “salida política” conocida como el Gran Acuerdo Nacional (GAN). Eran dos los propósitos fundamentales que perseguía Lanusse a través del GAN. Por un lado concertar con los partidos políticos un candidato presidencial común quien asumiría el gobierno con la misión de “ordenar” el escenario político-institucional para una futura competencia electoral irrestricta. Por otro, obtener de las fuerzas políticas una condena pública a la guerrillera, que desde 1970 había acrecentado su accionar insurgente contra la sociedad capitalista, “occidental y cristiana”.

Las expectativas depositadas en el GAN pronto se desvanecieron. Desde diferentes sectores se escucharon voces opositoras. Los partidos

políticos lo impugnaron porque le otorgaba a las FFAA el control sobre el proceso de la transición y le permitiría al propio Lanusse asegurarse la futura presidencia. También fue objetado por algunos grupos castrenses que veían en él la claudicación de “los principios de septiembre de 1955” al permitir la participación del peronismo en el “acuerdo”. Pero lo que determinó el fracaso definitivo del GAN fue la negativa de Perón a condenar el accionar armado de las organizaciones que luchaban contra la dictadura de la Revolución Argentina, muchas de las cuales se reivindicaban peronistas.

A pesar del exilio y los intentos de desplazarlo de la conducción de su propio movimiento –como el que intentó Vandor en los tempranos años sesenta– Perón no solo mantuvo el liderazgo, sino que a comienzos de la década del setenta se perfilaba como el único político capaz de superar la crisis que atravesaba la Argentina. Supo arbitrar las tensiones entre las distintas líneas de su movimiento –la tradicional dirigencia sindical, los sindicalistas “combativos”, los políticos, los sectores juveniles radicalizados y “las formaciones especiales”, la forma en que Perón nombró a las organizaciones guerrilleras que se inscribieron en su movimiento– y jugar con ellas a favor de su retorno a la política argentina.

Pese a la derrota política del GAN, Lanusse mantuvo su decisión de “devolver” el gobierno a los “civiles” pero fijó algunas condiciones para impedir un posible triunfo peronista en las elecciones generales que tendrían lugar el 11 de marzo de 1973. No podían ser candidatos quienes no residieran en el país antes del 24 de agosto de 1972 (tal el caso del líder justicialista) como tampoco quienes desempeñasen cargos en el Ejército hasta el 25 de agosto de 1975 (el precio que pagó Lanusse para excluir a Perón de las elecciones), y se estableció la doble vuelta electoral –el ballottage– en el caso en que ninguna fuerza política alcanzara la mayoría absoluta de los votos.

Estas disposiciones no disuadieron a Perón de su estrategia política. El 17 de noviembre de 1972 retornó al país luego de diecisiete años de exilio. De esta manera le respondía a Lanusse su provocación: “Si Perón no regresa al país, no es porque no puede, es porque a Perón no le da el cuero para venir”, había declarado el presidente un tiempo antes. Durante los veintiocho días que residió en la Argentina, desarrolló una intensa actividad política que incluyó reuniones con referentes de su movimiento y de otros partidos, como Ricardo Balbín, del radicalismo, y Arturo Frondizi, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Perón salió fortalecido de la experiencia: ante la ciudadanía, su figura pareció encarnar el verdadero espíritu del acuerdo nacional y con ello desanimó cualquier intento de injerencia política de las FFAA.

La “masacre de Trelew”

El 15 de agosto de 1972 un grupo de presos políticos, integrantes de Montoneros, el ERP y las FAR, se fugaron de la cárcel de Rawson (provincia de Chubut). Algunos de ellos, lograron abordar un avión en el aeropuerto de esa ciudad con destino a Chile. En tanto, otros 19 quedaron varados allí. Con el compromiso de las autoridades de que no se tomarían represalias que pusieran en riesgo su vida se entregaron y fueron llevados detenidos a la Base Aeronaval Almirante Zar, ubicada en la localidad chubutense de Trelew. En la madrugada del 22 de agosto los presos y presas de la frustrada fuga fueron sacados de sus celdas y obligados a formarse en fila para ser fusilados bajo el fuego de las ametralladoras de la Marina. Lograron sobrevivir a la masacre, para contarla, María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Miguel Camps. Los tres serían víctimas del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura militar.



Militantes detenidos luego de la fuga del penal de Rawson, 22 de agosto de 1972.

Fuente: Archivo General de la Nación.

La campaña electoral de 1973

A pesar de los condicionamientos impuestos, Perón decidió que su movimiento participara de la contienda electoral. Para ello propició la creación de un frente electoral, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) del que participaron, además del peronismo, el Partido Conservador Popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Popular Cristiano. Héctor Cámpora fue designado candidato a la presidencia y Vicente Solano Lima, dirigente del conservadurismo popular, a la vicepresidencia. La campaña del FREJULI, que tuvo como lema “Cámpora al gobierno, Perón al poder” en franco desafío a las disposiciones del gobierno militar, fue dinamizada por la Juventud Peronista y otros sectores radicalizados del peronismo, quienes desde el comienzo de la década del setenta habían ganado espacios en el movimiento

y contaban con el respaldo de Perón. La tradicional dirigencia sindical peronista, bautizada por los opositores como “la burocracia sindical”, se mantuvo al margen del proceso proselitista en consonancia con el rol secundario que venía desarrollando hacia el interior del movimiento tras el fracaso del “peronismo sin Perón”. En el marco de la campaña electoral las divisiones hacia el interior del movimiento peronista se polarizaron entre la izquierda, también conocida como la “Tendencia Revolucionaria”, y la derecha.

La “Tendencia” nucleaba a aquellos grupos que veían en el peronismo la posibilidad de construir un “socialismo nacional”; allí estaban por ejemplo, la Juventud Peronista (JP), los Montoneros y los dirigentes sindicales combativos. En tanto la “derecha” cobijaba a los sectores ortodoxos, encabezados por la dirigencia sindical, para los que el peronismo era la expresión de la armonía entre el capital y el trabajo que garantizaría la conformación de la “comunidad organizada”. Como estudiaremos en el próximo capítulo, las diferencias entre ambas facciones se profundizarán durante las presidencias peronistas del período 1973-1976 y marcarán, junto con otros elementos, el desarrollo de la política de esos años.

La UCR, por su parte, presentó la fórmula integrada por Ricardo Balbín y Eduardo Gamond. El Partido Intransigente (PI), el Partido Comunista (PC) y el Partido Revolucionario Cristiano (PRC) conformaron la Alianza Popular Revolucionaria (APR) que postuló las candidaturas de Oscar Alende (PI) y Horacio Sueldo (PRC). Finalmente, los sectores de la derecha política se agruparon en la Alianza Popular Federalista que propusieron al ex-marino Francisco Manrique como candidato a presidente.

Las elecciones se celebraron el 11 de marzo de 1973. El FREJULI obtuvo el 49,5% de los votos seguido por la UCR que obtuvo el 21,2%. Ante la contundencia del resultado, la UCR no se presentó a la segunda vuelta y el peronismo volvió a gobernar el país, tras dieciocho años de proscripción política. Las FFAA habían fracasado en su programa

autoritario. En las calles se celebraba el fin de la dictadura militar. “Se van, se van y nunca volverán” coreaba la multitud... Un grito que sería ahogado tres años más tarde cuando las FFAA perpetraran un nuevo golpe de Estado.

IV- La juventud entre la rebeldía cultural y la radicalización política: contestaciones al orden social, cultural y familiar

Durante los años sesenta del siglo pasado se produjeron cambios significativos en la sociedad y la cultura argentinas. Así, los cuestionamientos no se circunscribieron al orden político- económico vigente sino que se ampliaron a la familia, las relaciones entre varones y mujeres, la sexualidad, el rol de las mujeres en la vida social, la cultura instituida. Fue una época donde la “autoridad” en todas sus manifestaciones y niveles –desde el Estado al padre– resultó cuestionada y atacada.

Los principales responsables de la contestación fueron los y las jóvenes que ya desde mediados de los años cincuenta comenzaron a discutir los valores constituidos. Ya entrada la década siguiente la noción de “ser joven” quedó anudada a la idea de ruptura de lo establecido. Por ello, el “ser joven” se volvió “peligroso”, amenazante y por lo tanto objeto de un disciplinamiento desde el poder, que a mediados de los años setenta se desplegaría con inusitada violencia.

Tal como lo señala la historiadora Valeria Manzano, fueron las jóvenes mujeres las que llevaron adelante las acciones más disruptivas. Prolongaron su permanencia en el sistema educativo, especialmente en el universitario. La presencia femenina en las universidades nacionales creció del 25% en 1958 al 38% en 1972. En 1968, por ejemplo, el 86% de las mujeres inscriptas en la Universidad de Buenos Aires eran estudiantes de “primera generación” en su familia, “guarismo –sostiene Manzano– que demuestra el profundo cambio respecto a las generaciones predecesoras”. Ahora bien, esas jóvenes que accedieron a la universidad en los años sesenta eran en

su mayoría de clase media. La presencia de estudiantes de familias obreras comenzaría a registrarse a comienzos de los años setenta.

Lograron, además, una significativa inserción en el mercado laboral. Si en 1947 las mujeres representaban el 18% de la población económicamente activa el porcentaje ascendió al 38% en 1970. Las mujeres jóvenes de los sesenta fueron además las primeras cohortes que no abandonaron masivamente sus empleos al cumplir los veinticinco años, una edad que se asociaba por entonces con el matrimonio y la maternidad. La postergación del casamiento fue otro de los aspectos que las diferenciaron de la generación de sus madres.

Las jóvenes junto a sus compañeros varones experimentaron nuevas formas de cortejo y de noviazgo que incluyó la aceptación del sexo prematrimonial como parte de la preparación para la vida en común. La historiadora Isabella Cosse estudió los cambios en la pareja, la sexualidad y la familia durante los años sesenta que pusieron en entredicho el “modelo de domesticidad” –un ideal de familia basado en la organización nuclear, la reducción del número de hijos y la división de roles entre el varón proveedor y la mujer a cargo del cuidado de los hijos– que delineó los contornos de la aceptabilidad social desde 1930.

La figura del matrimonio indisoluble organizado a partir de una relación de complementariedad con inequidad, puesto que la autoridad masculina resultaba indiscutible, comenzó a ser cuestionado por la idea de pareja –con libreta matrimonial o sin ella– entendida como un espacio de encuentro sostenido en el compañerismo (aunque eso no garantizara la igualdad entre sus integrantes) y donde la realización personal y la satisfacción sexual formaban parte de las expectativas de ambos cónyuges.

En cuanto a la sexualidad, también produjeron importantes desplazamientos. En el modelo de domesticidad familiar, quedaba resumida a una práctica que solo debía ejercitarse en el lecho de un matrimonio heterosexual y con fines reproductivos. Asimismo, la virginidad femenina era tomada como símbolo de virtud y requisito para contraer matrimonio.

Estos mandatos, por su parte, habilitaron la aceptación de un doble patrón de moralidad sexual que ensalzaba la satisfacción sexual del varón y las negaba a las mujeres. Durante los sesenta, la virginidad femenina perdió su carga de honorabilidad y su rango de prenda para concretar un casamiento “decente”, se cuestionó la doble moral y se liberó a la sexualidad de ese imaginario que la asociaba a lo prohibido y lo sucio y comenzó a ser ponderada positivamente.

Todos estos importantes cambios tuvieron, sin embargo, sus limitaciones. Cosse subraya por lo menos tres aspectos que hicieron de la “revolución sexual” en la Argentina una experiencia “discreta”: la persistente centralidad de la pauta heterosexual, el mantenimiento de las desigualdades de género y la ligazón de la sexualidad a relaciones afectivas de largo plazo.

La aparición de la píldora anticonceptiva y su comercialización a comienzos de 1960 —en la Argentina se dio casi inmediatamente de su salida en los Estados Unidos— se convirtió en una aliada de las mujeres que querían planificar su maternidad: decidir cuándo ser madres y cuántos hijos tener. Según la investigadora Karina Felitti, en la Argentina fueron las mujeres casadas y con hijos sus principales demandantes y usuarias quienes se veían urgidas de contar con un método contraceptivo que estuviera bajo su responsabilidad y control. Asimismo la “píldora” deslindó la reproducción del placer sexual lo que provocó cambios en las subjetividades respecto de la sexualidad, especialmente de las mujeres. Finalmente, si bien la información sobre la “píldora” era pública y estaba disponible para todas las mujeres, su consumo era restringido y desigual, ya que como sucede con otros métodos anticonceptivos en la actualidad, su uso estaba condicionado por la clase social.

En 1970, a medida que las jóvenes ponían en entre dicho el orden vigente con sus modos de ser y de vivir, surgieron las primeras agrupaciones feministas. Al calor de un “movimiento internacional de liberación femenina” que buscaba terminar con la “opresión de la mujer”,

se fue gestando localmente un activismo feminista que, aunque de alcance limitado y vinculado a los sectores medios urbanos, comenzaron a denunciar y combatir las subordinaciones que sufrían las mujeres.

V- La Iglesia, cerca de la revolución

La Iglesia Católica no fue ajena a los vientos de cambio y transformación de los *sesenta*. Entre 1962 y 1965 sesionó el Concilio Ecuménico Vaticano II en el que los obispos allí reunidos buscaron, a través de una serie de nuevas disposiciones, “abrir” la Iglesia al mundo contemporáneo y sus problemas. La distancia que existía entre la institución y sus fieles se manifestaba por ejemplo en la impartición de las misas en latín y en las que el sacerdote se ubicaba de espaldas a la feligresía. El Concilio modificó esta situación y asumió un compromiso más fuerte con las cuestiones sociales que afectaban al “pueblo de Dios”.

Tres años más tarde, en la ciudad colombiana de Medellín se realizó la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano con la intención de adecuar la Iglesia latinoamericana las innovaciones que introdujo el Concilio Vaticano II. Aquí comenzó a gestarse una nueva corriente teológica denominada Teología de la Liberación que se manifestó su “opción preferencial por los pobres” y se acercó a las ciencias sociales y humanas para encontrar con herramientas para enfrentar la pobreza desde sus causas y no un remedio superficial.

En la Argentina, el Concilio Vaticano II provocó la emergencia del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM) que se manifestó a favor de una iglesia que acompañe activamente a los pobres en sus luchas de “liberación”. Por eso, los curas que se sumaron al MSTM se integraron al pueblo a través de su trabajo en villas y barrios populares, con sindicatos y ligas campesinas. Un número importante de jóvenes católicos formados por integrantes del MSTM se integrarían a varias de las organizaciones político-armadas que surgieron a fines de la década del sesenta.



El sacerdote Carlos Mugica (centro), cura villero e integrante del MSTM.

Fuente: Wikipedia.

La juvenilización de la cultura

La música fue una de las vías principales a través de las cuales se desarrolló el proceso de juvenilización de la cultura argentina. En 1962 comenzó a emitirse el exitoso programa de televisión *El Club del Clan*. Las canciones de los distintos “ídolos juveniles” que allí se presentaban solían tener un fuerte tinte conservador; sin embargo, también fueron una oportunidad para que millones de jóvenes comenzaran a identificarse a sí mismos como tales. Apenas unos años más tarde surgieron los primeros grupos de lo que terminaría por llamarse *rock nacional*. Nuevas bandas como Almendra, Manal o Los Gatos aspiraron a componer canciones menos concesivas con el mercado, pero igualmente orientadas al público juvenil local.

Estas transformaciones expresaban, a su manera, una dinámica modernizadora que contrastaba con pautas culturales autoritarias profundamente arraigadas en la sociedad argentina. Si los proyectos revolucionarios de los años sesenta no consiguieron triunfar, el impacto de esta revolución cultural de la época tuvo en cambio más largo aliento. Las formas en que las personas se pensaban a sí mismas, las formas en que se presentaban frente a los otros y los modos de relacionarse en el ámbito familiar, sentimental y social se modificaron intensamente a lo largo de aquellos años. Los jóvenes “pelilargos” y las jóvenes vestidas con minifalda, por ejemplo, cuestionaron de un modo práctico y concreto las lógicas conservadoras del deber ser masculino y femenino. La comercialización de la píldora anticonceptiva, por su parte, permitió a las mujeres (y a los hombres) imaginar nuevos modelos de sexualidad.

Por Julián Delgado

Bibliografía

- Aroskind, Ricardo, “El país del desarrollo posible”, en Daniel James (Director de Tomo), *Nueva Historia Argentina: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Brennan, James P., *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.
- Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en la Argentina*, Buenos Aires, Ariel, 1997.
- Cosse, Isabella, *Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta*, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2010.
- De Riz, Liliana, *La política en suspenso, 1966/1976*, Buenos Aires, Paidós, 2000.
- Felitti, Karina, *La revolución de la píldora. Sexualidad y política en los sesenta*, Buenos Aires, Edhasa, 2012.
- Gordillo, Mónica, “Protesta, rebelión y movilización”, en Daniel James (Director de Tomo), *Nueva Historia Argentina: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Historia Argentina. Desde 1931 hasta la actualidad*, Tomo 3, Buenos Aires, Colegio Nacional de Buenos Aires-Página/12, 2000.
- James, Daniel, *Resistencia e integración*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Manzano, Valeria, *La era de la juventud en la Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón a Videla*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2017.
- Novaro, Marcos, *Historia de la Argentina, 1955-2010*, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2010.
- O’Donnell, Guillermo, “Estado y alianza de clases en la Argentina, 1956-1976”, *Desarrollo Económico*, vol.16, n° 64, 1977.
- O’Donnell, Guillermo, *El Estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.
- Portantiero, Juan Carlos, “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”, en Ansaldi, Waldo y Moreno, José (compiladores), *Estado y sociedad en el pensamiento nacional*, Buenos Aires, Cántaro, 1989.
- Tcach, César, “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en Daniel James (Director de Tomo), *Nueva Historia Argentina: Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Capítulo 6

El retorno del peronismo al poder, 1973-1976

Diego Neme

El 25 de mayo de 1973 el peronismo volvió a gobernar la Argentina: lo hizo después de dieciocho años de proscripción política y de gobiernos que desarmaron el proyecto redistributivo que había llevado a cabo durante su primer paso por el poder. En el presente capítulo se estudian los tres años que transcurren entre 1973 y 1976 a partir de dos ejes: el primero se centra en la economía y se propone analizar los intentos de consensuar un Pacto Social y desplegar medidas orientadas a redistribuir la riqueza en beneficio de los trabajadores. Este eje incluye el repaso de los conflictos sociales y los problemas surgidos durante la implementación de estas medidas, así como el drástico abandono de muchas de ellas luego de la muerte de Juan Domingo Perón. El segundo eje, relacionado con el primero, estudia la dinámica de la conflictividad política durante este período y a los actores centrales que la protagonizaron: la izquierda y la derecha peronista, el sindicalismo tradicional y los sindicalismos combativos, las organizaciones armadas de izquierda, el propio Perón y las Fuerzas Armadas. Los dos ejes atraviesan los tres apartados del capítulo: el primero da cuenta de la breve presidencia de Héctor Cámpora, transcurrida entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1973; el segundo se abre con el retorno definitivo de Perón,

abarca su presidencia y se cierra con su muerte ocurrida el 1º de julio de 1974; y el último transcurre durante el gobierno de su sucesora, María Estela “Isabel” Martínez de Perón, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

I. Cámpora al gobierno: entre la izquierda peronista y el Pacto Social

La izquierda peronista y “el tío” presidente

El fin de la proscripción del peronismo tuvo diferentes significados para los actores que dominaban el campo político en los meses finales de la Revolución Argentina. El general Lanusse y su entorno lo consideraban como una forma de relegitimar el poder estatal y de canalizar dentro del sistema institucional la movilización popular y los conflictos sociales y políticos, en particular aquellos protagonizados por los sindicatos combativos, los estudiantes y las organizaciones armadas de izquierda. Por su parte, para el sindicalismo tradicional y gran parte del peronismo partidario el nuevo panorama era visto como una oportunidad para reflotar el proyecto social y económico del peronismo clásico, retornando a aquella “patria peronista” caracterizada por la redistribución de la riqueza social, la atenuación de las desigualdades entre trabajadores y capitalistas y el fortalecimiento del mercado interno y las pequeñas y medianas empresas nacionales. Un tercer sector, representado por la Tendencia Revolucionaria del peronismo –en la que convergían grupos de izquierda como la Juventud Peronista y organizaciones armadas como Montoneros– entendían el retorno de Perón como una oportunidad para enfrentar al “imperialismo” y al capital extranjero, acceder a la “liberación nacional” y construir una “patria socialista” que diera por terminado el orden capitalista.

Las esperanzas de la izquierda peronista, sumamente movilizada luego del Cordobazo, parecían coincidir –por entonces– con los apoyos públicos que les brindaba el propio Perón desde el exilio. El líder político veía en esa amplia movilización una forma de presionar a los militares para que dejaran de lado la proscripción y, al mismo tiempo, contrapesar el poder de los jefes sindicales desleales. Perón se aseguró la presencia de la Juventud Peronista en los actos masivos realizados por el justicialismo durante 1972 y respaldó el nombramiento de sus representantes dentro de la estructura partidaria. También apoyó públicamente a Montoneros y a las organizaciones armadas peronistas, definiéndolas como las “formaciones especiales” del movimiento que permitirían debilitar y condicionar a los militares en el poder. En una decisión que tenía una fuerte carga simbólica, el peronismo nombró –en 1972– a Juan Abal Medina como Secretario General del movimiento: el nuevo dirigente era el hermano del fallecido jefe de Montoneros, aunque no era parte de aquella organización.

En aquel marco, Perón eligió a Héctor Cámpora –su delegado personal y representante del peronismo partidario leal a su figura– como candidato presidencial del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). La izquierda peronista le dio su total apoyo y la campaña electoral fue desplegada, principalmente, por los sectores juveniles que usaban el slogan “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, en claro desafío a los militares que habían fijado una serie de condiciones legales para que Perón no pudiera presentarse como candidato. Durante la campaña, Cámpora elogió públicamente a Montoneros y a la izquierda del movimiento por el apoyo recibido, mientras que la Juventud Peronista lo apodó, afectuosamente, con un sobrenombre que exteriorizaba una relación de familiaridad con ellos y con el ex presidente: “el tío”. Todo parecía indicar que Perón había dejado de lado a la vieja guardia sindical como su principal aliada en la etapa que se iniciaba, aunque –como se verá– esta fue una decisión momentánea.

El 11 de marzo de 1973, la fórmula encabezada por Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima triunfó con un 49,5% de los votos –superando largamente a la del radicalismo encabezada por Ricardo Balbín– y, en las semanas siguientes, la izquierda peronista tuvo un enorme protagonismo público. El día de la asunción del nuevo presidente, el 25 de mayo de 1973, todo parecía indicar que la Tendencia Revolucionaria protagonizaría los tiempos por venir, como quedó de manifiesto en las palabras de Cámpora al referirse a la Juventud Peronista como una “juventud maravillosa”. Esas palabras fueron pronunciadas frente a los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós, que habían viajado para asistir a la asunción: la escena representaba un símbolo de los tiempos que parecían abrirse con el nuevo gobierno. Aquel día, la Plaza de Mayo se llenó de militantes juveniles, los militares tuvieron que retirarse en medio del repudio público y una multitud se dirigió hacia la cárcel de Villa Devoto para pedir la liberación de los presos políticos encarcelados por el régimen anterior. Todos ellos fueron indultados de inmediato a través de un decreto presidencial que, posteriormente, fue revalidado por el Congreso Nacional al aprobarse una Ley de Amnistía. El parlamento también derogó parte del entramado normativo e institucional montado por la dictadura para reprimir los conflictos políticos y sociales, promover la censura y perseguir a los militantes de las diferentes expresiones de izquierda.

El discurso de Righi a la policía

El gobierno de Cámpora se propuso terminar con las prácticas de represión política de la dictadura saliente. Esto quedó reflejado en el discurso que su ministro del Interior, el doctor Esteban Righi, pronunció el 5 de junio de 1973 frente a la cúpula de la Policía Federal. El ministro expresó:

“...Lo trágico de la situación que nuestra Policía ha vivido es que sus jefes, oficiales y tropas han sido compelidos a enfrentarse con las masas populares de las que surgieron, y que defendían un futuro mejor también para ellos (...) Pero esto debe cambiar. Es habitual llamar a los policías guardianes del orden. Así seguirá siendo. Pero lo que ha cambiado, profundamente, es el orden que guardan. Y en consecuencia, la forma de hacerlo. Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respaldado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia, con respeto y sensibilidad humanas. La sociedad argentina ha padecido muchos agravios en estos años terribles que acaban de concluir (...) Es natural y comprensible que la presión tan duramente contenida escape ahora con ímpetu. Que se manifiesten pedidos y demandas sectoriales (...) La función policial no será combatir esas manifestaciones. Sólo encauzarlas, ponerles razonables límites, impedir desbordes. Los hombres de la Policía pueden sentirse aliviados. Ahora nadie pretende que de sus armas deba salir la solución a los conflictos (...) Las reglas del juego han cambiado. Ningún atropello será consentido. Ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista...”.

Citado en Feinmann, José Pablo (2012), *Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina [2011]*, Buenos Aires, Planeta, tomo II, pp. 207-210.



Héctor Cámpora durante su asunción presidencial.

Fuente: Archivo General de la Nación.

El breve gobierno de Cámpora estuvo atravesado por una intensa movilización popular que reflejó las expectativas de cambio social abiertas con el nuevo ciclo democrático, dando continuidad a la tradición de conflictividad social y protestas que se habían producido durante los años previos. Ese estado de movilización atravesó a grandes sectores de la clase trabajadora y los estudiantes y se materializó, en junio de 1973, en “tomas” de empresas, organismos públicos, universidades y hospitales. Una parte de las bases obreras y los sectores más combativos del sindicalismo, menos negociadores y más radicales en sus formas de lucha que el sindicalismo tradicional (al que tildaban como la “burocracia

sindical”), adquirió un enorme protagonismo durante aquellos días. Esto se manifestó en la multiplicación de huelgas y reclamos para conseguir mejores salarios y condiciones de trabajo, desbordando a las estructuras sindicales tradicionales del peronismo y a sus dirigentes, a quienes muchos trabajadores criticaban por haber firmado lo que se conoció como el Pacto Social.

El Pacto Social y el plan económico de Gelbard

El presidente Cámpora nombró, a instancias de Perón, a José Ber Gelbard como Ministro de Economía. El funcionario era el referente histórico de la Confederación General Económica (CGE), una corporación que representaba a los empresarios nacionales, particularmente a los pequeños y medianos, cuyos productos y servicios estaban orientados al mercado interno. El nuevo ministro también era la cara visible de un grupo empresarial propietario de FATE (productora de neumáticos) y Aluar (productora de aluminio) y estaba vinculado políticamente al Partido Comunista. Gelbard permaneció en el cargo hasta octubre de 1974, pese a los cambios de gobierno que se produjeron en ese lapso, y su plan económico se basó en un conjunto de medidas inspiradas en las del primer peronismo. Sus objetivos principales e interrelacionados fueron: a) mejorar la distribución del ingreso en favor de los trabajadores, b) asegurar el pleno empleo y la ampliación del mercado interno y, c) fortalecer a las empresas del Estado y del sector privado nacional, reemplazando la centralidad que habían adquirido las firmas transnacionales desde 1955.

La herramienta inicial de este plan económico se conoció con el nombre de Pacto Social, un acuerdo de precios y salarios firmado en junio de 1973 entre el Estado, los empresarios agrupados en la CGE y el movimiento obrero representado por la Confederación General del Trabajo (CGT), conducida por José Ignacio Rucci. Con este acuerdo se buscaba regular

la puja distributiva entre el capital y el trabajo para controlar la inflación, aumentar inicialmente el poder adquisitivo de los salarios y asegurar su incremento en el futuro. El acuerdo y el plan económico se proponían, con metas graduales en el tiempo, alcanzar una distribución de la riqueza parecida a la que había logrado el primer peronismo, en donde los trabajadores tenían una participación del 50 por ciento en la renta nacional (una cifra que había descendido al magro 43 por ciento en el año 1972).

El Pacto Social, que tendría una vigencia de dos años, estipulaba un aumento salarial inicial de 200 pesos mensuales para todos los trabajadores (en el caso de los salarios mínimos esto representaba una suba del 20 por ciento) y el compromiso de los jefes sindicales de mantener los sueldos congelados por un año, cuando los firmantes se sentarían a revisarlos. Por su parte, los empresarios se comprometían a congelar los precios de los productos de mayor consumo y absorber los incrementos salariales futuros sin trasladarlos a los precios. Los dos sectores que habían realizado el acuerdo tuvieron, para asegurar su compromiso, presencia en el gabinete nacional: al ministro de Economía, proveniente del mundo empresarial, lo acompañó Ricardo Otero como ministro de Trabajo, un hombre del sindicalismo proveniente de las filas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conducía Lorenzo Miguel.

El plan de Gelbard se proponía darle un firme impulso a la producción nacional, incentivando la ampliación del mercado interno por vía de las mejoras salariales iniciales (y de las previstas en el futuro) y a través del incremento del gasto público, especialmente de las inversiones planeadas por las empresas estatales. Estas medidas fueron acompañadas con otras destinadas a incentivar las exportaciones industriales y agropecuarias hacia nuevos mercados mundiales, especialmente hacia los países socialistas y árabes, de quienes también se esperaba recibir inversiones

en infraestructura. Se descontaba que esta estrategia comercial sería facilitada por los contactos políticos que Gelbard tenía con el Partido Comunista. Por otra parte, la producción industrial fue incentivada limitando las importaciones e implementando subsidios y créditos ventajosos, particularmente destinados a las pequeñas y medianas empresas. Para alcanzar este último objetivo se reguló el sistema financiero y se nacionalizaron los depósitos bancarios, lo que también permitiría controlar y atenuar las fugas de divisas que llevaban a cabo los bancos, las firmas transnacionales y los sectores más adinerados de la sociedad. El programa de Gelbard incluyó una nueva ley de inversiones extranjeras y regulaciones destinadas a reducir la dependencia externa de la economía, restringiendo la capacidad de las empresas transnacionales de enviar sus ganancias al exterior y de decidir sobre el tipo de inversiones que hacían.

El incremento de las exportaciones agropecuarias y su control estatal eran acciones claves, en este plan, para generar los ingresos necesarios que permitieran redireccionar la riqueza social desde el sector rural hacia el sector industrial y los trabajadores urbanos. Con esa finalidad, el Estado monopolizó las exportaciones agropecuarias a través de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, aprovechando los buenos precios mundiales que tenían esos productos a mediados de 1973, y planificó acciones para estimular el aumento de la producción. Por esta razón el gobierno se mostró activo en la búsqueda de nuevos mercados internacionales, promovió líneas de crédito ventajosas, impulsó estímulos fiscales para el sector y asumió el compromiso de aumentar los precios mínimos que se pagaban a los productores. El plan incluyó, asimismo, dos medidas (que no se pudieron aplicar) destinadas a presionar a los grandes terratenientes para que aumentaran la producción rural: un impuesto que penalizaba la mantención de tierras sin producir a partir de 1976 y un proyecto de Ley Agraria que posibilitaba la expropiación de

tierras improductivas y el incentivo de las cooperativas rurales. Todas estas medidas fueron planificadas sin devaluar la moneda, algo esperado por los empresarios agroexportadores para aumentar sus ganancias inmediatas, pero que Gelbard desestimó por sus consecuencias inflacionarias.

El plan también incluía la realización de un programa de bienestar social basado en la construcción de viviendas populares, que permitiría incrementar los niveles de empleo, incentivar la demanda interna y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Este programa quedó bajo la órbita del Ministerio de Bienestar Social, en el que Perón colocó a José López Rega, un policía retirado que era su secretario privado en el exilio español y que terminó aglutinando, en torno a su figura como ministro, a algunos de los sectores y miembros de la derecha peronista.

El Pacto Social y las medidas económicas proyectadas por Gelbard generaron tensiones iniciales con diferentes actores sociales y políticos que se fueron agravando con el correr de los meses. El congelamiento inicial de salarios y el rol del sindicalismo tradicional como garante de las medidas chocaron con el alto nivel de movilización existente entre las bases trabajadoras y con las formas de protesta y organización impulsadas por los sectores más combativos del sindicalismo. Estas formas incluían medidas de acción directa como la ocupación de los lugares de trabajo, la realización de asambleas y reclamos salariales que excedían los acordados por los jefes sindicales. Las líneas generales del Plan Gelbard tampoco coincidían con las expectativas de la Tendencia Revolucionaria del peronismo, debido a que sus objetivos y medidas iniciales estaban lejos de la “patria socialista” esperada por la izquierda del movimiento y su aplicación otorgaba un lugar preponderante a sus enemigos en la interna peronista: los jefes del sindicalismo tradicional. Por su parte, a pesar de que lo percibían poco favorable para sus intereses, las corporaciones patronales más poderosas aceptaron inicialmente los lineamientos económicos, estimando que no

había mucho margen para otra postura ante la popularidad del nuevo gobierno.

El fin del gobierno de Cámpora

La distancia que empezaba a marcarse entre los proyectos políticos y sociales de Perón y los de la izquierda del movimiento se hizo visible con el regreso definitivo del caudillo, que se produjo el 20 de junio de 1973, en medio de una concentración multitudinaria que colmó la ruta al Aeropuerto de Ezeiza. En aquella concentración se hizo notar el poder de movilización que tenían los sectores juveniles y de la izquierda peronista, que coreaban lemas como “vamos a hacer la patria peronista, pero la haremos montonera y socialista”. Sin embargo, la organización del acto y el control del escenario montado sobre la ruta estuvieron en mano de quienes respondían al ministro de Bienestar Social, José López Rega. Estos sectores terminaron abriendo fuego sobre la multitud y provocaron una gran cantidad de muertos y heridos en lo que se conoció como la Masacre de Ezeiza. A raíz de estos hechos, el avión que trasladaba a Perón aterrizó en la base aérea de Morón y al día siguiente el viejo líder dio un discurso en el que reclamó la vuelta a la ortodoxia doctrinaria de la “patria peronista”, en una alocución que parecía destinada a mostrar las diferencias con los sectores juveniles que interpretaban al peronismo como la posibilidad de construir una “patria socialista”.



El día después de la Masacre de Ezeiza: el escenario vacío y un elocuente cartel.

Fuente: Archivo General de la Nación.

A partir de entonces, los días del gobierno de Cámpora estuvieron contados: no solamente porque este se había dispuesto a facilitar el retorno de Perón al gobierno –a tono con las expectativas de gran parte de los argentinos– sino, además, porque el tipo de gobierno que representaba no era afín con el proyecto político y social que planificaba Perón. En este proyecto se esperaba el protagonismo concertado del sindicalismo tradicional peronista y de un sector del empresariado nacional, antes que de los sectores de la izquierda que confluían en la figura del “tío” y que habían sido apoyados por Perón en los meses previos. Los militantes de una “patria socialista” tampoco encajaban con el proyecto económico que Perón pensaba llevar a cabo ni, como se verá, con los acuerdos políticos que quería desplegar. El 13 de julio de 1973 –a los 49 días de haber

asumido– renunciaron Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Desde entonces, y por algunos meses, la presidencia provisional de la Argentina fue asumida por Raúl Lastiri, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados y se encontraba –en aquel momento– en la línea sucesoria. El nuevo presidente era el yerno de José López Rega, el ministro al que la izquierda peronista señalaba como el responsable de la Masacre de Ezeiza.

II. Perón al poder: los problemas de una estrategia acuerdista

La “democracia integrada”

Durante el gobierno de Lastiri se convocó nuevamente a elecciones presidenciales y el justicialismo presentó la fórmula integrada por Perón y su esposa, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel. La CGT se transformó en el eje de la nueva campaña electoral, aunque Perón mantuvo abierto los canales de diálogo con la izquierda peronista que había propuesto sin éxito a Cámpora para acompañarlo en la fórmula. Estos no perdieron las esperanzas de reforzar sus posiciones dentro del justicialismo debido a su gran capacidad de movilización, como sucedió en un acto de finales de agosto en el que Mario Firmenich, jefe de Montoneros, le pidió públicamente a Perón el desplazamiento de la “burocracia sindical” de los ámbitos partidarios. Lo cierto es que la CGT –a pesar de ese pedido– se había convertido en una de las garantes del Pacto Social y su secretario general, José Ignacio Rucci, quedó confirmado como el principal aliado político de Perón. Por aquellos días, el jefe sindical expresaba –en clara respuesta a sus adversarios de la izquierda juvenil– que había que realizar una “purificación ideológica” contra la “infiltración” en el movimiento peronista.



Perón e Isabel triunfaron en las elecciones del 23 de septiembre de 1973.

Fuente: Archivo General de la Nación.

El 23 de septiembre de 1973 la fórmula integrada por Perón e Isabel ganó con el 62% de los votos, obteniendo una diferencia contundente frente a la fórmula de los radicales Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa, que quedó en segundo lugar con el 24% de los sufragios. Pero dos días después se produjo un hecho que conmocionó la política nacional: Rucci fue asesinado en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. En el entorno de Perón las miradas se posaron sobre la izquierda peronista y, aunque nadie se atribuyó públicamente el atentado, una de sus consecuencias inmediatas fue un mayor distanciamiento del viejo general frente a los sectores de la Tendencia Revolucionaria.

Perón asumió el 12 de octubre de 1973 y desde la presidencia intentó desplegar un sistema de acuerdos al que llamó “democracia integrada”, cuyo objetivo formal era encauzar la conflictividad y la violencia registrada hasta entonces en el sistema político a partir de su tramitación en el seno de las instituciones del Estado. El eje de la propuesta se basaba en el referido Pacto Social y en acuerdos entre el peronismo y el resto de los actores partidarios. La búsqueda de consensos, especialmente con el radicalismo de Balbín, estaba destinada a fortalecer el sistema democrático en medio de la avanzada golpista que se venía dando en los países del Cono Sur, en donde dominaban las dictaduras alineadas con los Estados Unidos bajo el signo de la Doctrina de Seguridad Nacional. El más reciente de esos golpes se había producido en Chile el 11 de septiembre de 1973, cuando los militares, encabezados por el general Augusto Pinochet, derrocaron al presidente socialista Salvador Allende.

Perón también ensayó una conciliación, pese a las persecuciones del pasado, con los sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas. Esta estrategia se inició con la remoción del general Jorge Carcagno, el jefe del Ejército nombrado por Cámpora, quien en su corta gestión había criticado la política exterior norteamericana y organizado —en octubre de 1973— el Operativo Dorrego, una misión de ayuda a inundados de la provincia de Buenos Aires en la que convivieron miembros del ejército y militantes de la izquierda peronista. El reemplazo de Carcagno por el general Leandro Anaya fue un gesto de acercamiento hacia un ejército atravesado por posturas anti-izquierdistas y doctrinariamente alineado, en sus facciones dominantes, con los Estados Unidos.

Con respecto a las organizaciones guerrilleras, Perón las exhortó —desde su retorno al país— a dejar de lado la lucha armada como recurso político, reconociéndola como una táctica válida durante el período dictatorial previo, aunque carente de legitimidad en la nueva etapa democrática. Montoneros abandonó formalmente la violencia armada y se integró al

juego político legal, pero el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) continuó apelando a la lucha armada como estrategia para llevar a cabo una transformación revolucionaria. La primera operación importante del ERP desde el retorno del peronismo al poder fue el intento de copamiento del Comando de Sanidad del Ejército en la ciudad de Buenos Aires, producido antes de las elecciones presidenciales de 1973, lo que motivó su ilegalización por parte del gobierno de Lastiri. Perón terminó calificando públicamente este tipo de acciones políticas como actos de delincuencia y promovió su represión policial, aunque excluyendo de esa tarea a los militares para no acrecentar su poder.

El presidente electo repetía en público que los intentos de tejer diferentes acuerdos estaban destinados a formar una “comunidad política” con un objetivo común: el de la “justicia social” plasmada en el “reparto de los beneficios”, mitad para el trabajo y mitad para las empresas, señalando que se debía alcanzar un “capitalismo sabiamente gobernado” en el que la “ganancia” sería legítima al no ser “abusiva”. Su proyecto no se orientaba a alcanzar la “patria socialista” anhelada por la izquierda del movimiento, sino –ante todo– las metas de la “patria peronista” de los años cuarenta. En ese camino incluyó el protagonismo del sindicalismo tradicional y una tregua política con los sectores militares dominantes, los dos grupos que la izquierda juvenil había “combatido” con el propio guiño de Perón antes de su retorno al país.

El Pacto Social y la reactivación de la puja distributiva

El Pacto Social y las medidas económicas tomadas por Gelbard permitieron alcanzar, durante los primeros meses de su aplicación, algunos de los resultados esperados: creció la economía, la producción industrial y la participación de los salarios en el ingreso nacional. También se registró un incremento del consumo interno y un descenso en las tasas de desempleo y de inflación. Esto se produjo en un contexto mundial

que presentaba una alta demanda y buenos precios para las exportaciones agropecuarias argentinas. Sin embargo, a finales de 1973 sobrevino un cambio en el panorama económico internacional cuando, en el marco de un conflicto bélico en Medio Oriente, las principales naciones petroleras –agrupadas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)– aumentaron sustancialmente los precios de los combustibles y desataron lo que se conoció como la “crisis del petróleo”. Esa situación se tradujo, para la Argentina, en el incremento de los precios de los insumos y productos importados, generando una presión inflacionaria de origen externo, y ocasionó el descenso de los precios de los productos agropecuarios exportables.

La crisis mundial fue el escenario que reimpulsó la puja distributiva entre empresarios y trabajadores pese a la vigencia del Pacto Social. Los empresarios presionaron al gobierno para trasladar al mercado interno el incremento de precios de los productos importados, obteniendo como respuesta inicial la prohibición de hacerlo (aunque recibieron un subsidio a las compras de insumos en el exterior a través de un tipo de cambio específico y sobrevaluado). En abril de 1974 el gobierno permitió, finalmente, un incremento de los precios oficiales. Asimismo, los patrones desplegaron estrategias para aumentar sus precios por fuera de lo pactado: apelaron al desabastecimiento del mercado formal, a la venta de productos en el “mercado negro” y al contrabando hacia países limítrofes.

Los trabajadores también reclamaron mejoras salariales por encima de lo acordado en el Pacto Social. Esos reclamos fueron una respuesta frente a las estrategias empresariales mencionadas y una consecuencia de la fuerte movilización política y sindical presente en las bases obreras. El clima de movilización se alimentaba de la experiencia adquirida en las protestas de los años previos y en las expectativas abiertas con el retorno de Perón al poder, a quien gran parte de los trabajadores apreciaban y recordaban por las mejoras en las condiciones laborales obtenidas

durante sus primeros gobiernos. En este marco, los delegados combativos disputaban fuertemente el poder de los jefes del sindicalismo tradicional, cuestionando su función como garantes del Pacto Social y presionándolos –en muchas ocasiones– a convalidar aumentos salariales para no quedar deslegitimados. Estos aumentos eran realizados de manera indirecta para no vulnerar frontalmente el acuerdo firmado en junio de 1973, adoptando la forma de montos adicionales que el empleador pagaba, por ejemplo, como compensaciones por malas condiciones laborales.

Ante esa situación, el gobierno de Perón promovió –en noviembre de 1973– una reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales destinada a impulsar una mayor centralización de la organización sindical en torno a los grandes gremios nacionales y a bloquear las acciones de los delegados más combativos, fortaleciendo a los jefes sindicales encargados de garantizar el Pacto Social. Esta ley incrementaba el poder que tenían los sindicatos centrales sobre las decisiones tomadas por los sindicatos locales, otorgando a los primeros el derecho a revisar las decisiones de las comisiones de fábrica sin que esas revisiones pudieran ser apeladas. Aunque muchas acciones sindicales de base fueron declaradas ilegales apelando a esta ley, los conflictos laborales no disminuyeron y continuaron desbordando el encuadramiento esperado por el gobierno.

Un ejemplo de esto se produjo en marzo de 1974 en la localidad de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, cuando los trabajadores de la siderúrgica Acindar y sus delegados llevaron a cabo una huelga y la ocupación de las instalaciones en reclamo de mejores condiciones de trabajo y la reincorporación de obreros despedidos, enfrentándose –además– con los jefes nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica. Estos hechos daban cuenta de la persistente conflictividad obrera, de las dificultades que tenían las cúpulas sindicales para controlarla y de la deslegitimación que sufrían al tener que garantizar el Pacto Social en esas condiciones. En virtud de esta situación, la CGT presionó al gobierno para conseguir un

aumento de las remuneraciones, que se terminó concediendo en marzo y en junio de 1974.

Los jefes sindicales y el Pacto Social

“La vuelta de Perón al gobierno modificó sustantivamente las condiciones que habían servido de marco a la participación conflictiva de los sindicatos en el sistema político. El cambio se tradujo, en primer lugar, en un doble reconocimiento de los líderes sindicales. Por un lado, un reconocimiento político, visible en el lugar de privilegio que volvieron a ocupar en el movimiento gobernante (...) Por otro lado, un reconocimiento institucional, por el que los líderes sindicales pasaban a la condición de interlocutores válidos del gobierno con iguales títulos que los empresarios y los partidos (...) La contrapartida de tantos halagos no habría de ser menos significativa y ello lo comprobaron bien pronto los jefes sindicales cuando se encontraron sujetos a los compromisos emergentes del Pacto Social. Tenemos, así, que, en segundo lugar, el retorno de Perón al gobierno y la puesta en marcha de la política concertada de ingresos comportaron limitaciones severas para los sindicatos en su calidad de articuladores de las demandas obreras e intermediarios de sus bases frente a los poderes públicos y los empresarios”.

Tomado de Torre, Juan Carlos (2004), *El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976*, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 126.

La presencia y autoridad de Perón no pudo evitar que el Pacto Social se desvirtuara en un contexto de crisis mundial y aumento de la puja distributiva entre patrones y trabajadores. En su último discurso público, el 12 de junio de 1974, el presidente denunció el incumplimiento de las partes que habían firmado el acuerdo y amenazó con renunciar. Unas

semanas después, el 1º de julio de 1974, Perón murió y sin su presencia el Pacto fue desarmado por sus sucesores.

La ruptura con la izquierda peronista

Las características del Pacto Social, la alianza de Perón con el sindicalismo tradicional y, en definitiva, los desacuerdos ideológicos y de estrategia política provocaron el distanciamiento entre Perón y la izquierda del movimiento. Ese distanciamiento se aceleró tras el asesinato de Rucci y quedó reflejado en un documento partidario –difundido en octubre de 1973– que señalaba a los “grupos marxistas, terroristas y subversivos” como enemigos del peronismo. El propio Perón convalidó esa línea argumental instando a separar del justicialismo a quienes consideraba “infiltrados”, al tiempo que ratificaba al sindicalismo tradicional como la “columna vertebral” del movimiento. Estas declaraciones enmarcaron el alejamiento de los espacios estatales de figuras relacionadas con la izquierda peronista, como ya había sucedido unos meses antes con la renuncia de los ministros Esteban Righi y Juan Carlos Puig, y como sucedió en octubre de 1973 con Rodolfo Puiggrós –un prestigioso intelectual y militante de izquierda– que tuvo que abandonar su cargo como rector interventor de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Asimismo, en los meses finales de 1973, se aprobó una Ley de Prescindibilidad para la administración pública que facilitaba el despido de personal estatal a criterio de las autoridades de cada dependencia y que fue usada para separar empleados estatales con militancia de izquierda.

En ese clima político, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asaltó –en enero de 1974– una dependencia militar en Azul, provincia de Buenos Aires. La situación apresuró, a instancias de Perón, el debate legislativo y la aprobación de reformas legales que endurecieron las penas contra las acciones consideradas “subversivas”, agravando el conflicto entre el presidente y la izquierda del movimiento. Esto quedó de manifiesto

cuando ocho diputados alineados con la Juventud Peronista se negaron a votar aquellas reformas alegando su carácter represivo y la inclusión de figuras jurídicas que posibilitaban la persecución penal de la izquierda, incluyendo a quienes no adherían a la lucha armada. Los legisladores fueron obligados a renunciar a sus bancas y expulsados del partido. En ese marco, Perón reincorporó a la Policía Federal a los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride: el primero tenía una sólida formación en la metodología represiva de la doctrina contrainsurgente francesa y ambos habían tenido un rol protagónico en la represión política anterior a 1973. En la nueva etapa terminaron ocupando los cargos máximos de aquella fuerza policial.

La marginación política alcanzó a gobernadores provinciales que tenían relaciones con la izquierda del peronismo y que además estaban en conflicto con sectores del sindicalismo tradicional. El asalto de Azul fue usado por el gobierno nacional para obtener la renuncia de Oscar Bidegain, gobernador de Buenos Aires cercano a la Tendencia Revolucionaria, acusado de incapacidad y tolerancia frente a la acción del ERP. Bidegain fue reemplazado por Victorio Calabro, su vicegobernador, que provenía de las filas del sindicalismo tradicional. En marzo de 1974, luego de un golpe de estado protagonizado por la policía provincial, el gobierno nacional avaló el desplazamiento del gobernador cordobés, Ricardo Obregón Cano, y del vicegobernador, Atilio López, disponiendo la intervención federal de la provincia. Además fueron desplazados –y sus provincias intervenidas– el gobernador Antenor Gauna en Formosa (noviembre de 1973) y Alberto Martínez Baca en Mendoza (junio de 1974).

Las universidades nacionales también fueron el blanco de la estrategia destinada a marginar a los sectores de izquierda (peronista y no peronista) de los ámbitos estatales. A la ya mencionada renuncia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Puiggrós, le siguió –en marzo

de 1974— la sanción de una nueva Ley Universitaria que preveía la prohibición del “proselitismo político partidario” en las casas de estudios superiores. Esta ley fue usada, luego de la muerte de Perón, para intervenir universidades, desplazar rectores con posiciones progresistas o de izquierda y disolver centros de estudiantes. Asimismo, se censuraron una gran cantidad de libros, se allanaron librerías e imprentas y se clausuraron — entre marzo y abril de 1974— diarios de izquierda, alegando incitación a la “violencia” y a la “subversión”.

Todas estas acciones confluyeron con la activación de grupos paraestatales de derecha que ejercieron una violencia ilegal contra militantes y simpatizantes de izquierda. En marzo y abril de 1974 se produjo un especial incremento de este tipo de acciones, aunque la mayor escalada se dio luego de la muerte de Perón. Estos grupos realizaban intimidaciones, atentados y asesinatos que se descargaban principalmente sobre delegados sindicales, cuadros políticos y estudiantiles, intelectuales, artistas, periodistas y abogados de izquierda. La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) fue la organización paraestatal más conocida: su funcionamiento fue coordinado desde las dependencias del Ministerio de Bienestar Social y entre sus responsables fueron señalados el propio ministro José López Rega, así como los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, los dos jefes policiales reincorporados en 1974 por Perón. Las “patotas” de esta organización estaban integradas, entre otros, por personal de origen policial y militar y por miembros de agrupaciones políticas y sindicales de la derecha peronista. La Triple A empezó a hacerse conocida a partir de noviembre de 1973 y convivió con otros grupos de la derecha justicialista atravesados por el mismo tipo de objetivos políticos y con relaciones policiales o sindicales que les permitían llevar a cabo similares acciones de violencia ilegal (como la Concentración Nacional Universitaria, el Comando de Organización, la Juventud Sindical Peronista y la Juventud Peronista de la República Argentina).



La izquierda peronista abandona el acto del 1º de mayo de 1974 y la Plaza de Mayo queda semivacía.

Fuente: Archivo General de la Nación.

El 1º de mayo de 1974, bajo el influjo del conflictivo clima político descrito, Perón encabezó el acto por el día del trabajador desde los balcones de la Casa de Gobierno. La Plaza de Mayo quedó sintomáticamente dividida en dos partes: una ocupada por el sindicalismo tradicional y otra por los sectores juveniles de la izquierda peronista, quienes entonaban cánticos críticos contra miembros del gobierno nacional. En este clima, Perón brindó un discurso en el que insultó a los manifestantes de la izquierda, calificándolos como “idiotas útiles” y “mercenarios al servicio del extranjero”, y reforzó su alianza con el sindicalismo tradicional al afirmar que “pese a estos estúpidos que gritan, durante 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido incólumes, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que trabajaron durante 20 años”. La izquierda abandonó la plaza antes de que Perón

terminara de hablar. Tres semanas después, el 24 de mayo, la rama juvenil fue excluida del justicialismo y la Juventud Peronista y Montoneros expresaron públicamente su total desacuerdo con el Pacto Social. A esa altura, la ruptura entre el presidente y gran parte de la izquierda del movimiento parecía no tener vuelta atrás, y luego de su muerte –ocurrida algunas semanas después– el conflicto político en el interior del peronismo se agravó mucho más.

III. La soledad de Isabel: el fin del acuerdo social y la escalada represiva

Una alianza para desarmar el Pacto Social

Perón murió el 1º de julio de 1974 e Isabel se hizo cargo de la presidencia cuando se estaba desintegrando el Pacto Social y mientras se agravaban los conflictos en el interior del peronismo. En la nueva etapa la derecha peronista adquirió mayor protagonismo en el gobierno y en la CGT: en el primer caso con la asunción del ministro López Rega como Secretario General de la Presidencia y, en el segundo, con el desembarco en la conducción de la central obrera de dirigentes vinculados a las 62 Organizaciones que respondían a Lorenzo Miguel.

Isabel continuó –durante la primera parte de su mandato– con la alianza entre el gobierno y el sindicalismo promovida por Perón, pero en la nueva coyuntura no se hizo para sostener el Pacto Social sino para desmontarlo. Los jefes sindicales veían en ese acuerdo una medida que los obligaba a aceptar un congelamiento salarial que les quitaba legitimidad frente a sus representados, por lo que estaban dispuestos a lograr el desplazamiento de su principal sostén: el ministro Gelbard. Asimismo, el entorno de Isabel y el sindicalismo tradicional objetaban en el ministro sus orígenes ajenos al peronismo y su relación con el Partido Comunista. En ese contexto, Gelbard intentó aprobar el anteproyecto de Ley Agraria que, como se explicó, estaba orientado a presionar a los terratenientes

para que aumentaran la producción rural, incluyendo la posibilidad de expropiar las tierras improductivas y el fomento de formas cooperativas de producción. Pero el propósito del ministro no se pudo concretar porque fue duramente atacado –tal como se esperaba– por la Sociedad Rural Argentina y los terratenientes más poderosos, quienes tuvieron en esta oportunidad un aliado inesperado: la cúpula de la CGT que le quitó su apoyo a la iniciativa, imposibilitando su tratamiento legislativo.



Isabel junto a José López Rega.

Fuente: Archivo General de la Nación.

Con Perón muerto y sin apoyos sustanciales, Gelbard renunció en octubre de 1974 y fue reemplazado por Alfredo Gómez Morales, un hombre que había conducido la economía durante el segundo gobierno de Perón. El Pacto Social empezó a desmontarse y los jefes sindicales quedaron bien posicionados para conseguir nuevos aumentos salariales. Asimismo, la renovada alianza con el gobierno le permitió a la CGT mostrar un logro que benefició a los trabajadores: la promulgación, en septiembre de 1974, de una nueva Ley de Contratos de Trabajo que dificultaba los despidos de los empleados del sector privado en un contexto de deterioro económico.

La alianza entre el gobierno de Isabel y el sindicalismo tradicional se vio reforzada por la aversión que ambos tenían hacia el sindicalismo combativo. En su conflicto con este último, el poder de la CGT se fortaleció con la sanción –en septiembre de 1974– de la llamada Ley de Seguridad, que fue promovida por el gobierno con la excusa de endurecer la represión de las organizaciones guerrilleras. La ley castigaba con prisión a quienes protagonizaran conflictos laborales declarados ilegales y prohibía las ocupaciones de fábricas, encuadrando estas acciones bajo el rótulo de “subversivas”. La posterior declaración del estado de sitio, en noviembre de 1974, también reforzó la persecución contra los sindicatos combativos. Ambas medidas se desplegaron en paralelo a una escalada en la represión ilegal que, de la mano de amenazas y atentados realizados por grupos paraestatales, sembró el terror entre los trabajadores más movilizados. Muchos de los referentes sindicales combativos fueron desplazados de sus cargos y perseguidos por la policía durante los primeros meses del gobierno de Isabel: así sucedió con Raimundo Ongaro (gráficos bonaerenses), René Salamanca (SMATA Córdoba) y Agustín Tosco (Luz y Fuerza Córdoba). El clima de persecución permitió que el sindicalismo tradicional terminara centralizando bajo su dirección algunas conducciones gremiales hasta entonces díscolas.

La represión legal y la violencia paraestatal provocaron un descenso en la cantidad de conflictos laborales luego de noviembre de 1974. El ausentismo (gracias a la protección que brindaba la nueva Ley de Contratos de Trabajo) se transformó, para muchos trabajadores, en una forma de resistencia frente a la prohibición de otras formas de protesta. Aun así, y pese al duro contexto represivo, se produjeron algunos conflictos sindicales importantes. En la planta de Acindar de Villa Constitución se inició nuevamente –en marzo de 1975– una larga huelga y ocupación de la fábrica liderada por el sindicalismo “clasista” que conducía la seccional local de la UOM (en disidencia con el sindicato nacional de Lorenzo Miguel). El conflicto fue calificado por el gobierno como una “operación subversiva terrorista” y reprimido fuertemente –con el apoyo de la patronal– usando la Ley de Seguridad y apelando a detenciones masivas. Durante el resto del año se siguió aplicando ese tipo de legislación contra los trabajadores y delegados gremiales combativos de esa y de otras fábricas del país, quienes además fueron el blanco de la violencia paraestatal. La persecución contó, en algunos casos, con la colaboración de los patrones, que confeccionaban “listas negras” con los nombres de los empleados menos dóciles, y de sindicalistas tradicionales, que se aliaban a la patronal para perseguir a los delegados combativos no alineados con el sindicato nacional.

El Rodrigazo y la pulseada con los jefes sindicales

En los primeros meses del gobierno de Isabel se fue agravando el panorama económico. La crisis mundial provocó el empeoramiento en la situación de la balanza comercial argentina debido a la caída de los precios de los productos exportables, la aplicación de políticas proteccionistas en los países europeos y el incremento de los precios de las importaciones. El ministro Gómez Morales intentó atraer inversiones extranjeras con escaso éxito: los capitales foráneos se oponían, entre otras cuestiones, a

las regulaciones impuestas sobre las firmas transnacionales y a las medidas económicas nacionalistas que se tomaron en octubre de 1974. Entre estas medidas se destacaron los anuncios de nacionalización de cinco bancos de capital extranjero y de las estaciones de servicio de Esso y Shell, así como la anulación de los contratos telefónicos firmados con Siemens e ITT.

Los grandes empresarios disminuyeron, durante el año 1974, las inversiones necesarias para atender la demanda de productos del mercado interno, al tiempo que continuaron violando los acuerdos de precios y acudiendo al “mercado negro” para vender parte de su producción. Ese comportamiento ayudó a que la economía entrara en recesión –con altos niveles de inflación– en el año 1975. Los capitalistas estaban disconformes con las regulaciones del gobierno y, en particular, con aquellas acciones tomadas a favor de los trabajadores como, por ejemplo, la nueva Ley de Contratos de Trabajo, los controles de precios y las recomposiciones salariales. Con respecto a este último punto, la renuncia de Gelbard abrió el camino para que los jefes sindicales obtuvieran aumentos de salarios en noviembre de 1974 y en marzo de 1975, desmontando en la práctica el espíritu del Pacto Social que aún estaba vigente. Asimismo, en mayo de 1975 se concluyeron las negociaciones paritarias planificadas dos años atrás (al firmarse el acuerdo social), y todo parecía indicar que los jefes sindicales conseguirían buenos incrementos salariales para sus representados.

Sin embargo, el 2 de junio de 1975 el entorno de López Rega se hizo cargo del ministerio de Economía con el nombramiento de Celestino Rodrigo al frente de esa repartición. El nuevo ministro intentó llevar a cabo un drástico giro en la política económica y salarial y sus primeras medidas generaron una conmoción pública por las consecuencias sociales y políticas que implicaban: dispuso una devaluación del peso de entre el 100% y el 160%, un incremento en las tarifas de los servicios públicos que en algunos casos superó el 100%, una suba de los combustibles del

180 % y la autorización de sustanciales aumentos en los precios de los alimentos.



Los obreros de Córdoba marchan contra las medidas del ministro Celestino Rodrigo.

Fuente: Archivo General de la Nación.

Estas disposiciones eran parte de un plan que pretendía encontrar una “salida” a los problemas económicos realizando una fenomenal distribución de la riqueza a favor de ciertos sectores del empresariado, perjudicando de manera inmediata a gran parte de la población. Sus objetivos eran, por un lado, incentivar las inversiones privadas y seducir a los capitalistas a través del descongelamiento de los precios y la baja de los salarios reales. Junto a esto se esperaba promover la producción agropecuaria y aumentar el ingreso de divisas llevando a cabo una gran devaluación que mejorara los ingresos inmediatos de los exportadores. Se

pretendía, asimismo, disminuir el déficit fiscal incrementando los precios de los bienes y tarifas de servicios públicos manejados por el Estado. Todas estas medidas, que implicaban balancear la puja distributiva en contra de los asalariados, debían aplicarse de golpe para tomar por sorpresa a los sindicatos.

El Rodrigazo –tal como se conocieron las acciones del nuevo ministro– paralizó las negociaciones salariales previas, alimentó el clima de protestas y el malestar entre los trabajadores y abrió una pulseada entre el gobierno y los jefes sindicales para definir el monto de los salarios. A finales de junio de 1975, el gobierno otorgó por decreto un aumento de sueldos de tan solo el 50% inicial. La decisión unilateral, que rebajaba notoriamente los salarios reales, provocó la paralización espontánea de las labores en muchos lugares de trabajo, la renuncia de Ricardo Otero (el ministro de Trabajo proveniente de las filas sindicales) y la convocatoria de la CGT –ante la fuerte presión de las bases– a un paro general por 48 horas que se realizó el 7 y 8 de julio. Esta era la primera medida de ese tipo llevada a cabo por la central obrera frente a un gobierno peronista. Esa pulseada fue ganada por los jefes sindicales: el gobierno terminó aprobando acuerdos salariales que recompusieron los ingresos de los trabajadores y renunciaron los ministros López Rega (que además se fue del país) y Rodrigo. La abrupta devaluación, los tarifazos y la consecuyente aceleración de la puja distributiva provocaron que la inflación aumentara el 35% en el mes de julio, abriéndose un ciclo hiperinflacionario en la Argentina.

El plan de Rodrigo y López Rega no pudo prosperar debido al estado de movilización que había en los lugares de trabajo y a la reacción de los jefes sindicales. Los sectores dominantes del empresariado tomaron nota de eso y probablemente concluyeron que para realizar un ajuste de ese tipo no bastaba con la persecución que el gobierno de Isabel estaba realizando contra los trabajadores más conflictivos: también había que desarticular el poder de negociación del sindicalismo clásico peronista. La dictadura

que se inició pocos meses después –fundada en una alianza social entre militares y el gran empresariado– pudo llevar a cabo, finalmente, varios de los objetivos no alcanzados por Rodrigo, incluyendo una fenomenal rebaja de los salarios reales. Para lograrlo se incrementaron descomunadamente las acciones represivas contra los trabajadores y los delegados gremiales más combativos, y también se incluyó, como blanco de la persecución, al sindicalismo tradicional.

El poder sindical frente al ajuste

El economista e historiador Mario Rapoport describe al Rodrigazo como “un ajuste significativo y un verdadero *shock* económico que quedó grabado en la conciencia de los argentinos. Pero, aunque afectó notablemente a los asalariados, en los meses posteriores al *shock* la capacidad de negociación de los sindicatos logró atenuar en gran parte sus efectos y su impacto terminó siendo relativamente compensado desde el punto de vista de la carrera precios-salarios. El crecimiento del costo de vida entre junio de 1975 y enero de 1976 fue de un 257% mientras que los salarios subieron un 290%...”.

Tomado de Mario Rapoport: *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*, Buenos Aires, Booket, 2010, pp. 308-309

La escalada represiva y la radicalización de la violencia política

Con la llegada de Isabel a la presidencia –y el mayor protagonismo de López Rega y el peronismo de derecha– se incrementaron las amenazas, atentados y asesinatos contra militantes de izquierda realizados por grupos paraestatales. Los asesinatos más notorios adjudicados a la Triple A fueron, entre julio y septiembre de 1974, el de Rodolfo Ortega Peña (diputado de la izquierda peronista), los de Silvio Frondizi y Alfredo Curutchet (abogados defensores de presos políticos) y el de Atilio López (ex vicegobernador cordobés destituido en los meses previos y referente

del sindicalismo combativo). Estos asesinatos fueron precedidos por otros también atribuidos a la Triple A, como el del Padre Carlos Mugica, un “cura villero” y tercermundista fusilado en mayo de 1974. En esta etapa, además, se mostraron activos grupos paramilitares, vinculados con sectores del Ejército, que ejercieron este tipo de violencia ilegal en provincias como Córdoba (el Comando Libertadores de América) o Tucumán (el Comando Nacionalista del Norte).

Esta escalada represiva se articuló con otras medidas destinadas a continuar con la expulsión de los cargos estatales de quienes estaban vinculados con la izquierda peronista. Así sucedió –durante la segunda mitad de 1974– con los gobernadores Jorge Cepernic de Santa Cruz y Miguel Ragone de Salta, que fueron desplazados y sus provincias intervenidas por el gobierno nacional. Ragone fue secuestrado unos días antes del golpe de Estado de 1976 y aún se encuentra desaparecido. Algo parecido sucedió en el ámbito universitario en donde, desde septiembre de 1974, se intervinieron varias universidades nacionales, se clausuraron centros de estudiantes y se nombraron rectores de derecha, como sucedió en la Universidad de Buenos Aires con el nombramiento de Alberto Ottalagano. El gobierno de Isabel continuó, asimismo, con acciones de censura que terminaron en la clausura de publicaciones periódicas de izquierda.

En ese marco de persecución política y violencia paraestatal, el jefe de Montoneros, Mario Firmenich, anunció –en septiembre de 1974– que se habían acabado las formas legales de lucha política y que era necesario volver a la clandestinidad y a la lucha armada, algo que en la práctica se estaba haciendo desde antes. En la etapa abierta con la muerte de Perón, las operaciones más resonantes de Montoneros apuntaron, principalmente, contra objetivos empresariales y represivos. La organización concretó –en septiembre de 1974– el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, dos de los empresarios más importantes del país, y se les adjudicó el asesinato

del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal señalado como uno de los responsables de la Triple A, ocurrido en noviembre de 1974. Montoneros también participó –junto a otros integrantes de la Tendencia Revolucionaria, gobernadores peronistas destituidos y sindicalistas combativos– de la fundación del Partido Peronista Auténtico, ocurrida en febrero de 1975, aunque con escaso éxito al presentarse en elecciones en la provincia de Misiones. Por su parte, durante estos meses el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) continuó con las acciones armadas centradas en objetivos militares y organizó un foco de guerrilla rural en el sudoeste tucumano, la “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez”, cuya circulación se hizo pública a partir de mayo de 1974.

Con el argumento de “reprimir la actividad terrorista y subversiva”, el gobierno de Isabel promulgó la llamada Ley de Seguridad –aprobada por el Congreso a finales de septiembre de 1974– que establecía la prisión para quien “intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden constitucional y la paz social de la Nación”. Los delitos así definidos eran establecidos de una manera amplia, de modo que el gobierno la usó contra un extendido rango de actores políticos tildados como “subversivos”. La ley fue invocada para realizar detenciones masivas, clausurar medios de prensa, poner fin a conflictos laborales y perseguir a militantes de la izquierda no armada. Asimismo, desde el 6 de noviembre de 1974 se decretó el estado de sitio en todo el país (recién fue levantado en el año 1983), dejando en suspenso las garantías constitucionales y produciendo una gran cantidad de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Con estas dos normativas se anularon los principios básicos del Estado de derecho en la Argentina.

Isabel y su entorno abandonaron –unos meses después– la concepción de Perón que estipulaba el uso de fuerzas policiales para perseguir a las organizaciones armadas de izquierda y, en febrero de 1975, permitieron a los militares llevar a cabo la represión del pequeño foco guerrillero

establecido por el ERP en el sudoeste tucumano. Con esa finalidad se firmó un decreto autorizando al Ejército a “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” en esa zona, desplegando miles de uniformados y poniendo bajo su disposición al personal policial nacional y provincial. El “Operativo Independencia” –como se conocieron las operaciones en suelo tucumano– fue comandado por el general Adel Vilas (hasta diciembre de 1975) y luego por el general Antonio Domingo Bussi, y fue el resultado de una serie de presiones militares iniciadas en 1974, cuando los uniformados empezaron a reclamar al gobierno la participación en la represión interna en el marco de la radicalización de la violencia política y del incremento de la conflictividad social.

El operativo tuvo una dimensión pública centrada en algunos “enfrentamientos” entre militares y guerrilleros y en masivas operaciones de control poblacional, al tiempo que se realizaron tareas de ayuda social y acciones de propaganda orientadas a legitimar el despliegue castrense y ganar el apoyo de la población. Junto a estas tareas se llevó a cabo un conjunto planificado y sistemático de acciones ilegales y clandestinas –eje central de aquel operativo– que incluyó el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de los cuerpos de quienes eran considerados “subversivos”, así como el montaje de los primeros centros clandestinos de detención del país en los que se produjeron esos delitos. Estos métodos se correspondían con los aprendidos por los uniformados durante los veinte años previos bajo el influjo de la doctrina contrainsurgente francesa y la Doctrina de la Seguridad Nacional norteamericana. Los guerrilleros no fueron los únicos considerados “subversivos”, también se clasificó de esa manera –sufriendo en carne propia aquella represión– a dirigentes sindicales, trabajadores azucareros, militantes partidarios, docentes, estudiantes, abogados, periodistas y otros actores que formaban parte de la amplia tradición de conflictividad sindical y política –centrada en el mundo obrero azucarero y en el universitario– existente por entonces

en Tucumán. El “aniquilamiento” de esa tradición –reflejada en grandes huelgas, rebeliones estudiantiles y manifestaciones de protesta– y el disciplinamiento de la población fueron dos objetivos fundamentales de aquel despliegue militar realizado en suelo tucumano.

La “Escuelita” de Famaillá

El Informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), señala que: “A la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la ‘institución’ Centro Clandestino de Detención, como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina. La ‘Escuelita’ de Famaillá fue el primero de estos lugares de tormento y exterminio, cuyo funcionamiento pudo constatar la CONADEP. Se trataba de una pequeña escuela de campaña, que en 1975 se encontraba en construcción (...) En Tucumán, a partir de la experiencia de ‘La Escuelita’ de Famaillá, se establecieron por los menos otros diez Centros Clandestinos de Detención”.

De acuerdo con el testimonio del ex gendarme Antonio Cruz, transcrito en el informe citado, los secuestrados eran “traídos a la ‘Escuelita’ en coches particulares, ya sea dentro del baúl, en el asiento trasero o recostados sobre el piso. De la misma forma eran sacados, y por lo poco que se sabía, cuando ello ocurría, la mayoría iba a ser ejecutados. Si algún detenido moría, se esperaba la llegada de la noche y luego de envolverlo en una manta del Ejército se lo introducía en uno de los coches particulares que partía con rumbo desconocido”.

Extractos tomados de CONADEP (1985), *Nunca Más* [1984], Buenos Aires, Eudeba, pp. 213-217.

El incremento de la represión policial, el accionar de bandas paraestatales y la intervención castrense en Tucumán produjeron una ampliación

exponencial del escenario de violencia estatal (legal e ilegal) durante el último año del gobierno peronista. A lo largo de 1975 se multiplicaron los secuestros, asesinatos y las denuncias por torturas y desapariciones de personas, así como muchos argentinos debieron exiliarse y se hicieron públicas denuncias de abusos y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en reparticiones policiales sobre militantes políticos y sindicales de izquierda. En la segunda mitad de 1975, con un gobierno atravesado por una grave crisis política y económica, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a hacerse cargo de la represión política en todo el país, y los jefes militares usaron ese protagonismo para terminar de planificar un golpe de Estado que les posibilitaría profundizar aún más este tipo de tareas.

El debilitamiento de Isabel

El impacto del Rodrigazo, el posterior triunfo sindical frente al gobierno, la aceleración de la crisis económica, el clima de violencia política creciente y la renuncia de López Rega provocaron una acelerada licuación del poder político de Isabel. En los meses siguientes se fortalecieron, dentro del peronismo partidario y sindical, las posiciones de los sectores “antiverticalistas” —que buscaban el desplazamiento de la presidenta y el retorno a las banderas clásicas del movimiento— frente a los “verticalistas”, que mantenían su apoyo a Isabel. Los espacios de poder que quedaron vacantes con el alejamiento de López Rega fueron rápidamente cubiertos por el peronismo partidario y el sindicalismo tradicional: al ministro Rodrigo lo reemplazó Pedro Bonani, un hombre del peronismo clásico, y Raúl Lastiri —yerno de López Rega— fue desplazado de la presidencia de la Cámara de Diputados. A esta jugada, que canceló la posibilidad de que se repitiera su acceso a la presidencia interina del país, la precedió la elección del senador justicialista Ítalo Luder (un dirigente con buena llegada a políticos opositores, militares y sindicalistas) como presidente

de la Cámara de Senadores, quedando primero en la línea de sucesión presidencial ante un eventual alejamiento de Isabel.

La debilidad política de la presidenta la llevó a profundizar la búsqueda de apoyo militar, algo que venía haciendo desde febrero de 1975 al autorizar las acciones represivas en Tucumán, o al nombrar —en mayo de ese año— al general Alberto Numa Laplane como jefe del Ejército. Este militar había adoptado una línea doctrinaria —el “profesionalismo integrado”— que aseguraba el compromiso castrense con el gobierno, orientación que Isabel intentó ahondar en agosto de 1975 con el nombramiento del coronel Vicente Damasco como ministro del Interior. Esa búsqueda terminó en un fracaso debido a que, por entonces, una parte de los jefes militares se encontraban planificando un nuevo golpe de Estado junto a representantes del gran empresariado. Los jefes castrenses obtuvieron —en el mismo mes de agosto— el reemplazo de Numa Laplane por el general Jorge Rafael Videla, un militar que se ubicaba en la línea doctrinaria del “profesionalismo prescindente” y que postulaba la imposibilidad de cualquier apoyo hacia el gobierno. Los militares terminaron sellando, con esa movida, la debilidad política de Isabel: la presidenta se tomó una licencia médica a mediados de septiembre y se alejó temporariamente de su cargo, reclusándose en las sierras cordobesas en compañía de las esposas de los tres jefes de las Fuerzas Armadas. Esta escena era representativa del poder político que los militares habían acumulado desde febrero de 1975 y que ahora ponían en juego aprovechando la crisis y debilidad del gobierno constitucional. Con la licencia de Isabel, la presidencia fue ocupada interinamente —entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975— por el senador Luder.

La crisis política y la gravedad de la situación económica iban de la mano: Bonani asumió en el ministerio de Economía en un delicado contexto de recesión, hiperinflación y aumento del desempleo, y duró 21 días en su cargo. El nuevo funcionario intentó retomar, de manera

infructuosa, un acuerdo social entre la CGT, que pedía un “retorno al verdadero peronismo”, y un empresariado que se negaba a avalar medidas redistributivas alegando que se encontraban al borde de la bancarrota. Tras su renuncia, el sindicalismo dio muestras del poder acumulado en la nueva coyuntura: Antonio Cafiero –un economista asesor de la CGT– asumió como ministro de Economía, y Carlos Ruckauf –un joven gremialista relacionado con Lorenzo Miguel– ocupó el ministerio de Trabajo. Cafiero y sus colaboradores tomaron –a fines de octubre– dos medidas para intentar aplacar el aumento del desempleo, frenar la hiperinflación y controlar la puja distributiva entre los trabajadores y los patrones: se prohibieron los despidos (pero también las huelgas) por el lapso de 180 días y se intentó reeditar el Pacto Social para controlar los precios y los salarios (que se indexarían cada tres meses).

Sin embargo, los jefes sindicales –presionados por las bases– consiguieron nuevos aumentos salariales antes de lo estipulado y los empresarios continuaron remarcando los precios de sus productos. Estos últimos –debido a la dinámica de la crisis y a su decepción frente al fallido intento del Rodrigazo de acotar el poder sindical– disminuyeron aún más los niveles de inversión y crearon, por aquellos meses, la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias (APEGE). Esta organización estuvo destinada a presionar a la nueva conducción económica con el fin de lograr privilegios sectoriales y a desafiar el poder de negociación que había adquirido el sindicalismo. Entre sus integrantes se encontraban los representantes del capitalismo agropecuario argentino –como la Sociedad Rural Argentina– quienes no dudaron en realizar dos “paros” ganaderos en septiembre y en noviembre de 1975, creando un clima de malestar social al provocar un desabastecimiento de carnes.

Esta etapa también estuvo caracterizada por la autorización dada a los militares para que ampliaran a todo el país el tipo de acciones represivas desplegadas en Tucumán. La decisión fue tomada luego de que el 5 de octubre de 1975 se produjera un asalto organizado por Montoneros contra

un regimiento ubicado en Formosa, ocasión usada por el general Videla para realizar declaraciones golpistas y presionar al gobierno de Luder para que adoptara un conjunto de reglamentaciones represivas extremas. El presidente interino y su gabinete firmaron, por entonces, una serie de decretos en los que se autorizó a las Fuerzas Armadas a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en el conjunto del país, poniendo a disposición militar todas las fuerzas policiales e integrando a los jefes castrenses –a través de un Consejo de Seguridad Interna y otro de Defensa– en las decisiones de represión política tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Con esta medida se profundizó mucho más la capacidad de decisión y presión de los uniformados en el sistema político y en el entramado estatal. Las nuevas disposiciones fueron usadas prontamente, en noviembre de 1975, cuando los militares reprimieron un conflicto obrero que se estaba produciendo en Sierra Grande (Río Negro), en la mina de hierro de la empresa HIPASAM. Los obreros combativos eran considerados –en la doctrina castrense de entonces– “subversivos” que ponían en riesgo la Seguridad Nacional y se convirtieron en un blanco privilegiado en el nuevo y extendido marco represivo, tal como venía sucediendo en Tucumán desde principios de 1975.

Isabel reasumió la presidencia a mediados de octubre y lo hizo sin contar con una alianza política y social fuerte que pudiera sustentar su poder en el contexto de una profunda crisis política. Los peronistas que le seguían siendo fieles eran cada vez menos, principalmente en el Congreso, en donde el bloque “antiverticalista” terminó quitándole las mayorías necesarias para legislar, y una buena parte de los jefes sindicales –pese a los intentos de Lorenzo Miguel de evitarlo– terminaron oponiéndose a su figura, que había quedado pegada a la memoria reciente del Rodrigazo. El panorama de rechazo a la presidenta era similar entre los militares y las clases patronales y se completó con la circulación de insistentes rumores golpistas que Isabel –y quienes aún la apoyaban– intentaron desactivar al aceptar el adelantamiento de las elecciones presidenciales para octubre de 1976.

A pesar de esa estrategia, en diciembre se produjo un fallido intento golpista por parte de un grupo de la Fuerza Aérea dirigido por el brigadier Orlando Capellini. El resultado del levantamiento fue el desplazamiento del comandante de esa fuerza, el brigadier Héctor Fautario, el único de los tres jefes de las Fuerzas Armadas que aún se resistía al proyecto golpista que estaban planificando los jefes del Ejército (Videla) y de la Armada (Emilio Massera). Su sucesor, el brigadier Orlando Agosti, terminará plegándose a la conspiración y protagonizando el golpe de marzo de 1976 junto a los otros dos comandantes. Cuando finalizó aquella rebelión, al día siguiente, el ERP –que ya había sido desarticulado en la provincia de Tucumán– intentó copar un batallón del Ejército ubicado en Monte Chingolo, en el conurbano bonaerense. Una gran parte de los guerrilleros terminaron masacrados y la capacidad de esta organización quedó prácticamente desarticulada desde entonces, aunque la acción fue usada por el general Videla para pronunciar un discurso de Nochebuena en el que legitimó –desde Tucumán– el rol represivo de los militares y dio un ultimátum político al gobierno de Isabel.

Durante las semanas previas al golpe de Estado, la presidenta y su entorno intentaron ganarse el favor de las cúpulas militares y los sectores empresariales más poderosos rompiendo con la coalición de sindicalistas y sectores del peronismo partidario que aún integraban su gobierno. Esto implicó el nombramiento de nuevos funcionarios, como sucedió en el ministerio de Economía con la asunción de Emilio Mondelli, que preanunció un giro económico parecido al que había intentado realizar Celestino Rodrigo. El nuevo ministro justificó la ejecución de medidas antipopulares –en medio de una crisis económica agravada– en la necesidad de lograr inversiones y seducir a los grandes capitalistas. Sin embargo, estos últimos no respondieron de manera favorable a sus intentos de seducción y la APEGE llevó adelante una huelga patronal que paralizó el país el 16 de febrero de 1976. Los grandes empresarios desconfiaban de un gobierno que en junio de 1975 no había podido llevar

a cabo el ajuste económico y social que anhelaban, y a esa altura habían puesto sus esperanzas en un golpe de Estado que muchos preanunciaban sin pruritos. Esos preanuncios no eran solo una esperanza: por entonces los jefes militares estaban contando los días que faltaban para la toma del poder, y los intentos de Isabel de integrarlos aún más en su gobierno quedaron en la nada.

La soledad política de la presidenta era contundente al momento del golpe de Estado. El agravamiento de la crisis económica y social, los vanos intentos de atraer a la cúpula empresarial y militar y el alejamiento de sectores del peronismo y del sindicalismo que podrían haberla apoyado dan cuenta de este escenario. Es sintomático de esa situación que el Secretario General de la CGT, Casildo Herrera, haya viajado a Montevideo antes del golpe y declarado frente al periodismo: “Yo me borré”. En los primeros minutos del 24 marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón partió en el helicóptero presidencial desde la Casa Rosada, pero en vez de dirigirse a la residencia de Olivos fue conducida hacia el Aeroparque de Buenos Aires, en donde las Fuerzas Armadas la secuestraron y pusieron fin a su gobierno.

Los militares, con el apoyo de sectores civiles que incluían a los grandes grupos patronales, depusieron nuevamente a un mandatario constitucional, y lo hicieron a pesar de que faltaban pocos meses para las elecciones presidenciales. En esta oportunidad, como lo habían hecho en 1966, llegaron al poder decididos a terminar con el clima de conflictividad social y política vigente, pero esta vez lo hicieron con un plan represivo inédito por su magnitud –que habían ensayado en los meses previos– y con un proyecto de refundación de la sociedad que incluía barrer con muchas de sus características conformadas en los años treinta y en los tiempos del primer peronismo.

Bibliografía

- Basualdo, Victoria (2006), “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, en *Engranajes*, Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA), núm. 5 (edición especial), marzo.
- CONADEP (1985), *Nunca Más* [1984], Buenos Aires, Eudeba.
- De Riz, Liliana (1981), *Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista*, Buenos Aires, Hyspamérica.
- Feinmann, José Pablo (2012), *Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina* [2011], Buenos Aires, Planeta, tomo II.
- Franco, Marina (2012), *Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Rapoport, Mario (2010), *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*, Buenos Aires, Booket, pp. 271-283.
- Restivo, Néstor y Dellatorre, Raúl (2016), *El Rodrigazo. El lado oscuro del ajuste que cambió la Argentina*, Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Sidicaro, Ricardo (2010), *Los tres peronismos. Estado y poder económico* [2002], Buenos Aires, Siglo XXI.
- Svampa, Maristella (2003), “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”, en Daniel James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, T. IX de *Nueva Historia Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Torre, Juan Carlos (2004), *El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Capítulo 7

La dictadura militar: terrorismo de estado y plan económico neoliberal, 1976-1983

Julián Delgado

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas pusieron fin al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Arguyendo “el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”, una Junta Militar asumió el poder. Estaba integrada por los tres comandantes generales: el almirante Emilio Eduardo Massera (Armada), el brigadier general Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea) y el teniente general Jorge Rafael Videla (Ejército). Este último fue designado además presidente.

Rápidamente, la Junta puso en marcha lo que denominó un “Proceso de Reorganización Nacional”. El mismo tenía dos grandes objetivos, totalmente relacionados entre sí. El primer objetivo era realizar una profunda reestructuración socioeconómica, abandonando las perspectivas industrialistas e intervencionistas que habían predominado desde la crisis de 1930 para adoptar un modelo basado en la apertura de la economía y el achicamiento del Estado. Este nuevo modelo neoliberal, que estaba a tono con las demandas del mercado internacional de la época, generaría inmensos beneficios para las actividades financieras y agropecuarias pero implicaría una aguda crisis de la actividad industrial y, por sobre todas

las cosas, un profundo golpe a las condiciones de vida de los sectores trabajadores.

El segundo objetivo del Proceso de Reorganización Nacional se vinculaba directamente con estas transformaciones que la Junta pretendía llevar adelante: consistía en controlar y silenciar cualquier tipo de oposición a las nuevas medidas económicas, disciplinando a una sociedad que contaba con una fuerte experiencia de movilización sindical y política y no se resignaría a aceptar sin más la redistribución regresiva del ingreso que el nuevo modelo generaría. Con la excusa de la “amenaza subversiva” (es decir, la supuesta idea de que el accionar de las agrupaciones revolucionarias de izquierda constituía un peligro real para la estabilidad de un gobierno constitucional), las Fuerzas Armadas no sólo dieron el golpe de Estado sino que organizaron, a partir de entonces, un Estado clandestino que aplicó un plan sistemático de represión.

El accionar represivo del gobierno militar ha dejado marcas indelebles en la historia argentina: 30 mil desaparecidos, incontables detenidos y torturados, 500 niños y niñas apropiados y miles de testimonios que dan cuenta de la violación de los derechos humanos ocurrida entre 1976 y 1983.

Los derechos humanos constituyen un conjunto de derechos que tienen todas las personas más allá de su situación jurídica, política o personal, porque se consideran inherentes a la condición humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas y firmada entre muchos otros países por Argentina en 1948, establece entre otras cosas el derecho “a la vida y a la libertad”; a no estar “sometido ni a servidumbre”, ni a la “esclavitud” ni “a torturas”; “a la libertad de opinión y de expresión”; “a la educación”; y “al trabajo”. Se sostiene además que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Una de las razones de ser del Estado es proteger los derechos humanos. Cuando un gobierno, que posee el control de la estructura estatal, organiza un ataque generalizado o sistemático contra su propia población civil, los crímenes cometidos son considerados delitos de lesa humanidad.

La denominación *terrorismo de estado* permite dar cuenta de dos aspectos claves de la represión durante el Proceso de Reorganización Nacional. En primer lugar, señala que, lejos de tratarse de meros “excesos” o acciones individuales (tal como muchos de los perpetradores de los crímenes sostienen hasta el día de hoy), los crímenes cometidos durante la dictadura fueron planificados y cometidos haciendo pleno uso de los recursos estatales. En segundo lugar, al subrayar el terror y el miedo que esos crímenes clandestinos infundieron en buena parte de la población (los desaparecidos no estaban “ni vivos ni muertos”, las causas de su ausencia eran inciertas), habilita una reflexión sobre los efectos sociales más amplios y duraderos de la represión. La desmovilización, el individualismo, la desconfianza, el descreimiento y la aceptación del autoritarismo fueron algunos de los valores que el terrorismo de estado promovió. Sin embargo, la relación entre el régimen dictatorial y la sociedad no puede pensarse de una manera lineal. Es cierto que muchos actores sociales estuvieron en desacuerdo con las políticas económicas y/o represivas del gobierno y que, aun en un escenario completamente adverso, buscaron demostrar su descontento y defender otros ideales. Pero es asimismo justo señalar que amplios sectores de la sociedad civil acordaron con el nuevo rumbo adoptado e incluso participaron activamente en su construcción. Las numerosas pruebas que demuestran la responsabilidad de los grandes

empresarios, los funcionarios civiles, los medios de comunicación, el Poder Judicial y la Iglesia Católica en la concreción de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional sugieren la necesidad de considerar el período 1976-1983 como una *dictadura cívico-militar*.

El gobierno de facto inaugurado el 24 de marzo de 1976 se sostendría en el poder hasta el 10 de diciembre de 1983. Hacia comienzos de la década del ochenta, las consecuencias del plan económico neoliberal comenzaron a hacerse evidentes. Además, luego de años de silenciamiento producto de la represión, el clima político comenzó a agitarse: diversas organizaciones sociales y políticas se volvieron más visibles, el movimiento obrero consiguió reordenarse y poco a poco las denuncias locales e internacionales contra el autoritarismo y la represión del gobierno de facto cobraron mayor relevancia pública. A la par, las disputas al interior de la Junta Militar se volvieron cada vez más acentuadas. En 1981, Jorge Rafael Videla fue sucedido en la presidencia por Roberto Eduardo Viola. A fines de ese mismo año, Viola fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. Aprovechando un legítimo reclamo nacional, el nuevo presidente intentó recobrar el apoyo social con la recuperación de las islas Malvinas el 2 de abril de 1982. La rápida derrota en el conflicto bélico que se desató con el Reino Unido desprestigió aún más al gobierno y precipitó la salida de Galtieri y su reemplazo por Reynaldo Bignone. La crisis económica y las presiones políticas terminaron por apresurar la transición a la democracia. El 30 de octubre de 1983 se realizaron elecciones libres y triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Este capítulo se organiza en cinco apartados. En el primero se retoman las causas y se estudian los objetivos del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El segundo aborda el plan económico neoliberal. El tercero se ocupa del plan sistemático represivo llevado adelante por el gobierno. Los dos últimos capítulos se concentran en los procesos sociales y políticos que llevaron al fin de la dictadura y el inicio de la transición democrática.



“¿Dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio?” Las Abuelas de Plaza de Mayo son un símbolo de la denuncia contra los crímenes del terrorismo de estado.

I- El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: causas y objetivos

De la crisis del tercer gobierno peronista al golpe de Estado

Luego de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974, la conflictividad social y política se profundizó. Si bien institucionalmente la presidencia pasó a ser ocupada por la vicepresidenta Isabel Martínez de Perón, ninguna figura o actor político podía contener los enfrentamientos entre los distintos sectores, tanto dentro como fuera del peronismo.

Al mismo tiempo que los grupos de derecha liderados por el influyente Ministro de Bienestar Social José López Rega ganaban espacio en el gobierno, la violencia política se intensificó. La Triple A, la organización armada clandestina dirigida por el propio López Rega, multiplicó su accionar “antisubversivo” utilizando métodos y estrategias represivas que

anticipaban en cierta medida las características del terrorismo de estado. Sus atentados afectaron a los integrantes de las agrupaciones político-militares pero fueron mucho más allá, asesinando y amedrentando a cientos de militantes de izquierda y activistas populares. Los grupos revolucionarios armados, por su parte, volvieron a la clandestinidad (de la que habían salido luego del triunfo de Cámpora) y reforzaron su militarismo en perjuicio de otros tipos de intervención política: realizaron ataques con explosivos, secuestros extorsivos, asesinatos políticos y copamientos de destacamentos militares y policiales.

	Cantidad de hechos armados ocurridos durante el período mayo de 1973/marzo de 1976*
Primer año	1760
Segundo año	2425
Tercer año	4324
Total	8509

* El recuento incluye tanto las acciones represivas clandestinas como las de las organizaciones político-militares. Se basa en la información provista por el diario *La Razón* del 25/5/1973 al 24/03/1976. Fuente: Juan Carlos Marín: *Los hechos armados*, Buenos Aires, Editorial La Rosa Blindada, 2003.

En ese contexto, las Fuerzas Armadas fueron recobrando la legitimidad que parecían haber perdido en los tres primeros años de la década del setenta. Los medios de comunicación y la dirigencia política tradicional alimentaron los discursos sobre el “flagelo de la violencia” (sin mencionar sus causas ni problematizar el apoyo social a esos usos de la fuerza) y volvieron a plantear que la inestabilidad política era la razón de los males económicos. Mientras tanto, los sectores económicos de poder nacionales e internacionales comenzaron nuevamente a mirar con buenos ojos una intervención militar que frenara las demandas sociales y asegurara

sus ganancias. El gobierno, por su parte, tomaba medidas cada vez antipopulares y se desgastaba.

En febrero 1975, la presidenta Martínez de Perón firmó un decreto que autorizaba al Ejército a intervenir en la provincia de Tucumán con el objetivo de “aniquilar el accionar de elementos subversivos”. La decisión era una clara expresión de las principales ideas de la Doctrina de la Seguridad Nacional: las Fuerzas Armadas debían combatir un “enemigo interno” que amenazaba las “fronteras ideológicas”. Sin embargo, el llamado “Operativo Independencia” no sólo destruyó un foco guerrillero que el ERP había instalado en Tucumán utilizando métodos ilegales (como el secuestro de personas, la tortura para obtener información y la instalación de centros clandestinos de detención) sino que ocupó militarmente la provincia sometiendo a toda la población a un nivel inédito de violencia represiva. En octubre de 1975, luego del ataque de la organización Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29, el Ejército fue habilitado a extender su intervención a todo el país.

Aunque “la lucha contra la subversión” continuaría siendo esgrimida como argumento hasta el 24 de marzo de 1976 (e incluso después), para entonces los grupos armados habían perdido prácticamente toda su capacidad militar. En ese sentido, las causas y los objetivos del golpe no deben buscarse tanto allí sino en la capacidad que la clase obrera había demostrado a lo largo de los años para resistir a las políticas económicas que la perjudicaban. Las fuertes movilizaciones desatadas frente al Rodrigazo –el plan de ajuste económico establecido en junio de 1975– fueron determinantes en el apoyo de los grandes grupos económicos al golpe de Estado.



La presidenta Isabel Martínez de Perón reunida con el general Videla y el almirante Massera pocos meses antes del golpe de Estado.

Fuente: Archivo *Clarín*.

Semanas antes del golpe, la mayoría de los diarios y revistas ya referían explícitamente a la inminencia de una nueva intervención militar, que para entonces era vista por una buena parte de la sociedad como un desenlace inevitable. En diciembre de 1975, la presidenta resolvió adelantar las elecciones para octubre del año siguiente, reconociendo la erosión de su autoridad. Pero ya era demasiado tarde. Presentándose a

sí mismas como la representación de la Nación y el único actor capaz de garantizar el orden social, las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 24 de marzo de 1976.



Tapa del diario *Clarín*, 25 de marzo de 1976

Los medios de comunicación no sólo expresan las opiniones de los propios periodistas sino que reproducen, refuerzan y a veces modifican discursos de sectores sociales más amplios. El mismo día del golpe de estado, los diarios saludaron la intervención militar: “Nuevo gobierno” (*Clarín*); “Las Fuerzas Armadas han asumido hoy el ejercicio del poder” (*La Razón*); “Nuevo gobierno. Comienza una etapa decisiva. Expectativas en lo económico” (*La Tarde de Buenos Aires*). Al día siguiente, *Clarín* tituló: “Total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno”.

La Junta Militar y el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional

El 24 de marzo, Isabel Martínez de Perón fue detenida. Una Junta Militar integrada por los comandantes generales de las tres fuerzas se hizo cargo del gobierno. Jorge Rafael Videla, integrante de esa Junta como comandante general del Ejército, fue nombrado presidente.



La primera Junta Militar que asumió el poder el 24 de marzo de 1976.

Para iniciar esta nueva etapa, la Junta Militar buscó ordenar su propio poder a partir de una serie de instrumentos institucionales. Uno de los más importantes fue el “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional”, publicada el mismo día del golpe de Estado. La corrupción y la ineficiencia del tercer gobierno peronista, el supuesto peligro “subversivo” y la falta de “desarrollo económico” eran postuladas allí como las razones que justificaban que una vez más las Fuerzas Armadas interrumpieran el orden constitucional para, paradójicamente, “asegurar” la democracia.

Según la Junta Militar, su gobierno daba inicio a un “Proceso de Reorganización Nacional” que buscaría construir un nuevo orden político, económico y sociocultural. Para ello, se declararon caducos los mandatos de los gobernadores provinciales, se disolvieron el Congreso nacional y las Legislaturas Provinciales, se suspendieron los partidos políticos y la actividad política en general y se prohibió toda actividad gremial. Con el objetivo de aplacar tensiones y evitar la personalización del mando en la figura del presidente, las tres armas buscaron repartirse el poder de forma equilibrada. Sin embargo, al poco tiempo quedó claro que esa organización tripartita no podía contener las disputas internas. Los conflictos entre los representantes de las distintas armas fueron una constante durante todos los años que duró la dictadura y las decisiones del Ejército terminaron por predominar, especialmente a nivel provincial. Además, al interior del nuevo gobierno coexistieron distintas posturas, tanto en cuanto al modelo económico a seguir (“liberales” vs. “nacionalistas”) como en cuanto a los plazos para volver a convocar a elecciones y la relación con las principales fuerzas políticas (“duros” contra “blandos”).

Pero por sobre todas estas diferencias existía en las Fuerzas Armadas una fuerte coincidencia en que la erradicación de “la subversión” y la transformación de la “situación socio-económica” eran las vías para asegurar la “vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”. Visto en una perspectiva de

mediano y largo plazo, el “orden” del que hablaban los militares implicaba una reorganización política e institucional que desactivara la movilización social y desarticulara definitivamente el poder del peronismo. Para lograr esa transformación el Proceso de Reorganización Nacional debería cumplir dos objetivos, íntimamente vinculados entre sí. Por un lado, perseguir y aniquilar a los miles de militantes sociales, sindicales y políticos que discutían y actuaban contra los intereses de los sectores económicos más poderosos. Por el otro, modificar radicalmente el perfil económico del país, dejando de lado las políticas proteccionistas para estrechar los vínculos con el sistema financiero internacional.



El general Augusto Pinochet lideró el golpe de Estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973 y fue presidente de la dictadura militar que gobernó ese país hasta 1990. En la foto, se saluda con el Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger.

Fuente: Wikipedia.

Durante los años setenta, una serie de regímenes dictatoriales alineados con los intereses económicos y los posicionamientos ideológicos de los Estados Unidos asumieron el poder en América Latina. El Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) fue uno de los gobiernos de facto que por entonces también se instauraron en Bolivia (1971-1978), Brasil (1964-1985), Chile (1973-1990), Paraguay (1954-1989) y Uruguay (1973-1985). Si bien las razones de cada golpe de estado, las medidas económicas y políticas adoptadas y las formas en que se reprimió la movilización social fueron distintas en cada caso, existieron muchas características comunes e inclusive instancias de coordinación entre los distintos gobiernos militares. Un claro ejemplo de esto último fue el llamado “Plan Cóndor”, que fue diseñado y financiado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (a cargo de Henry Kissinger) y tuvo como objetivo principal promover la coordinación a nivel continental y la asistencia recíproca entre las distintas dictaduras latinoamericanas en la ejecución de las tareas “antisubversivas”.

II- El plan económico neoliberal

Diagnóstico y solución

Más allá de las diferentes opiniones al interior del gobierno, apenas asumido el presidente Videla tomó una decisión determinante: designó como Ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Este nombramiento reflejaba la imposición del sector neoliberal sobre el nacionalista y por lo tanto un abandono de las perspectivas intervencionistas e industrialistas que, de diversas maneras, habían preponderado durante las últimas cuatro décadas.

José Alfredo Martínez de Hoz era un economista liberal, estrechamente vinculado con los grandes grupos industriales, financieros y agrarios nacionales e internacionales. Bisnieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina, ex funcionario de la Revolución Libertadora y del gobierno de José María Guido, fue presidente de la poderosa empresa Acindar hasta pocas semanas antes del golpe de Estado. Designado Ministro de Economía el 29 de marzo de 1976, Martínez de Hoz fue el gran ideólogo del plan económico del gobierno dictatorial.



José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla.

El diagnóstico de Martínez de Hoz era que el problema central de la economía estaba en la excesiva regulación estatal. Desde 1930, el Estado había intervenido en la economía aplicando políticas proteccionistas, controlando áreas claves de la producción, regulando el mercado interno, otorgando subsidios y distribuyendo estímulos a la pequeña y mediana industria y al consumo. Desde el punto de vista liberal que pregonaba el nuevo ministro, esta intervención había “distorsionado” la vida económica, volviéndola “ineficiente” y anquilosada, lo que ahuyentaba a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, había generado un Estado “elefantiásico” y malgastador, atado a los intereses políticos y atrapado por las disputas entre los sectores que competían por su protección.

Dado ese diagnóstico, la solución parecía sencilla: había que terminar con la intervención, disminuir el volumen del aparato estatal, “abrir” la economía y liberar a las “fuerzas productivas” del mercado para que tomaran la iniciativa. Se suponía que así se reducirían aquellas áreas de la economía que sólo podían funcionar gracias a la ayuda estatal y que no eran “competitivas” en el mercado internacional, lo cual permitiría que aquellas otras con potencial propio lideraran el proceso de crecimiento económico. Este propósito quedó fijado en un lema propagandístico de la época: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Las principales medidas del plan económico neoliberal

El 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz presentó públicamente su “Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina”. Allí planteó que el control de la inflación sería su “prioridad en el corto plazo”. Para hacer frente al problema, el Ministro sostuvo la necesidad de un “sinceramiento” de los precios, razón por la cual desarticuló los mecanismos de control de precios que había establecido

el tercer gobierno peronista, decretó un congelamiento de los salarios por tres meses y devaluó el tipo de cambio. Estas medidas, cuyo efecto inmediato fue una reducción del salario real de los trabajadores, ocurrían al mismo tiempo que el gobierno disolvía la CGT, suprimía el derecho a huelga y eliminaba las convenciones colectivas salariales.

Evolución de los principales indicadores industriales, 1974-1983 (1974=100)

Año	Volumen físico de la producción	Obreros ocupados	Productividad de la mano de obra	Horas trabajadas/ obreros	Salario real*	Costo salarial**	Productividad / costo salarial
1974	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1975	96,5	103,8	92,9	97,6	88,5	88,5	104,9
1976	93,6	100,4	93,3	99,1	57,0	57,0	163,7
1977	98,9	94,3	105,0	104,9	62,8	62,8	167,2
1978	88,1	85,1	103,5	104,1	66,4	66,4	155,8
1979	102,0	83,3	122,5	107,7	77,7	77,7	157,6
1980	99,7	76,8	129,7	106,6	96,2	96,2	134,9
1981	83,8	67,2	124,7	102,4	83,2	83,2	149,8
1982	83,0	63,6	130,6	103,9	61,5	61,5	212,4
1983	90,4	65,7	137,6	105,9	81,4	81,4	169,0

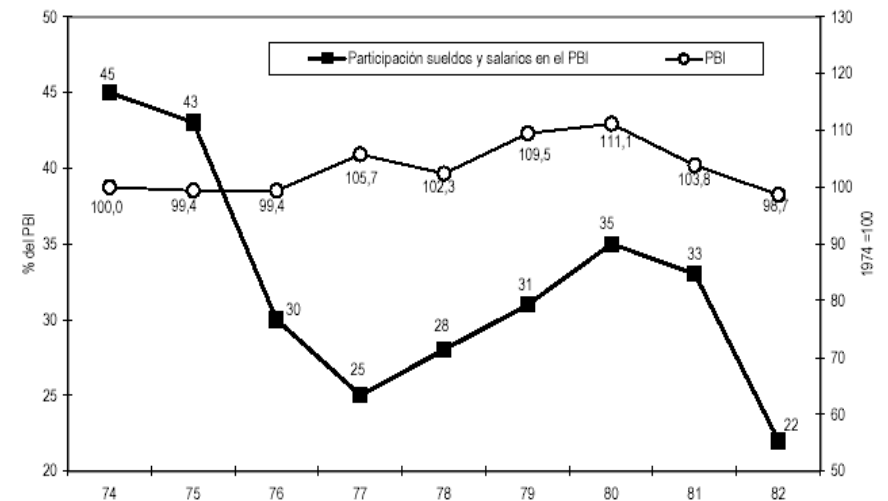
*Salario real = Salario nominal promedio / Índice de costo de vida.

**Costo salarial = Salario nominal promedio / Índice de precios mayoristas (Productos no agropecuarios nacionales).

Fuente: Eduardo Basualdo: *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

La redistribución regresiva del ingreso era concebida por la gestión económica de la dictadura como una condición necesaria para la realización de inversiones por parte de los grandes grupos económicos locales e internacionales. En agosto de 1976, se estableció un nuevo régimen de inversiones extranjeras, que quitaba los controles y otorgaba igualdad de derechos al capital transnacional frente a las empresas argentinas. La desregulación y la apertura económica se profundizaron en diciembre del mismo año, cuando se eliminaron las retenciones a la exportación agropecuaria, se redujeron los subsidios a la exportación industrial y se disminuyeron fuertemente los aranceles de importación.

Evolución del PBI y de la participación de los asalariados PBI, 1974-1982 (en números índice y porcentajes)



Fuente: Eduardo Basualdo: *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

Junto con esta drástica desregulación del mercado, Martínez de Hoz encaró también el achicamiento del aparato estatal. El problema del déficit fiscal (“los gastos improductivos del Estado”) fue el argumento para el aumento de las tarifas y la presión tributaria, así como para el cierre de distintas dependencias estatales (si bien el proceso de privatizaciones sólo se consumó plenamente algunos años después, durante el gobierno de Carlos Menem). En junio de 1977, el plan económico se completó con una Reforma Financiera que desregulaba la entrada y salida de capitales, flexibilizaba las condiciones para la creación de entidades bancarias y financieras y dejaba libradas las tasas de interés a la oferta y la demanda. Bajo la premisa neoliberal de que el mercado asignaría mejor los recursos que el Estado, se terminaban así de instaurar las bases para la transformación radical de la estructura productiva argentina: el paso de un modelo industrial a otro modelo de valorización financiera.

En síntesis, el plan económico neoliberal perjudicaba de manera directa a la clase obrera y a las pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales que dependían de la protección para subsistir y que por consiguiente comenzaron a cerrar, dejando desempleados a miles de trabajadores. Los sectores más concentrados de la economía, particularmente aquellos orientados hacia la exportación de materias primas y aquellos vinculados con el sistema financiero internacional, se vieron en cambio profundamente beneficiados y consolidaron aún más su posición de poder.

Cantidad de empresas controladas y vinculadas a los principales grupos económicos nacionales y conglomerados extranjeros que actúan en la Argentina, 1973, 1983, 1986-87 y 1990 (valores absolutos)

	1973	1983	1986-87	1990
Bunge & Born	60	63	87	92
Pérez Companc	10	54	86	92
Techint	30	46	53	58
Bridas	4	43	52	58
Macri (ex Fiat)	7	47	51	60
Garovaglio y Zorraquín	12	41	48	45
Arcor	5	20	34	31
Soldati (ex brown boveri)	15	35	34	51
Corcemar	23	30	31	26
Iva-Werthein	20	29	28	31
Celulosa Argentina	14	23	23	12
Astra	18	21	22	23
Inta-Deutsch	8	13	22	25
Alpargatas	9	24	21	24
FV + Canteras Cerro Negro	4	19	19	17
Fate-Aluar-Madanes	8	15	18	18
Huancayo-Constantini	2	18	18	19
Loma Negra	16	16	16	19
Massuh	1	10	16	13
Ledesma	14	15	16	24
Nougués Hermanos	8	13	16	15
Intermendoza-Taurales	0	6	15	0
Laboratorios Bagó	2	14	14	13
Bagley	6	14	14	8
San Martín del Tabacal	4	14	14	13
Bonafide	11	13	14	14
Agea-Clarín	1	12	13	16
BGH	6	14	13	17
Grafex	8	14	12	12
Indupa (ex rhodia-richard)	1	9	11	16
Herman Zupan	3	9	11	13
Aceros Bragado	3	9	11	9
Astilleros Alianza	0	9	10	9
Canale	4	11	8	9
Noel y Cía.	0	7	7	6
Atanor	4	8	0	0
Scholnik	3	8	0	0
Total	344	766	878	908

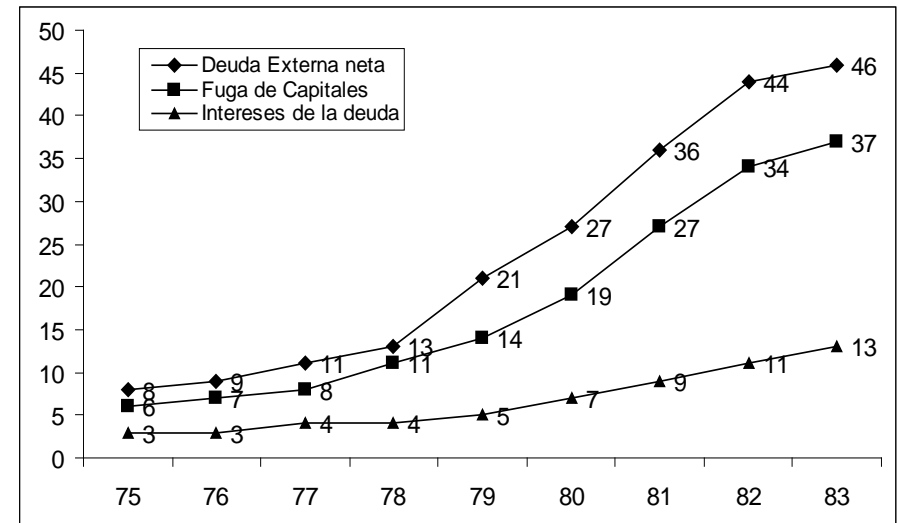
Fuente: Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín: “La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la ‘década perdida’”, en Pucciarelli, Alfredo Raúl (coordinador): *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

La valorización financiera y el aumento de la deuda externa

Las transformaciones económicas internacionales que estaban ocurriendo en los años setenta resultan fundamentales para comprender las condiciones de posibilidad histórica del plan neoliberal del gobierno militar. La decisión de los Estados Unidos de abandonar el “patrón oro” para pasar al “patrón dólar” y la llamada “crisis del petróleo” de 1973 (que en pocos meses cuadruplicó el precio del barril) provocaron un sustancial aumento de la liquidez del sistema monetario internacional. Los grandes bancos transnacionales encontraron en América Latina uno de los destinos predilectos para direccionar ese nuevo flujo de capitales. Los organismos de crédito internacionales como el FMI y el Banco Mundial, con su capacidad para presionar y negociar con los gobiernos de los distintos países, se convirtieron en sus poderosos aliados.

Los fluidos contactos de Martínez de Hoz y su equipo con el mercado financiero internacional redundaron en un impresionante aumento de la deuda externa argentina, que pasó de 7800 millones de dólares a comienzos de 1976 a 45 millones de dólares en 1983. Desde una perspectiva de tipo monetarista, el gobierno consideraba que aumentando las reservas en dólares y subiendo la tasa de interés reduciría la cantidad de pesos en circulación y frenaría la inflación, lo que a la larga permitiría la llegada de inversiones productivas. Sin embargo, esta política de toma de deuda no hizo más que favorecer las más diversas formas de especulación financiera en detrimento del desarrollo industrial. Las grandes empresas nacionales y extranjeras y los fondos de inversión internacionales ingresaban sus dólares al país, los cambiaban por pesos argentinos, aprovechaban las altas tasas pagadas por el Estado y, gracias a la falta de regulación, no tardaban mucho en recuperar sus capitales y fugarlos, junto con las cuantiosas ganancias, al exterior.

Evolución de la deuda externa neta, la fuga de capitales y los intereses de deuda pagados, 1975-1983 (en miles de millones de dólares).



Fuente: Eduardo Basualdo: “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas. De la sustitución de importaciones a la Valorización Financiera”, en Basualdo, Eduardo y Arqueo, Enrique (comps.): *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias*, Buenos Aires, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006.

El plan económico neoliberal desalentaba así todo tipo de inversión productiva, provocaba una veloz desindustrialización del país y contribuía a instalar un nuevo modelo de acumulación: la valorización financiera. La euforia especulativa de aquellos primeros años de la dictadura hizo que pasaran a ser recordados como los años de la “plata dulce”. Incluso los pequeños ahorristas encontraban mucho más conveniente colocar su dinero en un banco a la espera de que en pocos días, y sin hacer nada, su dinero se viera multiplicado.

Pero las consecuencias económicas negativas de esta estrategia no tardaron mucho en hacerse visibles. A comienzos de la década del ochenta, la liquidez del mercado internacional que había permitido y alimentado el proceso de endeudamiento argentino comenzó a reducirse debido a diversos factores (entre ellos, un cambio en la política monetaria de Estados Unidos). La imposibilidad de acceder a nuevos créditos internacionales puso en evidencia la vulnerabilidad de la economía nacional, que había quedado totalmente desprotegida como resultado de las medidas neoliberales.

Además, a pesar de los discursos sobre el orden y la eficiencia económica que supuestamente generaría el Proceso de Reorganización Nacional, comenzó a quedar cada vez más claro que el gobierno dictatorial había operado desde un comienzo con altísimos niveles de discrecionalidad y corrupción. A la vez que se defendía el fin del intervencionismo, se habían encarado una serie de obras públicas de enorme magnitud: para hacerlo el Estado había tomado deuda externa con altísimos intereses y adjudicado su realización a empresas directamente vinculadas con los funcionarios gubernamentales, a las que pagó grandes sobrepagos. La supresión de privilegios fiscales y la quita de subsidios habían funcionado de un modo similar: mientras las pequeñas y medianas industrias se veían perjudicadas por la ausencia de medidas proteccionistas, los grandes grupos económicos disfrutaron de grandes créditos estatales que, en casi todos los casos, no fueron invertidos en la producción (tal como supuestamente se esperaba) sino que se orientaron hacia el mercado financiero.

La inflación sostenida, las múltiples devaluaciones, la caída de la producción industrial, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y la puesta en evidencia de la permanente inestabilidad económica que producía el juego financiero llevaron a la remoción de Martínez de Hoz en marzo de 1981. Su partida estuvo lejos de conllevar, sin embargo, un abandono del modelo de valorización financiera. Por el

contrario, en septiembre de 1982, el por entonces presidente del Banco Central (y futuro Ministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa) Domingo Felipe Cavallo tomó la determinación de estatizar 17.000 millones de dólares de deuda externa privada. Para fines del año siguiente, cuando los militares finalmente dejaron el poder, la estructura económica argentina se había transformado profundamente.

“Diversos analistas trataron de responder por qué, a pesar de que objetivamente el circuito de endeudamiento-especulación conducía indefectiblemente a la crisis, se sostuvo en un período tan prolongado. La respuesta invariable apunta a que diversos sectores con gran peso político y económico se vieron beneficiados con dicha política. Entre ellos, la literatura distingue como principales beneficiarios a:

- altos funcionarios del gobierno que implementaron las políticas mencionadas (algunos de ellos habrían transferido fondos a sus cuentas en el extranjero);
- un grupo significativo de empresarios y financistas que efectuaron la mayor cantidad de maniobras especulativas (el grueso de las operaciones las efectuó un reducido número de empresas y bancos), incluyendo la fuga de capitales;
 - las Fuerzas Armadas y los intermediarios que utilizaron el endeudamiento externo para la compra de armas (...);
 - grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que aprovecharon regímenes promocionales o contratos del Estado, hicieron grandes negociados, se vieron favorecidos con desgravaciones impositivas y tomaron empréstitos del exterior beneficiándose luego con la estatización de la deuda;
 - sectores primarios exportadores, agrarios y de *commodities* industriales, en diferentes etapas de la política económica.”

Mario Rapoport: *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*, Buenos Aires, Booket, 2010, pp. 308-309.

III - El terrorismo de estado

La aplicación del plan económico neoliberal y la imposición de un régimen de valorización financiera suponían un ataque directo a una clase trabajadora argentina que en las últimas décadas había acumulado una gran experiencia de movilización y difícilmente aceptaría sin quejas los cambios propuestos. En ese sentido, el gobierno y la élite empresarial sabían que para lograr ese primer objetivo resultaba necesario cumplir con un segundo: disciplinar a la sociedad y silenciar aquellas voces que de distintas formas expresaban su oposición a las desigualdades generadas por el orden social capitalista.

Si bien la violencia política era una constante que marcaba la historia argentina desde hacía muchas décadas, la represión ejercida durante el Proceso de Reorganización Nacional supuso un cambio cualitativo. El período 1976-1983 es definido como el del *terrorismo de estado* ya que en aquel momento se organizó desde el aparato estatal un plan sistemático de represión que no sólo aniquiló a una parte de la población sino que además se propuso infundir un terror paralizador y desmovilizador en el conjunto social.

El plan fue preparado con anterioridad al golpe de Estado y contó con la participación activa de las grandes empresas, el Poder Judicial, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. En paralelo a la faz pública del Estado, se estableció una estructura clandestina. Organizadas en “grupos de tareas”, las Fuerzas Armadas junto con las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales se ocuparon de la implementación de la represión. Los supuestos “subversivos” eran “chupados” (secuestrados) en operaciones planificadas y trasladados a alguno de los aproximadamente 500 *centros clandestinos de detención* que funcionaron a lo largo de todo el país en cuarteles militares, dependencias policiales, fábricas y otras instalaciones. Estos lugares de encierro contaban con sistemas de administración y personal a cargo y muchas veces se encontraban en medio de las ciudades y

pueblos. El rol jugado por distintos actores civiles (empresarios, médicos, sindicalistas negociadores) fue central para su funcionamiento.

Se estima que durante los años de la dictadura funcionaron alrededor de 500 centros clandestinos de detención (CCD) a lo largo de todo el país.

La *Escuela de Mecánica de la Armada* (ESMA) estaba en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras del estadio del Club Atlético River Plate. *El Olimpo* y *Automotores Orletti* funcionaron en el barrio de Floresta, al oeste de la capital. El *Club Atlético*, ubicado en el bajo porteño, fue así conocido por su proximidad con el estadio del Club Atlético Boca Juniors.

En el Gran Buenos Aires, zona de gran actividad fabril, se instalaron entre otros: *El Vesubio* en La Tablada (partido de La Matanza); *El Campito* en San Miguel; *La Mansión Seré* en Morón; *El Infierno* en Avellaneda; *El Pozo* en Quilmes. Las comisarias 1° de Florencio Varela y 1°, 3°, 5° y 6° de Almirante Brown y la Planta Transmisora de Plátanos en Berazategui también operaron como centros clandestinos de detención.

En Córdoba funcionó *La Perla*, también conocido como *La Universidad*; en Santa Fe, la *Quinta de Funes*; en Misiones, *La Casita de Mártires*; en Tucumán, *La Escuelita de Famaillá*.

En los centros clandestinos de detención, quienes habían sido secuestrados quedaban a disposición de sus captores, sometidos a las más terribles formas de tortura e intimidación física y psicológica. Encapuchados y esposados, podían permanecer encerrados unos pocos días o muchos meses. Los interrogatorios, en los que los detenidos padecían los más aberrantes tormentos, tenían como objetivo su puro sufrimiento pero también la delación de otros supuestos “subversivos”.

En muchas ocasiones servían también para obligarlos a firmar los papeles que legitimaban el robo de sus bienes materiales (por ejemplo, el título de propiedad de un inmueble). Aunque por las propias características de la represión es difícil precisarlo, se calcula que 30 mil personas fueron víctimas del terrorismo de estado. Sus asesinatos fueron el resultado de las propias sesiones de tortura, de fusilamientos y de los llamados “vuelos de la muerte” (por los cuales se arrojaban los cuerpos aún con vida al Río de la Plata desde aviones), entre muchos otros métodos inhumanos de provocar la muerte. Sin embargo, acaso el símbolo máximo de la atrocidad de los crímenes que se cometieron en los centros clandestinos de detención es la apropiación de aproximadamente 500 niños recién nacidos, hijos e hijas de las detenidas-desaparecidas.



Autor de la fotografía: Jorge Durán.



Durante los años de la dictadura, la amenaza represiva se volvió una experiencia cotidiana.

Fuente: archivo del diario *Clarín*.

Dado que todas estas eran operaciones clandestinas, el gobierno militar se negaba a reconocer que tuviera alguna responsabilidad sobre aquellas personas que habían desaparecido. Miles de personas parecían no estar en ningún lado: sus familiares denunciaban su ausencia, pero ante la imposibilidad de encontrar sus cuerpos el Estado negaba que hubieran sido detenidos o asesinados. “Es una incógnita el desaparecido (...), no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo”, sostenía Videla en una conferencia de prensa ante periodistas extranjeros realizada en 1979. Algo similar sucedía con aquellos que lograban sobrevivir a los centros clandestinos y de algún modo (siendo liberados, escapándose, siendo “legalizados”) recuperaban la libertad: sin pruebas concretas de su detención, sus testimonios daban cuenta de los crímenes que se estaban cometiendo pero aun así eran puestos en duda por muchos.

Sintetizada en la tristemente célebre cifra de los 30 mil desaparecidos, esta ostentación y visibilización de la represión clandestina resulta clave para entender las características específicas del terrorismo de estado. En efecto, el plan de la dictadura supuso la eliminación física de miles de personas. Muchas de ellas eran integrantes de organizaciones políticas (armadas o no), activistas sindicales, militantes sociales, estudiantes y docentes comprometidos con las causas populares, intelectuales de izquierda, miembros de la Iglesia y dirigentes políticos. No obstante, la incertidumbre que generaba no poder saber con real precisión quiénes eran esos hombres y mujeres, por qué y cómo habían desaparecido, y cuál había sido su destino mantenía permanentemente abierta la posibilidad de que cualquiera fuera detenido. De ese modo, la represión militar no sólo asesinaba a una parte de la población sino que un profundo terror generalizado. Era un terror que conducía al silenciamiento y la autocensura y alimentaba la desconfianza y la sospecha hacia los otros. Un terror capaz de producir una nueva sociedad disciplinada.

Gran parte de la documentación de los centros clandestinos de detención fue destruida como resultado de la estrategia militar de borrar las huellas de sus delitos. Por eso, el testimonio de los sobrevivientes ha sido y sigue siendo fundamental para dar a conocer los crímenes y torturas cometidos y enjuiciar a los responsables.

Basándose en los relatos de quienes sufrieron la represión, la CONADEP (Comisión Nacional sobre la de Desaparición de Personas) publicó su informe *Nunca Más* en 1984. El mismo demostró con contundencia el carácter sistemático de la represión y sirvió de prueba en el Juicio a las Juntas Militares de 1985.

Otros organismos de derechos humanos también han cumplido un

rol central en la investigación y denuncia del terrorismo de estado. El trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, permitió recuperar la identidad de más de 125 de los niños y niñas nacidos en cautiverio y apropiados por los militares.

Finalmente, cabe destacar las políticas de la memoria impulsadas por el Estado luego de la crisis del 2001 y el trabajo de distintas dependencias estatales como la Secretaría de Derechos Humanos y el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ubicado en el que fuera el predio de la ESMA.

Porcentaje de desaparecidos por edad

Edad	%
De 0 a 5 años:	0,82 %
De 6 a 10 años:	0,25 %
De 11 a 15 años:	0,58 %
De 16 a 20 años:	10,61 %
De 21 a 25 años:	32,62 %
De 26 a 30 años:	25,90 %
De 31 a 35 años:	12,26 %
De 36 a 40 años:	3,76 %
De 41 a 45 años:	3,40 %
De 46 a 50 años:	2,41 %
De 51 a 55 años:	1,84 %
De 56 a 60 años:	1,17 %
De 61 a 65 años:	0,75 %
De 66 a 70 años:	0,41 %
Más de 70 años:	0,25 %

Fuente: CONADEP: *Nunca Más*, Buenos Aires, Eudeba, 1984.

“Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”

El 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año del golpe de Estado, el escritor y militante Rodolfo Walsh envió copias de su “Carta abierta a la Junta Militar” a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales de medios extranjeros.

Un día después, fue emboscado y acibillado por el Grupo de Tareas 3.3. de la Escuela de Mecánica de la Armada (comandado por Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta). Existen testimonios de que el cuerpo de Walsh, ya sin vida, fue trasladado a aquel centro clandestino de detención. Al día de hoy sus restos continúan desaparecidos.

Carta abierta de un escritor a la Junta Militar

La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años. (...)

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. (...)

Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la

investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. (...)

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el “submarino”, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. (...)

Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 % y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. (...)

El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el “festín de los corruptos”. (...)

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

IV- La sociedad durante la dictadura

La construcción de consensos y la cuestión de la responsabilidad civil

¿Cómo fue posible el terrorismo de estado? Si bien la principal responsabilidad por la aplicación del plan sistemático de represión corresponde a las Fuerzas Armadas, también es cierto el mismo que contó con apoyos concretos y con silencios cómplices que ayudaron a desplegar las ac-

ciones clandestinas. Diversas organizaciones empresariales y corporativas, que pretendían la imposición del plan económico neoliberal, convocaron al golpe, celebraron el nuevo gobierno y colaboraron activamente con los grupos de tareas: financiándolos, elaborando listas negras de sus empleados “conflictivos” e incluso habilitando la instalación de centros clandestinos de detención en los predios de sus fábricas.

La cuestión de la responsabilidad civil es, no obstante, mucho más amplia y compleja. Hubo dirigentes políticos que aceptaron participar de ministerios e instancias de gestión de la dictadura militar. Los pedidos de *habeas corpus* por los desaparecidos y las denuncias públicas de los crímenes que se estaban cometiendo fueron desatendidos y desestimados por la vasta mayoría del Poder Judicial. La jerarquía de la Iglesia Católica también apoyó la dictadura, al punto de que algunos sacerdotes eran parte de las sesiones de torturas y los interrogatorios a detenidos. Sin la intervención de distintos profesionales de la medicina, la apropiación de bebés hubiera sido impracticable.

Todas estas colaboraciones, aún si respondieron a decisiones individuales, expresaban el amplio grado de consenso social que existía tanto sobre la interrupción del gobierno democrático como sobre la necesidad de “aniquilar a la subversión”. En ese sentido, la participación de los medios masivos de comunicación fue crucial. En muchos programas televisivos y radiales y en las publicidades solía enfatizarse la importancia del cambio económico que se estaba implementando: se hablaba de la buena calidad de los productos importados frente a la precariedad de aquellos provenientes de la industria nacional. También se fueron construyendo imágenes que asociaban toda crítica al régimen militar con simpatías con lo que se denominaba genéricamente “la subversión”. Todo lo que no cuadrara dentro de lo estipulado por el gobierno militar o que pudiera ser sospechoso de expresar algún tipo de mensaje crítico fue censurado: programas televisivos, libros -incluso infantiles-, canciones, películas, así como también artistas, escritores o intelectuales.



Publicidad de la Dirección General Impositiva (DGI), año 1978. El discurso está orientado a los evasores fiscales, pero expone al mismo tiempo la faz represiva y clandestina del Estado.

El régimen militar, por su parte, trabajó fuertemente en la construcción de sentidos sobre la realidad que justificaran sus acciones. En esta línea, la organización del Mundial de Fútbol de 1978 fue particularmente importante para mostrar una supuesta aceptación de la sociedad. Se trató de un evento no sólo deportivo sino fundamentalmente político. El gobierno gastó altísimas sumas de dinero y se ocupó de cada detalle, buscando difundir la imagen de un país pacificado y feliz a la vez que en pleno desarrollo económico. Sin embargo, mientras por las calles se celebraban los triunfos de la selección argentina, el Estado seguía secuestrando y torturando en los centros clandestinos de detención. En Buenos Aires, a pocas cuadras del estadio del Club Atlético River Plate en donde se jugaron muchos partidos del campeonato (incluida la final), muchos detenidos-desaparecidos sufrían torturas físicas y psicológicas en la Escuela de Mecánica de la Armada.



Tapa de la revista *Somos*, 30 de junio de 1978.

Una semana después de la finalización del Mundial de Fútbol de 1978, la revista *Somos* publicó en su tapa la foto de un jubiloso Jorge Rafael Videla, sonriendo y alzando los brazos en señal de triunfo. El título era “Un país que cambió”.

La nota describía la realización del torneo como un éxito absoluto, que demostraba “signos inequívocos” de transformación social y contradecía las “críticas y agorerías lanzadas por un sector de la prensa extranjera –que se hizo eco de entidades y voceros subversivos derrotados en el ámbito del país–”. “En el pasado”, sostenía la publicación, “cualquier manifestación deportiva (...) llevaba siempre implícita la nota de una potencial agresividad. Otro tanto ocurrió con las concentraciones políticas (...). Los colores argentinos quedaban en segundo plano: importaba más la divisa, los emblemas sectarios, el choque verbal o de hecho con los opositores”. En un sentido completamente opuesto, el Mundial '78 había funcionado desde la perspectiva de *Somos* como un evento de comunión social: “(...) el entusiasmo fue creciendo a medida que avanzaba el torneo. No era la manifestación ruidosa y tumultuosa de otros años; todo fue civilizado, respetuoso, aún dentro de la mayor euforia que se recuerda en todas las calles del país. Se gritó solamente Argentina, y no otra palabra, nombre o consigna partidista. (...) Todos celebraron la conquista: ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, ancianos, funcionarios, obreros, empresarios, hasta los propios extranjeros (...)”.



“Que no haya fútbol entre los campos de concentración”. Afiche en francés llamando al boicot contra el Mundial de Fútbol de 1978.

La denuncia del terrorismo de estado: el papel de los organismos de derechos humanos

Los primeros años de la dictadura fueron los más duros. El temor generalizado, combinado con el apoyo explícito de distintos actores de la sociedad civil, los beneficios transitorios de las políticas económicas de Martínez de Hoz para un sector de la sociedad (la “plata dulce”) y el recuerdo de los turbulentos meses que marcaron el final del gobierno de Isabel Perón, contribuyeron a generar consenso. La sociedad pareció quedar en silencio: algunos porque tenían miedo; otros porque de una u

otra manera justificaban lo que el gobierno militar estaba haciendo. El plan sistemático de desaparición de personas favoreció la rápida instalación de un clima de sospecha, desconfianza e indiferencia, bajo el cual se fueron difundiendo frases e ideas del estilo “no te metás”, “por algo será” o “algo habrá hecho”. Muchas personas se vieron forzadas a marchar al exilio en el exterior; otras optaron un exilio interno, un total apartamiento de la vida pública.

La dictadura se había impuesto con fuerza y parecía no quedar ninguna vía para la canalización de demandas, quejas o denuncias. La CGT estaba intervenida y los dirigentes sindicales más combativos eran perseguidos y asesinados. Lo mismo sucedía con los miles de militantes que en los años inmediatamente previos habían alimentado la movilización social y defendido la necesidad de construir un mundo más igualitario y justo. Los partidos políticos habían sido prohibidos y sus dirigentes oscilaban entre la colaboración y la prudente reserva. Los grandes medios de comunicación estaban alineados con el gobierno y, si hacían referencia a alguna denuncia (por ejemplo, aquellas que comenzaron a hacer los exiliados desde Europa y México), la presentaban como parte de una “campana anti-argentina”.

En este contexto, los familiares de las víctimas directas del terrorismo de Estado y los organismos de derechos humanos conformaron un aislado sector de protesta contra la violencia estatal. En abril de 1977 un pequeño grupo de madres de desaparecidos se organizó para reclamar a las autoridades por el paradero de sus hijos. A pesar de que las manifestaciones públicas estaban prohibidas, decidieron marchar hacia la simbólica Plaza de Mayo. Allí, la policía les recordó que regía el estado de sitio y les ordenó “circular”: fue el comienzo de la célebre ronda alrededor de la pirámide de la plaza, que las Madres de Plaza de Mayo realizan hasta el día de hoy todos los jueves. Unos meses más tarde, con motivo de la peregrinación a Luján, surgió la idea de identificarse con un pañal de tela blanca (como el que habían usado para criar a sus hijos) llevado como pañuelo en la cabeza.

La lucha de las Madres generó la preocupación del gobierno, que encomendó a Alfredo Astiz infiltrarse en la organización. Astiz, que era parte de uno de los grupos de tareas de la ESMA, fue el principal responsable de la desaparición de tres de las fundadoras de la agrupación: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. Las Madres, sin embargo, no detuvieron su reclamo. Su tenacidad les permitió conseguir apoyos (sobre todo en el extranjero) para convertirse en el puntal de lucha contra la dictadura y superar el aislamiento inicial.



La ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Autor de la fotografía: Carlos Villoldo.

Poco a poco las denuncias por los crímenes cometidos por el Estado argentino empezaron a multiplicarse. Los organismos de derechos humanos tuvieron un rol clave: entre ellos pueden mencionarse, además

de las Madres, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos (MEDH). Asimismo, las presiones internacionales se volvieron cada vez mayores.



Los organismos de derechos humanos han cumplido un rol clave en la denuncia de los crímenes del terrorismo de estado.

Autor de la fotografía: Daniel García.

Aun insistiendo en la existencia de una “campana anti-argentina”, el gobierno no pudo evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitara al país en 1979. La propaganda oficial distribuyó calcomanías que

decían “los argentinos somos derechos y humanos”, pero la Comisión recogió un grandísimo número de testimonios que daban cuenta de las prácticas terroristas organizadas desde el Estado. Fue un duro revés para la dictadura, al que se sumó un año más tarde la entrega del premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un destacado integrante del cada vez más fuerte movimiento de derechos humanos.

El despertar de las voces y la breve presidencia de Viola

Hacia fines de la década del setenta, el corsé que acallaba cualquier crítica parecía estar aflojándose. La CGT, que había sido disuelta por la dictadura militar, comenzó lentamente a reconstituirse alrededor de dos grandes sectores de las organizaciones sindicales: uno más propicio al diálogo y la negociación con las autoridades (Comisión Nacional del Trabajo), y otro más confrontativo (Comisión de los 25), que ya en abril de 1979 lanzó un primer paro general contra la dictadura. En noviembre de 1980, este segundo sector conformó la CGT “Brasil”, designando como Secretario General a Saúl Ubaldini. Unos meses más tarde el sector dialoguista se reorganizó en la llamada CGT “Azopardo”.

Los sectores más progresistas de la Iglesia también comenzaron a expresar sus críticas al gobierno militar, en muchos casos en vinculación con el movimiento sindical, al cual los unía la preocupación por los cada vez más visibles efectos sociales nocivos de la política económica llevada adelante por el Proceso de Reorganización Nacional. En mayo de 1981 se realizó la Conferencia Episcopal, cuyo documento final apelaba a la necesidad de retomar el camino institucional. El 7 de noviembre de aquel mismo año, los sindicatos combativos marcharon a la Iglesia de San Cayetano reclamando por “paz, pan y trabajo”.

En ese contexto, el general Videla terminó su mandato y fue reemplazado por el general Viola. Si bien este recambio fue presentado como algo previsto (también se renovó la Junta Militar), lo cierto es que las tensiones

al interior del gobierno eran cada vez más agudas. Viola, representante de una línea “blanda”, tomó algunas medidas que distendieron el clima político: se permitió cierto grado de movilización política y se relajaron las rígidas medidas de censura vigentes desde 1976. No fueron pocos los que sugirieron que la salida electoral estaba cerca. En julio de 1981 se conformó la Multipartidaria, una instancia política integrada por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Intransigente y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que reclamaba el restablecimiento de la democracia.

Sin embargo, los sectores más “duros” de la corporación militar no tardaron en pronunciarse en contra de cualquier normalización institucional en el corto plazo. A fines de ese mismo año, forzaron la salida de Viola, la formación de una tercera Junta Militar y la designación de uno de sus tres integrantes, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, como presidente.

El rock nacional: ¿música y resistencia?

Uno de los fenómenos culturales más significativos ocurridos durante la dictadura militar de 1976-1983 fue la masificación del rock nacional. Artistas que venían tocando desde fines de los años sesenta como Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco o Pappo vieron por entonces crecer inmensamente su popularidad. Al mismo tiempo, emergían con gran éxito nuevos solistas como Fito Páez y nuevos grupos como Los Abuelos de la Nada, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Soda Stereo, Virus o Sumo.

Si las virtudes de todos estos músicos resultan claras, las razones por las que sus composiciones llegaron a los estadios, colmaron la programación de las radios y ocuparon las bateas principales de las tiendas de discos precisamente en aquel momento histórico son en cambio mucho más difíciles de definir. Aun siendo menos

explícitamente políticos que los sectores militantes, los jóvenes rockeros habían participado del clima de ebullición social de la primera mitad de los setenta. Su propuesta musical y cultural basada en los valores del antiautoritarismo y la libertad sintonizaba con el espíritu contestatario de la época.

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 no fue, por lo tanto, una buena noticia. La juventud se volvió uno de los principales focos de la represión dictatorial y su “rebeldía” fue públicamente condenada tanto en los discursos oficiales como en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el clima de censura y terror limitaba la libre expresión y creación, forzando a muchos artistas populares al silencio o el exilio.



Quema de libros catalogados como “subversivos” realizada en la provincia de Córdoba.

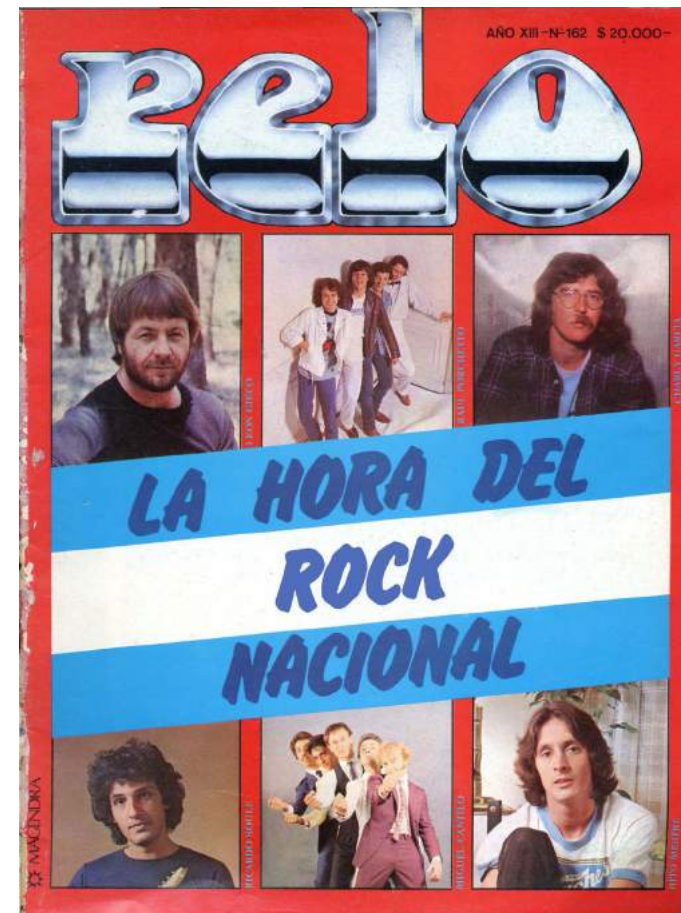
Autor de la fotografía: Gustavo Farías.

No obstante, la instauración del régimen de facto no supuso la clausura de toda actividad cultural ni alteró de la misma forma la vida cotidiana de todas las personas. Aun cuando muchas veces terminaban con *razzias* (redadas en las que la policía arrestaba a cientos de asistentes), los recitales de rock siguieron realizándose. Y acaso porque eran una de las pocas instancias de reunión pública que el gobierno habilitaba, fueron convirtiéndose en encuentros cada vez más masivos y cargados de sentido político.

Las tensiones que recorren la historia del rock nacional a partir de 1976 son una buena puerta de entrada para reflexionar sobre la compleja cuestión de las actitudes sociales durante la dictadura. Por un lado, resulta claro que el crecimiento del rock se debió a su capacidad de expresar o canalizar sentimientos e ideas de libertad. En un contexto sumamente represivo, escuchar o tocar música rock y asistir a recitales suponía defender en cierta medida una serie de valores contrapuestos a los ideales disciplinarios del Proceso de Reorganización Nacional. Por otro lado, sin embargo, resulta bastante difícil asumir que estas actitudes representaran una resistencia directa al proyecto dictatorial. Más aún: se podría incluso llegar a plantear que el hecho de que los recitales de rock se pudieran realizar demostraba que, al menos desde la perspectiva gubernamental, no significaban un verdadero desafío a sus objetivos.

Lo sucedido con el rock durante el conflicto bélico de Malvinas es, tal vez, la mejor muestra de esta ambivalencia. En aquel contexto de fervor nacionalista, el gobierno determinó la prohibición de difundir por las radios música cantada en inglés. Esto favoreció fuertemente a los músicos argentinos de rock (y de muchos otros géneros), que encontraron de pronto una oportunidad excepcional para difundir sus composiciones. La determinación gubernamental ayudó así a consolidar aquel proceso de

masificación que ya estaba en curso. Luego de la derrota en Malvinas y con el comienzo de la transición democrática, el rock nacional se transformó definitivamente en una de las expresiones musicales y culturales más importante de su tiempo.



“La hora del rock nacional”: la tapa de la revista *Pelo* del mes de mayo de 1982, en pleno conflicto bélico con Malvinas.

Del silencio a la alegoría y de la abstracción a la denuncia

La comparación entre la letra de dos canciones del grupo de rock Serú Girán permite reflexionar sobre las transformaciones socioculturales ocurridas durante el gobierno militar de 1976-1983.

“Serú Girán” (1978)	“Canción de Alicia en el país” (1980)
Cosmigonón, gisofanía. Serú girán, seminare, paralía.	Quién sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir?
Narcisolón, solidaría, serú girán, serú girán, paralía.	Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Eiti leda, luminería caracó.	No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastado por el mismo pie juegan cricket, bajo la luna.
ah... lirán marino. ah... lirán ivino. Parastaría necesari eri desi oia. Seminare narcisolesa desi oia, serilerilán. Eiti leda luminería caracó.	Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. (...) Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia.

Cine y memoria: las películas sobre el terrorismo de estado

A lo largo de los años, las formas en que se recordaron e interpretaron socialmente los crímenes del terrorismo de estado han ido transformándose. Los testimonios orales, las obras artísticas, los monumentos memorialísticos y los actos políticos (por ejemplo, los discursos presidenciales) que hacen referencia al pasado resultan fundamentales para conocer y comprender lo ocurrido pero deben ser considerados, sobre todo, como fuentes que hablan de su propio presente histórico.

Las películas de ficción y documentales sobre la dictadura ofrecen una vía de acceso privilegiada para indagar en los distintos “regímenes de memoria” de la sociedad argentina, es decir, en las diferentes maneras en que el pasado fue narrado y explicado en diferentes momentos de la historia reciente.

La historia oficial, la película dirigida por Luis Puenzo que fue estrenada en el país en 1985 y ganó el premio Oscar a la mejor producción extranjera un año después, supo por ejemplo expresar la conmoción de una gran parte de la sociedad argentina frente a las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los crímenes cometidos en los años previos. El film contaba la historia de Alicia, una profesora de historia casada con un empresario vinculado con el gobierno de facto, que adoptaba una niña (Gaby). Con el regreso de la democracia y gracias a su contacto con una Abuela de Plaza de Mayo, la protagonista descubría que su hija era uno de los tantos bebés apropiados por los represores. Se postulaba de ese modo la imagen de una sociedad inocente (obviando el fuerte apoyo social que la “lucha contra la subversión” había tenido y aún entonces tenía) y ajena al terrorismo de estado (evitando problematizar la visibilidad pública que la represión clandestina había tenido).

Una memoria social muy distinta es la que se manifiesta en la película documental *Los Rubios*, de Albertina Carri. Estrenada en 2003, esta producción se basa en la historia personal de la directora, que es hija de dos militantes políticos detenidos y desaparecidos durante el terrorismo de estado. A través de una variedad de recursos (entrevistas, dramatizaciones, voz en off), *Los Rubios* propone una reflexión en primera persona: Carri indaga críticamente la historia de sus padres, exponiendo sus vacilaciones, sus rencores y las tensiones que definen su propia identidad. Así, con su tono a la vez íntimo y polémico, la película da cuenta de los cuestionamientos morales y políticos de una nueva generación sobre la violencia del pasado reciente. Pensada en el contexto histórico de poscrisis del 2001, puede además ser conectada con el creciente reclamo por la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Otras películas para indagar en la historia de la memoria social sobre el terrorismo de estado: *La noche de los lápices* (dir. Héctor Olivera, 1986); *Juan, como si nada hubiera sucedido* (dir. Carlos Echeverría, 1987); *Montoneros, una historia* (dir. Andrés Di Tella, 1994); *Garage Olimpo* (dir. Marco Bechis, 1999); *Iluminados por el fuego* (dir. Tristán Bauer, 2005); *Crónica de una fuga* (dir. Adrián Caetano, 2006); *Infancia Clandestina* (dir. Benjamín Avila, 2011); *La larga noche de Francisco Sanctis* (dir. Francisco Márquez y Andrea Testa, 2016).

V- La Guerra de las Malvinas y el final de la dictadura

El gobierno de Galtieri

Galtieri asumió la presidencia declarando que su ascenso suponía una reafirmación de los principios económicos y políticos del Proceso de Reorganización Nacional. La designación de Roberto Alemann, un liberal ortodoxo, como Ministro de Economía confirmó lo primero.

El “nuevo” plan consistía en una profundización del ajuste fiscal y monetario. Con el objetivo repetido de frenar la inflación, se repitieron las medidas que en 1976 habían sido presentadas como la solución y no habían hecho más que agudizar el problema y generar una profunda recesión: se devaluó el peso, se tomaron medidas para reducir el gasto público (aumento de impuestos y tarifas, congelamiento de los salarios del sector público) y se eliminaron las pocas regulaciones del mercado cambiario que se había intentado instalar durante la presidencia de Viola el Ministro de Economía (también liberal) Lorenzo Sigaut. Además, Alemann elaboró un proyecto que no llegó a concretarse para la privatización de las empresas estatales de comunicaciones, gas y petróleo, entre otras.



“Paz, pan y trabajo”. La movilización social fue clave para la caída del régimen militar.

En el plano político, en cambio, la continuidad de los objetivos refundacionales establecidos en 1976 parecía mucho más compleja. Como integrante de la línea dura de las Fuerzas Armadas, Galtieri suspendió la liberalización política promovida por Viola. Al mismo tiempo, sin embargo, hizo explícitas sus intenciones de cumplir un viejo anhelo del gobierno dictatorial: la creación de un partido político militar (el Movimiento de Opinión Nacional o MON) capaz de competir en elecciones. Buscaba así diseñar una alternativa para sostener la legitimidad del régimen frente a la cada vez más activa oposición de diversos sectores políticos, gremiales y culturales. Pero las protestas se agudizaban y el consenso del régimen seguía decayendo. El 30 de marzo de 1982 una multitudinaria manifestación fue violentamente reprimida por el gobierno en la Plaza de Mayo, con un saldo de casi 3 mil detenidos. Tres días más tarde, el presidente de facto anunciaba la recuperación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.



Una imagen de la represión a la movilización del 30 de marzo de 1982.

Autor de la fotografía: Pablo Lasansky.

La recuperación de las islas Malvinas

La creciente movilización social y las repercusiones que comenzaban a tener las denuncias por las violaciones a los derechos humanos podrían considerarse la causa principal de la decisión de Galtieri de recuperar las islas Malvinas. Levantar las banderas del nacionalismo a partir de una guerra seguía siendo una posibilidad real de lograr unificar a la población en relación con un tema concreto, oponerlo a un enemigo exterior y estimular un respaldo en función de conseguir una victoria nacional. Unos años antes, el gobierno militar había intentado también el inicio de un conflicto bélico con Chile, en torno de la cuestión del canal de Beagle. En ese momento, la negociación y la intervención del Papa lograron evitar la guerra. La recuperación militar de las islas Malvinas era un antiguo proyecto de la Marina, ya desde comienzos del Proceso de Reorganización Nacional.

Al mismo tiempo, el contexto internacional parecía favorable para la aventura. Desde 1981 gobernaba en EE.UU. Ronald Reagan, quien estaba convencido de la importancia de las dictaduras del Cono Sur en la “guerra” que debía librarse contra el comunismo. Reagan reforzó los vínculos de su país con el gobierno militar argentino, que envió asesores militares a colaborar con los estadounidenses en su combate contra las guerrillas revolucionarias que luchaban en América Central. Aun cuando Estados Unidos formaba parte de la OTAN y era un estrecho aliado del Reino Unido, Galtieri esperaba que esta “relación especial” se tradujera en un apoyo activo en ocasión del conflicto bélico, cosa que no sucedió.

Las islas Malvinas son un archipiélago que forma parte de la plataforma continental americana. Esta condición geográfica es uno de los múltiples argumentos con los que el Estado argentino ha sostenido históricamente el reclamo para recuperar su soberanía, así como la de las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur. En 1833, el Imperio británico ocupó estas islas, sobre las cuáles mantiene control hasta la actualidad. Esta ocupación tiene claros motivos estratégicos: le ofrece a Gran Bretaña una ubicación destacada sobre el tráfico marítimo austral así como una posición a partir de la cual reclamar derechos territoriales sobre una porción de la Antártida.

El 2 de abril de 1982, cerca de cinco mil soldados argentinos desembarcaron en las islas Malvinas. Las primeras reacciones del arco político y de gran parte de la sociedad fueron en el sentido esperado por los militares. A poco de saberse la noticia sobre el desembarco argentino, 10 mil personas se concentraron en la Plaza de Mayo. La movilización que tres días antes protestaba en contra de la dictadura había mutado su humor y ahora saludaba con entusiasmo a quienes se presentaban como héroes y promotores de una gesta nacional. Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada y pronunció un exultante discurso que en tono de desafío a los ingleses concluía con la frase: “si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla”.

El enfrentamiento militar no se desencadenó inmediatamente. Hubo durante algunas semanas distintos intentos infructuosos de resolver el conflicto por vías diplomáticas. Pero ni el gobierno argentino ni el gobierno británico, con su presidenta Margaret Thatcher (la “Dama de hierro”) a la cabeza, aceptaron retirarse de las islas para encarar una negociación. Mientras tanto, se creaba el Fondo Patriótico, una colecta para sostener a las tropas argentinas. Recién a fines de abril tuvieron lugar los primeros combates.

El conflicto bélico y el rol de los medios de comunicación

Una vez anunciada la recuperación de las islas Malvinas, los medios de comunicación entraron en el juego: los diarios y revistas llenaron sus tapas con titulares que elogiaban sin cuestionamientos la decisión gubernamental y anunciaban grandes logros militares. El mismo discurso acrítico se podía escuchar en la mayoría de los programas de radio y televisión.



“Estamos ganando”; “Estamos en guerra”; “Vimos rendirse a los ingleses”; “Vamos a atacar”; “Seguimos ganando”. Estos fueron algunos de los titulares que aparecieron en los números de la revista *Gente* publicados durante abril y mayo de 1982.

Pero la realidad del conflicto poco tenía que ver con lo que se afirmaba o lo que las imágenes mostraban. La cúpula militar había decidido reclutar a los soldados que estaban realizando el servicio militar. El heroísmo de estos jóvenes de veinte años, enviados a combatir a las frías islas del Atlántico Sur sin equipamiento ni preparación adecuada, no era suficiente para enfrentar a una de las mayores potencias militares del mundo. En este sentido, la ocupación de las islas Malvinas no sólo fue una sólo decisión improvisada sino también irresponsable.



Autor de la fotografía: Martín Cleaver



Soldados argentinos en Malvinas.
Autor de la fotografía: Román von Eckstein.

Pese al entusiasmo de gran parte de la población, alimentado por la desinformación sobre la real situación de los enfrentamientos bélicos, el resultado fue entonces el esperado: una rápida derrota argentina. Gran Bretaña envió aproximadamente 30 mil soldados y más de doscientos aviones y buques. El 2 de mayo, uno de los primeros días de combate el submarino nuclear HMS Conqueror (S48) atacó y hundió al crucero ARA General Belgrano junto con trescientos veintitrés de sus tripulantes. Las batallas se sostuvieron por un mes y medio. El saldo final de la desastrosa aventura sería la muerte de 649 soldados argentinos y 255 soldados británicos, así como las terribles secuelas que sufrieron y siguen sufriendo quienes sobrevivieron al conflicto, que han llevado al suicidio a más de 400 ex-combatientes.



14 de junio de 1982. Rendición de Argentina.

Autor de la fotografía: Martín Cleaver

El 14 de junio de 1982, 74 días después de la recuperación de las Islas Malvinas, el conflicto bélico concluyó con la rendición de las tropas argentinas. La suerte del Proceso de Reorganización Nacional estaba sellada: el último plan de los militares para recuperar algo de legitimidad que les permitiera seguir gobernando se había agotado. Galtieri abandonó la presidencia y la Junta Militar entró en crisis. La Fuerza Aérea y la Marina abandonaron el órgano tripartito. El Ejército, que quedó solo y a cargo del gobierno, designó al general Reynaldo Bignone como presidente. Todo indicaba que su mandato sería limitado y que el camino a seguir era el de entablar un diálogo con los partidos y dirigentes políticos para iniciar una transición a la democracia.

“Cadáveres” de Néstor Perlongher

Fragmento del poema “Cadáveres” de Néstor Perlongher, escrito en 1981. Existe una grabación del autor recitando su poema.

Bajo las matas
En los pajonales
Sobre los puentes
En los canales
Hay Cadáveres

En la trilla de un tren que nunca se detiene
En la estela de un barco que naufraga
En una olilla, que se desvanece
En los muelles los apeaderos los trampolines los malecones
Hay Cadáveres

En las redes de los pescadores
En el tropiezo de los cangrejales
En la del pelo que se toma
Con un prendedorcito descolgado
Hay Cadáveres

En lo preciso de esta ausencia
En lo que raya esa palabra
En su divina presencia
Comandante, en su raya
Hay Cadáveres

(...)

Era ver contra toda evidencia

Era callar contra todo silencio

Era manifestarse contra todo acto

Contra toda lambida era chupar

Hay Cadáveres

Era: “No le digas que lo viste conmigo porque capaz que se dan cuenta”

O: “No le vayas a contar que lo vimos porque a ver si se lo toma a pecho”

Acaso: “No te conviene que lo sepa porque te amputan una teta”

Aún: “Hoy asaltaron a una vaca”

“Cuando lo veas hacé de cuenta que no te diste cuenta de nada
... y listo”

Hay Cadáveres

(...)

Saliste Sola

Con el Fresquito de la Noche

Cuando te Sorprendieron los Relámpagos

No Llevaste un Saquito

Y

Hay Cadáveres

Se entiende?

Estaba claro?

No era un poco demás para la época?

Las uñas azuladas?

Hay Cadáveres

La transición democrática

La derrota bélica agudizó el mal humor social para con el gobierno militar. Todos los reclamos que durante las semanas que duró el conflicto habían quedado en segundo plano, volvieron a surgir con más vehemencia: especialmente las denuncias por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos años se volvieron cada vez más numerosas y visibles. Los mismos medios de comunicación que en los años anteriores habían hablado de una “campaña anti-argentina” y que apenas unas semanas antes habían contribuido a la manipulación de la opinión pública durante la guerra, viraron abruptamente su enfoque y pasaron a presentar espectaculares informes sobre la represión del terrorismo de estado.

El reclamo por la salida democrática se tornó masivo. El 16 de diciembre de 1982, cien mil personas confluieron en la Plaza de Mayo, en una marcha convocada por la Multipartidaria de la que también participaron la CGT de Ubaldini y los organismos de derechos humanos. La represión policial fue brutal: un manifestante murió y muchos otros fueron heridos. Sin embargo, la violencia no podía tapar la falta de apoyos. Al gobierno militar sólo parecían quedarle fuerzas para intentar negociar las condiciones en las que traspasaría el poder.

En ese punto, el interés principal de los militares pasó a ser conseguir un compromiso por parte de las próximas autoridades democráticas de que no se revisaría lo actuado por las Fuerzas Armadas en lo que llamaban la “guerra contra la subversión”. Dos medidas puntuales adoptadas durante 1983 apuntaron en esta dirección. Por un lado, la destrucción de toda la documentación existente sobre el plan represivo organizado desde el Estado desde 1976, que fue ordenada en abril de 1983. Por otro lado, la promulgación de la Ley de Pacificación Nacional, también conocida como Ley de Autoamnistía, en septiembre del mismo año, que impedía la apertura de juicios contra el personal militar y civil involucrado en la “lucha antisubversiva”.

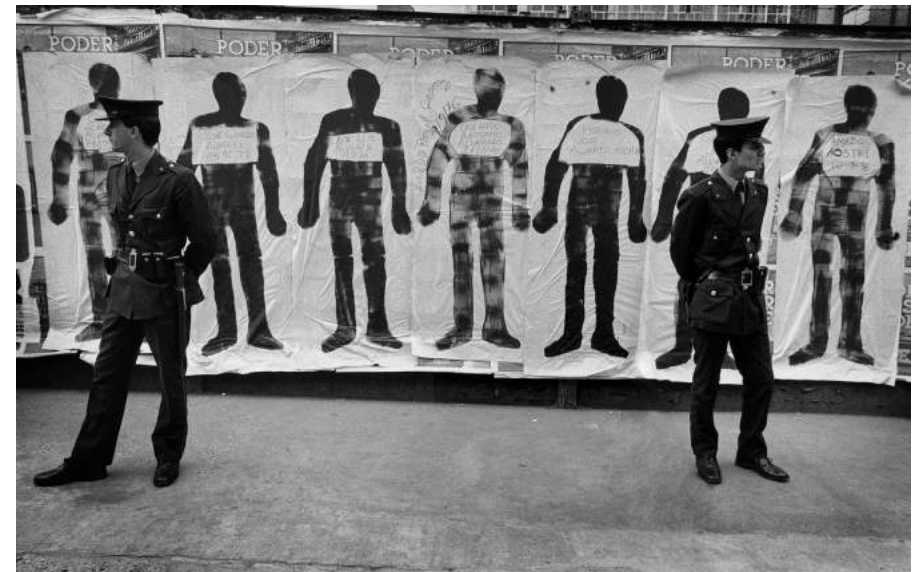
La Ley 22.924 de Pacificación Nacional o Ley de Autoamnistía fue el mecanismo legal por el que las Fuerzas Armadas buscaron evitar el juzgamiento de sus crímenes. Fue derogada una semana después del retorno democrático, el 22 de diciembre de 1983.

Mediante la ley, los militares no sólo se auto-otorgaban un perdón oficial por los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino que justificaban sus acciones con el argumento de haber librado una “guerra” contra el “terrorismo subversivo” e incluso prohibían la realización de acciones legales por otros delitos comunes (robos, extorsiones) cometidos durante el terrorismo de estado.

Artículo 1º — Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.

Artículo 5º — Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores.

Los dirigentes de los principales partidos políticos se negaron a aceptar estas condiciones, aunque las negociaciones continuaron. El gobierno definió el calendario electoral con la expectativa de poder negociar con quien ganara las elecciones, antes de la entrega efectiva del mango. Pero las especulaciones militares se acabaron el 30 de octubre de 1983, con el importantísimo triunfo del candidato de la UCR Raúl Alfonsín (obtuvo el 52% de los votos). El candidato de la UCR había basado su campaña en la contraposición entre el régimen dictatorial y la futura democracia, prometiendo el juicio a las Juntas Militares. El 10 de diciembre asumió la presidencia. Era el fin de la etapa más violenta y dolorosa de la historia argentina.



Siluetas y canas. Esta fotografía de Eduardo Gil retrata la experiencia artística *El Siluetazo*, realizada durante la tercera Marcha de la Resistencia organizada por las Madres de Plaza de Mayo (21/22 de setiembre de 1983).

Bibliografía

- Águila, Gabriela: “La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales”, en Águila, Gabriela y Alonso, Luciano: *Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur* (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2013), 97-122.
- Aspiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo M. y Schorr, Martín: *El nuevo poder económico en la argentina* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2003).
- Basualdo, Eduardo M.: *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2006).
- Basualdo, Victoria: “Complicidad patronal-militar. Los casos de Acidnar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, *Engranajes (revista de la FETIA)*, n° 5 (edición especial), marzo de 2006.
- Buch, Esteban: *Música, dictadura, resistencia. La Orquesta de París en Buenos Aires* (Buenos Aires: FCE, 2016).
- Burkart, Mara: *De Satiricón a Humor: Risa, cultura y política en los años setenta* (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2017).
- Canelo, Paula: *La política secreta de la última dictadura militar (1976-1983)* (Buenos Aires: Edhasa, 2016).
- Carassai, Sebastián: *Los años sesenta de la gente común* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2013).
- D’Antonio, Débora y Eidelman, Ariel: “Antecedentes y genealogía de la historiografía sobre la historia reciente argentina”, *Nuevos Mundos. Mundos Nuevos*, Cuestiones del tiempo presente, puesto en línea el 14 de octubre de 2013.
- Feld, Claudia y Franco Marina (editoras): *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la postdictadura* (Buenos Aires: FCE, 2015).
- Franco, Marina: *El final del silencio* (Buenos Aires, FCE, 2017).
- Lorenz, Federico: *Malvinas. Una guerra argentina* (Buenos Aires: Sudamericana, 2009).
- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente: *La dictadura militar 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración democrática* (Buenos Aires: Paidós, 2006).
- Oberti, Alejandra y Pittaluga, Roberto: *Memorias en montaje. Escrituras sobre la militancia y pensamientos sobre la historia* (Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2006).
- Pittaluga, Roberto, “Imágenes(d)ehistoria. Unamiradasobrelosfragmentos visuales de la última dictadura en la Argentina”, *Contenciosa*, Año II, n° 3, segundo semestre de 2014.
- Rapoport, Mario: *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia* (Buenos Aires: Booket, 2010).

Tercera parte | 1983-2011

**Los límites de la democracia: entre la
supervivencia del neoliberalismo y la vuelta
al mercado interno**

Presentación

Tras siete años de gobierno militar, el 30 de octubre de 1983 los argentinos finalmente pudieron volver a elegir sus autoridades a través del voto. Había pasado más de una década desde las últimas elecciones, en septiembre de 1973, y el escenario político, social y económico había cambiado profundamente. Por un lado, la principal figura política de la segunda mitad del siglo XX, Juan Perón, había dejado de existir, lo cual modificaba profundamente la escena política nacional. Por el otro, la combinación de la violencia estatal con los efectos de las políticas económicas neoliberales llevadas adelante desde 1976 había dejado su marca. La sociedad del “retorno democrático” estaba muy alejada de la que había acudido a las urnas en 1973: los sueños de transformación social que movilizaron a gran parte de la juventud habían sufrido los efectos de las criminales políticas represivas del Proceso. Idéntica suerte habían sufrido las dirigencias más combativas de muchos sindicatos, los cuales habían visto además disminuir el número de sus afiliados por la desindustrialización del país. La brecha de ingresos se había incrementado, produciendo tensiones y conflictos sociales que no existían diez años atrás, y el extraordinario aumento de la deuda externa limitaba enormemente el margen de maniobra del gobierno democrático, obligándolo a administrar una economía virtualmente hipotecada.

A pesar de las expectativas que se depositaban en la restauración de la democracia y el restablecimiento de las libertades políticas, los cambios estructurales que se habían experimentado durante los años anteriores

no pudieron ser revertidos por los gobiernos que surgieron por el voto popular en las décadas del ochenta y noventa. Antes bien, fue la propia democracia la que experimentó profundas transformaciones políticas, económicas y socioculturales. El papel del Estado, el lugar de los partidos políticos como canal de expresión y demanda de los intereses de amplios sectores de la sociedad, la influencia en la vida de los ciudadanos de los sectores corporativos (como los militares o las empresas y los sectores económicos más poderosos), los derechos de los trabajadores y su capacidad para sostener sus demandas, entre muchos otros elementos, se vieron hondamente alterados en este período. A su vez en los años noventa, los gobiernos democráticos retomaron y dieron continuidad al programa económico de la dictadura. El triunfo de las ideas neoliberales y el apoyo electoral que obtendrían, a pesar del impacto negativo que tendrían sobre gran parte de nuestra sociedad, son un rasgo novedoso que muestra hasta qué punto el país había cambiado.

De todos modos, los límites de los gobiernos democráticos para enfrentar los problemas políticos, económicos y sociales que afectaban al país no implicaron necesariamente un descrédito generalizado sobre las posibilidades de la democracia como sistema político. La crisis general del 2001, una de las más graves de nuestra historia, no tuvo como correlato la interrupción del régimen democrático, como había ocurrido en el pasado. En cierto sentido, la participación de amplios sectores sociales permitió que el sistema fuera ampliado y revitalizado. La Argentina de hoy es resultado tanto de esta crisis como de las formas de intervención que tuvieron gran parte de dichos sectores.

Como veremos, la situación crítica atravesada por el país en 2001 habilitó una salida impensada en los años precedentes: el fortalecimiento de la autoridad política fue de la mano de una reorientación de la actividad económica en la que el centro volvía a ser el mercado interno, lo que suponía una relativa recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. La

salida de la convertibilidad le permitió al Estado recuperar herramientas básicas para ejercer cierto control sobre la economía, mientras que la devaluación del peso (al abandonarse su equivalencia forzada con el dólar) reactivó el comercio exterior. En este contexto, la economía china en expansión se convirtió en el principal destino de nuestras exportaciones.

La formidable recuperación económica lograda a partir de 2002 sostuvo un intento por revertir en parte el legado dejado por la dictadura de 1976 y las reformas neoliberales de los años noventa. El desendeudamiento externo, la restitución al Estado de sus atribuciones para regular la economía y el crecimiento de la inversión pública corrieron en paralelo con la reactivación de los juicios por crímenes contra los Derechos Humanos durante los años setenta y el parcial abandono de las políticas represivas para enfrentar la protesta social. La duradera experiencia kirchnerista (sus doce años continuos en el poder son una marca inédita en nuestra historia desde la Ley Sáenz Peña) articuló y canalizó una serie de demandas que atravesaban nuestra sociedad sin haber encontrado hasta entonces una expresión política sólida.

Sin embargo, las transformaciones operadas en Argentina a partir de 1976 habían dejado una huella profunda, y el escenario político no tardaría en dejar en evidencia tensiones que aún recorren nuestra sociedad. Las políticas redistributivas ensayadas por los gobiernos kirchneristas debieron enfrentar la resistencia de distintos sectores de la sociedad, así como las dificultades inherentes a su estrategia industrialista. En 2015 —es decir, luego del período analizado en este libro— el triunfo electoral de una expresión política tan abiertamente ligada al ideario liberal como el macrismo constituirá una situación inédita, imposible de comprender por fuera de los cambios profundos ocurridos en nuestra historia reciente.

Capítulo 8

Los límites de la democracia política, 1983-2001

Daniel Szabón

El período que va de 1983 hasta 2001 se abre con la esperanza generada por la finalización de la dictadura y la recuperación de la posibilidad de elegir a los representantes de la voluntad popular, y termina con una desilusión generalizada con el sistema electoral y el mecanismo representativo, reflejada en el “voto bronca” y la aparición de consignas como “¡que se vayan todos!”. Un país que esperaba que con el fin del gobierno militar hubiera quedado atrás la época de la represión contra quienes pretendiesen expresar su descontento, verá en diciembre del 2001 como el Estado ejercía nuevamente una violencia criminal contra las demandas de sus ciudadanos.

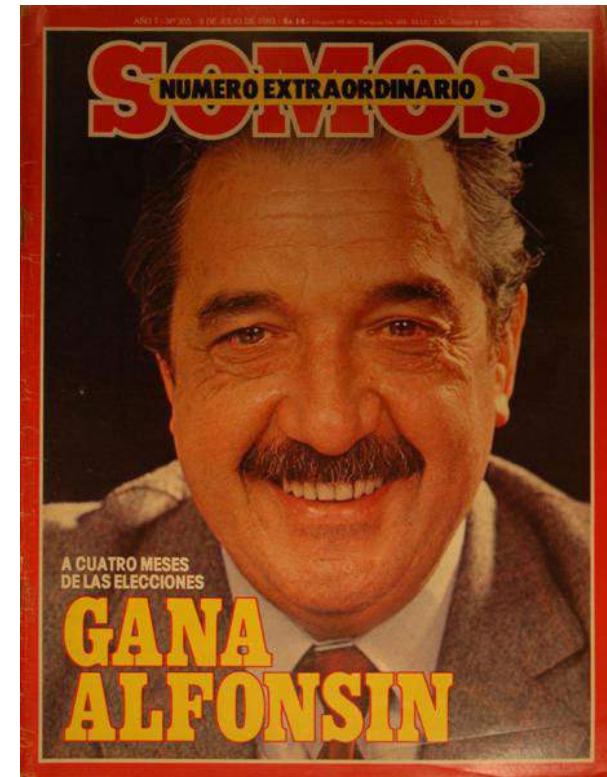
Cada uno de los presidentes que gobernaron en la etapa 1983-2001 marca los tres grandes momentos en los que subdividiremos al período. En primer lugar, la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), en la que las grandes expectativas que despertó la recuperación democrática debieron enfrentar la dura prueba que supusieron las resistencias de los poderes concentrados frente a los intentos de la autoridad política por ponerles límite. Posteriormente, las dos presidencias de Carlos Menem (1989-1999), que fueron los de la continuación y profundización de las

transformaciones económicas y sociales neoliberales que tuvieron lugar durante el Proceso, esta vez legitimadas por el voto popular. El breve gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), finalmente, vio estallar por los aires al sistema político, incapaz de contener la crisis económica y social a la que habían llevado las reformas económicas menemistas.

I. El gobierno de Alfonsín, 1983-1989

La primavera democrática

A pesar de la terrible herencia dejada por la dictadura militar, en la primavera de 1983 una buena parte de los ciudadanos que fueron a votar lo hicieron movidos con la ilusión de que con el restablecimiento de la democracia gran parte de sus problemas hallarían solución. El candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, buscó captar este espíritu, condensándolo en una de sus fórmulas de campaña más exitosas: “con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”, repetía en sus discursos, en un claro mensaje destinado a atraer a los votantes identificados con las banderas peronistas de bienestar social. Por otro lado, su relativa juventud y su distancia con la conducción histórica de su partido (el viejo líder radical, Ricardo Balbín, había fallecido en 1981) le permitían presentarse como la imagen de una política “nueva”, alejada del pasado oscuro que venía a cerrarse. Al mismo tiempo, Alfonsín había sido uno de los dirigentes políticos que menos había celebrado la iniciativa militar de recuperar las Islas Malvinas por la fuerza, lo que le permitió distanciarse del doloroso fracaso de la aventura bélica.



Raúl Alfonsín. En las elecciones de 1983 el candidato radical buscó presentarse como la imagen de la esperanza que despertaba la recuperación democrática.

Fuente: educ.ar.

Por el lado del peronismo, aunque ya no existía la antigua “tendencia revolucionaria” de izquierda de los años ’70 (debido a las políticas represivas de la dictadura, que la tuvieron como blanco principal) sus antiguas divisiones seguían afectando su unidad interna. A esto se le sumaba que debía afrontar la inédita situación de presentarse a elecciones en ausencia de su líder indiscutido, tras el fallecimiento diez años atrás del general Perón. El candidato elegido fue Italo Luder, quien ya había

ocupado brevemente la presidencia del país en 1975 (por licencia médica de Isabel Perón). Luder, algo mayor que Alfonsín, presentaba un perfil más cercano al peronismo “ortodoxo”, vinculado a los sindicatos más importantes de la Argentina industrial (como la UOM), lo cual lo asociaba, a ojos de algunos sectores de la opinión pública, a una época de violencia y enfrentamientos a la que muchos querían dejar atrás.



La recuperación de la democracia. El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín asume el gobierno y habla a la multitud desde el Cabildo de Buenos Aires.

Fuente: Archivo General de la Nación.

Uno de los ejes más importantes de la campaña electoral de 1983 fue el reclamo de justicia contra los responsables de los crímenes cometidos durante el gobierno militar, así como por las organizaciones paramilitares

que actuaron durante el gobierno de Isabel Perón (la Triple A). El movimiento de derechos humanos, uno de los principales bastiones en la resistencia contra la dictadura, ganó en fuerza y visibilidad luego de la catastrófica derrota sufrida en la guerra de Malvinas, y se convirtió en un protagonista central de la vida política durante los años posteriores, cuando los crímenes de la dictadura militar pasaron a ser “revelados” por la prensa masiva y sensacionalista, que buscaba borrar así su complicidad con el gobierno saliente.

En este contexto, el radicalismo se presentó como portador de un conjunto de valores que lo distinguían de su principal competidor, el Partido Justicialista. Frente a la violencia generalizada que marcó la política en los años '70, la UCR se veía a sí misma como abanderada de la paz y la tolerancia, así como encarnación de esperanza y vitalidad (“somos la vida, somos la paz”, era una de sus consignas). Al mismo tiempo, planteó como uno de sus ejes de campaña el compromiso de llevar ante la justicia a los responsables últimos de los delitos aberrantes que conmovían a la opinión pública. De este modo, estratégicamente, el radicalismo se mostraba como una fuerza sin lazos con un doloroso pasado que la mayoría quería dejar atrás, mientras que su rival, el peronismo, aparecía como la continuidad de una etapa de conflictos que lo había tenido como protagonista central.

Durante la campaña, las denuncias públicas de Raúl Alfonsín de un supuesto “pacto sindical-militar”, por el cual el peronismo garantizaría la impunidad de los militares implicados en violaciones a los derechos humanos en caso de triunfar en los comicios, contribuyeron a plasmar esta identificación entre su figura y la causa de la paz y la justicia. Lo mismo ocurrió con la llamada “ley de amnistía”, decretada por el gobernante saliente, Reynaldo Bignone, que buscaba impedir toda acción judicial referida a lo que se denominaba eufemísticamente “la lucha contra la subversión”: mientras que el candidato peronista, Luder, declaraba que la medida era “irreversible”, Alfonsín anunciaba su rechazo, afirmando que en caso de triunfar anularía la medida. El hecho de que fuera Luder quien

firmara en 1975 el decreto de “aniquilación” del accionar subversivo, mientras que Alfonsín era miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una de las organizaciones civiles más activas en la denuncia de los crímenes de la dictadura, reforzaban este contraste.

A pesar de todo para la mayoría de los observadores se descontaba un triunfo del peronismo, como había ocurrido en todas las ocasiones en las que había podido presentarse sin sufrir proscripciones o ilegalizaciones. Sorpresivamente, la victoria fue para la fórmula de la UCR compuesta por Alfonsín y Víctor Martínez, con un impresionante 51,75% de los votos; por primera vez un candidato peronista era derrotado en elecciones presidenciales. De todos modos, el porcentaje obtenido por la fórmula del PJ que integraron Luder y Deolindo F. Bittel fue muy importante, 40,16%, lo que evidenciaba tanto la vitalidad de esta fuerza política como la elevada polarización que existía entonces: entre el peronismo y el radicalismo (y las fuerzas aliadas a ambos) concentraron más del 90% de los votos, lo que muestra a las claras la vigencia de un modelo bipartidista que no sobreviviría a la década siguiente.

El alfonsinismo en triunfo

El período que va desde la victoria electoral del 30 de octubre hasta mediados del año 1985 fue el de mayor vitalidad de la experiencia alfonsinista. Las ilusiones que despertaba la vuelta de la democracia, el desconcierto de la oposición peronista, enfrentada al inédito escenario de una derrota electoral ante sus adversarios históricos, y la energía que mostró el nuevo presidente para enfrentar los distintos desafíos que se le abrían, se tradujeron en una serie de iniciativas diversas que contribuían a fijar la imagen de un gobierno resuelto a transformar la realidad nacional. Son los años del “destape”, cuando el levantamiento de las “listas negras” y normas de censura impuestas por la dictadura permitió una profunda renovación y modernización del campo cultural, que se enriqueció con el regreso de muchos artistas y figuras sometidas en la década anterior a la

persecución, el silenciamiento y el destierro.

Del mismo modo, la intención del gobierno de avanzar contra las fuerzas más reaccionarias y conservadoras quedaron en evidencia con la realización del Congreso Pedagógico Nacional en 1984 (que buscaba renovar los contenidos educativos obligatorios) y el tratamiento de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio, que fueron aprobadas en 1985 y 1987 respectivamente. Los sectores más tradicionalistas de la Iglesia católica resistieron con fuerza estas medidas, realizando movilizaciones masivas contra el gobierno, al que acusaron de “ateo” y de alentar la “pornografía”. La Iglesia también objetaba las políticas del gobierno en materia de derechos humanos, propiciando en su lugar una idea de “reconciliación nacional” que suponía desactivar los juicios a los responsables de los crímenes cometidos durante los años de la dictadura.

El renacer democrático supuso también la posibilidad del regreso de centenares de profesores e investigadores que habían debido dejar el país en los años anteriores, ya sea por persecuciones políticas e ideológicas (que se remontaban a la “noche de los bastones largos” de 1966) o por dificultades económicas nacidas del ahogo presupuestario producto de las políticas neoliberales implementadas desde 1976. La universidad recuperó parte de la vitalidad perdida en las décadas anteriores: aumentó la inversión estatal, muchos programas de estudio se renovaron, se fomentó la integración entre la investigación científica y las actividades docentes y se multiplicó la militancia política a nivel estudiantil.

Al mismo tiempo el gobierno de Alfonsín se enfrentó también con la poderosa corporación sindical. A las pocas semanas de asumir se presentó al Congreso un proyecto de ley (la llamada “Ley Mucci”, por el nombre del Ministro de Trabajo, Antonio Mucci), que intentaba disminuir el poder de los dirigentes en sus sindicatos, limitando su reelección, fiscalizando los comicios por el Estado y otorgándoles mayor representación a las minorías; es decir, un intento similar al proyecto frustrado del también

radical Arturo Illia veinte años atrás. Este proyecto, que buscaba minar las bases del peronismo en el mundo laboral, fue aprobado en la Cámara de Diputados pero terminó derrotado en la de Senadores por un solo voto. A partir de entonces, el enfrentamiento del presidente con el sindicalismo peronista sería una de las marcas de su gobierno.

Igualmente, el proceso de negociaciones con Chile para resolver el diferendo limítrofe en la región del Beagle, en el sur del país, a través de la mediación del Vaticano, apuntaba en el mismo sentido. Frente a la oposición de sectores del peronismo, que objetaban que Argentina aceptara la autoridad de un mediador extranjero, el presidente sometió el tema a una consulta popular, en la que su propuesta triunfó abrumadoramente. En la escena internacional, por otra parte, Alfonsín logró mostrarse con éxito como un abanderado de la causa de la no intervención de las potencias extranjeras en los asuntos latinoamericanos, particularmente frente a la agresiva política de EE.UU. en Centroamérica. En el mismo sentido propuso la conformación de un “club de deudores”, en el que los países que enfrentaban problemas similares por el pago de la deuda externa (Argentina, Brasil, México, Venezuela) articularan una defensa común frente a sus acreedores.

Confrontando con la Iglesia, los militares y el sindicalismo, el alfonsinismo buscó exhibirse en estos primeros años como la expresión del poder de los ciudadanos contra los intereses de los sectores corporativos, frente a adversarios caracterizados como expresión de la violencia y la intolerancia. El relativo éxito alcanzado en esta etapa hizo soñar a algunos con que se estaba gestando un nuevo movimiento político que podría sintetizar lo mejor de las antiguas tradiciones radical y peronista, es decir, los principales partidos populares de nuestra historia. El gobierno encaró ambiciosos proyectos de transformaciones profundas, como el traslado de la Capital Federal al sur patagónico (a la ciudad de Viedma). Sin embargo, el sueño de este “tercer movimiento histórico” no duraría demasiado.

La cuestión militar y la política de derechos humanos

Como hemos visto, la imagen de Alfonsín como representante de la causa de los derechos humanos contribuyó en gran medida a su victoria. Pero a la vez, implicó un compromiso público que condicionó en gran medida sus decisiones de gobierno. Por empezar, a los pocos días de asumir el mando, en diciembre de 1983, derogó la ley de amnistía, tal como había prometido en la campaña. Para la misma fecha, emitió un decreto llamando al enjuiciamiento a los miembros de las tres primeras juntas que habían gobernado desde 1976. Si bien originalmente debían ser juzgados por la justicia militar, en 1984 el Congreso aprobó una ley que habilitaba que actuaran tribunales civiles. Al mismo tiempo, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), un organismo oficial que dependía del Ministerio del Interior pero estaba formado por un amplio espectro de personalidades de la política, la cultura, la ciencia y la religión. La tarea de la CONADEP consistía en centralizar la información relativa a las actividades represivas del Estado en los años anteriores, recogiendo los testimonios de sus víctimas y familiares, y vinculándose con los organismos de derechos humanos.

De este modo, Alfonsín intentaba encauzar desde el Estado la tarea de llevar a la justicia a los responsables de la represión, evitando al mismo tiempo una confrontación excesiva con las Fuerzas Armadas que hiciera peligrar a la recién recuperada democracia. El gobierno comenzó a transitar delicado camino entre satisfacer las demandas de justicia de amplios sectores de la sociedad y enfrentar la resistencia de los militares, que no tardaría en hacerse sentir. Por tal motivo, su estrategia fue desde un comienzo acotar la acción judicial a los miembros de las cúpulas gubernamentales que habían gobernado desde 1976, sin extender los procesamientos al resto de los implicados. Los cuadros de menor jerarquía, es decir, quienes habían sido los ejecutantes de las tareas represivas, debían quedar al margen de las investigaciones judiciales. Esta distinción entre “niveles de responsabilidad” buscaba concentrar las culpas en los sectores

más visibles y desacreditados de la dictadura, mientras que se preservaba a la enorme masa de oficiales de menor graduación, que aún estaban en actividad, y que por lo tanto podían representar una amenaza mucho mayor sobre su gobierno. A pesar de la voluntad inicial del presidente, sin embargo, la acción de los familiares y víctimas de la dictadura llevó a que la justicia avanzara sobre los eslabones intermedios de la cadena de mandos, lo que, como veremos, no tardaría en producir importantes tensiones.



“Nunca Más”. En septiembre de 1984 el escritor Ernesto Sábato entrega al presidente Alfonsín el informe elaborado por la CONADEP.

Fuente: Archivo General de la Nación.

Al mismo tiempo, el gobierno de Alfonsín también promovió la investigación y enjuiciamiento de algunos miembros de las organizaciones armadas de los años '70, buscando de este modo un equilibrio con las causas llevadas adelante contra los militares presentarse que expresara el

rechazo de la sociedad a cualquier tipo de violencia, más allá de su signo ideológico. Entre 1984 y 1985 la justicia condenaría a varios dirigentes sobrevivientes de las organizaciones guerrilleras, particularmente de Montoneros (como Mario Firmenich) y ERP. Esta iniciativa, sumada a las declaraciones de importantes miembros del elenco gubernamental (como el Ministro del Interior, Antonio Tróccoli, quien llegó a afirmar que el origen de la violencia en el país había sido la acción de “la subversión y el terrorismo”), terminaron cristalizando en una imagen que parecía igualar las responsabilidades del Estado con las acciones llevadas a cabo por grupos particulares.



22 de abril de 1985. Los integrantes de las tres primeras juntas militares frente al tribunal, al iniciarse el histórico Juicio a las Juntas.

Fuente: educ.ar.

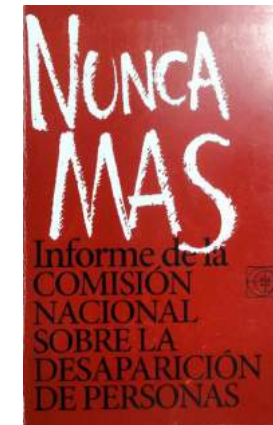
La llamada “teoría de los dos demonios”, como comenzó a ser conocida esta visión de los hechos, presentaba a la violencia criminal del gobierno militar como respuesta a una agresión previa, por parte de las

organizaciones guerrilleras, equiparando a ambos sectores en una imagen común de “violencia”. Tal concepción fue duramente criticada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos, que insistieron en que la responsabilidad del Estado era incomparable a la conducta de grupos o personas particulares, dado que, por su propia naturaleza, los organismos estatales debían encargarse de velar por la defensa y protección de los derechos de las personas. Además, la “teoría de los dos demonios” daba lugar a una engañosa imagen: la de una sociedad que había sido la “víctima inocente” de sectores simétricamente violentos, como si los militantes políticos (tanto los que tomaron las armas como quienes simpatizaron con ellos) no hubieran sido parte del conjunto social.

En septiembre de 1984 la CONADEP entregó el resultado de sus investigaciones: un voluminoso informe en el que se documentaban más de diez mil casos de secuestros, torturas y asesinatos de personas llevadas adelante por las fuerzas de seguridad desde 1975, que demostraban la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, lejos de cualquier “exceso” o “error” cometido por individuos aislados. Las pruebas de este informe (que luego fue editado como libro con el título *Nunca más*) fueron tomadas por el gobierno para su acusación sobre los responsables máximos de la dictadura: en abril de 1985 comenzaría el llamado Juicio a las Juntas, llevado a cabo por la Cámara Federal (es decir, por un poder del Estado), que fue seguido con enorme atención por la mayor parte de la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Los meses siguientes fueron de gran tensión, a medida que se hicieron evidentes las resistencias de los sectores militares a aceptar el examen de la justicia: los rumores de malestar castrense provocaron que el gobierno llamara a un masivo acto en defensa de la democracia. Esta campaña de desestabilización, que incluyó amenazas de bombas a escuelas y otros blancos civiles, llevó a que el gobierno declarase el estado de sitio por sesenta días, al tiempo que arrestaba a periodistas y militares retirados bajo la acusación de conspirar contra la democracia. El presidente llamó a un acto masivo “en defensa

de la democracia”, convocando a todas las fuerzas políticas, alertando contra un posible golpe de estado, al tiempo que anunciaba que ante el estado ruinoso del país se imponía una “economía de guerra”. Fue en este delicado contexto que se celebraron las elecciones legislativas de noviembre de 1985, en las que el gobierno logró un importante triunfo, aumentando su representación parlamentaria (mientras que el peronismo, envuelto en una profunda crisis, volvió a ser derrotado).

Mientras tanto, la justicia seguía su tarea: venciendo el temor y la vergüenza, centenares de testigos se presentaron a narrar los tormentos sufridos a manos de las fuerzas de seguridad durante los “años de plomo”. Finalmente, en diciembre de 1985 llegó la sentencia: la Cámara condenó a prisión perpetua a Videla y Massera, y dictó elevadas sentencias a otros miembros de las juntas militares (como Viola y Lamburschini), aunque absolvió a otros (por ejemplo, a Galtieri). Si bien el fallo de la Cámara fue criticado por varias organizaciones de derechos humanos por las escasas penas impuestas, el impacto de llevar ante la justicia a figuras que se habían convertido en el símbolo de la muerte y el horror fue indudable, y significó una importante victoria política para el gobierno.



El Informe *Nunca Más* fue elaborado por la CONADEP y presentado en 1984.

PERPETUA

Reclusión a Videla y prisión a Massera con inhabilitación absoluta y destitución



9 de diciembre de 1985. La sentencia: condena a cadena perpetua a Videla y Massera, miembros de la primera Junta Militar.

Más allá de la evidente importancia de este juicio llevado adelante por el Estado, los familiares y sobrevivientes de los crímenes de la dictadura no se dieron por satisfechos con las condenas a los máximos responsables, por lo que continuaron acudiendo a la justicia para lograr que el castigo alcanzara también a quienes habían quedado al margen de las investigaciones. Sus demandas judiciales, que implicaron causas abiertas a más de 600 represores, se convirtieron en un problema para el gobierno, ya que la mayoría de los denunciados seguían revistiendo funciones militares, y comenzaron a manifestar de forma cada vez más visible su descontento, señalando abiertamente su negativa a comparecer a declarar ante las citaciones judiciales. Las tensiones nacidas de los reclamos de justicia de un importante sector de la ciudadanía frente a la resistencia de los militares a reconocer el imperio de la ley se sumaban

a la creciente conflictividad salarial por el aumento de la inflación y la parálisis económica, así como a las marchas convocadas por la Iglesia para rechazar el tratamiento de la ley del divorcio. Llegado 1986, la “primavera democrática” alfonsinista parecía haberse esfumado.



Protesta de organismos de Derechos Humanos. Los reclamos de justicia fueron una constante desde los últimos años de la dictadura militar.

Fuente: educ.ar.

Punto Final, Semana Santa y Obediencia Debida

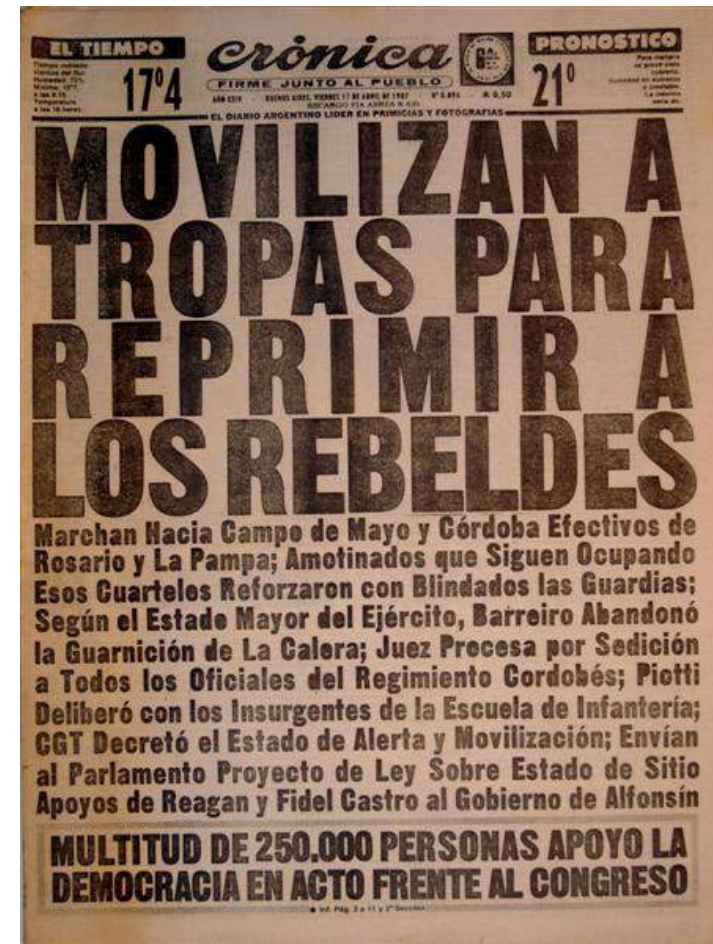
En este contexto, a fines de 1986 el gobierno intentó contener la situación militar a través de la llamada “ley de Punto Final”: por ella se fijaba un tope de sesenta días para la presentación de este tipo de denuncias, luego del cual toda acción penal se declaraba “extinguida”. La ley de Punto Final significó un fuerte golpe a la imagen de Alfonsín como

defensor de la causa de la justicia y los derechos humanos: Un año después del Juicio a las Juntas, el gobierno parecía ceder ante el poder militar, con una medida que se parecía mucho a la “ley de autoamnistía” de la dictadura, que tanto había denunciado Alfonsín en la campaña electoral de 1983. Para colmo, la medida no tuvo el efecto buscado: el malestar de los oficiales investigados en las causas que ya estaban abiertas siguió en aumento, e interpretando que el retroceso del gobierno era un signo de debilidad, buscaron avanzar aún más en su contra.

Así, la negativa de los militares en actividad a responder a las citaciones judiciales desembocó, en abril de 1987, en el primero de una serie de levantamientos militares, que aunque no se proponían abiertamente tomar el gobierno, suponían un desconocimiento de la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas. En la semana santa de 1987, un grupo de oficiales, liderados por el teniente coronel Aldo Rico, se amotinó en el estratégico regimiento de Campo de Mayo. Con sus rostros pintados como camuflaje bélico, se dirigieron a la prensa exigiendo la remoción del comandante del Estado Mayor y la anulación de todos los juicios en curso, al tiempo que reivindicaban su accionar en la represión como parte del “combate contra la subversión”.

La respuesta del gobierno estuvo marcada una vez más por la ambigüedad. Por un lado, convocó a un gigantesco acto público en defensa de la democracia, al que acudieron centenares de miles de ciudadanos de todas las identidades partidarias. Allí, Alfonsín, flanqueado por importantes líderes de la oposición, dio un vibrante discurso sobre la necesidad de preservar las instituciones de la república, anunciando que iría en persona a Campo de Mayo para exigir la rendición de los sediciosos. Por el otro, tanto el discurso que dio al regresar de su encuentro con los militares “carapintadas” (a los que se refirió como “héroes de Malvinas”) como sobre todo las medidas tomadas después, se hizo evidente que se había llegado a un pacto con los amotinados que implicaba un nuevo

retroceso frente a la fuerza militar. La frase que utilizó para cerrar el acto y desmovilizar a la multitud (“la casa está en orden”) chocó contra la evidencia a las pocas semanas.



Semana santa de 1987. Oficiales investigados por crímenes durante la dictadura militar se acuartelan en Campo de Mayo. Comienza el levantamiento.

Fuente: educ.ar.

Efectivamente, en mayo el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que eximía de responsabilidad penal a todos los oficiales de rango menor al de coronel, con el argumento de que los delitos que hubieran cometido fueron en cumplimiento de órdenes superiores. Como se observa, la iniciativa estaba en sintonía con la idea inicial de Alfonsín de acotar la acción de la justicia de acuerdo a los “niveles de responsabilidad” de los implicados. La ley, aprobada en junio de 1987 y conocida popularmente como “ley de Obediencia Debida”, terminó de debilitar la imagen de Alfonsín como defensor de los derechos humanos. Por el contrario, el presidente era acusado por muchos por permitir la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura.

Nuevamente, al igual que ocurrió con el “Punto Final”, la “Obediencia Debida” no resolvió el problema de fondo: la evidente debilidad oficial llevó a que los militares continuarían protagonizando levantamientos en los meses siguientes (en enero de 1988 en Monte Caseros, provincia de Corrientes, nuevamente con la conducción de Aldo Rico, y luego en diciembre de ese mismo año en Villa Martelli, esta vez encabezado por el coronel Mohammed Alí Seineldín), evidenciando su escasa disposición a subordinarse al poder civil. La “cuestión militar” continuaría más allá del gobierno radical: en diciembre de 1990, ya durante el gobierno de Carlos Menem, tuvo lugar un nuevo alzamiento, también protagonizado por oficiales que respondían a Seineldín, el cual, como veremos, fue reprimido por la fuerza.

El último episodio del gobierno alfonsinista vinculado a la compleja relación entre el poder civil y el militar fue el más trágico: en enero de 1989, en plena campaña electoral, un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (una pequeña agrupación política de izquierda, formada por antiguos miembros del ERP y jóvenes estudiantes universitarios, que hasta ese momento no tenía antecedentes de episodios violentos) intentó tomar por la fuerza el Regimiento de Infantería de La Tablada, en el partido de La Matanza. Su argumento era que se estaba preparando un golpe de

estado, organizado por “carapintadas” vinculados al coronel Seineldín, por lo que buscaban defender la democracia tomando el cuartel. La represión del ejército fue feroz (39 de los 40 militantes fueron muertos, algunos presuntamente ejecutados luego de entregarse), y afectó aún más la ya deteriorada imagen del gobierno de Alfonsín como defensor de los derechos humanos.

El delicado panorama económico

Si bien el problema militar fue uno de los principales que tuvo que enfrentar el gobierno radical, su suerte política quedó sellada por el manejo de la situación económica. El escenario que encontró al asumir el nuevo presidente era desolador: siete años de dictadura cívico-militar habían llevado al desmantelamiento de la Argentina industrial que se había ido construyendo desde los años '30, y que ya mostraba signos de agotamiento en la década del '70. La desaparición de gran parte de las pequeñas y medianas industrias y la desindustrialización general provocó efectos terribles en el mundo del trabajo, donde la precarización del empleo y el deterioro salarial fueron la norma, y donde más se sentían los efectos de la elevadísima inflación (que superó el 15% mensual durante 1983). En el otro extremo de la estructura social, la alta concentración de la economía que produjeron las políticas del Proceso fortaleció la posición de los sectores dominantes, que ahora gozaban de un poder de maniobra mucho mayor que en el pasado frente a las posibilidades de regulación del Estado, el cual había quedado fuertemente debilitado por las medidas de corte neoliberal que se aplicaron desde 1976. Un Estado más frágil y débil, sectores propietarios más poderosos y clase trabajadora empobrecida y fragmentada, sintetizan el cuadro social legado por la dictadura, al que hay que agregar la terrible carga de una deuda externa que había incrementado su monto en más de cinco veces, obligando al nuevo gobierno a hacerse cargo del pago de los intereses.

El fracaso del impulso industrialista de Grinspun

Ante este panorama, la primera batería de medidas que adoptó el gobierno de Alfonsín estuvo dirigida a intentar recomponer algunos de los elementos de la economía productiva más erosionados por el Proceso. El primer ministro de Económica, Bernardo Grinspun, intentó llevar a cabo aplicó políticas que buscaban reactivar el mercado interno, apelando a las clásicas medidas de corte keynesiano: aumentos salariales, créditos a las pequeñas y medianas empresas, y control estatal sobre los precios para abaratar el costo de vida, disminuyendo paulatinamente la elevada inflación. Al mismo tiempo, el gobierno llevó adelante políticas asistenciales a los sectores más desprotegidos, que habían incrementado fuertemente su número durante los siete años anteriores: un Programa Alimentario Nacional (P.A.N.) se encargó de repartir cajas con alimentos de primera necesidad para paliar la situación social de los inmensos bolsones de pobreza y marginalidad que rodeaban las principales ciudades del país.

Sin embargo, estas iniciativas pronto chocarían con límites que se revelaron como insalvables, y que demostraban hasta qué punto habían cambiado las condiciones macroeconómicas en el país. Los grandes empresarios, que gozaban ahora de un poder de presión mucho mayor sobre los intentos de regulación por parte de la autoridad estatal, no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de restricción sobre sus ingresos, en particular bajo la forma de controles de precios. A diferencia de las empresas que marcaron el inicio del proceso de industrialización sustitutiva entre 1930 y 1955, grupos económicos como Pérez Companc, Techint o Bridas no obtenían sus principales ingresos de las ventas en el mercado interno, sino que se habían orientado hacia actividades competitivas en el exterior del país (como la petroquímica, la agroindustria o el acero). Por lo tanto, un aumento en el nivel de ingresos de los trabajadores, lejos de significarles un aliciente para aumentar la producción e incrementar sus

ganancias, suponía más bien una elevación en sus costos que no estaban dispuestos a tolerar. Los “capitanes de la industria”, como la prensa llamó a los líderes de los grupos económicos más poderosos, no tardaron en manifestarle al presidente su descontento con las iniciativas del ministro Grinspun, planteándole la necesidad de viraje en la dirección que venía siguiendo el gobierno.

Pero el principal obstáculo que se debió enfrentar en materia económica provenía del frente externo: el pago de los elevados servicios de la deuda desangraba las ya muy golpeadas finanzas nacionales, generando un déficit fiscal que le impedía al Estado contar con los recursos necesarios para cumplir con el papel que le exigía el keynesianismo de las propuestas de Grinspun. Fue así como antes de cumplir su primer año, en septiembre de 1984, el gobierno debió acudir a las recetas tradicionales del ajuste fiscal para equilibrar sus cuentas: devaluación del peso, aumentos de tarifas y restricción a la emisión monetaria, medidas que como es habitual golpearon en el bolsillo de los sectores trabajadores, con el agregado de que no lograron domar a la inflación, que siguió trepando en los meses siguientes, evidenciando los la capacidad de los sectores más concentrados de la economía para imponer sus intereses contra todo intento de regulación estatal.

El comprensible descontento de los sectores trabajadores no tardó en manifestarse en forma de planes de lucha, que respondían al deterioro de su capacidad adquisitiva a partir de la espiralización de la inflación, así como a motivos más ligados a la lógica partidaria. La CGT, convertida en el principal bastión del PJ luego de la inédita derrota sufrida por el peronismo en las elecciones generales, no dudará en usar su fuerza para golpear duramente sobre la legitimidad del gobierno de Alfonsín. Por otro lado, el mencionado proyecto de reforma sindical incrementó la hostilidad del sindicalismo peronista. Luego de la derrota de la “ley Mucci” Alfonsín intentó una política conciliatoria, que incluyó el nombramiento de un peronista como Ministro de Trabajo, pero con escaso éxito. Los trece

paros generales lanzados por la CGT de Saúl Ubaldini son una clara demostración de este fracaso.

El Plan Austral y el Plan Primavera

A comienzos de 1985, con una situación económica delicada, asumió el nuevo ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille. El principal objetivo del nuevo equipo fue contener la carrera de aumentos entre precios y salarios, que había llevado a que la inflación del año anterior llegara a casi un 700%. Como hemos mencionado, en abril, en un contexto convulsionado por los rumores de malestar castrense debido al inicio de los juicios a los militares implicados en violaciones a los derechos humanos, el presidente Alfonsín había convocado a un gran acto “en defensa de la democracia”. Allí, frente a una multitud de ciudadanos de las más diversas procedencias partidarias, llamó a la población a prepararse para tiempos duros, que necesitarían “del esfuerzo de todos”, y anticipó lo que llamó una “economía de guerra”. Había llegado el tiempo del ajuste.

Discurso de Raúl Alfonsín en la Plaza de Mayo Acto “En defensa de la democracia” 26 de abril de 1985

“Hemos heredado una situación difícil, difícilísima. Hemos heredado una economía desquiciada y un Estado devastado, lo que significa que al mismo tiempo que tenemos que operar debemos construir los instrumentos de la operación. Es absolutamente necesario que se parta de esta realidad para comprender la necesidad de realizar todos un esfuerzo...”

En primer lugar, hay un reclamo legítimo de los sectores populares en búsqueda de reivindicaciones justas. Hay, al mismo tiempo, la necesidad de poner orden en la economía, y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar el esfuerzo

de todos. Por último, hay también una tercera demanda que es la necesidad de crecimiento de la economía, porque la recesión, cuando se mantiene en el tiempo, está desesperanzando a los pueblos e impide la realización definitiva de la democracia.

Es decir, en este estado difícil, frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y, al mismo tiempo, tenemos que ordenar la economía y tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones...

Hay que hacer la revolución primero de las expectativas y de las esperanzas en la Argentina. Tenemos que comprender para ello, si vamos a pedir el esfuerzo de todos, cuál es ese esfuerzo, y en consecuencia cuáles son las expectativas que podrán ser satisfechas. Y cuáles las que no podrán ser satisfechas. Y yo les digo hoy, en este acto, que por ejemplo no se puede esperar en este año un mejor nivel de vida, precisamente por la gravedad de esta situación...”

Pocos meses más tarde, en junio de 1985, el equipo económico lanzaría un nuevo y ambicioso paquete de medidas, el llamado “Plan Austral”, que apuntaban simultáneamente en varias direcciones: congelamiento de salarios, tarifas y precios, una reforma tributaria (que incluía el aumento de los aranceles de exportación); reducción del déficit fiscal, disminuyendo subsidios; freno a la emisión monetaria, en paralelo con la baja de las tasas de interés; y la renegociación de la deuda con los acreedores externos. El plan buscaba dejar atrás la imagen de una economía descontrolada y caótica, por lo que se tomó la decisión simbólica de abandonar la vieja denominación de la moneda: en junio de 1985 nació el “austral”, que equivalía a lo que hasta entonces eran mil pesos, y que cotizaba casi en paridad con un dólar.

El Plan Austral tuvo un rápido éxito inicial, que se tradujo en un abrupto descenso de la inflación mensual (pasando de los más de 30

puntos mensuales de junio a 6% en julio y menos de 2% en los meses siguientes) y una consecuente reactivación del consumo, lo cual redundó en un repunte de la actividad económica en general. Esta mejoría de la situación económica se tradujo, en noviembre de ese mismo año, en el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, en las que venció en casi todo el país.



Plan Austral. En junio de 1985 la nueva moneda sustituyó al antiguo peso argentino, muy devaluado por la inflación. En 1991 ocurrirá lo mismo con el propio austral.

Fuente: educ.ar.

Sin embargo, a poco de comenzar el año 1986 la economía volvió a presentar signos inquietantes. La inflación volvió a subir, aunque aún lejos de los niveles anteriores, mientras que las presiones sectoriales sobre el Estado no se hicieron esperar: a los paros generales decretados por la CGT se sumaron las demandas de los sectores empresarios y agroexportadores, que exigían una devaluación cambiaria y una baja en los impuestos. En una economía que había dejado de privilegiar desde hacía tiempo el mercado interno, los grupos más concentrados encontraban muchas mayores ventajas en una devaluación que en proteger el nivel adquisitivo de los trabajadores.

En este contexto, el gobierno, al tiempo que cedía a algunas de las demandas (reduciendo los aranceles de exportación, por ejemplo, y permitiendo aumentos de precios), comenzó a delinear la segunda fase del Plan Austral, que avanzaba en la desregulación de la economía y planteaba nuevas metas de ajuste fiscal, a fin de superar el elevado déficit de las arcas públicas. A tal efecto, el gobierno propuso la privatización de algunas empresas públicas, lo que le generó fuertes críticas por parte de la oposición peronista. Aunque estas privatizaciones no llegaron a ponerse en efecto (esto ocurrirá recién a partir de 1989, en la presidencia de Carlos Menem), su posibilidad ya comenzaba a ser discutida en ámbitos oficiales. La situación comenzaba a deteriorarse nuevamente, y la remarcación de precios se aceleraba, junto con las consiguientes protestas de los sectores populares.

Para mediados de 1988 el cuadro económico se había agravado: imposibilitada de pagar la deuda externa por el deterioro de las cuentas públicas, con una inflación que había vuelto a trepar a las tasas similares a las previas al Plan Austral, y que había llevado a que la moneda perdiera con un gobierno políticamente debilitado luego de las recientes asonadas militares y de la derrota electoral de 1987 (donde había perdido varias

gubernaciones, incluyendo la estratégica provincia de Buenos Aires, a manos del peronista Antonio Cafiero), Alfonsín intentó un nuevo plan de estabilización, el llamado Plan Primavera, lanzado en agosto de 1988. Un régimen cambiario desdoblado (con valores diferenciados para importadores y exportadores) buscaba mejorar el nivel de las reservas, al tiempo que se volvía a intentar ponerle un freno a la escalada inflacionaria con un congelamiento de precios, salarios y tarifas. El empleo de bonos del tesoro para contener las presiones sobre el dólar se reveló moderadamente exitoso en los primeros meses, aunque a costa de sacrificar buena parte de las reservas del Banco Central. Sin embargo, rápidamente el Plan Primavera mostró sus límites: los sectores más poderosos continuaron presionando por una devaluación, al tiempo que los organismos internacionales de crédito manifestaron su desconfianza en las posibilidades de éxito del gobierno, suprimiendo la ayuda externa, y por lo tanto hiriendo de muerte a la ya muy debilitada economía nacional. La inminencia de las elecciones presidenciales, en las que se descontaba la derrota del radicalismo, terminó de generar un cuadro caótico.

Así, llegado el año de 1989, el gobierno terminó de perder el escaso control que hasta entonces tenía sobre las variables económicas: el dólar comenzó a dispararse aceleradamente, incentivado por los trascendidos que indicaban que los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial no auxiliarían al país. Esto llevó a que se produjeran varias “corridas” cambiarias que desfinanciaron aún más las reservas del Banco Central. Los propietarios rurales dejaron de liquidar sus exportaciones, especulando con una devaluación que mejore sus ingresos, y la inflación comenzó una alocada carrera que la hizo superar el 80% mensual en mayo y el 100% en junio, lo que técnicamente implicaba un nivel hiperinflacionarios. La respuesta de los sectores más golpeados por el aumento del nivel de vida fue una ola de saqueos de establecimientos

comerciales, con el saldo de 14 muertos y casi un centenar de heridos. En este contexto de crisis económica y social se celebraron las elecciones presidenciales, adelantadas al mes de mayo por el acelerado debilitamiento político del gobierno (debían celebrarse en octubre). En ellas, como veremos, terminaría venciendo el Partido Justicialista, encabezado por Carlos Saúl Menem.

El renacer del peronismo

Como se dijo, la derrota de 1983 significó un golpe durísimo para el peronismo, que hasta entonces había vencido en todas las elecciones en las que se le había permitido participar desde su fundación, casi cuarenta años atrás. La muerte de Perón en 1974, que había dejado al movimiento profundamente dividido, y la violencia de la represión ilegal después de 1976, golpearon duramente al peronismo; ahora, ya en democracia, debió afrontar la dura tarea de reorganizarse internamente luego de ser vencidos por el alfonsinismo. Gran parte de los viejos líderes del PJ fueron indicados como responsables de la derrota, y paulatinamente fue cobrando fuerza una línea más moderna, la llamada “renovación peronista”.

Paralelamente, el sindicalismo se convirtió en el principal bastión del peronismo entre 1984 y 1987, junto con algunos gobernadores de las escasas provincias donde no había vencido la UCR. Saúl Ubaldini, el combativo líder gremial que había ganado legitimidad en la lucha contra la dictadura desde 1981, se convirtió en la contrafigura frente a la de Alfonsín, a quien enfrentó a través de varios paros generales y parciales, atacando fundamentalmente el flanco más débil del gobierno: la elevada inflación y el deterioro del nivel de vida de los trabajadores.



Saúl Ubaldini. El líder de la CGT fue una de las principales figuras opositoras al gobierno de Alfonsín.

Fuente: educ.ar.

Para 1987, el agotamiento del plan de estabilización propuesto por el ministro Sourrouille y el malestar producido por el retroceso del gobierno ante los militares llevaron a que el peronismo venciera en las elecciones legislativas y de gobernadores. Varios mandatarios provinciales comenzaron a aparecer como potenciales candidatos para los comicios presidenciales de 1989, en particular Antonio Cafiero, electo gobernador de Buenos Aires, y Carlos Saúl Menem, reelecto por tercera vez en La Rioja, ambos miembros de la “renovación”. Ambos se enfrentarían, en julio de 1988, en elecciones internas, en las que, contra todos los pronósticos, el triunfador fue el gobernante de la provincia más pequeña, Carlos Menem, quien se convirtió entonces en el candidato del Partido Justicialista para

las elecciones de 1989.

En esa campaña Menem buscó presentarse como continuador de la tradición histórica del peronismo de justicia social y defensa de los intereses de los trabajadores. Frente a una situación económica que se deterioraba aceleradamente, sus promesas de “revolución productiva” y “salariazó” y su aspecto de caudillo popular cautivaron a una buena parte del electorado, angustiado por la crisis económica. Así, el 14 de mayo de 1989 la fórmula Carlos Menem – Eduardo Duhalde obtuvo el 47,5% de los votos, venciendo al radicalismo (representado por el binomio Angeloz-Casella), que obtuvo el 32,45%. Después de 13 años, el peronismo volvía al poder.

II. El gobierno de Menem, 1989-1999

La victoria del candidato justicialista Carlos Menem en las elecciones presidenciales de 1989 tuvo lugar en un contexto económico gravísimo. La crisis energética que afectaba a todo el país desde 1988, con cortes de luz programados, se intensificó durante el agobiante verano del '89: la falta de agua y la suspensión de servicios de transporte produjeron un creciente malhumor colectivo. Las corridas bancarias y la disparada en la cotización del dólar (que pasó en pocos meses de 15 australes a valer más de 500), llevaron a la cesación de pagos de la deuda externa. Este cuadro se coronó cuando la ya elevadísima inflación dio paso a un estado hiperinflacionario: las remarcaciones de precios (a veces en el transcurso del mismo día) afectaron sobre todo a los sectores más vulnerables, imposibilitados de afrontar sus necesidades más básicas; casi la mitad de la población quedó por debajo del nivel de pobreza en 1989. Como señalamos, la respuesta espontánea fue una ola de saqueos a comercios en todo el país, que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad y por los propios comerciantes, dejando un saldo de 14 muertos y casi un centenar de heridos.

En este contexto, el presidente Raúl Alfonsín adelantó en cinco meses la entrega del mando: el 8 de julio de 1989, en un país económica y socialmente convulsionado, asumía la presidencia Carlos Saúl Menem. Con él volvía al poder el peronismo, luego de las traumáticas experiencias de los años '70 y de la inédita derrota electoral de 1983; regresaba con una figura que se presentaba como caudillo popular, prometiendo un “salariazó” que mejorara las condiciones de los más humildes, y con un discurso nacionalista que prometía la recuperación de la soberanía nacional en las Malvinas.



Alternancia inédita. El presidente saliente, el radical Raúl Alfonsín, le entrega el gobierno al nuevo mandatario, Carlos Saúl Menem, del PJ.

Fuente: Archivo General de la Nación.

La crítica situación económica se convirtió desde el primer momento en el problema más acuciante que debió enfrentar el nuevo gobierno; al mismo tiempo, también tuvo que lidiar con la conflictiva situación en el campo militar, que se resistió durante toda la presidencia de Alfonsín a aceptar las decisiones de la justicia civil en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura. En ambos frentes las políticas de Menem estuvieron marcadas por un espíritu similar: energía y autoridad para tomar decisiones, pero al mismo tiempo un retroceso frente a los intereses de los sectores de poder, como los empresarios o los militares. Menem rápidamente demostró que no le temblaría el pulso para encarar audaces reformas que modificarían profundamente el panorama social y económico del país, favoreciendo precisamente a esos intereses.

La resolución de la cuestión militar

La negativa de diversos sectores de las Fuerzas Armadas a reconocer la autoridad civil, que se venía arrastrando desde la segunda mitad del gobierno alfonsinista, continuó durante los primeros años del nuevo gobierno. Rumores de disconformidad entre los “carapintada” que respondían a Seineldín se escucharon desde comienzos de 1990, y terminaron de estallar en el levantamiento militar de diciembre de ese año en distintas unidades militares, incluyendo el edificio Libertador (sede del Ministerio de Defensa) y el Regimiento de Patricios, ambos en la capital. Este episodio fue mucho más violento que los anteriores, y constituyó un virtual intento de golpe de estado, incluyendo apoyos civiles. A diferencia de lo ocurrido durante el mandato de Alfonsín, en este caso el gobierno logró reprimir la rebelión por la fuerza: el saldo de 14 muertos revela la violencia de los enfrentamientos, en lo que constituyó el último acto de sublevaciones militares contra los gobiernos civiles.

La resolución definitiva del problema militar se apoyó en dos audaces medidas tomadas por el gobierno pocos días después del último

levantamiento carapintada: por un lado, una profunda reforma de las Fuerzas Armadas, en línea con la reforma del Estado que venía produciendo Menem desde el momento de asumir. Medidas como la reducción del personal, la disolución de cuerpos del ejército y la venta de terrenos, llevaron a que los militares redujeran su capacidad operativa, y por lo tanto su peso político. La eliminación del servicio militar obligatorio, en 1994, luego de la muerte del conscripto Omar Carrasco en Neuquén, terminó de completar este achicamiento del papel del ejército en la vida argentina, que venía siendo determinante desde los años '30.

Pero si estas medidas supusieron en cierta medida un avance del poder civil sobre los condicionamientos del sector castrense, la otra razón de la finalización del descontento militar supuso por el contrario un marcado retroceso en el mismo sentido, a partir de la finalización de las investigaciones judiciales por los crímenes cometidos en los años '70. Sin participación del Congreso (como ocurriera con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida) y haciendo uso de las prerrogativas que la Constitución Nacional le concedía, el presidente Menem firmó entre octubre de 1989 y diciembre de 1990 una serie de indultos que beneficiaron a los condenados por violación a los derechos humanos. Figuras como Videla, Massera, Astiz, Camps o Martínez de Hoz salieron en libertad, así como también el líder de Montoneros, Mario Firmenich. También fueron indultados los militares sublevados contra Alfonsín, como Aldo Rico. A pesar de las fuertes críticas de gran parte de la opinión pública, que veía como un retroceso el otorgamiento del perdón a quienes la justicia había encontrado responsables de crímenes atroces, el gobierno defendió la medida como un modo de “cerrar las heridas” del pasado reciente, y propuso “mirar hacia adelante”, actitud que buscó graficar con gestos como la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas o el abrazo público con el almirante Isaac Rojas, símbolo del antiperonismo más visceral de la Revolución Libertadora.

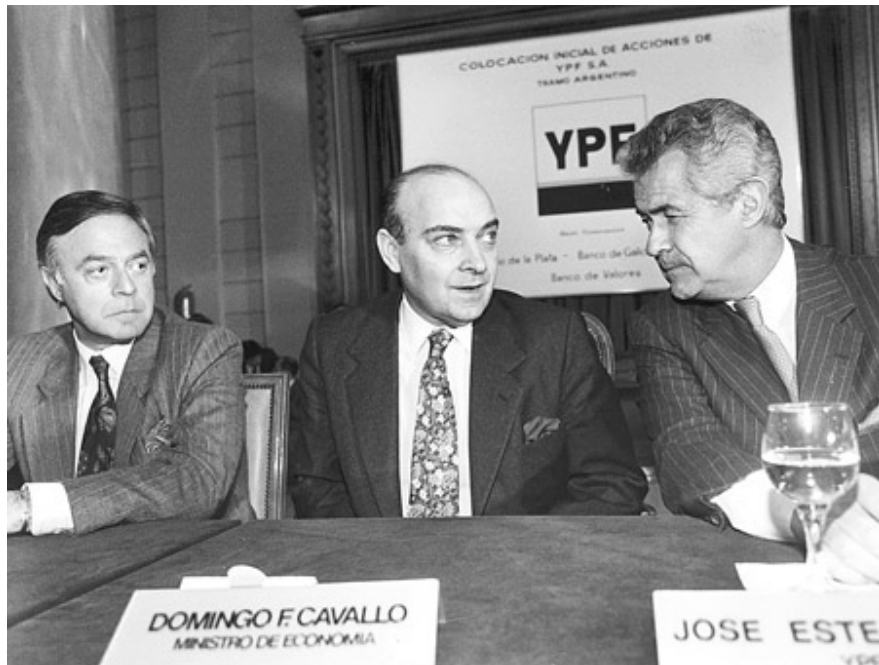
De este modo, los indultos de Menem completaron el ciclo abierto con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que marcaban los límites de la justicia contra el poder militar. Salvo en el caso de los crímenes referidos a la sustracción de bebés, los juicios por causas vinculadas a derechos humanos durante los años '70 quedaron virtualmente paralizados.

La reforma del Estado

Un desafío aún mayor que el de la “cuestión militar” que debió enfrentar el gobierno de Menem correspondía a la gravísima situación económica: un Estado absolutamente desfinanciado, sin capacidad para afrontar sus obligaciones externas e internas, ni para controlar las variables principales de la economía. Si bien durante la campaña electoral Menem se había presentado con un perfil que enfatizaba los rasgos históricos del peronismo con su mensaje de justicia social y bienestar económico, no tardó en mostrar un perfil distinto, marcadamente liberal y favorable a los sectores dominantes. Esto quedó en evidencia apenas asumió, dando un discurso en el que planteaba que “lo que puedan hacer los particulares no lo hará el Estado”, idea que se vio confirmada con la elección de sus primeros Ministros de Economía, ligados a las grandes empresas, y en la adopción de un plan económico consensuado con el poderoso grupo Bunge y Born.

El escenario de descomposición social le sirvió al nuevo gobierno para tomar una serie de medidas impensables anteriormente, y que transformaron profundamente el panorama social y económico: era imperioso realizar una “cirugía mayor sin anestesia”. La Ley de Emergencia Económica y Social, que suspendía subsidios y autorizaba el despido de empleados estatales, se vio complementada con la Ley de Reforma del Estado, que facultaba al gobierno a privatizar distintas empresas estatales. Ambas leyes fueron aprobadas a los pocos meses de la asunción del nuevo presidente, entre agosto y septiembre de 1989.

De este modo, se continuaba y profundizaba el camino iniciado en 1976 por la dictadura cívico-militar, por el cual se pretendía dismantelar al aparato estatal y reorientar el perfil productivo del país. En los años siguientes el Estado fue perdiendo progresivamente una gran cantidad de las funciones que desempeñaba como instrumento de control y regulación de la vida económica y social. El “Estado de Bienestar” fue dando paso así a un “Estado mínimo”, sin capacidades efectivas de intervención. Paradójicamente, un gobierno identificado con el peronismo revertía el fortalecimiento estatal llevado a cabo durante los gobiernos de Perón cuarenta años atrás.



Septiembre 1992, privatización de YPF. El ministro de economía, Domingo Cavallo (centro) y el presidente de YPF, José Estenssoro (derecha), explican la medida.

Fuente: Wikipedia.

Así, en los siguientes diez años se privatizaron empresas públicas de servicios (gas, teléfono, agua, electricidad, correo), transporte (ferrocarriles, subterráneos, Aerolíneas Argentinas) y energía (YPF, YCF, hidroeléctricas, petroquímicas). También se privatizaron o disolvieron empresas siderúrgicas (Somisa, Altos Hornos Zapla), astilleros (Tandano), las terminales de puertos y la flota mercante del Estado, así como las Juntas reguladoras de Carnes y Granos. Los aeropuertos y autopistas fueron concesionados a privados, y lo mismo ocurrió con varias emisoras de radio y la casi totalidad de los canales de televisión.

Para enfrentar el problema del pago de la deuda externa, que tan gravemente había afectado al gobierno de Alfonsín, la nueva administración realizó un fuerte acercamiento hacia EE.UU. Para ello fueron importantes las gestiones del flamante Ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo, un economista con fuertes lazos con los organismos de crédito internacionales. A dos meses de asumir, Menem viajó a EE.UU., y en diciembre de 1989 el presidente norteamericano George Bush visitó Argentina. El abandono de la tradicional “tercera posición” justicialista, así como de la política no-alineada del ex presidente Alfonsín, era evidente.

La convertibilidad y la profundización de la reforma del Estado

A pesar los fuertes recortes en los gastos estatales y del acuerdo alcanzado con los grandes grupos económicos desde 1989, durante los primeros dos años el gobierno no logró estabilizar definitivamente la economía. La inflación, que había descendido luego del brote hiperinflacionario de mayo-julio del '89 (cuando había llegado al 200% mensual), volvió a subir a fines de ese año; en enero de 1990 se volvió a experimentar un pico de hiperinflación. En ese contexto, el nuevo Ministro de Economía, Antonio Erman González, tomó una medida drástica, el “Plan Bonex”, que suponía la incautación de los depósitos en plazo fijo, y su canje forzoso por bonos en dólares a cobrarse en diez años; también llevó adelante otra reducción

del personal administrativo del Estado. La medida afectó fuertemente a los pequeños y medianos ahorristas, pero permitió controlar la inflación y desactivar la especulación sobre el dólar. Sin embargo, una fuerte corrida cambiaría a fines de 1990 provocó la renuncia de Erman González, reemplazado por Cavallo.

Con Cavallo las transformaciones que venía experimentando la sociedad argentina se profundizaron aún más: por un lado, avanzó en las privatizaciones ya iniciadas, incluyendo ahora la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), entidades privadas encargadas de administrar los fondos destinados a jubilaciones y pensiones de los trabajadores, así como las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que privatizaban el tratamiento de los accidentes laborales. Se reformuló además la Carta Orgánica del Banco Central, volviéndolo más autónomo del poder político, y por lo tanto más vinculado al sistema financiero local e internacional.

En octubre de 1991, poco después de su victoria en las elecciones legislativas, Menem firmó el Decreto de Desregulación, que afectaba a actividades como el comercio interior y exterior, el mercado de capitales y la seguridad social, al tiempo que se abandonaba la instancia de negociación colectiva como ámbito privilegiado de acuerdos entre empresas y trabajadores. Se redujeron los aranceles aduaneros, liberalizando aún más la entrada y salida de bienes y capitales al país, lo que terminó exponiendo a la Argentina a los vaivenes de los mercados internacionales.

Discurso de Carlos Saúl Menem en cadena nacional. Decreto de “Desregulación Económica” – 31 de octubre de 1991

“Hermanas y hermanos de mi patria... Hablo al país para anunciar una serie de decisiones históricas, verdaderamente revolucionarias... que apuntan a continuar la transformación de raíz de nuestro sistema

económico y social...

A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. A partir de hoy, sentamos las bases firmes para favorecer un proceso de inversión; de iniciativa económica y de equidad social. A partir de hoy, liberamos energías durante largo tiempo enmasilladas bajo la falsa disyuntiva de un sector público regulador y un mercado incompetente.

Estas medidas no son una receta ideológica, ni abstracta, ni declamatoria. Se trata de decisiones que tienden al bienestar de todos los argentinos y, por consiguiente, se trata de medidas que van afectar favorablemente la vida cotidiana de cada ciudadano, constituyendo un auténtico cambio cultural...

El Estado se fortalece en sus funciones básicas... combatiendo la corrupción y deshaciéndose de los controles y regulaciones inútiles. Por eso mismo, se fortalecerán, especialmente, los organismos de recaudación, como la Aduana y la Dirección General Impositiva. Y se eliminan organismos que gravaban innecesariamente la producción... En este contexto, se ha dispuesto la disolución de los siguientes organismos: Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate; Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate; Dirección Nacional del Azúcar; Junta Nacional de Granos; Junta Nacional de Carnes; Instituto Forestal Nacional; Mercado de Concentración Pesquera; Instituto Nacional de la Actividad Hípica; Corporación Argentina de Productores de Carne; Mercado Nacional de Hacienda de Liniers...”.

Un elemento central de esta profundización del modelo liberal sería la adopción de una nueva relación entre el Estado nacional y las administraciones provinciales y municipales, la llamada “descentralización

del Estado”, un proceso que formaba parte de las reformas exigidas por los organismos de crédito internacional. Argumentando principios federales, el “gasto social” (salud, educación, vivienda, cloacas, etc.) dejaba de ser responsabilidad del gobierno nacional y pasaba a tener que ser solventado por las provincias y municipios. Esta reforma afectó gravemente a las provincias más pobres, imposibilitadas de afrontar por su cuenta los nuevos gastos. Al mismo tiempo, el deterioro de la salud y la educación públicas se tradujo en el florecimiento de entidades privadas que brindaban esos servicios, beneficiadas por la desregulación de sus actividades.

Pero sin dudas, la medida más trascendente del nuevo ministro sería la Ley de Convertibilidad, adoptada en marzo de 1991, por la que se adoptaba una nueva moneda, el peso (equivalente a 10.000 australes), cuya cotización quedaba fijada en paridad uno a uno con el dólar, garantizada por las reservas del tesoro. Esto implicaba que el Estado abandonaba la posibilidad de emitir moneda, lo que limitaba fuertemente sus recursos para afrontar sus obligaciones. A partir de ahora, la economía argentina estaba, en la práctica, dolarizada, y dependía básicamente del ingreso de divisas del extranjero, bajo la forma de inversiones, compra de empresas o préstamos. Esto generaba una situación de altísima vulnerabilidad de nuestra economía: en la medida en que el flujo de capitales hacia nuestro país fuera sostenido, ésta podría sostenerse y crecer; apenas ese ingreso se agotara sobrevendría la parálisis y la crisis. Como veremos, ambas situaciones ocurrieron en los diez años en los que estuvo vigente la convertibilidad cambiaria.

La Convertibilidad tuvo efectos inmediatos en la economía: la inflación disminuyó drásticamente, pasando de más del 2000% de 1990 al 17% en el '92, para mantenerse alrededor del 2% en el resto de la década. Esta estabilización de precios tranquilizó las expectativas de gran parte de la ciudadanía, que venía de atravesar la pesadilla de dos episodios hiperinflacionarios, con sus secuelas de violencia social

y empobrecimiento. La estabilidad permitió que muchos pudieran volver a comprar bienes en cuotas, algo imposible en la alocada carrera de precios y salarios anterior. Al mismo tiempo, la equivalencia del peso con el dólar fortaleció la ilusión de una economía sólida; muchos asalariados pudieron así realizar viajes al exterior que anteriormente les resultaban prohibitivos. La paridad cambiaria sirvió para atraer capitales internacionales, seducidos por la posibilidad de cobrar en dólares en el país, y que compraron gran parte de las empresas públicas privatizadas, así como también muchas empresas privadas. Esto permitió reactivar la economía, que creció aceleradamente en esos primeros años, aunque este crecimiento tuvo efectos sociales desiguales, como veremos. El impacto de la renovación tecnológica que supusieron muchas inversiones extranjeras fue significativo: la computación, la telefonía móvil, la televisión por cable y el acceso a internet, entre otras novedades, contribuyeron a la imagen de superación de una etapa de “atraso” que se quería dejar atrás.

Estos efectos positivos supusieron un aumento en la popularidad del presidente Menem (y de Cavallo), que pasaron a ser vistos como artífices y garantes de la estabilidad lograda.; los resultados de las elecciones legislativas de 1993, en las que el peronismo venció ampliamente en casi todo el país, reflejaron bien ese sentimiento colectivo. Poco después de esa victoria el líder justicialista, que venía insistiendo con su idea de gobernar un nuevo período, acordó con Raúl Alfonsín una serie de puntos consensuados para reformar la constitución nacional. Este acuerdo entre Menem y Alfonsín, conocido como “Pacto de Olivos”, por resultar del encuentro de ambos líderes en la residencia gubernamental, se plasmó en el llamado a elecciones constituyentes a comienzos de 1994.

Reforma constitucional y reelección: el segundo gobierno de Menem

Luego de tres meses de deliberación, la nueva Constitución fue jurada en agosto de 1994. De acuerdo a lo acordado entre el peronismo y el

radicalismo, incluía la reelección del presidente, la reducción del período presidencial a cuatro años, el voto directo con sistema de doble vuelta, la creación de la figura de jefe de Gabinete y del Consejo de la Magistratura. También, en el futuro texto se incorporaría la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que ahora podría elegir a su Jefe de Gobierno (hasta entonces designado por el gobierno nacional), así como el tercer senador por la minoría en cada provincia, de acuerdo al sistema de lista incompleta.

La reforma constitucional permitió la reelección de Menem. En los elecciones presidenciales de 1995, la fórmula Menem-Carlos Ruckauf se impuso con el 48% de los votos. El radicalismo, cada vez más debilitado, quedó en un lejano tercer lugar, con apenas el 17%; el segundo puesto (cerca del 30%) fue para una fuerza nueva, el Frepaso, formada por peronistas que abandonaron el PJ disconformes con el giro liberal del menemismo, junto con otras fuerzas de centroizquierda. Desaparecía así el histórico bipartidismo que había marcado a la política nacional desde la aparición del peronismo en 1945.

A menos de un año de ganar las elecciones, Menem debió enfrentar un desafío surgido del lugar menos esperado: su ministro estrella, Domingo Cavallo, quien desafió públicamente al presidente al rechazar algunas de sus medidas, al tiempo que realizaba fuertes denuncias de corrupción que involucraban a funcionarios públicos. En julio de 1996 Menem le pidió la renuncia, nombrando en su reemplazo al Roque Fernández, hasta ese entonces presidente del Banco Central.

A pesar de la salida de Cavallo de su cargo, el segundo mandato de Menem continuó y profundizó la línea desarrollada desde 1991, con nuevas privatizaciones (el Correo Central, la Casa de la Moneda) y más avances contra los restos de regulación estatal en la economía. A los pocos meses de iniciado su mandato, el Congreso aprobó la Ley de Educación Superior (LES), parte de las políticas de reforma del estado que venía llevando adelante Menem desde su primer mandato. En consonancia con los lineamientos neoliberales que moldeaban estas reformas, la

LES regulaba al conjunto de la educación universitaria (tanto pública como privada) con un criterio eficientista: la calidad académica de cada institución se medía por su rendimiento en cantidad de egresados, y se cedía a comisiones externas la evaluación y acreditación de programas y carreras, poniendo así límites a la autonomía universitaria. Al mismo tiempo permitía que cada universidad decidiera su política de ingresos, lo que abría la puerta a un eventual arancelamiento de los estudios. A pesar de la fuerte oposición que generó entre los miembros de la comunidad universitaria, la LES fue aprobada a mediados de 1995.

Un hito clave en la profundización de la desregulación estatal fue la Ley de Flexibilización Laboral, sancionada en 1995 y reforzada en 1996; con el pretexto de luchar contra el desempleo, se anuló gran parte de la legislación que protegía a los trabajadores, con el objetivo de disminuir el “costo laboral” y así atraer capitales hacia la inversión. Dejaron así de tener vigencia institutos como la negociación colectiva, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado o las indemnizaciones por despido injustificado, y se redujo en gran medida el poder de los sindicatos para defender a sus afiliados e intervenir en las negociaciones salariales.

La reforma laboral significó un enfrentamiento del gobierno con el poder sindical, que hasta el momento había acompañado el proceso de reformas. Al mismo tiempo, los efectos más negativos de las transformaciones operadas en la sociedad comenzaron a cobrar una visibilidad cada vez mayor, a medida que se desvanecían las condiciones que habían permitido sus éxitos iniciales. La economía fue deteniendo su marcha hasta entonces creciente; si bien ya hubo indicadores negativos en 1995 (con la crisis mexicana del “efecto Tequila”, que provocó la retirada de muchos capitales especulativos de nuestro país), a partir de 1997 la recesión se instaló definitivamente. En las elecciones legislativas de ese año el peronismo se vio derrotado por la oposición, por primera vez en toda la década.

La hegemonía de las ideas liberales

Las reformas neoliberales llevadas adelante durante los diez años de gobierno menemista (y luego continuadas durante el breve gobierno de la Alianza) profundizan el camino iniciado durante la dictadura cívico-militar de 1976: reducción del peso del Estado, desregulación del sistema financiero, liberalización del comercio, desindustrialización, polarización social y empobrecimiento de la mayor parte de los sectores trabajadores, son algunos de los rasgos que comparten ambas experiencias. Durante el menemismo se toman medidas que avanzan aún más lejos de lo que lo había hecho el equipo económico encabezado por Martínez de Hoz; un ejemplo relevante en este sentido son las privatizaciones de empresas públicas, incluyendo algunas tan simbólicas como YPF o Aerolíneas Argentinas.

Pero a diferencia de lo ocurrido durante el Proceso, en el caso del menemismo estas profundas transformaciones se dieron en un gobierno democrático que fue elegido y reelegido por el voto popular. Esto no implica que no hayan existido voces que se alzaron en contra, pero la popularidad mantenida por el presidente Menem durante todo su mandato (que incluso le permitió fantasear con la idea de un tercer mandato en 1999) demuestra que sus reformas gozaron de un importante grado de consenso social, impensable décadas atrás.

La caída del Estado de Bienestar, el fin de la Guerra Fría y el “Consenso de Washington”

Para entender esta popularidad de las ideas liberales se deben tener en cuenta tanto factores internacionales como locales en relación al contexto histórico y político que acompañó su implementación. Entre las primeras, debe destacarse que desde mediados de la década del '70 el modelo keynesiano que se venía aplicando desde hacía más de treinta años en gran parte de los países capitalistas venía dando signos de

agotamiento. De allí que en los años ochenta se comenzara a observar un renacimiento de las ideas liberales, en particular en países como EE.UU. y Gran Bretaña, donde por entonces se comenzaron a aplicar reformas que fueron desmantelando gran parte de los atributos del Estado de Bienestar.



Relaciones carnales. El presidente de EE.UU., Bill Clinton, recibe en la Casa Blanca a su par argentino, Carlos Menem.

Fuente: Wikipedia.

Un elemento fundamental en este sentido fue la finalización de la “Guerra Fría” en 1989, a partir de la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del bloque comunista, lo que fue presentado como evidencia de la superioridad del modelo capitalista. Este hecho incidió fuertemente en el triunfo de los modelos basados en ideas liberales: ante la desaparición de la “amenaza comunista”, el capitalismo ya no debían precaverse como antes de que sus efectos más negativos pudieran alimentar la resistencia de los sectores obreros. Ya no era necesario, por lo tanto, atenuar esos efectos a través de instancias de regulación o control.

Fue así que en los años noventa en gran parte del mundo se fue imponiendo un modelo de “pensamiento único”, según el cual sólo las políticas favorables al mercado podrían servir para salir del subdesarrollo. En América Latina este modelo estuvo articulado alrededor de los diez puntos del llamado “Consenso de Washington”, un conjunto de medidas sugeridas (ajuste fiscal, privatizaciones, desregulación del comercio y del ingreso de capitales, etc.) que fue aplicado en los países de la región, en gran medida debido a la presión de los organismos internacionales de crédito, y a la necesidad de los gobiernos de contar con su aprobación para lograr renegociar sus elevadas deudas externas y continuar recibiendo su asistencia financiera.

En Argentina este clima internacional se vio favorecido por las evidencias de que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que venía experimentando serias dificultades ya desde los años '70, parecía agotado hacia finales del gobierno alfonsinista. La deteriorada industria nacional requería constantemente la asistencia de un Estado que carecía de los recursos para afrontar tales necesidades, condicionado en gran medida por las obligaciones de pago a los acreedores externos. El estado ruinoso de muchos servicios públicos (cortes de luz, transportes defectuosos, dificultades para obtener líneas telefónicas, etc.) simbolizaba para muchos ciudadanos la ineficiencia del Estado en general, y llevó a

que vieran con buenos ojos las privatizaciones, como garantía de buen funcionamiento y modernización.

Una fuerte campaña periodística (en muchos casos llevada adelante por quienes se beneficiarían de algunas de estas privatizaciones, como en el caso de canales de TV y radios) también jugó su parte en esta aceptación de gran parte de la sociedad de los beneficios del plan económico. Los argentinos se vieron rápidamente inundados por una serie de adelantos técnicos que hasta entonces parecían imposibles en nuestro país, y que desataron una verdadera fiebre consumista: teléfonos celulares, computadoras, electrodomésticos de avanzada, automóviles importados, hicieron que muchos creyeran que el sueño del ingreso al “primer mundo” estaba al alcance de la mano.

Por último, no puede desconocerse el traumático efecto que tuvieron para enormes capas de la población los episodios hiperinflacionarios de 1989-90. Luego de sufrir la profunda incertidumbre de no tener referencia firme en cuanto a la relación entre sueldos y precios, la estabilidad económica fue vista por muchos como un valor supremo, aun cuando estuviera acompañada por la pérdida de trabajos o el aumento de las desigualdades sociales. En este sentido, la hiperinflación tuvo resultados disciplinadores en la sociedad, tanto o más profundos que el terror político llevado adelante por los militares durante la dictadura de 1976.

Así, el Consenso de Washington fue aceptado con entusiasmo durante el menemismo: quienes pretendían mantener algunos rasgos del antiguo Estado regulador de la economía eran vistos como enemigos del progreso, atados a concepciones vetustas y superadas (“se quedaron en 1945”, solía ironizar Menem). Al mismo tiempo, se vio acompañada por un alineamiento más estrecho que nunca con las políticas de EE.UU., abandonando la tradicional posición neutralista que había adoptado nuestro país en conflictos internacionales. La participación argentina en la “guerra del Golfo” en 1991 (más simbólica que real), en Medio Oriente, así

como las declaraciones del canciller argentino sobre la necesidad de adoptar “relaciones carnales” con la potencia norteamericana, evidencian el grado en que el gobierno de Menem abrazó estas ideas. Dicho compromiso no dejó de tener sus efectos en el país: los atentados terroristas sufridos en la embajada de Israel en marzo de 1992, y luego en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, en julio de 1994, que dejaron más cien muertos en total, son resultado directo de la participación argentina en dicho conflicto bélico. A más de 25 años de producidos estos episodios, la justicia aún no ha determinado quiénes fueron sus responsables.

Los efectos profundos del neoliberalismo

Las políticas económicas neoliberales llevadas adelante desde 1989 tuvieron efectos profundos sobre la economía y la sociedad argentinas. El achicamiento del Estado y las privatizaciones implicaron el despido o retiro forzoso de una gran parte de la administración pública nacional o provincial, que se redujo en más de doscientos mil puestos en esos años. Un resultado similar se produjo en muchas empresas privadas, que “racionalizaron” su personal para volverse más competitivas frente a la competencia extranjera. Esta misma competencia llevó a la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas industriales, que no pudieron enfrentar la ola de productos importados. La desindustrialización de la economía iniciada en los '70 se profundizó, consolidando un nuevo perfil productivo: mientras que la Argentina había sido una economía básicamente rural hasta los años '30, e industrial hasta 1976, ahora el sector principal pasó a ser el de servicios.

Por otra parte, áreas tan sensibles para el desarrollo social como la educación y la salud públicas se vieron duramente afectadas por el ajuste fiscal y la descentralización política, que llevaron a que escuelas y hospitales de la órbita nacional pasaran a la administración de provincias

que no siempre contaban con recursos para solventarlos. Así, aun muchos de quienes lograron conservar sus trabajos se vieron perjudicados por el congelamiento de salarios (empleados estatales, docentes, jubilados) y el encarecimiento de los servicios públicos en general.

Pobreza, desempleo y marginalidad

Estos cambios implicaron un espectacular aumento del desempleo y del empleo precario (es decir, frágil, sin protección gremial ni cobertura social): en sólo 5 años el porcentaje de trabajadores desempleados prácticamente se cuadruplicó, pasando de menos del 5% en 1991 a casi el 20% en 1996. Junto con el desempleo y la precarización del trabajo, la secuela más terrible de la década menemista fue la elevación de los niveles de pobreza y marginalidad social: la pobreza, que había descendido fuertemente por la estabilización de precios, aumentó progresivamente y se consolidó alrededor del 25% de la población, mientras que la indigencia trepó hasta el 7%.

Estas cifras revelan un cuadro aún más impactante cuando se las acompaña con el notable aumento de la brecha de ingresos, que alcanzó niveles nunca vistos en nuestra historia. La diferencia entre la población más rica y la más pobre se amplió un 50%: para fines de la década de 1990, el ingreso de los sectores más acomodados era 30 veces más alto que el de los más pobres, cuando a fines del gobierno de Alfonsín era de 20 veces (y antes de la dictadura de 1976, sólo de 10 veces). La división de la sociedad en dos mitades, con “ganadores” por un lado y “perdedores” por el otro, fue un rasgo central de la Argentina menemista.

Esta polarización social fue acompañada con el espectacular crecimiento en las cifras de la delincuencia, particularmente en los crímenes contra la propiedad. Así, pobreza, desempleo e inseguridad pasaron a ser problemas centrales entre las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos.

El paisaje urbano se modificó profundamente: si bien la pobreza nunca había estado ausente de nuestra historia, en estos años la marginalidad se volvió parte del escenario normal de las principales ciudades del país. Como nunca antes había ocurrido, pasaron a ser imágenes habituales la mendicidad o actividades lindantes (trapitos, limpiavidrios), el cartoneo, las escenas de familias enteras durmiendo en la calle, el pedido de alimentos en cadenas de comida rápida, etc.

El modelo neoliberal volvió a la economía argentina mucho más dependiente del exterior, y por lo tanto más vulnerable a las alternativas del mercado mundial. Esto trajo consecuencias que en muchos casos siguen entre nosotros, como la fuerte transnacionalización de la economía, por la venta a capitales extranjeros de gran cantidad de empresas, no sólo públicas sino también privadas. Muchas empresas argentinas tradicionales (alimenticias como Bagley, Terrabusi, Havanna, Canale, Gándara o Fargo, cervezas como Quilmes y Bieckert) pasaron a manos de multinacionales extranjeras. El importante incremento de la deuda externa (que se duplicó, llegando a más de 120 mil millones de dólares) hizo que se volviera habitual la visita de enviados de los organismos de crédito internacional (FMI, Banco Mundial, etc.), que fiscalizaban que las políticas llevadas adelante se atuvieran a las metas de “disciplina fiscal” que recomendaban.

Oposición política y protesta social

Como se mencionó, la segunda presidencia de Menem estuvo marcada por el incremento de la protesta social y política contra los efectos de las transformaciones económicas. Si bien habían existido resistencias a muchas de sus medidas ya desde comienzos de su primer gobierno (como las manifestaciones contra las privatizaciones de YPF o Aerolíneas, o las de organismos de derechos humanos contra los indultos) el deterioro general de las condiciones económicas llevó a que la protesta adquiriera mayor

masividad y presencia pública a partir de 1995.

Los protagonistas principales de estos reclamos fueron los sectores más afectados por las políticas liberales, en particular quienes dependían directamente de las cuentas públicas. Las protestas de trabajadores estatales (nacionales y provinciales) tuvieron gran importancia, y llegaron a transformarse en verdaderas “puebladas” en provincias como Tucumán, Santiago del Estero o Tierra del Fuego. En el terreno educativo, uno de los más castigados por las políticas neoliberales, los maestros tuvieron un papel protagónico en las protestas: su larga lucha por el aumento de los fondos para la educación y contra la Ley Federal de Educación menemista quedó simbolizada por la “carpa blanca”, espacio de protesta que colocaron frente al Congreso Nacional en 1997, en la que permanecieron durante más de dos años. Los reclamos de la población de tercera edad por el deterioro de jubilaciones y pensiones, reprimidos en ocasiones violentamente, fueron otra expresión de estos efectos del ajuste neoliberal sobre lo que se definía como “gasto social”.

Sindicalismo: fragmentación, aislamiento y ruptura

En el caso del sindicalismo, sus estructuras entraron en crisis con el menemismo. Por un lado, porque las reformas neoliberales produjeron una profunda segmentación de la clase obrera, en la cual también existieron “ganadores” y “perdedores”. Efectivamente, para ciertos trabajadores (sobre todo vinculados al rubro “servicios”, como transporte, informática, telecomunicaciones, etc.) la convertibilidad implicó ventajas reales y tangibles, traducidas en nuevos consumos y cierto ascenso social; se fue conformando así una cierta “aristocracia obrera”, cuyos intereses no coincidían siempre con el resto de los trabajadores, en particular con los desocupados y precarizados. Por otra parte, gran parte de la fuerza de la que gozaba el sindicalismo argentino correspondía a esa Argentina

industrial y estatista que el menemismo venía a desarmar, por lo que muchos sindicatos se vieron debilitados por estas mismas reformas (como los ligados a las actividades metalúrgicas y metal-mecánicas, como UOM y SMATA). Por último, la participación de muchos sindicatos en los beneficios de las privatizaciones (como ocurrió con los poderosos gremios ferroviarios) también hizo que perdieran gran parte de su capacidad de defensa de los intereses de los trabajadores.

Estas transformaciones se hicieron evidentes en la disminución del peso político de los sindicatos, sobre todo en el partido político que históricamente más los había incorporado: el peronismo. Mientras que tradicionalmente los sindicalistas tenían garantizada una elevada cuota de representación en las listas de cargos electorales del PJ (aproximadamente un tercio), ahora, con el menemismo, esa participación se vio fuertemente reducida, reemplazada por figuras provenientes de otros ámbitos, como la farándula o los deportes.

De esta forma, la CGT, que con Ubaldini había logrado primero enfrentar a la dictadura militar y luego poner en jaque al gobierno de Alfonsín, se fragmentó en los años noventa en tres sectores: la CGT “oficial”, que tendió a acompañar las políticas oficiales, el llamado Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), liderado por Hugo Moyano, un conjunto de gremios que no rompieron formalmente con la CGT, pero que a partir de 1995 comenzó a ganar cada vez más presencia al protagonizar huelgas contra las políticas económicas de Menem; por último, una nueva central sindical, fuertemente combativa: la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), que agrupó básicamente actividades vinculadas al empleo público (estatales, docentes, salud). La CTA tendrá gran participación en las protestas contra el menemismo, en episodios significativos como la protesta de los trabajadores de la educación (la mencionada “carpa blanca”); también tendió lazos con el movimiento de trabajadores desocupados, así como con las fuerzas de la oposición, como el Frente Grande.

El movimiento piquetero

Un actor novedoso en estas protestas fue el movimiento de trabajadores desocupados, el cual, al no poder emplear las herramientas tradicionales de la clase obrera (la organización sindical, la huelga, la ocupación de fábricas), adoptó como forma de lucha el corte de rutas o “piquete”. Entre 1996 y 1997 se produjeron dos puebladas en Cutral Có y Plaza Huinul, en la provincia de Neuquén, protagonizadas por trabajadores petroleros despedidos; lo mismo ocurrirá en otras áreas de la misma actividad, en el norte del país (Tartagal, Gral. Mosconi). A partir de allí los cortes de ruta comenzaron a reproducirse en todo el país, llegando también a la región metropolitana. Se fue constituyendo así una nueva forma de organización social, el movimiento piquetero, que sirvió como expresión de demandas y forma de organización de distintos sectores sociales, particularmente los más desprotegidos.

Aunque llegaron a existir instancias de alcance más amplio (como el Movimiento de Trabajadores Desocupados), así como vínculos con algunas centrales sindicales nacionales como la CTA, los grupos piqueteros tendieron a organizarse en función de demandas locales, vinculadas con el territorio en el que se encontraban sus miembros. Este rasgo va de la mano de la crisis de instituciones tradicionales, como partidos políticos y los sindicatos, que anteriormente agrupaban a sus miembros en función de sus ideas e intereses a nivel nacional o provincial. Esta “territorialización” de la acción colectiva también puede observarse en la política tradicional, como queda en evidencia por el peso que comienzan a adquirir las estructuras municipales en la vida política nacional, particularmente las de la provincia de Buenos Aires.

En una sociedad donde el Estado había abandonado gran parte de sus antiguas funciones de garante de derechos, el movimiento piquetero será una de las pocas formas de organización con la que cuenten muchos

ciudadanos para obtener alguna satisfacción a demandas tan básicas como alimentación, salud y vivienda. Lejos de atender a esos reclamos, la respuesta del gobierno menemista frente a las protestas tendió a ser represiva, incluso a costa de vidas humanas. Así, en 1995 fue asesinado por la represión policial el obrero Víctor Choque, en Tierra del Fuego, mientras que dos años más tarde, ocurriría lo mismo en Neuquén con Teresa Rodríguez, empleada doméstica.



Junio de 1996. Los primeros piquetes fueron protagonizados por los habitantes de las localidades más afectadas por la privatización de las empresas estatales.

Fuente: Diario *Clarín*.



Corte de ruta en Cutral Co, junio de 1996.

Fuente: Anred.

El desencanto con la política

Las profundas transformaciones de los años noventa los afectaron de modo desigual a los partidos políticos, pero en cierto modo todos sufrieron una crisis de legitimidad. La erosión de la antigua sociedad basada en el trabajo industrial condujo a un marcado auge del individualismo y un abandono de las viejas formas de acción colectiva, entre las cuales un lugar central lo ocupaban los antiguos partidos. Por otro lado, la lucha política pareció haber perdido gran parte de su atractivo como posibilidad de transformación social y expresión de intereses e ideas en pugna. Estos cambios hundían sus raíces en el pasado, tanto por los profundos efectos desmovilizadores que produjo la feroz represión llevada adelante por la dictadura, como por la desilusión que acompañó el final del gobierno

radical, que tantas expectativas había despertado en ciertas capas de la sociedad.

La ostentación de riquezas y poderío por parte de algunos de los “ganadores” del modelo, también colaboró en esta despolitización de buena parte de la sociedad. Los diversos escándalos por malversación de fondos públicos denunciados en la prensa llevaron a que la discusión política se viera reemplazada por las denuncias éticas o penales. Muchos ciudadanos compartían la idea de que la raíz de los problemas sociales era la corrupción, y no la adopción de ciertas políticas económicas y sociales. Así, cargaban las tintas contra “los políticos” (una categoría genérica que empezó a cobrar cuerpo precisamente en esta década), pero no sobre los principales factores de poder, como los grandes grupos económicos y los sectores sociales más acomodados.

No es de extrañar, por lo tanto, que durante esta década se viviera un fuerte desencanto con la política, que pasó a ser vista más como mecanismo de resolución para demandas puntuales (las más de las veces, ineficiente) que como herramienta de participación colectiva y transformación social. El voto en blanco o la impugnación del mismo creció significativamente en estos años, un indicador de la crisis de legitimidad que afectaba crecientemente al sistema representativo.

Por el lado del peronismo, el marcado giro que implicaron las políticas menemistas respecto a las históricas banderas del movimiento puso en crisis su identidad político-ideológica. Alejado de su tradicional “columna vertebral” sindical, con un discurso que se confundía con el de sus históricos adversarios liberales, el PJ se convirtió más en un mecanismo de administración del poder político que en la expresión de los intereses de un sector definido de la sociedad. En este contexto no es de extrañar el partido incorporara a figuras provenientes del mundo del deporte o del espectáculo (como Palito Ortega o Carlos Reutemann). En una sociedad en la que la discusión política había caído en descrédito, el único requisito para

convertirse en candidato parecía ser tener un rostro conocido; la política parecía haberse retirado de las calles para tener lugar sólo dentro de la TV.

A comienzos de los años noventa muchos dirigentes y militantes peronistas abandonaron el partido, entendiendo que había dejado de cumplir su papel histórico como fuerza de transformación. Entre estos dirigentes se encontraban algunos diputados (el llamado “Grupo de los 8”), que junto con otras fuerzas confluían en 1993 en el Frente Grande, un partido de centroizquierda que a partir de 1994, luego de otras incorporaciones, pasó a llamarse Frepaso (Frente por un País Solidario). Su figura principal era el peronista Carlos “Chacho” Alvarez, junto con dirigentes como José Octavio Bordón y Graciela Fernández Meijide.

Pero sin duda, la fuerza que más sufrió los cambios políticos del período fue el radicalismo, que vio disminuir drásticamente su caudal electoral. Así, pasó del 37% de 1989, cuando obtuvo el segundo lugar, al 17% del tercer puesto en 1995. El catastrófico final del gobierno de Alfonsín, así como la participación del radicalismo en el “Pacto de Olivos”, erosionaron en gran medida las posibilidades del centenario partido de presentarse como una alternativa real al menemismo, y lo sumieron en una profunda crisis, que perdura hasta nuestros días. Desde entonces, su supervivencia política dependió de su capacidad de aliarse a otras fuerzas relativamente afines.

Nace la Alianza

Fue así que en 1997, luego de un acuerdo entre el expresidente Alfonsín y Carlos “Chacho” Alvarez, la UCR y el Frepaso formaron la “Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación”, que se presentó exitosamente en las elecciones legislativas de ese año. En esos comicios el peronismo menemista fue derrotado por primera vez en una década. La Alianza logró capturar buena parte del clima de opinión de la época, que criticaba al gobierno menemista por los escándalos de corrupción que

revelaba cotidianamente la prensa, pero que al mismo tiempo no quería alterar en lo esencial el modelo que venía operando desde 1991, a pesar de que había dado suficientes evidencias de su agotamiento. De este modo, el discurso público de la Alianza hacía hincapié en la necesidad de mantener la convertibilidad pero con “manos limpias”, es decir, eliminando la corrupción de los funcionarios públicos.



En las elecciones de octubre 1999 vencería la Alianza conformada por la UCR y el Frepaso.

Fuente: Wikipedia.

En los últimos años de su gobierno Menem, que mantenía una buena dosis de popularidad, pretendió forzar una segunda reelección que le permitiera optar por un tercer mandato consecutivo. Pero esta vez tuvo que enfrentar la resistencia de todo el arco político, incluyendo importantes

sectores de su propio partido, encabezados por el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde (quien había sido su primer vicepresidente hasta 1991). Duhalde logró impedir el intento de Menem, convirtiéndose en el candidato presidencial por el PJ en las elecciones presidenciales de 1999, acompañado por el ex-cantante y ex-gobernador de Tucumán, Ramón “Palito” Ortega. Por su parte, la fórmula de la Alianza estuvo encabezada por el radical Fernando de la Rúa, perteneciente a la línea más conservadora de la UCR, junto con el frepasista Chacho Alvarez.

III. La presidencia inconclusa de Fernando de la Rúa, 1999-2001

Las elecciones generales de 1999 se celebraron en un contexto económico delicado, en el que ya se adivinaban los efectos negativos del plan económico aplicado desde principios de esa década, y el agotamiento del modelo neoliberal. El aumento del desempleo y el subempleo, así como la creciente polarización de la sociedad, con el consecuente incremento de la pobreza y la marginalidad, eran datos imposibles de soslayar. Sin embargo, las condiciones parecían muy distintas a las que acompañaron el catastrófico final del gobierno anterior, presidido por Raúl Alfonsín, y cuyo recuerdo estaba aún muy fresco en la memoria de miles de argentinos. La continuidad de la “estabilidad” parecía ser una consigna que debía imponerse frente a cualquier diferencia política.

Este dato se hizo evidente en la campaña electoral, en la que ninguna de las principales fuerzas políticas propuso modificar los lineamientos básicos de la “convertibilidad”. Desde la oposición, la Alianza levantó las banderas de la honestidad, la lucha contra la corrupción y el respeto a las instituciones republicanas, frente a los abusos de poder de los que había hecho gala el gobierno menemista. Como decía un recordado spot electoral, lo que el país necesitaba era simplemente “un presidente que no sea corrupto”. Al decir esto, la Alianza expresaba su negativa a cambiar

el rumbo del plan económico; por ello, y para evitar su identificación con la traumática experiencia radical alfonsinista, su campaña remarcó constantemente que “la convertibilidad no se toca”. Desde luego, tal alternativa tampoco se escuchó en boca del candidato del peronismo, Eduardo Duhalde, a pesar de que su discurso apuntó a la necesidad de reindustrializar la economía.



Diciembre de 1999. El presidente Menem le entrega al poder a Fernando de la Rúa.

Fuente: Wikipedia.

El triunfo de la Alianza (con más del 48% de los votos) significó la vuelta del radicalismo al poder; el peronismo, con Eduardo Duhalde, obtuvo el 38%. En diciembre de 1999 asumió el nuevo mandatario, De la Rúa, mientras que el frepasista “Chacho” Alvarez sería su vicepresidente. Por primera vez en la democracia argentina moderna un binomio

conformado por dos fuerzas políticas distintas asumía el Poder Ejecutivo; las tensiones entre ambas no tardarían en salir a la luz.

El costo de la convertibilidad: ajuste fiscal y renegociación de la deuda

Al igual que ocurriera con los dos gobiernos democráticos anteriores, la Alianza debió lidiar con la situación económica en dos frentes: el interno, agravado por los efectos de una recesión económica que se arrastraba desde 1997, y el externo, en el que los pagos de los intereses de la deuda (que se había duplicado durante el decenio menemista) condicionaban fuertemente las deterioradas finanzas públicas. Las presiones de los organismos de crédito se incrementaron, en la medida que las dificultades económicas hacían dudar de las posibilidades de pago del país. La protesta social, ya importante durante los últimos años del menemismo, fue en aumento: antes de su primera semana de gobierno De la Rúa ya contaba con dos muertos, luego de reprimir una manifestación de docentes y empleados públicos en Corrientes, provincia por entonces intervenida y en crisis de pagos. La imposibilidad del gobierno correntino de mantener en funcionamiento la administración provincial era un cuadro similar al que se podía encontrar en muchas otras provincias.

Frente a este panorama, el diagnóstico del gobierno era coherente con el esquema neoliberal vigente durante toda la década: el deterioro de la situación se debía a la corrupción del menemismo y al excesivo gasto público. La respuesta, por lo tanto, debía ser ajustar lo más posible las cuentas. A pocos meses de asumir, en mayo de 2000, se dispuso un recorte salarial de entre un 12% y 15% de los salarios públicos de jubilados empleados públicos, y buscó reducir el presupuesto de las Cámaras del Congreso. Estas medidas estuvieron lejos de producir los efectos buscados, ya que terminaron aumentando la recesión económica. En lugar de ello, comenzaron a erosionar la imagen del nuevo presidente, dado que afectaron en mayor medida a sus propios votantes.

Ante la constante presión por el pago de la deuda, el gobierno de De la Rúa llevará adelante una serie de acuerdos con los organismos de crédito: a fines de 2000 se acordó el llamado “blindaje”, por el cual el país recibió un préstamo de salvataje de 40.000 millones de dólares, a cambio de comprometerse a continuar reduciendo el gasto público (sobre todo en lo referente al pago de jubilaciones y empleados públicos). El ajuste continuaba, mientras que la deuda seguía aumentando y la situación económica continuaba deteriorándose. A pesar de ello, De la Rúa buscaba mostrar una imagen de solidez al hablarle a la población, recalcando las “enormes posibilidades” que se abrían a nuestro país.

Discurso de Fernando de la Rúa en el Congreso Nacional, Apertura de las Sesiones Legislativas – 1 de marzo del 2001

“...Las posibilidades de nuestro país son enormes: podemos producir una amplia gama de bienes y servicios exportables ya que contamos con abundantes recursos naturales y una dotación de mano de obra calificada con logros destacados en los campos de la industria y la ciencia...

Hoy, la solvencia fiscal está garantizada y el Estado cuenta con un blindaje que elimina la posibilidad de que enfrente problemas de liquidez. La Convertibilidad está fuerte, y el sistema financiero es muy sólido y tiene capacidad para aumentar el crédito en el corto plazo.

A su vez, contamos con instituciones laborales modernas que permitirán el desarrollo de amplias ganancias de productividad en el ámbito del trabajo, con impuestos al trabajo y al endeudamiento significativamente menores que en los años anteriores, y con una infraestructura que se desarrollará para permitir una importante reducción de costos y el surgimiento de nuevos sectores productivos. Finalmente, la desregulación y la inyección de competencia en

numerosos mercados está reduciendo los precios y, por lo tanto, los costos para toda la economía, lo que mejorará la calidad de vida de amplias capas de la sociedad, aumentará la rentabilidad de los sectores productivos, estimulará la inversión y permitirá un crecimiento significativo de las exportaciones...”.

La Alianza se parte: el escándalo de la “ley Banelco”

El difícil panorama para el gobierno se vio agravado a mediados del año 2000 por una importante crisis política, cuando estalló un escándalo que resquebrajó a la frágil alianza gobernante. Buscando profundizar la “flexibilización laboral” iniciada por el menemismo, con el argumento de la necesidad de reducir el “costo argentino” (es decir, los derechos de los trabajadores) para así atraer inversiones, el gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto de Reforma Laboral. A diferencia de lo ocurrido en la década anterior, el sindicalismo se opuso a este reforzamiento de la flexibilización, por lo que el bloque peronista, mayoritario en el senado, comenzó a objetar el proyecto. A pesar de estas dificultades, el oficialismo logró trabajosamente aprobar la ley; poco después, sin embargo, comenzaron a circular versiones que denunciaban que el gobierno había buscado sobornar a senadores opositores para conseguir sus votos. El escándalo público a partir de la llamada “ley Banelco” (nombre recibido por la supuesta declaración del Ministro de Trabajo, quien habría declarado que “para los senadores tengo la Banelco”) hizo que el vicepresidente Chacho Álvarez, titular del Senado, encargara una exhaustiva investigación.

No obstante, la iniciativa del líder frepasista chocó con la negativa del presidente De la Rúa. El 6 de octubre de 2000, Chacho Álvarez renunció a la Vicepresidencia. Aunque su renuncia no implicó que el Frente Grande abandonara el gobierno, su salida del cargo debilitó aún más a De la Rúa, quien no sólo se quedaba sin su compañero de

fórmula, sino que veía deteriorada una de las bases de su legitimidad, la lucha contra la corrupción. La Alianza, que había llegado al poder prometiendo continuidad económica y honestidad en los funcionarios, parecía desmentir aceleradamente ambas promesas. La imagen pública del presidente se hundía, mientras se acumulaban los problemas económicos.

La vuelta de Domingo Cavallo

Desde fines de la década un indicador provocaba dolores de cabeza a los gobiernos argentinos: el llamado “riesgo país”, un índice construido por las consultoras internacionales que determinaban el grado de confianza que merecían las economías de los países emergentes para recibir inversiones. En un modelo como el que venía aplicándose en nuestro país desde fines de los años ochenta, la entrada continua de divisas resultaba esencial para el mantenimiento del nivel de actividad; por lo tanto, una elevación del “riesgo país” era leída como indicio de dificultades para la tan ansiada llegada de capitales e inversiones. Por el contrario, lejos de ingresar las divisas venían saliendo a ritmo sostenido de la economía nacional ya desde el segundo gobierno menemista: esta “fuga de capitales” tenía como protagonistas tanto a los inversores extranjeros, que veían agotado el ciclo iniciado en 1991, como a los propios empresarios, deseosos de poner a salvo de cualquier devaluación las ganancias extraordinarias obtenidas durante la convertibilidad.

El incremento del “riesgo país” se debía a distintos factores, tanto locales como internacionales; al igual que lo que ocurriera con los organismos de crédito, el gobierno de la Alianza buscó constantemente emitir “señales” tranquilizadoras en el sentido de que no abandonaría el camino de reformas neoliberales iniciado por Carlos Menem. De este modo, a comienzos del 2001 De la Rúa nombró como Ministro de Economía a Ricardo López Murphy, un radical liberal que pretendió profundizar el ajuste fiscal reduciendo el presupuesto en áreas ya deterioradas, como

salud y educación. La fuerte resistencia que encontró López Murphy en el propio gobierno (tanto entre sectores radicales como frepasistas, que amagaron con renunciar a sus cargos si se seguía adelante con su plan) lo llevó a dejar el cargo apenas dos semanas después de asumir. Cada vez quedaba más en evidencia la profundidad de la crisis, tanto a nivel económico como político.

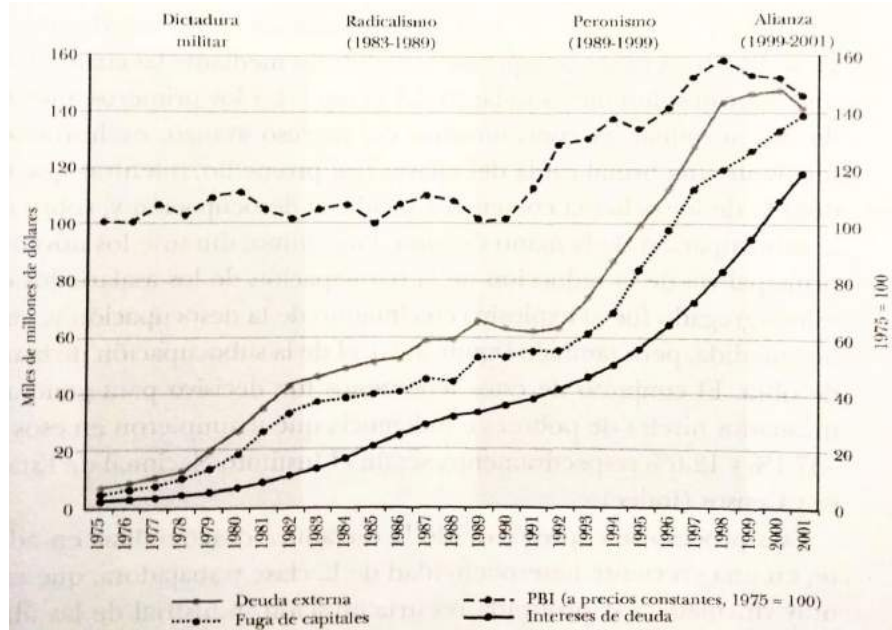
El presidente decidió entonces convocar nuevamente a Domingo Cavallo como Ministro de Economía, en marzo del 2001. Cavallo, de reconocidos vínculos con el capital internacional y local, parecía representar la mejor garantía de continuidad de las políticas de la “convertibilidad”. De la Rúa, cuya autoridad parecía ir en constante declive, le otorgó carta libre a nuevo ministro.

Las medidas que aplicó Cavallo estuvieron en sintonía con los lineamientos de su etapa anterior: por un lado, buscó minimizar el déficit fiscal (a través de la ley de “Déficit Cero”), a costa de nuevas rebajas de sueldos y jubilaciones, además de permitir el pago de las cuentas públicas con bonos. El ajuste también se hizo sentir en las provincias, ya que la Nación congeló las transferencias a sus arcas. Para paliar la grave situación financiera, los gobiernos provinciales empezaron a emitir sus propios bonos para pagar deudas, salarios y demás gastos. La falta de efectivo era tan notoria que en diversos puntos del país comenzaron a surgir “clubes del trueque”, donde los participantes intercambiaban sus productos sin utilizar al dinero como medio de cambio.

Las duras medidas tomadas por Cavallo estaban en sintonía con lo exigido por los organismos internacionales de crédito, por lo que no fue de extrañar que en noviembre del 2001 la Argentina lograra reestructurar su deuda externa. El llamado “Megacanje” permitió postergar los pagos que debían hacerse entre 2001 y 2005 al período 2006-2013, aunque a cambio de un significativo aumento de los intereses. Sin embargo, la crisis se aceleraba, dado que las políticas llevadas adelante, lejos de permitir la

necesaria reactivación económica, profundizaban la recesión, al tiempo que cada nueva renegociación aumentaba exponencialmente el nivel del endeudamiento externo.

Gráfico. Evolución del PBI, la deuda externa total, los intereses pagados y la fuga de capitales, 1975-2001. En miles de millones de dólares y números índices 1975=100.



Fuente: Eduardo Basualdo (comp.), *Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017.

En octubre del 2001, en medio de este panorama de crisis política y económica, se celebraron las elecciones legislativas. La derrota de la Alianza no resultó sorpresiva, al igual que la victoria de la principal fuerza opositora, el justicialismo (Duhalde, su principal figura, resultó electo senador por Buenos Aires, con amplia ventaja). El dato llamativo de estas

elecciones fue la aparición del “voto bronca”, que agrupaba tanto los votos en blanco como los nulos, y que alcanzó un registro histórico, con casi un 26% de los sufragios. Una importante porción del electorado expresó de esta forma su rechazo al sistema político como un todo, sin encontrar ninguna opción que los representara.

Protesta, represión y derrumbe: diciembre del 2001

Como señalamos, desde el comienzo de su mandato el presidente De la Rúa enfrentó distintas manifestaciones de protesta ante la situación social heredada del gobierno de Menem: huelgas (particularmente de los gremios enrolados en la CTA y el MTA), ocupación de fábricas, piquetes en calles y rutas nacionales, fueron parte del escenario habitual. Al igual que lo ocurrido con Menem, la respuesta del gobierno tendió a ser represiva, criminalizando la protesta social. A pocos días de su asunción, en diciembre de 1999, el gobierno ordenó desalojar por la fuerza un corte en el puente que une a las provincias de Chaco y Corrientes con un saldo de dos muertos (Mauro Ojeda y Francisco Escobar) y cuarenta heridos por la represión de la Gendarmería. Lo mismo ocurrió con una protesta en Tartagal el año siguiente, donde falleció el dirigente piquetero Aníbal Verón.

Lejos de paliar la situación social, las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno tendieron a agravarla, por lo que las protestas sociales fueron una constante durante todo el período de la Alianza. La sanción de la ley de Reforma Laboral, fuertemente resistida por los sindicatos, dio lugar a manifestaciones que fueron también duramente reprimidas.

Para fines del 2001 la situación económica parecía no tener retorno; las dudas que generaba el futuro económico hicieron que aumentara la fuga de depósitos bancarios, que ya venía produciéndose desde hacía un

tiempo. La posibilidad de que el gobierno no contara con los dólares necesarios para garantizar la continuidad de la convertibilidad cambiaria se acentuó, lo que dio lugar a nuevas corridas, que a su vez hicieron caer aún más las reservas. Ante este panorama, el 1° de diciembre, el ministro Cavallo tomó una medida desesperada: prohibió el giro de envíos al exterior y restringió el retiro en efectivo de fondos a un máximo de \$250 por persona; se pretendía que las operaciones que hasta ese momento se realizaban en efectivo se hicieran a través del sistema bancario (mediante cheques, tarjetas de crédito o débito, etc.). La idea era simple: evitar que el dinero saliera del cada vez más debilitado sistema bancario, para parar la sangría de fondos que amenazaba con terminar definitivamente con la convertibilidad cambiaria.

El objetivo del “corralito”, como pronto pasó a ser conocida la medida, era contener la situación mientras se esperaba una ayuda externa de los organismos de crédito. Sin embargo, su efecto inmediato fue profundamente recesivo: al limitar la cantidad de circulante, hizo caer aún más la actividad económica, que ya se encontraba en crisis. Los pequeños ahorristas, que utilizaban mayormente dinero en efectivo para sus compras y ventas cotidianas, se vieron imposibilitados de contar con sus fondos, lo cual a su vez afectaba a muchos trabajadores del sector informal, que dependían de esas actividades para su supervivencia. Los estados provinciales, por su parte, incrementaron la utilización de “cuasimonedas” (bonos y letras de cambio) como forma de hacer frente a sus obligaciones.



En 2001, la crisis económica y la imposibilidad de emisión llevó a que proliferaran "cuasimonedas" como bonos y patacones.

Fuente: Wikipedia.

La respuesta social no tardó en llegar, expresándose de modo diverso, de acuerdo a los sectores afectados. A partir de diciembre del 2001, mientras las organizaciones de trabajadores desocupados incrementaron su actividad a través de cortes de ruta, manifestaciones callejeras y reclamos de alimentos a comercios, hipermercados y organismos públicos, los sectores medios se manifestaron bajo la forma de “cacerolazos” callejeros espontáneos, así como ruidosas protestas frente a las puertas de los bancos de quienes reclamaban poder retirar sus ahorros, incluyendo muchos pequeños y medianos empresarios afectados por la medida. Finalmente, en distintas ciudades del país los sectores más desprotegidos comenzaron a producir saqueos a comercios e hipermercados, al igual que como había ocurrido en 1989, aunque ahora en un contexto económico muy distinto. Su causa

no era ya la hiperinflación (por el contrario, los precios bajaban, ante la falta de demanda), sino el plan económico que había venido precisamente a combatir la inflación: la convertibilidad.



19 y 20 de diciembre del 2001. Protestas en el Obelisco porteño contra el gobierno de Fernando de la Rúa.

Fuente: Wikipedia.

En las semanas siguientes las protestas se incrementaron, y los saqueos, inicialmente producidos en provincias como Santa Fe y Entre Ríos, comenzaron a tener lugar en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal. El jueves 19 de diciembre, en medio de fuertes protestas (reprimidas por fuerzas de seguridad) renunció Cavallo; sin embargo, esto no detuvo los reclamos. Ante esta situación, la respuesta del presidente De la Rúa estuvo en consonancia con la política represiva llevada adelante desde

su asunción: esa misma noche decretó el estado de sitio. Esto encendió aún más la protesta, convertida rápidamente en rebelión popular en las principales ciudades del país. Luego de fracasar en su intento de sumar al peronismo en un “gobierno de coalición”, el 20 de diciembre del 2001, De la Rúa renunció a su cargo. Abandonó la Casa Rosada en helicóptero, en una Plaza de Mayo envuelta en humo y sangre, luego de una represión que alcanzó un total de 39 muertos en todo el país.

“¡Que se vayan todos!”

Como vemos, la protesta popular de diciembre del 2001 se nutrió de actores muy diversos. Si bien todos tenían como blanco común al gobierno de la Alianza, perseguían fines muy disímiles, aunque esta disparidad no siempre quedara en evidencia. Mientras los pequeños y medianos ahorristas que exigían que se les devolvieran sus depósitos en dólares estaban en los hechos reclamando por la continuidad de la convertibilidad (ya que fue esa política la que les había prometido que “un peso era un dólar”), las demandas que movilizaban a quienes protagonizaban piquetes y saqueos eran muy distintas, y en la práctica sólo podían satisfacerse con el abandono del modelo económico que había tenido como efectos el deterioro social y el aumento del desempleo. La consigna de unidad que se hizo carne entre los manifestantes ante la brutal represión del gobierno (“¡piquete y cacerola, la lucha es una sola!”) era de imposible realización, y sólo se podía mantener en pie en el marco de la protesta colectiva.

Al mismo tiempo, el grito de guerra de muchos manifestantes (“¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo!”) reproducía esta diversidad, así como la ausencia de una plataforma común de reclamos. La falta de representatividad de los partidos políticos, que se había manifestado en las elecciones de octubre de ese mismo año como “voto bronca”, ahora se expresaba en esta consigna que expresaba claramente el rechazo a quienes se veían como responsables del desastre económico. Sin embargo, esta

bronca no lograba articularse en un objetivo político compartido, y permitía asociar a sectores muy diversos en la medida en que se mantuviera esa misma vaguedad. El florecimiento momentáneo en varios puntos de la Capital Federal de asambleas de vecinos que pretendían sustituir la democracia de partidos por un sistema asambleario de decisiones tomadas colectivamente era reflejo de esta crisis de legitimidad del sistema político.



Diciembre del 2001. Ahorristas protestan contra el "corralito" decretado por el gobierno de De la Rúa.
Fuente: Wikipedia.

Pero más allá de la imprecisión y diversidad de las consignas, los acontecimientos de fines del 2001 muestran una vuelta de la política a las calles, bajo distintas expresiones: desde los movimientos sociales que se venían organizando para exigir satisfacción a sus demandas

desde la década anterior hasta las espontáneas asambleas populares que se conformaban por ciudadanos de distinta procedencia, pasando por quienes simplemente se expresaban con el ruido de sus cacerolas. La sociedad argentina se movilizaba nuevamente, en medio de la conmoción social y política más profunda de nuestra historia.



Cacerolazos. Ahorristas protestan en las puertas de los bancos exigiendo la devolución de sus ahorros.
Fuente: Wikipedia.

Presidencias provisionales, interinatos y estabilización política

La profundidad de la crisis del 2001 se revela en el hecho de que afectó todas las dimensiones de la vida nacional: fue una crisis económica, que marcó el final del ciclo iniciado por las políticas económicas del menemismo, pero que se remontaba en realidad a las transformaciones

llevadas adelante por la dictadura cívico-militar de 1976; fue también una crisis social, producto de esas mismas políticas, que llevaron a que en 2002 la pobreza alcanzara al 50% de la población y la indigencia a más del 20%, mientras que el desempleo afectaba a casi el 25% de los trabajadores; por último, se trató también de una gran crisis política, que afectó no sólo al gobierno nacional sino a la propia idea de representación basada en los partidos, que forma parte de nuestro sistema político desde el siglo XIX.

En este panorama, uno de los pocos hechos auspiciosos fue el que, a diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestra historia, el orden constitucional pudo mantenerse sin que existiera amenaza de intervención de las Fuerzas Armadas para tomar el poder. Como está previsto por la Ley de Acefalía, ante la renuncia del presidente, asumió interinamente el cargo el presidente provisional del Senado, el peronista Ramón Puerta (quien había reemplazado al renunciado Chacho Álvarez luego de las elecciones legislativas de octubre del 2001). Dos días después, la Asamblea Legislativa eligió al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, también del PJ, como presidente por 60 días, luego de los cuales deberían realizarse elecciones anticipadas.

Rodríguez Saá asumió el 23 de diciembre, pero sólo estuvo siete días en el cargo. A pesar de ciertas medidas de emergencia, como la entrega de planes sociales y subsidios para desempleados, y el anuncio de la negativa del gobierno a continuar pagando la deuda externa, las protestas continuaban. El mantenimiento del corralito, sumado a su nombramiento de funcionarios ligados a episodios de corrupción durante el menemismo (como el antiguo intendente de la Capital, Carlos Grosso), llevaron a nuevos cacerolazos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, las versiones que indicaban que el presidente pretendía mantenerse en el poder más allá de los 60 días previstos, hasta completar el mandato de De la Rúa (es decir, diciembre de 2003), hicieron que Rodríguez Saá perdiera gran parte de sus apoyos, en particular en su

propio partido político. El 30 de diciembre, convocó a los gobernadores del PJ a una reunión en la residencia presidencial de Chapadmalal en busca de sustento político; ante la ausencia de los convocados, el presidente volvió a su provincia de origen y transmitió al país su renuncia por cadena nacional. Ese mismo día, horas antes, ya había renunciado también Ramón Puerta a su cargo en el Senado, por lo que la presidencia interina pasó esta vez a manos del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Tres días después, una nueva Asamblea Legislativa se reunió para nombrar un nuevo presidente, el senador peronista Eduardo Duhalde. En su caso, a diferencia de Rodríguez Saá, su nombramiento debía durar hasta diciembre de 2003. Como veremos en el capítulo próximo, también Duhalde debería acortar su mandato y convocar a elecciones anticipadas. La profunda crisis que atravesaba el país estaba aún lejos de encontrar su fin.

Bibliografía

- Basualdo, Eduardo y Leandro Bona, "La deuda externa (pública y privada) y la fuga de capitales durante la valorización financiera, 1976-2001", en Eduardo Basualdo (comp.), *Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017, pp 17-48
- Belini, Claudio y Juan Carlos Korol, *Historia económica de la Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012. Cap. VI: "Desindustrialización, hiperinflación, convertibilidad y crisis (1976-2001)".
- Beltrán, Gastón: "El empresariado argentino frente a la crisis. Alianzas, conflictos y alternativas de salida en la etapa final de la convertibilidad", en Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani (comps.), *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*,

- Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, pp. 295-344.
- Castellani, Ana y Alejandro Gaggero: "Estado y grupos económicos en la Argentina de los noventa", en Alfredo Pucciarelli (comp.), *Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, pp. 263-291
- Dikenstein, Violeta y Mariana Gené: "De la creación de la Alianza a su vertiginosa implosión. Reconfiguraciones de los elencos políticos en tiempos de crisis", en Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani (comps.), *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, pp. 35-79.
- Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach, *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Emecé, 2007 [1998]. caps. IX: "La democracia y el difícil gobierno de la economía (1983-1989)" y X: "Grandes expectativas, grandes decepciones (1989-2001)".
- Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo: "Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre del 2001 en Argentina", en Gerardo Caetano (comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, Buenos Aires, Clacso, 2006, pp. 49-92.
- Jelin, Elizabeth: "Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad", en Juan Suriano (comp.), *Nueva historia argentina. Tomo X. Dictadura y democracia (1976-2001)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 507-558
- Levitsky, Steven, *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Ortiz, Ricardo y Martín Schorr: "La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la 'década perdida'", en Alfredo Pucciarelli (comp.), *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 291-334.
- Palomino, Héctor: "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales", en Juan Suriano (comp.), *Nueva historia argentina. Tomo X. Dictadura y democracia (1976-2001)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 377-442
- Pucciarelli, Alfredo: "Menemismo. La construcción política del peronismo neoliberal", en Alfredo Pucciarelli (comp.), *Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, pp. 23-70
- Pucciarelli Alfredo: "Crisis sobre crisis: la Ley del Déficit Cero. Golpe de mercado retorno a la ultraortodoxia, crisis política y comienzos de la resistencia popular", en Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani (comps.), *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, pp. 161-213.
- Quiroga, Hugo: "La reconstrucción de la democracia argentina", en Juan Suriano (comp.), *Nueva historia argentina. Tomo X. Dictadura y democracia (1976-2001)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 87-154
- Vommaro, Gabriel, "Cuando el pasado es superado por el presente: las elecciones presidenciales de 1983 y la construcción de un nuevo tiempo político en la Argentina", en Alfredo Pucciarelli (comp.), *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 245-289.
- Wainer, Andrés y Mariano Barrera, "El fin de la valorización financiera y la masiva fuga de capitales locales en 2001", en Eduardo Basualdo (comp.), *Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017, pp 49-74.

Capítulo 9

La Argentina reciente. Transformaciones políticas, económicas y sociales en el período 2001-2011

Mauricio Schuttenberg

Luego de los años neoliberales y como consecuencia de ellos, se operó en la sociedad argentina -y latinoamericana- una reconfiguración de fuerzas sociales y políticas que este capítulo intentará poner en escena para marcar algunos posibles ejes de interpretación. El período se inicia con la crisis del 2001 y con la posterior evolución del proceso de recomposición política. Estos hechos marcaron el fin de una etapa de predominio de una forma de concebir el orden económico y político de la sociedad que había generado pobreza, concentración e inequidad y dieron lugar a un nuevo modelo de desarrollo en el cual el mercado interno y la recuperación de la industria han pasado a ocupar un lugar central. A su vez, estas transformaciones locales han ido al compás de la constitución de un bloque de países latinoamericanos que fue ganando en autonomía frente a los Estados Unidos y las grandes corporaciones globales y que ha servido como contrapunto y estímulo para los procesos vividos en la Argentina.

De esta forma, el capítulo concentrará su atención en las cuestiones económicas y políticas de las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011). Durante esos años los

principales problemas estuvieron vinculados, en principio, a cómo reconstruir una legitimidad política en un escenario de fragmentación producto de la crisis del modelo neoliberal en 2001. Asimismo, el rol del Estado volvió a ser el centro de los debates en cuanto a la posibilidad de regular los distintos espacios económicos y políticos, cuestión nodal en la regeneración del tejido social fuertemente dañado por las políticas económicas seguidas desde la dictadura. El relato que se presenta, incluye una reflexión, también, sobre la situación regional de América Latina y la revalorización del MERCOSUR.

I- De la crisis del 2001 a la presidencia de Kirchner

Tal como se adelantó al final del capítulo anterior, la crisis del 2001 se constituyó, indudablemente, en un punto de inflexión en la historia más reciente de la Argentina. Por un lado, los acontecimientos de fines del 2001 condensaron un período previo de cuestionamiento al sistema político por parte de diversos actores políticos, ya que al menos desde mediados de los años noventa las protestas iban en aumento. Por otro lado, la respuesta represora de carácter brutal (26 muertos en la semana del 19 de diciembre del 2001) dada por el gobierno de De la Rúa a la movilización impactó fuertemente sobre las instituciones y la credibilidad de la clase política lo cual terminó provocando una situación de extrema inestabilidad política e institucional. A partir de ese momento poco a poco el sistema político fue recomponiéndose, siempre dentro del marco institucional: si bien el año 2002 mostró una nueva fase de movilización y radicalización en los modos de protestas e impugnación, ese ciclo fue dando paso a un proceso de recomposición gradual de la autoridad estatal, de “pacificación” del conflicto a partir de la estabilización económica, la asistencia social implementada a través de algunos Planes sociales –como el Plan Jefas y Jefes- y la solución progresiva del problema que afectaba a

los sectores medios en relación a los depósitos bancarios.

Esta recuperación y relegitimación de la política tuvo una condición básica: el Estado, a través de sus instituciones, aseguró la continuidad democrática. La sucesión presidencial de fines de diciembre del 2001 y principios de 2002 se hizo siguiendo lo establecido por la Constitución. El Congreso Nacional, a pesar de haber estado fuertemente cuestionado a fines del 2001 continuó funcionando. Incluso en las sangrientas y difíciles jornadas de diciembre del 2001 y enero de 2002, hubo una apuesta generalizada a que la crisis debía encauzarse a través de las instituciones existentes. Lo central de ese momento fue que ninguno de los sectores implicados en el conflicto apeló o intentó un salido no institucional de la crisis. El “que se vayan todos” –frase que se convirtió en símbolo de la protesta generalizada y la impugnación a toda la clase política- al sistema político, pero no anuló el orden institucional.

Por otro lado, fue también en el Estado en donde comenzaron a procesarse las tensiones políticas, en primer lugar las del propio peronismo, actor clave del proceso que se iniciaba. A partir de la asunción de Eduardo Duhalde –senador peronista de la Provincia de Buenos Aires, electo por la Asamblea Legislativa-, la conformación del gabinete y las mesas de negociación que se fueron abriendo fueron las llaves con las que el flamante presidente intentó ordenar al peronismo, apelar a las fuerzas de la oposición y crear consensos mínimos para gobernar.

Duhalde asumió en enero de 2002: los problemas de la crisis económica y financiera, la inestabilidad política y la movilización de amplios sectores sociales eran los principales problemas que debía enfrentar. Desde el inicio de su gestión implementó una estrategia diferenciada y selectiva para con las organizaciones de desocupados basada en lo que diversos analistas llamaron “planes y palos”, que consistía, en términos generales, en dar un lugar a la negociación con algunos sectores del arco piquetero y de represión hacia las organizaciones más cuestionadoras.

No obstante las medidas económicas tomadas y las negociaciones iniciadas con la oposición y con algunos movimientos sociales, el gobierno de Duhalde no logró contener la protesta social, la cual terminó en episodios, nuevamente, de violencia. El 26 de junio de 2002, fueron asesinados, a causa de la represión policial, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, dos jóvenes militantes. Ese día, en la estación Avellaneda – cercana al Puente Pueyrredón- efectivos bonaerenses acribillaron a Darío Santillán mientras asistía a Maximiliano Kosteki, quien había sido herido a pocos metros. Las dos muertes terminaron de desestabilizar al gobierno de Duhalde que debió adelantar el llamado a elecciones presidenciales. En la foto que le sigue se observa la “histórica” tapa del diario Clarín y cómo reflejó dicha represión.



Tapa de *Clarín* del 27 de junio de 2002, dando cuenta de los acontecimientos de Puente Pueyrredón

El llamado a elecciones presidenciales fue para el 27 de abril de 2003. En esa ocasión se impuso la fórmula Carlos Menem-Juan Carlos Romero con el 24,45 %, mientras que Néstor Kirchner-Daniel Scioli obtuvieron el 22,24 %. Ambas fórmulas del peronismo, pasaron a la segunda ronda al no obtener el 45% de los votos válidos. La segunda vuelta debía celebrarse el 18 de mayo, pero al vislumbrar una derrota ante Kirchner, Menem retiró su candidatura con el fin de quitarle legitimidad a su adversario y debilitarlo de cara a la difícil tarea que le esperaba.

II- La presidencia de Kirchner. La recuperación del rol del Estado

La característica distintiva de la etapa que se abre en 2003 con la presidencia de Kirchner es la de la recuperación del Estado como actor clave dotado de legitimidad para dialogar y negociar con actores sociales con intereses sectoriales muchas veces enfrentados entre sí. En general, el kirchnerismo aplicó un modelo flexible de intervención en cada uno de los diferentes ámbitos económicos aplicando en cada caso concreto la política que interpretaban como más conveniente.

Así, el Estado Nacional (considerando tanto la presidencia de Kirchner como de Cristina Fernández) recuperó el control del agua a través de la creación de una nueva empresa Aguas Argentinas, los servicios de correo a través de Correo Argentino, diferentes líneas ferroviarias como el Belgrano Cargas, la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, y la transmisión de los eventos deportivos y culturales de interés general. Además, de los fondos de los trabajadores fueron recuperados vía ANSES.

Las causas de la intervención del estado en cada uno de estos casos responde a causas y situaciones diversas. La recuperación de los servicios del correo, por ejemplo, presenta algunas particulares: el Estado, luego de que los administradores privados declararan que no contaba con recursos para seguir adelante, se hizo cargo del servicio correspondiente. Lo interesante fue que la administración estatal fue positiva y arrojó un superávit operativo

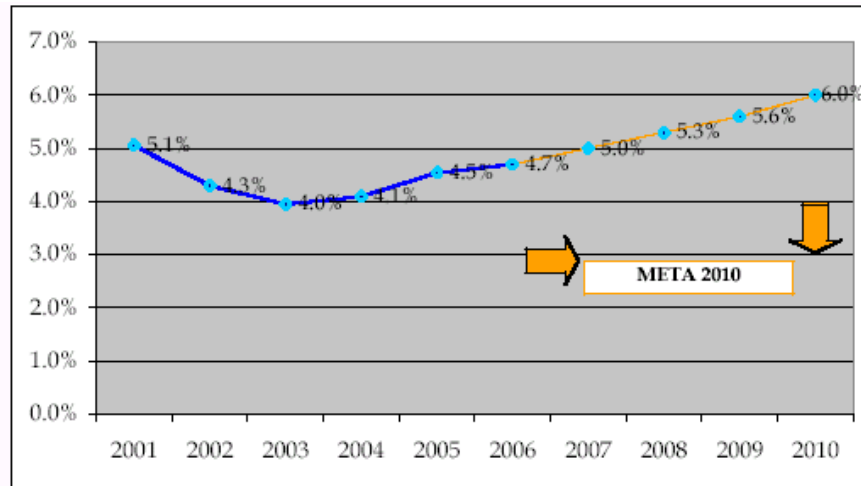
de \$70 millones en el primer año, y \$60 millones en 2005. Esto echaba por tierra uno de los más recurrentes argumentos del neoliberalismo que sostenía la ineficacia estatal y la corrupción intrínseca del mismo.

Asimismo, en marzo de 2006, luego de una larga negociación (que incluía la discusión de un aumento de tarifas, inversiones, etc) entre el Poder Ejecutivo y el grupo francés Suez –concesionario del servicio de Aguas– el contrato fue finalmente rescindido de común acuerdo. El Estado creó entonces una empresa para hacerse cargo del servicio. Otros casos fueron encontrado diversas definiciones en las cuales el Estado recuperaba un rol clave como administrador, accionista o supervisor: el ferrocarril General San Martín, Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio, el espacio radioeléctrico, Aeropuertos Argentina 2000. En este último, el Estado ha recuperado mayor presencia dentro del grupo accionista y ciertos derechos para apoyar o vetar decisiones de la empresa.

Con estos cambios el Estado recuperó rápidamente un margen de autonomía respecto de las peleas corporativas locales recobrando así legitimidad para hacerse cargo de los conflictos intersectoriales. A su vez, también comenzó a sentar una nueva posición frente a las presiones internacionales. Por ejemplo, a un mes de haber asumido inició una firme negociación con el FMI y comenzó a apostar a una posición latinoamericanista en cuanto a las relaciones internacionales abandonando la alineación incondicional con los Estados Unidos de la década del noventa.

La inversión en educación, ciencia y cultural

Otro aspecto significativo fue la inversión estatal en materia educativa y en política científica. En el siguiente cuadro puede observarse la evolución del porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) destinado a educación. De la misma forma, las instituciones científicas se vieron fuertemente apuntaladas con la posibilidad de incorporar científicos a las carreras e incluso repatriar a muchos de los que estaban fuera del país.

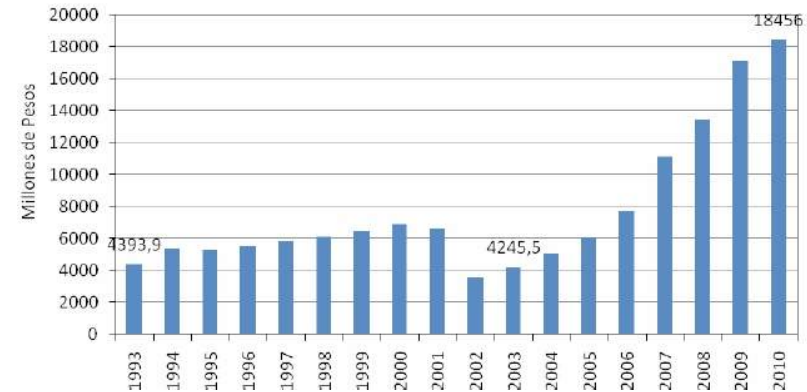


Fuente: CIPPEC, Proyecto de Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo en base a información suministrada por la Coordinación de Estudios de Costos del Sistema Educativo, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, Ministerio de Economía y Producción y el INDEC. Citado en Rivas, Axel (2007)

En materia educativa, una medida clave fue la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizó un aumento del porcentaje del PIB destinado a la educación: el porcentaje indicado para la educación se llevó al 6% y fue luego tomado como piso básico con la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. Los contenidos y orientaciones estratégicas de esta nueva ley, además, posicionan a la educación como un bien público, provisto y garantizado por el Estado.

Evolución Presupuesto Nacional

Educación y Cultura 1993-2010



Además, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández comenzaron con una fuerte política de incremento presupuestario para la educación universitaria, llegando a quintuplicar los fondos asignados desde 2003, fecha a partir de la cual se crearon 10 nuevas Universidades, entre ellas la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En el siguiente cuadro se observa la evolución del Presupuesto Nacional reservado a Educación y Cultura. El gráfico marca la evolución del mismo.

Los Derechos Humanos, nuevamente en el centro de la política

La política de Derechos Humanos llevada adelante desde el 2003 también ha significado un cambio trascendente, en relación a lo actuado por los gobiernos democráticos anteriores. Este era un tema que, desde la recuperación democrática en 1983, había movilizó al conjunto de la

sociedad civil y a una multiplicidad de organizaciones sociales, políticas y culturales. Como se ha explicado en los capítulos anteriores, durante los primeros años de la democracia, el Estado tuvo actitudes contradictorias al respecto. En primer término, promovió un juicio a los militares que durante la dictadura de 1976 ejercieron la represión; pero poco después, y en medio de diversas presiones castrenses, impulsó otras acciones que contradecían aquellos reclamos de justicia, como las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y, finalmente, Indultos a los militares.

El 24 de marzo de 2004 el presidente Kirchner formuló un discurso en cual expresó “vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades (...) No es rencor ni odio lo que nos guía. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino”. En ese mismo evento el presidente ordenó retirar, en pleno acto de conmemoración del aniversario del golpe de Estado de 1976, los retratos de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone de las paredes del Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación, en un gesto que marcó un cambio de actitud de parte del Estado en relación a los derechos humanos.



Momento en que el presidente Kirchner ordena descolgar los cuadros de los represores de la dictadura.

Esto significó una ruptura con las políticas anteriores que, además, colaboró para crear un clima de opinión favorable a la revisión de las llamadas Leyes del Perdón y los indultos. En cuanto a las primeras, finalmente en junio de 2007, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales, y habilitó de esta manera la posibilidad de condenar a muchos militares que actuaron durante los años 70; se trata de casos que ya habían sido analizados durante el juicio a las Juntas Militares en los años ochenta pero que luego habían sido “perdonados” gracias a las mencionadas leyes.

Esta política de búsqueda de justicia visibilizó además la continuidad en democracia del accionar de los grupos represivos. El 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado y desaparecido de su casa en la ciudad de La Plata, Jorge Julio López, un albañil de 77 años que había prestado declaración en el juicio al represor Miguel Etchecolatz, colaborador del entonces jefe de Policía Ramón Camps.

El modelo de desarrollo económico

Desde el año 2003 se dieron una serie de transformaciones económicas y sociales de suma importancia a partir de ubicar al Estado como planificador, orientador y garante de los derechos sociales y del fomento de políticas económicas que impulsaron el mercado interno. Uno de los hechos más salientes, indudablemente, es la creación de más de 5 millones de puestos nuevos de trabajo entre 2003 y 2011 lo que trajo aparejado la reducción de los índices de pobreza e indigencia. En el plano laboral es de destacar el lugar que recobraron las negociaciones colectivas como dinámica de discusión salarial. En este plano el sector asalariado incrementó progresivamente en estos años su participación en el producto generado por la economía, que había caído notablemente en el 2002, pasando desde el 34,6% a casi el 44%. Esto quiere decir que los trabajadores aumentaron, en seis años, 10 puntos porcentuales su participación en el producto. Además se produjo en este período un crecimiento económico promedio del 7,8%, un proceso de desendeudamiento que llevó la relación de la deuda con el PBI de 156% al 36,5%. Este crecimiento sostenido sumado a la quita de deuda conseguida por Argentina disminuyó en términos relativos el peso de esta, dejando así importantes recursos para volcar en inversión y gasto público.

El siguiente cuadro muestra la relación entre Deuda Externa y Producto Bruto Interno. Allí se observa el proceso de desendeudamiento operado desde 2003.



La estrategia del nuevo modelo de desarrollo económico se basó en el sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo que estimuló las exportaciones y desincentivó las importaciones propiciando la recuperación de la industria y el empleo, revirtiendo el proceso de desindustrialización iniciado con la última dictadura militar y acentuado en los años noventa.

El siguiente cuadro muestra la composición de las exportaciones en donde sobresale el peso relativo de las manufacturas de origen industrial. En estos últimos años la industria nacional ha entrado en una fase de crecimiento en donde el sector de minerales no metálicos creció el 156%, el complejo metalmeccánico y la industria textil un 145% cada uno; la industria del calzado un 130% y la industria del software tuvo un crecimiento anual promedio del 23,5%.



Composición de las exportaciones, año 2010. Fuente: Indec, citado en: Tres banderas, Una gran Argentina Instituto de Estudios y Formación política GESTAR, Documento de 2011

Las políticas sociales

Otro eje del desarrollo estuvo dado en el sostenimiento y ampliación de políticas sociales con el objetivo de ampliar la cobertura social y el poder adquisitivo de los sectores populares de forma de afianzar el mercado interno. Las políticas en materia de seguridad social, los aumentos de jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo –a la que se hará referencia en el apartado sobre el gobierno de Cristina Fernández–, las negociaciones colectivas de salarios, y los subsidios a ciertos productos y servicios apuntaron a impulsar el consumo interno como motor del desarrollo y recuperación del tejido productivo.

En materia de programas sociales se implementó el Plan “Argentina Trabaja” cuyo objetivo era la generación de trabajo genuino para aquellos sectores que continúan al margen del mercado de trabajo formal. En esa dirección se crearon más de 1.600 cooperativas y 150.000 nuevos empleos en las localidades y barrios más vulnerables.

A continuación se observa la evolución de los índices de pobreza e indigencia. Cabe acotar que la línea de indigencia, es más baja y define la pobreza extrema. Su valor es el requerido para que un hogar atienda sus necesidades básicas alimentarias, mientras que la línea de pobreza, se calcula mediante el monto de ingresos que precisa un hogar para satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas básicas.



III- La recuperación de la iniciativa política

Kirchner llegó al Gobierno en medio de un proceso de fragmentación política, de crisis de representación y legitimidad de los partidos políticos “tradicionales” que habían estructurado un sistema bipartidario durante gran parte del siglo XX. El desafío que afrontaba era el de atenuar el antagonismo que había surgido del pueblo contra la clase política ¿Cómo romper con ese antagonismo para desplazarlo, transformarlo y articularlo en beneficio de la construcción política propia? En ese marco, los actores sociales surgidos o potenciados a partir de las jornadas de diciembre del 2001 habían tenido en común una alta preocupación por la autonomía

frente al Estado, las patronales y los partidos políticos tradicionales. Esa preocupación se enarbolaba a menudo como bandera, vinculándola con el rechazo generalizado a la dirigencia política, que en su versión más simplista se expresaba como “antipolítica.”

En los primeros pasos de la gestión el nuevo gobierno comenzó a absorber y a dar respuesta a un importante conjunto de demandas circulantes en el entramado social. De esta manera, su política de control de las corporaciones y las empresas de servicios públicos privatizados, el impulso a los juicios a los militares acusados de crímenes en la última dictadura, la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la defensa de los intereses nacionales frente al FMI fueron construyendo un consenso en torno a un conjunto de elementos que la sociedad había exigido históricamente. El gobierno construyó rápidamente su legitimidad de ejercicio en oposición al modelo neoliberal a través de políticas intervencionistas que recuperaban buena parte de las cuestiones que habían permitido la articulación de la protesta.

Mientras Duhalde se había apoyado en la dirigencia tradicional, Kirchner comenzó un acercamiento con distintas corrientes del movimiento piquetero y otros sectores sociales que habían participado de la resistencia al modelo neoliberal también como un modo de ampliar las bases de sustentación de la gestión presidencial. En efecto, el gobierno se mostraba decidido a construir alianzas con parte de los nuevos actores, a condición de que moderaran la modalidad y frecuencia de sus protestas, y asumieran un grado de compromiso con la gestión pública. De esta forma, la expansión de la oferta oficial de recursos a través de múltiples programas sociales incentivaba la búsqueda de vinculación con las nuevas autoridades, no sobre la base de la protesta sino sobre la base de entendimientos políticos y lealtades. Esto contribuyó no sólo a reducir el caudal disruptivo del accionar de estas organizaciones sino también a que las mismas aumentaran de manera muy importante sus recursos,

su capacidad de reclutamiento y su tamaño. Como consecuencia, a los variados ejes de debate ya existentes entre las organizaciones populares, y al interior de cada una de ellas, vino a sumarse una más referido a qué actitud tomar frente al gobierno y sus medidas: de un lado quedaron los movimientos que se sumaron de manera entusiasta a apoyar al nuevo gobierno y del otro un arco opositor. Como fuere, todos estos cambios configuraron un nuevo contexto para la organización y la acción colectiva.

Del mismo modo, entre 2002 y 2007 los cortes de ruta, por ejemplo, fueron progresivamente reemplazados por las marchas, los acampes, etc, lo cual evidenciaba también la emergencia de otras formas de protesta. Otro elemento que contribuyó a frenar la protesta fue la judicialización de la misma a la vez que se impulsaba el acercamiento y la negociación con varios movimientos. También, la normalización de los procesos electorarios incidió en la situación de las organizaciones piqueteras, dado que en los comicios en los que se presentaron no obtuvieron resultados alentadores.

¿La “desmovilización” de la clase media?

Por otro lado, el relativo crecimiento económico, la estabilidad política e institucional ratificada con la llegada del nuevo presidente Kirchner, el realineamiento del Partido Justicialista, modificaron la percepción de importantes sectores de la población sobre la situación y condujeron a un proceso más generalizado de desmovilización, que incluyó también a la clase media.

En efecto, pasada la época de efervescencia social y la efímera movilización de en torno al problema del corralito, los depósitos y la impugnación a la clase política, hacia mediados de 2004, la clase media –definida en términos generales en este caso– se fue alejando de las calles y abandonando aquellas banderas que durante un tiempo la habían acercado a los movimientos sociales y algunos otros movimientos piqueteros. Esto

implicó, a su vez, que las organizaciones piqueteras se encontraron en las calles con un importante nivel de aislamiento social, pero en un marco político bien diferente al de los años anteriores.

Un hecho que ilustra el cambio en las demandas y causas de la movilización de la clase media, se dio el 1 de abril de 2004 cuando una gran marcha reunió a más de 150 mil personas en el Congreso Nacional tras la demanda de seguridad. Allí el empresario Blumberg –cuyo hijo había sido secuestrado y asesinado por delincuentes– presentó un petitorio para la aprobación de proyectos de endurecimiento de penas: baja en la edad de imputabilidad y juicio por jurados. Este petitorio fue respaldado por más de 5 millones de firmas de ciudadanos de todo el país. Lejos quedaban las antiguas demandas de inclusión social o de impugnación de la clase política.

Algún tiempo después, la revista *Barcelona* volvía a retomar el tema del quiebre de la efímera alianza social entre sectores medios y trabajadores desocupados luego de furor del “que se vayan todos” de fines del 2001. Y de manera puntual, su tapa /ironizaba sobre el corrimiento de la clase media hacia posiciones más de derecha, calificándola directamente como “fascista”.



Tapa de la revista *Barcelona*, de febrero de 2007, en la que se ironiza sobre la ruptura de la efímera alianza entre desocupados y sectores medios.

La revista *Barcelona* comenzó a salir el 15 de abril de 2003 y se posicionó como una sátira irónica de los temas de actualidad. Utiliza este recurso para marcar y ridiculizar el discurso de la derecha como así también cuestionar el rol de los medios de comunicación en la construcción de imaginarios.

Otro proceso de importancia fue el corrimiento de los conflictos sociales hacia la matriz sindical que recuperó un lugar importante como institución representativa de los intereses del movimiento obrero y la explosión de conflictos socioambientales. Estos últimos también organizaban a partir de consignas e identidades distintas a las propuestas por las organizaciones piqueteras, por ejemplo.

La oposición, entre la fragmentación y la denuncia

Asimismo, el espacio de la oposición política al Gobierno continuó fuertemente fragmentado. De cara a las elecciones de 2007 el principal partido opositor era la Coalición Cívica, la cual aglutinaba a antiguos dirigentes de diversos partidos con un discurso que le reclamaba al Gobierno “transparencia” en sus actos y decisiones y obediencia a una institucionalidad que, interpretaban, el kirchnerismo lesionaba constantemente. A ello le sumaban una demanda “republicana” en el sentido del respeto a la división de poderes que, en la lectura de esta fuerza, “el populismo kirchnerista” dejaba de lado.

Desde las agrupaciones de izquierda, al gobierno se le cuestionaba una suerte de disociación entre las acciones y el discurso. En ese sentido, se apuntaba a que la presidencia de Kirchner había retomado algunas banderas del campo popular sólo como una forma de “frenar” el proceso “real de transformación” que se había iniciado a partir de los acontecimientos del 2001. Desde esta visión, las medidas tomadas por el kirchnerismo sólo apuntaban a responder demandas puntuales pero en ningún caso a un verdadero cambio en el sistema. Las cuestiones denunciadas eran diversas: desde el escaso control que el estado ejercía, por ejemplo, sobre las empresas mineras, hasta la persistencia de la desigualdad económica y social y las alianzas que se seguían sosteniendo con lo que denominaban “la vieja política”.

IV- La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner

Las elecciones del año 2007 llegaban en medio de altos niveles de popularidad para el entonces presidente Kirchner. La estrategia fue impulsar la candidatura de Cristina Fernández acompañada por el radical mendocino, Julio Cleto Cobos en lo que se denominó la “concertación plural”. Cabe destacar que aceptar formar parte de la fórmula oficial le costó al dirigente radical la “expulsión de por vida” del partido, cuestión revocada por el Tribunal de Ética de dicho partido en 2009, luego de su “voto no positivo” que se explicará más abajo. La fórmula Cristina Fernández-Cobos se impuso con un 45,3 % de los votos seguidos por la Coalición Cívica que impulsaba a Elisa Carrió-Guistiniani con el 23 %.

El conflicto con el campo

A poco de asumir el gobierno estalló el denominado “conflicto con el campo” cuando el 11 de marzo de 2008 la administración nacional intentó establecer un nuevo régimen de retenciones móviles mediante el dictado de la resolución 125 del Ministerio de Economía que establecía el aumento en una relación directamente proporcional a los precios de dichos productos en el mercado internacional. La implementación de esta medida apuntaba a recaudar más fondos, producto del alto precio de la soja y a la vez controlar el crecimiento de la producción de la misma en desmedro de otras producciones tradicionales como trigo, maíz, etc.

Como respuesta todas las entidades que nucleaban a la producción agraria se juntaron en la denominada Mesa de Enlace: allí estaban la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Confederación Rural Argentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Desde esa Mesa se lanzaron distintas protestas que incluyeron cortes de ruta, movilizaciones, etc, y que, en algunos casos, provocaron el desabastecimiento de las ciudades.

Por otro lado, la CGT y numerosos movimientos sociales marcharon en varias ocasiones a Plaza de Mayo para respaldar la iniciativa gubernamental. La situación de tensión fue en aumento e incluso poco tiempo antes de la votación en la Cámara de Senadores se realizaron dos manifestaciones masivas: una en Plaza de Mayo en apoyo al gobierno y otra, también multitudinaria, en el Monumento a los Españoles de la ciudad de Buenos Aires, de oposición a la medida.

Finalmente el gobierno tuvo que derogar la medida el 18 de julio de 2008, luego de perder la votación en el Senado a partir del desempate del vicepresidente Cobos. Su voto “no positivo” dio marcha atrás a la iniciativa impulsada y marcó también un hecho institucional grave puesto que el vicepresidente votó en contra del gobierno del que él mismo formaba parte.

De la crisis internacional al revés electoral: reconstrucción y relanzamiento del gobierno

A ese primer gran conflicto en 2008, se sumaron a partir de 2009 los efectos de la crisis financiera internacional que estalló en los Estados Unidos. No obstante, el impacto de la crisis, para la Argentina, fue menor al que experimentaron otros países puesto que la salida de la misma se basó no en el ajuste sino en el sostenimiento del consumo interno que apuntaló el crecimiento de la economía, evitando una recesión.

En ese contexto de crisis, el Gobierno avanzó en la recuperación de los fondos previsionales por parte del Estado. Los fondos que antes eran administrados por las AFJP privadas –legado del menemismo-- pasaron a manos del Estado lo que permitió volcar una importante cantidad de ahorro nacional a actividades productivas y programas de diversa índole, a la vez que aumentó sustancialmente el ingreso de los jubilados y la cobertura previsional.

Sin embargo, el conflicto “con el campo” y la crisis económica habían debilitado al oficialismo de cara a las elecciones legislativas de 2009. El gobierno fue derrotado electoralmente en algunos distritos; en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Francisco de Narváez (Unión-PRO) triunfó con un 34 % sobre Néstor Kirchner, que obtuvo un 32 %. Más allá del impacto de haber perdido en uno de los principales distritos electorales del país, el gobierno perdía también mayoría en ambas Cámaras.

Sin embargo, luego del revés electoral, el gobierno de Cristina Fernández pudo relanzar en algún sentido su gobierno. Algunas importantes leyes sancionadas durante 2009 fueron parte de esas herramientas a partir de las cuales el gobierno pudo reconstruir su capital político. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una de ellas: si bien fue duramente resistida por las grandes corporaciones mediáticas y puso en evidencia la disputa de intereses, finalmente consiguió ser sancionada por amplia mayoría. En la tapa de *Clarín* del 28 de Agosto de 2009 la ley de democratización del espacio mediático es presentada como ley de control y disciplinamiento de la “prensa independiente”.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisuales cambia el concepto de radiodifusión, que antes era comercial, y ahora define a la comunicación como un Derecho Humano. Se destaca la posibilidad de que el 33% de las licencias de señales de televisión y radio estén destinadas a organizaciones de la comunidad sin fines de lucro, otro 33 % al Estado y otro 33 % a los privados. Además considera a las cooperativas, iglesias, mutuales, fundaciones y sindicatos como posibles licenciatarios de medios. También, favorece la promoción de la industria nacional ya que prevé que el 70% de la producción local tenga un espacio radial y el 60% en televisión. Cada emisora deberá tener un 50% de producción propia, al tiempo que las radios emitirán un 30% de música nacional. En esa línea, la propuesta designa una cuota de pantalla para el cine argentino. Otro eje de la Ley apunta a evitar la consolidación de los monopolios

mediáticos que se habían desarrollado fuertemente en los últimos años. Un licenciatario podrá tener como máximo 10 licencias radiales y de TV. Esta regulación del mercado constituye un avance en la posibilidad que los distintos sectores sociales puedan hacer escuchar sus voces en el espacio público.



Sobre finales de 2009 por decreto presidencial se lanzó la “Asignación Universal por Hijo” (AUH), un programa social que beneficia a trabajadores informales, desocupados y servicio doméstico que tengan hijos menores de 18 años y a embarazadas. La implementación de la AUH apuntó a reducir los índices de indigencia, que cayeron a partir de su ejecución en un 50% a partir de prestar cobertura a alrededor de 4,5 millones de niños de todo el país. La única contraprestación para cobrar es cumplir con el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años, y a partir de los 5 años, comprobar la concurrencia a establecimientos educativos públicos. La AUH se plantea como un derecho para todos los niños y establece un piso mínimo sin estigmatización e intermediarios que “faciliten” esos derechos.

En línea con las anteriores normativas, el 15 julio de 2010 la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La presidenta Cristina Fernández, en su discurso de apertura de las 129^o Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación Argentina defendió esta medida señalando que el matrimonio igualitario permitía devolver derechos a algunos argentinos que no los tenían y que nadie debía sentirse molesto dado que la ley no obligaba a nadie a casarse con quien no quisiera y que por el contrario ratificaba que cada uno pudiera elegir con quién hacerlo.

Por otro lado, en 2010 se dieron los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo que incluyeron muchos y diversos espectáculos artísticos, de carácter público y masivo. No obstante, en ese contexto comenzaron a darse fuertes discusiones políticas que incluyeron no sólo a la dirigencia de los partidos sino también a intelectuales, periodistas y profesionales diversos que fueron tomando abiertas posiciones a favor y en contra del Gobierno. En 2008 se había creado un espacio denominado Carta Abierta, que nucleaba a intelectuales afines al kirchnerismo; tiempo después surgió la llamada Asamblea de Intelectuales, que terminó apoyando Frente de Izquierda (FIT).



La avenida 9 de julio en Buenos Aires durante los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo.

El 27 de octubre de 2010 murió el ex presidente Néstor Kirchner: una multitud se acercó a Plaza de Mayo a despedir sus restos desde el Salón de los Patriotas Latinoamericanos.



La muerte de Néstor Kirchner.

El año 2011 fue año de elecciones presidenciales. En un clima favorable al gobierno y con una legitimidad fuertemente reconstruida en el ejercicio de su mandato, Cristina Fernández de Kirchner se impuso en las internas abiertas y luego en los comicios de octubre fue reelegida con el 54 % de los votos con una distancia considerable con respecto a la fórmula del Frente Amplio Progresista, integrada por Binner- Morandini, que quedó en segundo lugar.



Asunción de Cristina Fernández, diciembre de 2011.

V- Sobre el contexto internacional: la búsqueda de autonomía

Durante los años noventa América Latina había funcionado, en algún sentido, como laboratorio para la aplicación de medidas de corte neoliberal. La crisis argentina del 2001 como así también la ocurrida en otros países de la región, mostró el agotamiento de esas experiencias y dio inicio a una etapa en la cual el rechazo al modelo neoliberal se combinó con el planteo de nuevos rumbos para la política y la economía. Así en el transcurso de pocos años se dieron conjuntamente la sustitución de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera por Hugo Chávez en Venezuela, de Fernando Henrique Cardoso por Lula en Brasil, de los gobiernos colorados y blancos por Tabaré Vázquez en Uruguay, de Sánchez de Losada por Evo Morales en Bolivia, de Lucio Gutiérrez por Rafael Correa en Ecuador, de Nicanor Duarte y el Partido Colorado por Fernando Lugo en Paraguay.

Estos nuevos gobiernos lograron, además, marcar un límite a la hegemonía norteamericana sobre América Latina, la cual intentaba ejercerse a través de la implementación en toda la región del Tratado de Libre Comercio, ALCA. Dicho proyecto, que se venía negociando desde los años noventa, buscaba la conformación de un área de libre circulación de mercancías y capital en todo el continente, estipulaba además la eliminación progresiva de las barreras aduaneras al comercio, la inversión y los servicios, y la protección de la seguridad jurídica de los capitales.

Esta iniciativa, que había nacido en la etapa neoliberal, reducía en gran forma la capacidad regulatoria de los Estados nacionales en el comercio con Estados Unidos –potencia mundial desde ya- y dejaba sin efecto la posibilidad de defender las industrias locales y regionales. El Área de Libre Comercio de las Américas buscaba imponer, en ese sentido, la "libertad de los mercados" entre una de las economías más poderosas y las economías subdesarrolladas y endeudadas de América Latina.

No obstante, la llegada al poder de los gobiernos mencionados anteriormente, junto al declive de la influencia económica de Estados Unidos y el crecimiento político y económico de Brasil y China, comenzaron a modificar el escenario regional. En estos años se vinieron desarrollando dos procesos que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la región. En primer lugar el surgimiento del mercado de China impactó fuertemente en las economías latinoamericanas que dejaron de depender exclusivamente de otros mercados. Y en segundo lugar, las políticas expansivas que aplicaron los distintos países produjeron un aumento del mercado interno fortaleciendo el MERCOSUR.

En ese contexto de búsqueda de autonomía frente a los Estados Unidos se realizó en el 2005 la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. En ese acontecimiento, los países latinoamericanos lograron sentar una posición común de rechazo frente a la pretensión norteamericana de imponer el ALCA. «Hemos venido con una pala, porque en Mar del Plata está la tumba del ALCA (...) tenemos que ser no sólo los enterradores del ALCA, sino los enterradores del modelo capitalista neoliberal que desde Washington amenaza a nuestro pueblo desde hace tanto tiempo. Debemos ser las parteras del nuevo tiempo, de la nueva historia, del ALBA. Vamos a enterrar el capitalismo para crear el socialismo del siglo XXI». Esas fueron las palabras del presidente venezolano Hugo Chávez: quedaba así clara la nueva dirección que el bloque regional tomaría en el futuro.

En esa Cumbre de las Américas de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner expresó la posición de la Argentina: "Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al Mercosur, como el mercado regional que nos es propio, y a la nación de comunidades suramericanas es primordial. Por eso, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil y directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca

las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía de prosperidad en una sola dirección”.



Hugo Chávez, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata

El fuerte respaldo al MERCOSUR que dieron los principales países de la región dio como resultado la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevó a cabo en Brasilia el 23 de mayo de 2008. En ese espacio político aparecieron distintos proyectos de desarrollo regional, como el Banco del Sur, que aspira a ser un dinamizador de la economía de las naciones y una protección frente a los clásicos organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial y el FMI. Asimismo, la fortaleza del bloque regional y de las flamantes instituciones que se han ido creando, quedó demostrada frente al intento de golpe en Ecuador en

2010. En esa circunstancia, Kirchner facilitó un encuentro de presidentes en la madrugada del 31 de setiembre en Buenos Aires. Fue entonces que se dio el primer paso para establecer un acuerdo de defensa democrática conjunta que se concretó en la aprobación de una cláusula democrática para responder de forma conjunta y contundente ante cualquier intento golpista en la región.

Otra acción destacada del período fue la reafirmación de la soberanía política en Malvinas que contó con el apoyo de los 33 presidentes que integran la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), quienes rechazaron las intenciones del Reino Unido de concretar la exploración de hidrocarburos en las islas.

VI- A manera de reflexión final

Como cierre, este capítulo tiene una complejidad adicional, que es que justamente su final está abierto: aunque sea una contradicción en sus términos, se trata de nuestra historia en presente. Son los sujetos sociales, las organizaciones, los partidos políticos, el movimiento obrero, los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes, somos nosotros mismos en tanto actores de la realidad los que con nuestra acción y compromiso seguimos haciendo la historia, viviendo en el presente y construyendo el futuro. De nosotros depende la realización de una sociedad más justa y más solidaria, con independencia económica y autonomía política.

Bibliografía

- Aboy Carlés, Gerardo, “La democratización beligerante del populismo”, en *Historia política. Com Debate*. Revista de la Asamblea Nacional de Panamá, N° 12 pp. 47-58. 2007.
- Battistini, Osvaldo, “Luchas sociales en crisis y estabilidad”, en Villanueva, Ernesto y Massetti, Astor (comp.), *Movimientos sociales en la Argentina de hoy*, Buenos Aires, Prometeo, , 2007.
- Biglieri, Paula y Perelló, Gloria, *En el nombre del Pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*. Buenos Aires, Editorial de la Universidad de San Martín, 2007.
- Campione, Daniel y Rajland, Beatriz, “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina del 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos”, en Gerardo Caetano (comp.) *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, pp. 297-327, 2006.
- Camou, Antonio, “¿Más allá del bipartidismo? El peronismo kirchnerista como problema y solución en la Argentina actual”, en *Stockholm Review of Latin American Studies*, N° 3, 2008.
- Cheresky, Isidoro, “De la crisis de representación al liderazgo presidencialista. Alcances y limitaciones de la salida electoral de 2003”, en Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés (ed.) (2004), *El voto liberado. Las elecciones de 1983 en perspectiva histórica y estudios de casos*, Buenos Aires, Biblos, 2004.
- Documento *Tres banderas, Una gran Argentina*. Instituto de Estudios y Formación política GESTAR, 2011
- Gómez, Marcelo y Massetti, Astor, *Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros sobre el proyecto nacional y Latinoamericano*, Buenos Aires, Editorial Nueva Trilce, 2009.
- Gómez, Marcelo, “¿Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: falacias, alucinaciones y cegueras del paradigma normal de análisis” en Massetti, Astor; Villanueva, Ernesto y Gómez, Marcelo (comps) (2010) *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2010.
- Mocca, Edgardo, “Los partidos políticos: entre el derrumbe y la oportunidad”, en Cheresky, I. y Blanquer, J. M. (comps.) (2004) *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*, Rosario, Homo Sapiens, Rosario, 2004.
- Muñoz, María Antonia, *Sísifo en Argentina. Orden, conflicto y sujetos políticos*, Villa María, Córdoba, Editorial Universitaria, 2010.
- Panigo, Demian y Neffa, Julio César, “El mercado de trabajo argentino en el nuevo modelo de desarrollo”, *Documento de Trabajo de la Dirección Nacional de Programación Macroeconómica*. Dirección de Modelos y Proyecciones, 2009.
- Pérez, Germán, “Genealogía del quilombo. Una exploración profana por algunos significados del 2001”, en Pereyra, Sebastián, Pérez, Germán. y Schuster, Federico (comps), (2008) *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después del 2001*, La Plata, Ed. Al Margen, 2008.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián, *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos, 2004.
- Svampa, Maristella, *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI/CLACSO, 2008.
- Villanueva, Ernesto y Massetti, Astor (coomps), *Movimientos sociales en la Argentina de hoy*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.
- Villanueva, Ernesto, Una mirada a los recientes cambios en el estado argentino. ¿Emergencia de un nuevo modelo? En *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología*, Vol 17 N° 4, 2008.
- Wallerstein, Immanuel, *La decadencia del poder norteamericano*, Buenos Aires, Ediciones Le Monde diplomatique, 2006.

Autores y autoras

Carolina González Velasco es Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y desarrolla su trayectoria académica sobre problemas de historia social y cultural argentina para la primera mitad del siglo XX. Su tesis de doctorado fue publicada por la Editorial Siglo XXI, en 2012 con el título *Gente de Teatro. Ocio y espectáculos en la Buenos Aires de los años veinte*. Ha publicado artículos en revistas especializadas y libros diversos sobre su temática de estudio y ha participado en Jornadas y Congresos diversos como expositora y Coordinadora de espacios vinculado a sus temas de investigación. Actualmente es Investigadora Adjunta del CONICET y Profesora Asociada Regular a cargo de la materia Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En UNAJ ha coordinado en calidad de directora diversos proyectos de investigación, entre los que se cuenta “Entre la cultura de masas y la política de masas: actores, procesos y productos. Argentina, 1912-1955” (UNAJ Investiga 2018-2020). Además, es Directora del Instituto de Estudios Iniciales/ UNAJ.

M. Fernanda Percovich es Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es Profesora Adjunta Regular en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y allí se desempeña como co-coordinadora de la materia Problemas de Historia Argentina. Investiga temáticas de historia social latinoamericana, específicamente del

periodo temprano colonial. Publicó artículos en revistas especializadas, compilaciones y participa en Congresos y Jornadas. Actualmente es doctoranda en Historia (UBA), docente del Ciclo Básico Común de la UBA e integra un equipo de investigación en esa universidad. En UNAJ coordina el proyecto de Investigación "América Latina: territorios, recursos naturales y proyectos políticos en disputa" (UNAJ investiga 2018-2020) y ha participado de diversos proyectos de vinculación universitaria.

Julián Delgado es doctorando en Historia (Universidad de Buenos Aires, Argentina -Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia), Magíster en Ciencias Sociales con especialidad Música (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia) y Profesor de Enseñanza Media y Superior en Historia (Universidad de Buenos Aires). Se desempeña como becario interno doctoral del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es Jefe de Trabajos Prácticos de la materia Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y Profesor Instructor de la materia Historia de la Música I en la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes. Participa de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de San Martín y en Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ha compilado junto a Mauricio Schuttenberg el libro *Construir sobre los escombros. Política y cultura en la Argentina poscrisis del 2001* (Editorial UNAJ, 2018). Es autor del libro *Tu tiempo es hoy. Una historia de Almendra* (Eterna Cadencia, 2017).

Karin Grammático es egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés. Es Profesora Asociada Regular de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Allí enseña e investiga sobre la historia argentina reciente con perspectiva de género. Actualmente dirige el proyecto "La transición a la democracia en

la Argentina: nuevas lecturas desde la Historia, los Estudios de Género y la Crítica Literaria". Entre sus publicaciones se cuentan: *Mujeres Montoneras. Una historia de la Agrupación Evita, 1973-1974* [Ediciones Luxemburg, 2011], *Historia reciente, género y clase trabajadora* [compilación en colaboración con Mariela Marini y Wanda Wechsler, Imago Mundi, 2018] y *Cuando el feminismo era mala palabra. Algunas experiencias del feminismo porteño* [co-autora junto a Mónica Tarducci y Catalina Trebisacce, Espacio Editorial, 2019].

Diego Nemec es profesor en Enseñanza Media y Superior en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de San Martín. Es docente regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y allí se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos en la materia Problemas de Historia Argentina. Sus temas de investigación están relacionados con la historia reciente argentina, en particular con la violencia de Estado en los años setenta y sus representaciones políticas durante la transición democrática. Es miembro del Núcleo de Historia Reciente que funciona en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM) e integra el proyecto de investigación "La transición a la democracia en la Argentina: nuevas lecturas desde la Historia, los Estudios de Género y la Crítica Literaria" dirigido por Karin Grammático en la UNAJ.

Daniel Bernardo Sazbón es Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por FLACSO y Doctorando de Historia Filosofía y Letras - UBA. Desde 2011 es Profesor Asociado de Problemas de Historia Argentina en la UNAJ y docente concursado en otras universidades nacionales (UBA, Universidad Nacional de La Plata), en las que dicta cursos vinculados con la historia y las ciencias sociales. Ha formado parte de varios proyectos de investigación acreditados, tanto en la UNAJ como en la UBA.

Forma parte del Centro de Estudios del Deporte (CED), radicado en la Universidad Nacional de San Martín. Ha publicado diversos artículos -tanto en compilaciones como en revistas académicas- sobre temáticas diversas, que van desde las vinculadas con la historia intelectual europea o argentina hasta la historia social del deporte. Participó de numerosos congresos y encuentros académicos, tanto como expositor como en calidad de coordinador de mesas o comentarista de las mismas. Ha participado asimismo de diversas experiencias de divulgación del conocimiento histórico, tanto en medios audiovisuales (en producciones para el canal Encuentro) como en charlas y cursos abiertos a la comunidad.

Mauricio Schuttenberg es doctor en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, SedeArgentina). Magíster en Ciencia Política (Universidad Nacional de La Plata). Investigador Adjunto de CONICET en el IdIHCS en la UNLP). Profesor Asociado de Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y Profesor Adjunto de Historia de las Ideas y los procesos políticos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Dicta clases en el Doctorado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado *Las políticas sociales en los barrios. Relaciones y actores del Plan Más Vida en el Gran La Plata* (La Plata, 2008), “*La Argentina reciente. Transformaciones políticas, económicas y sociales en el período 2003-2011*”, en *Historia Argentina 1912-2011*, UNAJ. y *La reconfiguración de las identidades nacional populares*, en revista *Sociohistórica*, N° 28, EDULP, 2011. Compiló *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares* (EDULP 2013) y *Construir sobre los escombros* (UNAJ, 2018). Dirige y participa en proyectos de investigación en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en la Universidad Nacional de La Plata.